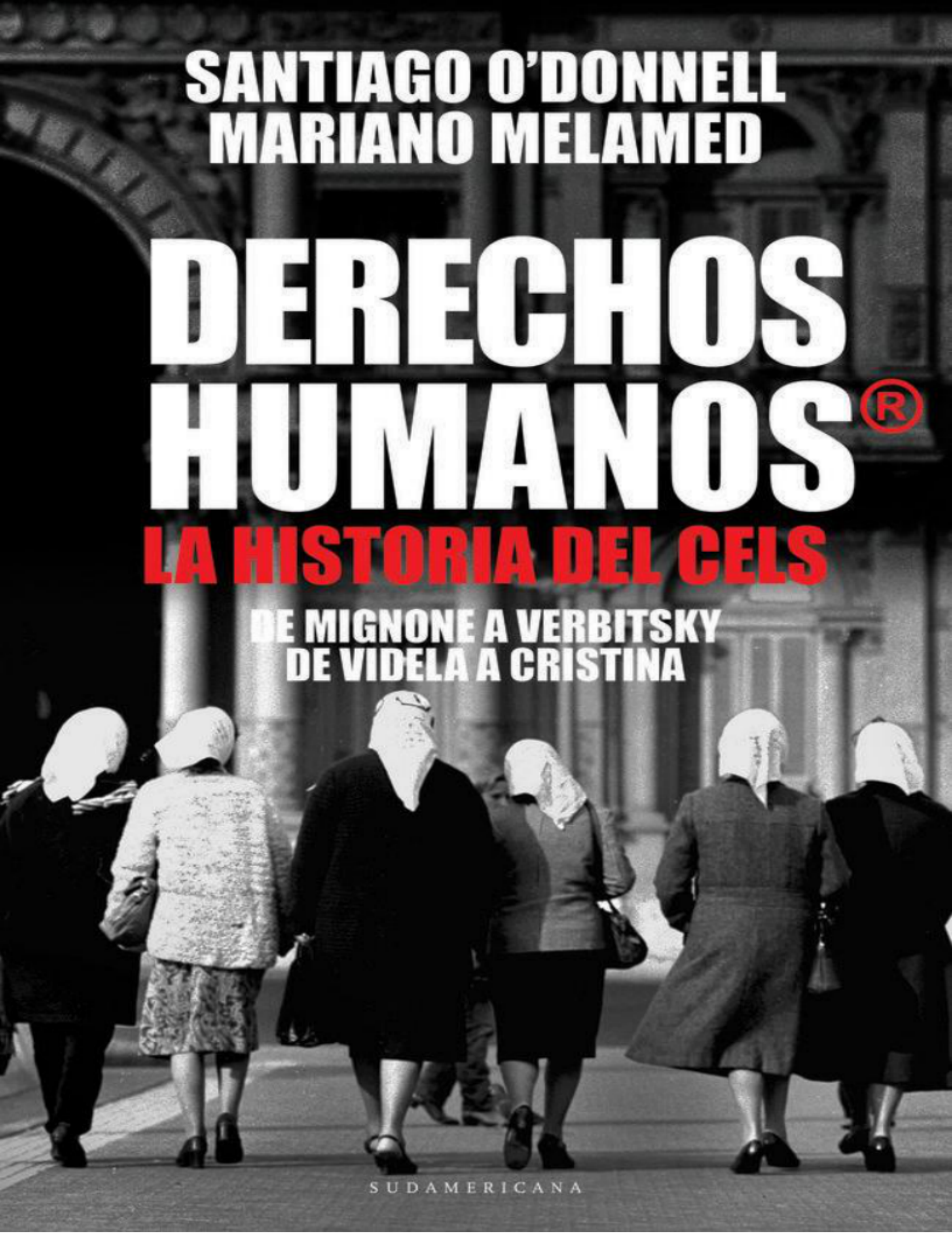
SANTIAGO O'DONNELL
MARIANO MELAMED

DERECHOS HUMANOS®

LA HISTORIA DEL CELS

DE MIGNONE A VERBITSKY
DE VIDELA A CRISTINA



SUDAMERICANA

Santiago O'Donnell y Mariano Melamed

Derechos Humanos®

La historia del CELS. De Mignone a Verbitsky. De Videla a Cristina

Sudamericana

A la memoria de Guillermo O'Donnell.
A Victoria Oyhanarte.
A Teresa Emery.
A José O'Donnell y Ramón Stocovaz.
S. O'D.

A la memoria de mi papá.
A mi madre y a mi hermana Sonia.
M. M.

AGRADECIMIENTOS

Gracias, viejo, por todo lo que me enseñaste. Este libro me trajo muchos recuerdos tuyos y me ayudó en el duelo.

Gracias, Victoria Oyhanarte, por compartir tu vida conmigo y por tratar de hacerme una mejor persona.

Gracias, José y Ramón, por tantas alegrías. Gracias, mamá, por cuidarme. Gracias a Carmen Celia por el pez espada. A mi hermana y colega María O'Donnell, un orgullo, gracias por ayudarme y apoyarme siempre. A Matías, Nacho, Julia, Fede, Fran, Leo, Milena, Carmela, Helena y Luz: gracias por tanto.

A María Salas, Justina, Olga y Hortensia. A los hermanos Gutiérrez Oyhanarte. Al *grosso* del Chapa Orrego. A los Arrastoa, Antelo, Eppinger, Bouldrini, Cavallero González y Frontini. A Enrique Mármora, Pato Barbosa, Mercedes López San Miguel, Celita Doyhambéhère, Tobal Llorente, Diego Carrió, Sergio Greco y Baby Badaracco.

A Luciana Bertoia, por creer en este libro y por ayudarnos a sostenerlo en momentos difíciles. A Gaby Pepe y a Albert Alsina. A Gonzalo Seoane de Madres de Plaza de Mayo y a Ezequiel María, Patricia Panich del Cels y a Santiago del Carril.

A todos los que confiaron en nosotros y nos dieron su tiempo y nos contaron sus historias.

A Florencia Ure, por su fuerza y su generosidad. A Juan Ignacio Boido, por todo. A nuestra editora, Ana Pérez, por su talento y buena energía para mejorar lo que hicimos.

A Mariano: gracias, querido.

S. O'D.

A Santiago, por no dejar que este libro se terminase de ir por la alcantarilla a pesar del tiempo transcurrido y de estar lejos, y por su talento no solo para hacer periodismo sino para enseñar sin proponérselo.

Gracias a Luciana Bertoia, por haber acompañado el proyecto cuando no era más que un proyecto frustrado. A Albert Alsina Ferrando, por el trabajo contrarreloj con las entrevistas.

Muy especialmente a Gaby Pepe, por su seriedad, rigor y tesón incansable para el ataque final, y sobre todo por su amistad. A Ana Pérez, por su saber y su calidez.

A Carlos Gassó, por las charlas sobre temas y obsesiones en *loop* que empezaron cuando estábamos en primer grado. A Pablo Wegbrait, por su amistad y buena disposición para dar una mano y un consejo siempre.

A Mariana Cencic y Claudio Capace, grandes compañeros de viaje, squash y sobremesas.

Al gran Taitus, por fumarse con buena cara largos monólogos sobre temas que no le interesan.

A Valeria Otheguy, por ser una persona tan hermosa y estar siempre cerca.

A las fuentes, sobre todo a aquellos que pasaron por el CELS y que a pesar de tener puesta la camiseta no dudaron en ser entrevistados sabiendo que este no sería un libro celebratorio o un mero informe de gestión.

M. M.

Prólogo
La historia

La historia de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina de los setenta, de los miles de desaparecidos por la dictadura militar, es mucho más que una historia, pero también es una historia. Desde un punto de vista periodístico, es la historia más importante de los últimos cincuenta años en este país y sigue vigente. Algún día alguien podrá escribir esa historia y entonces dejará de ser actualidad y pasará a ser historia.

Mientras tanto, quedan por contar las pequeñas historias que hacen avanzar la historia, una historia que va cambiando a medida que aparecen nuevos personajes y se conjugan con nuevos escenarios, historias que nos acercan un poquito más al final, que será el principio de una nueva historia. Ojalá esta historia sirva para eso.

Esta es la historia de un grupo de personas unidas por el deseo de llegar a la verdad y de castigar a los culpables por las desapariciones de esa época a través del sistema legal de la justicia argentina. Fundaron y trabajaron en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la organización no gubernamental que se encargó de llevar adelante la mayoría de los juicios en contra de los represores de la dictadura.

Quienes integraron e integran el CELS provienen de distintos lugares y posturas ideológicas, pero dentro de ciertos límites. Casi todos son profesionales, la mayoría abogados, y el arco político va desde la izquierda democrática hasta el liberalismo progresista. Sus fundadores son padres y madres de clase media de jóvenes desaparecidos, como Emilio y Chela Mignone, y Augusto y Laura Conte. A diferencia de sus hijos, que despreciaban la democracia burguesa y querían cambiar el sistema, ellos pensaban que la dictadura que se había llevado a sus hijos era una aberración del sistema. Supieron ver que solo conocerían la verdad sobre las desapariciones y obtendrían justicia para sus víctimas si recuperaban ese sistema, esa democracia tan vapuleada y despreciada por la generación de sus hijos. Con las herramientas legales y políticas de la democracia ayudaron a reconquistar la democracia. A partir de ahí emprendieron un largo camino para darle sentido a esa conquista formal a través de una praxis, un lenguaje, una iconografía, un relato, al fin, una cultura de respeto a los derechos humanos que hoy se ha

instalado en nuestra sociedad para dar pelea a distintas corrientes reaccionarias y fundamentalistas.

La historia del CELS empieza con sus fundadores pero no termina con ellos. También se destacaron militantes jugados como Jorge Baños, que murió en el asalto al cuartel de La Tablada en 1989, abogados trotskistas que ven en la práctica legal un puesto de lucha prerrevolucionario, como Luis Zamora y Marcelo Parrilli, sobrevivientes de la resistencia peronista como Alicia Oliveira, jóvenes idealistas recién salidos de las universidades como Carolina Varsky y Santiago Felgueras, y profesionales de los derechos humanos, educados y entrenados en Estados Unidos, como Víctor Abramovich, Martín Abregú y Gastón Chillier.

Sin embargo, un nombre se destaca entre todos ellos y es el del actual presidente de la organización, Horacio Verbitsky. El influyente periodista de *Página/12* es una institución en sí mismo que opaca y visibiliza a la vez al CELS. Actuaciones y relaciones, odios y amores se tocan y se entrecruzan, y aunque Verbitsky dice que para él está todo muy claro, para los miembros del CELS se hace difícil discernir dónde termina la ONG y dónde empieza el periodista. Ni hablar para los de afuera.

En la actualidad, además de los juicios a los militares, el CELS monitorea la aprobación de los ascensos militares en el Congreso y participa en distintos programas, proyectos y actividades vinculados con el reclamo por los crímenes de la dictadura. También se ocupa de casos de violencia policial, de abusos en las cárceles y de libertad de expresión. Además prepara proyectos de ley para mejorar la seguridad y el funcionamiento de la justicia, haciendo de nexo entre la demanda social, la vocación de servicio de sus integrantes y los temas de interés de sus donantes.

La principal fuente de financiación del CELS es la Ford Foundation, la segunda organización filantrópica de Estados Unidos por el volumen de ayudas que maneja y con un importante programa para fortalecer los derechos humanos en América Latina. Además, entre sus principales donantes están la Unión Europea, la Fundación Oak (una ONG global con sedes en Londres, Ginebra y con base en Carolina del Norte, Estados Unidos), el Sigrid Rausing Trust (Suecia), la Fundación Heinrich Böll Cono Sur (con base en Alemania), Open Society Foundations (OSF, la ONG de George Soros) y el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura. No recibe fondos del gobierno nacional, excepto a través de convocatorias académicas concursadas, como la que le permitió suscribir un acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación a través del programa de becas Carrillo-Oñativia. El CELS también cuenta con donantes particulares. Hoy tiene unos sesenta y cinco

empleados, la mayoría de ellos *full time*. Su presupuesto anual para el año 2014 fue de casi 2,6 millones de dólares, según su último balance.

La embajada estadounidense toma los informes del CELS como fuente principal para elaborar sus informes anuales sobre derechos humanos para el gobierno norteamericano. El CELS es la pata local de una importante red internacional de organismos de derechos humanos, cuyos referentes principales son Amnistía Internacional, con sede en Londres, y Human Rights Watch, con sede en Nueva York. A la vez, la institución argentina está a la vanguardia de una tendencia global hacia la descentralización de esa red para democratizar su agenda y establecer nuevas alianzas en lo que se dio en llamar "marcos de cooperación Sur-Sur".

La historia del CELS está atravesada por los debates que fueron marcando el camino de las organizaciones de derechos humanos, desde la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) hasta el apoyo al gobierno de los Kirchner, pasando por el punto final de Alfonsín y los indultos de Menem. La relación con los distintos partidos políticos y gobiernos, la aceptación de las reparaciones económicas a la víctimas y familiares de la dictadura, la distancia con las organizaciones armadas mientras existieron, las coincidencias y diferencias con los demás organismos de derechos humanos y el modelo estadounidense de ONG de derechos humanos adoptado por Mignone (encarnado por profesionales hiperformados) y continuado por sus sucesores, la simbiosis con la figura de Verbitsky.

¿Y por qué llegamos nosotros a esta historia? Porque la vivimos, porque la mamamos desde chicos y porque la fuimos a buscar. Pero también porque nos encontró. En 2008 el CELS nos había contratado para que escribiéramos su historia oficial. A insistencia de los representantes de la institución, convenimos que ellos iban a tener la edición final del libro pero nos reservamos el derecho a no firmarlo. Nos dieron un cronograma, una guía temática, una lista de libros y documentos que debíamos incorporar en nuestro texto, así como una lista de personas que debíamos entrevistar. Cumplimos en tiempo y forma con lo pedido, pero nos echaron después de entregar el tercer capítulo. Nos hicieron saber que no entendíamos los debates principales del movimiento de derechos humanos, que no estábamos familiarizados con la literatura básica y que, en general, no estábamos a la altura de la tarea encomendada.

El golpe fue duro. Veníamos de trabajar en el *Washington Post*, en Radio France Internationale, en *La Nación*, *Clarín*, *Perfil*, *Página/12*. Habíamos editado publicaciones para Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y la Fundación Síntesis. Acabábamos de terminar un libro

para la Fundación Ford sobre los organismos de derechos humanos que financia esa institución en América Latina. Nunca nos había pasado algo así.

Tocados en nuestro orgullo, pedimos otra oportunidad. Hicimos autocrítica delante del director ejecutivo, prometimos mejorar, propusimos duplicar nuestros esfuerzos, ofrecimos internarnos en los pasillos de CELS durante el tiempo que hiciera falta, sin costo adicional para la institución, hasta salir de nuestra ignorancia. Pero no hubo caso. "Yo quiero que esto termine bien, que puedas seguir escribiendo artículos sobre el CELS y que podamos tomarnos una cerveza", le dijo a uno de nosotros el director ejecutivo. "La única manera de que podamos seguir tomando cervezas es hacer el libro", se le contestó, pero él se mantuvo irreductible en su posición. Cuando le dijimos que por supuesto que íbamos a seguir, con o sin apoyo del CELS, porque nadie era dueño de nuestras palabras y mucho menos de nuestros silencios, el director ejecutivo se mostró sorprendido. "¿En serio quieren seguir? Dejame ver, no creo que haya problema." Como no había más nada para hablar, nos despedimos. Ese mismo día uno de nosotros llamó a un abogado y politólogo que conocía muy bien a la institución y a su gente para contarle la triste noticia. "No te preocupes, no te calientes —consoló—. A veces esta gente del CELS se cree que mea agua bendita."

La experiencia nos sirvió para entender un poco mejor al sujeto de nuestra observación. Aprendimos que la mayor fortaleza del CELS es, a la vez, su mayor debilidad. Como suele pasar con la gente brillante, exitosa y trabajadora, quieren todo y creen que todo lo pueden. Así, quieren y creen que pueden ser juez y parte en los procesos legales y políticos por las violaciones a los derechos humanos en la Argentina; quieren y creen que pueden hacer política y a la vez defender los derechos humanos, pero sin politizar la defensa de los derechos humanos; quieren y creen que pueden cambiar las reglas de la democracia pero dentro de las reglas de la democracia. Y muchas veces lo consiguen.

¿Y qué querían de nosotros? ¿Qué fue lo que no les supimos dar? Querían una enciclopedia, un inventario que comprendiera todas las acciones que había realizado el CELS, quiénes habían sido sus cultores y ejecutores, y cuáles habían sido los resultados, más los debates internos y con los demás organismos, las discusiones, los fundamentos que las sostenían y la bibliografía en la que se apoyaban. Querían algo positivo, claro, y con una postura ideológica definida. Algo no necesariamente masivo, un trabajo más bien académico, con citas al pie de página, con tapa dura quizá, algo que pudieran lucir orgullosos en sus bibliotecas y regalar a sus financistas.

En otras palabras, querían un Verbitsky. Querían algo parecido a sus

tres tomos sobre los doscientos años de la historia de la Iglesia Católica argentina, pero sobre los treinta años del CELS. Y todo bien con el estilo Verbitsky. Pero nosotros queríamos contar una historia más simple y a la vez más contradictoria, más dramática y a la vez más divertida, protagonizada por personas, no por mártires o héroes o expedientes.

Cuando uno de nosotros le explicó esto a Verbitsky tres días después de ser echados, él se sonrió. “Supongo que no servimos como escribas”, se le dijo. “Tenés razón, en eso nos equivocamos”, contestó. En ese encuentro, que tuvo lugar en su departamento, Verbitsky aseguró que él no había tenido nada que ver con la decisión del CELS de prescindir de nuestros servicios. A su vez, se le dijo que esa decisión, por muy dolorosa que nos había parecido, terminaba siendo una bendición, porque nos liberaba de ataduras institucionales y nos permitía salir a buscar la historia a nuestra manera, con personajes, temas, tiempos y estilos elegidos por nosotros. Y que por respeto al CELS y a nosotros mismos, el libro lo íbamos a hacer. En ese momento a Verbitsky la idea mucho no le gustó. “Entonces va a haber dos libros, no sé si va a ser bueno eso”, objetó, recordándonos que el CELS pensaba seguir adelante con su libro institucional, con otros autores, proyecto que finalmente quedó trunco. “El CELS se merece dos, tres, cuatro y mil libros también”, se le respondió.

A los tres meses, después de que retomáramos nuestra primera entrevista, el director ejecutivo nos escribió diciendo que el libro era “inconveniente” para el CELS y que si queríamos escribirlo, teníamos que devolverle lo que nos habían pagado y cierto material “no público” del CELS que supuestamente nos habían confiado. Contestamos con alguna ironía, dejando en claro que los reclamos nos parecían absurdos y particularmente abusivos para una institución que defiende la libertad de expresión, para ratificar nuestra intención de seguir adelante.

De a poco fuimos abriendo puertas y encontrando cómplices, tanto adentro como afuera del CELS, que nos contaron historias que a nosotros nos parecían interesantes, historias de héroes y villanos, sí, pero sobre todo de seres humanos. De seres sensibles, inteligentes, comprometidos, desafiantes, estudiosos, ingeniosos, militantes, arrogantes, cabrones, ambiciosos, desconfiados, seductores y seducidos. Dejamos para casi el final las entrevistas con Verbitsky y el director ejecutivo. Ambos fueron muy generosos con su tiempo y su disposición a contestar todo lo que les quisimos preguntar.

La historia del CELS, dijimos, está atravesada por los debates que marcaron las distintas etapas de la historia del movimiento por los derechos humanos en la Argentina. También está marcada por los sucesivos relatos de esa historia. Primero, el relato de las “víctimas

inocentes” de la era alfonsinista. La historia de las monjas, los catequistas y la turista sueca que no tenían nada que ver con la violencia y de repente desaparecieron. La de los chicos de la secundaria que eran “chupados” por reclamar un boleto estudiantil. En ese momento, con los militares todavía poderosos y la joven democracia acechada por intentos golpistas, estas historias edulcoradas parecían ser las únicas que la sociedad estaba dispuesta a aceptar.

Luego, a medida que los militares fueron perdiendo recursos e influencia, el relato empezó a cambiar. Con el endurecimiento del discurso de Hebe de Bonafini primero y después con la publicación de la trilogía *La voluntad*, de Eduardo Anguita y Martín Caparrós, surgió a fines de los ochenta y principios de los noventa la narrativa de “los jóvenes idealistas que dieron la vida por un país mejor”. Ya no eran meras víctimas pasivas sino militantes de armas tomar, valientes, generosos, comprometidos, que dieron todo y hasta lo que no tenían para seguir el sueño de utopías marcado a sangre y fuego por el Che Guevara.

Después, con la reapertura de los juicios, con cientos de represores en la cárcel, con plazas llenas el Día de la Memoria, con nietos emblemáticos recuperados, otro relato fue posible. Abrieron el camino la denuncia ética del filósofo y ex montonero Oscar del Barco y el diálogo público entre el politólogo y ex montonero Héctor Leis y la referente política y madre de Plaza de Mayo Graciela Fernández Meijide.

Sin caer en la trampa de los dos demonios, ahora podemos decir que además de víctimas inocentes, además de jóvenes idealistas, que muchos lo fueron, también muchos fueron ególatras, violentos y egoístas con sus familias, a las que pusieron en riesgo e hicieron sufrir. Que se alzaron en armas no sólo contra una dictadura, sino que también antes lo hicieron contra una democracia. Una democracia con paritarias, aguinaldo y salario mínimo, entre otras garantías que bastante había costado conquistar.

Ahora podemos y debemos decir también que muchos de esos jóvenes de los setenta, por responsabilidad individual o colectiva, fueron y son asesinos. Mataron y aplaudieron la muerte de personas desarmadas. Y que muchos no se hacen cargo y otros tantos ni siquiera se arrepintieron. Y que algunos hoy ocupan lugares en el Estado y ONG, desde donde juzgan la actuación que tuvieron otros en aquella época tan terrible y sangrienta. En ese contexto, no deja de ser una paradoja que un ex guerrillero que nunca habló de sus acciones armadas en una organización que atacó a civiles, un ex montonero que nunca nombró a sus víctimas y —que se sepa— nunca les pidió perdón, hoy ocupe la presidencia del CELS.

Más allá de que a las fuerzas del Estado como tales les cupieron responsabilidades mayores y que los crímenes paraestatales fueron mucho más aberrantes y masivos, no deja de ser llamativo que este tema, el de la contribución de las organizaciones armadas a la violencia en los setenta, nunca haya sido siquiera mencionado, no ya debatido, en ninguna reunión o asamblea del CELS. Para nosotros es una clara señal de que esta historia no se terminó, de que no se terminó de contar, de que sigue enterrada a la vuelta de la esquina junto con la identidad de los nietos que faltan recuperar y demás secretos que nunca soltaron los desaparecedores.

Por eso es una historia incompleta. Por eso y porque no entrevistamos a todas la personas del CELS, ni contamos todas y cada una de sus muchas y decisivas contribuciones al proceso de verdad y justicia y al fortalecimiento de la democracia. Hay personas muy reconocidas que trabajaron mucho y bien en el CELS y que merecían estar en este libro, pero ni siquiera las nombramos. Tal vez decimos cosas que no tendríamos que decir y somos injustos y estamos equivocados. En ese caso, pedimos perdón. Pero es nuestro aporte limitado, nuestra historia chiquita, nuestro aprendizaje incompleto.

Este es nuestro homenaje al CELS y a quienes desde el CELS contribuyeron a mejorar nuestro país.

Primera parte

1
Mignone

Emilio Mignone nació en 1922 en Luján, donde su padre tenía un almacén de ramos generales que era ferretería, fonda y hotel de paso. Ahí creció, junto con dos hermanos y dos hermanas, entre el elenco estable que va y viene sobre los puestos, las chacras y el boliche. El entorno gauchesco lo empujaba hacia algún oficio campero o comercial, pero se hizo adicto a la lectura. Su madre era maestra y en la casa siempre había material para leer. No era raro encontrar a Emilio acurrucado en algún rincón a cualquier hora, matando el tiempo devorando cualquier cosa, desde los libros de pedagogía de su madre hasta clásicos del Siglo de Oro español sacados de la biblioteca del pueblo. A los cuatro años, apenas haciendo equilibrio en un banquito, lo vieron dando discursos inventados ante un auditorio invisible.

Mignone se empezó a interesar por la pintura y la música, por eso se frustró cuando se dio cuenta de que no sabía ni cantar ni dibujar. Sus padres lo mandaron a estudiar a un colegio marista de Luján, una institución de cuño antiliberal. No querían formarlo en la fe católica pero sí darle las mejores posibilidades de estudio.

Cuando promediaba su secundario, la Guerra Civil española sacudió Europa y sus chispas volaron hasta la Argentina. Los maristas festejaban cada victoria nacionalista. Emilio, como buen alumno, admiraba al fundador de la Falange Española, Miguel Primo de Rivera. También, como una manera de llegar a Dios a través del trabajo, se involucró con la Acción Católica, un grupo militante de la evangelización que tenía mucha penetración en las comunidades del interior. Alguna vez pensó en ser sacerdote pero, aunque lo descartó, comenzó a asistir a misa cada domingo. No llegó a ser antisemita, pero en su familia miraban de reojo su devoción por el falangismo español, sobre todo en una época en la que ser católico ferviente equivalía prácticamente a ser de derecha. Cuando en Europa se desató la Segunda Guerra Mundial, el muchacho Mignone sostenía que no lograba decidir si apoyar al Eje o a los Aliados.

En 1941, cuando ya había ingresado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) para estudiar Derecho, volvió a Luján y, en representación de la Juventud de la Acción Católica, habló en un acto

que terminó en escándalo. Cerró su arenga con una reformulación de una frase del escritor nacionalista Leopoldo Lugones: "Es la espada, cuando llegue su hora, la afirmación heroica de la patria y la cruz", dijo. Lo ovacionaron. En otro acto, Mignone volvió a plantear argumentos similares y algunos lo tildaron de pronazi, una etiqueta que le generó un dolor de cabeza a su padre, más adherente de la causa aliada. Por eso, y para esquivar las críticas de familiares, amigos y vecinos que apuntaban contra "el hijo totalitario", a Emilio lo mandaron lejos de Luján. Al menos hasta que la tormenta pasara.

En 1943, la Acción Católica ya era la organización juvenil más grande del país, con unos doce mil cuatrocientos miembros. Allí Mignone aprendió sobre el trabajo institucional: toda esa gimnasia de las actas, las reuniones, la agenda, la responsabilidad de representar a otros. Luego de un viaje a España con colegas militantes de la agrupación, su relación con ellos se torció —aunque sin quebrarse del todo— en diciembre de 1945, cuando decidió ocupar un lugar en la lista de candidatos a diputados provinciales de la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN), un grupo de choque ultracatólico.

Un día, en Buenos Aires, Mignone se presentó a rendir un examen para trabajar como empleado en la justicia laboral. Lo aprobó. Empezó tomando audiencias. Le iba bien. Lo felicitaban. Era puntual, práctico, operativamente irreprochable. A las pocas semanas lo convocaron para un pequeño acto. Había una nueva normativa y alguien apareció para hablar. Improvisó un discurso de una hora. Mignone había quedado justo a su lado. Era Juan Domingo Perón. Ante de cumplir los veinticinco años, Emilio Mignone se recibió de abogado en la UBA y se casó con Chela. Tuvieron cinco hijos: Isabel, Mónica, Mercedes, Fernando y Javier.

Mignone ingresó en la función pública en lo que pareció ser una comedia de enredos devenida de la reforma de la Constitución de 1949 que incluyó la cláusula para la reelección de Perón. Además de Jesucristo, no reconoció demasiados liderazgos políticos, acaso una profunda adhesión a Domingo Mercante, el católico, rígido e histórico militar que gobernó la provincia de Buenos Aires durante la primera presidencia de Perón. De hecho, una gestión directa de Mercante convirtió a Mignone en director general de Enseñanza de la provincia de Buenos Aires. Tenía apenas veinticuatro años.

En cada pueblo del interior de la provincia, en Chivilcoy, en Azul, en Zárate, en Tandil, en medio del campo, las pistas verdes bien demarcadas anunciaban que al lado había un aeroclub. Los hangares de chapa guardaban los Piper PA-11 y los Cessna 120 y 140, los clásicos aviones para instrucción de la aviación mundial, que arrastraban su fama desde la década del treinta. A bordo de esos aviones —biplazas, apenas— Mignone recorrió el territorio

bonaerense en función oficial. Volaba de distrito en distrito, explicando sus planes pedagógicos ante los maestros locales, en teatritos de pueblo reacondicionados para la ocasión. Del aeroclub al discurso, y si el día estaba bien planeado, seguía viaje hasta otra localidad antes de volver a La Plata.

En el aire, se acostumbró a aguantar las zancadillas del poder central por oponerse al adoctrinamiento peronista desde los libros infantiles. Mignone detestaba los “Evitame-ama”. Mercante arrastraba demasiadas tensiones con Perón y terminó de caer en desgracia cuando desistió de competir por la reelección. Su sucesor, Carlos Aloé, se propuso limpiar cualquier indicio de la anterior gestión. Ministros, secretarios y protegidos de Mercante fueron apartados de sus funciones y muchos sufrieron distintos grados de hostigamiento policial. Mignone fue uno de ellos, pero se salvó de la cárcel y del interrogatorio. Sus perseguidores buscaban a un tipo con sombrero y portafolios. Sin más operación de escape que la de olvidarse el sombrero y el portafolios, Mignone los evitó.

Cuando terminaba la década de 1950, Arturo Frondizi le firmó pactos al exiliado Perón que no podía cumplir. El país ya sabía distraerse con su incipiente farándula y Mignone trabajaba “malamente de abogado”, según decía. Iba y venía entre Luján y Mercedes acarreando escritos de amigos, de parientes, de trabajadores despedidos que no tenían cómo pagarle. Compró un periódico en Luján, *La Voz*, donde pensaba escribir lo que quisiera y darle forma al negocio editorial, aunque más no fuera a pequeña escala. Intentó hacer de un diario de pueblo un medio rentable que le empatara un poco las finanzas, que venían adelgazando. No pudo. Los avisitos apenas pagaban la tinta y el papel. Frondizi ya era un ex presidente y Mignone evaluó que ni sus clientes morosos ni la industria periodística de Luján lo ataban demasiado al país. Aprovechó un ofrecimiento para ser funcionario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tomó a su mujer, a sus cinco hijos y voló a Washington. Aceptó un salario reducido, pero no tenía demasiadas opciones.

Recorrió el mundo trabajando en política educativa, visitó cincuenta universidades. Se quedó cinco años en Estados Unidos. Su estadía allí le reveló un mundo nuevo: John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King Jr., los derechos civiles, las grandes protestas de la población afroamericana, multitudes contra la guerra, contra la segregación racial, por los derechos de las mujeres. Se topó con la mirada de jóvenes libres que habían descubierto un camino y una manera de vivir que a él le sonaban extrañas, pero que aprendió a tolerar. Gente muy distinta de él, que creía en la vida como una línea de puntos a unir sin objeciones: estudiar, trabajar, rezar, tener hijos, nietos, jubilarse y morir.

Cuando volvió a la Argentina, el presidente era Juan Carlos Onganía. Mignone, con voluntad de funcionario, aceptó un cargo en su gobierno. No pensó en esa dinámica de civiles oponiéndose a militares, sino en una función, un camino y una meta. Pero él ya no era aquel joven protofascista o abiertamente falangista, ni el educador de maestros flaco y tímido. Algo en su mirada del mundo había cambiado.

La primavera camporista le devolvió un aire de su estadía en Estados Unidos y se sintió a gusto. Se acercó al peronismo y lo nombraron rector de la Universidad de Luján. Muchos alumnos y profesores no lo aceptaron con cariño: fue el impulsor de un plan de ingreso a la universidad con restricción de acuerdo con el promedio, respaldado por el ultraderechista ministro de Educación Oscar Ivanissevich, quien también había ocupado esa cartera durante el primer gobierno de Perón. Fue antipopular, pero él no podía dejar de ser un técnico que buscaba los procedimientos más idóneos para llegar al resultado buscado.

Una tarde de 1973, Mignone se quebró el brazo derecho. No podía moverlo ni para afeitarse. Al otro día, Antonio Cafiero lo invitó a subir al avión para embarcar en el vuelo más famoso de la historia argentina. “Bueno, voy”, dijo. Con una barba de varios días que raspaba a quien saludaba, Mignone se subió al avión que fue a buscar a Perón a Roma. Con esa pinta le estrechó la mano, casi treinta años después de haberlo escuchado en aquel discursito intrascendente.

Al regreso, el avión canceló la aproximación a Ezeiza y desvió el curso hacia el aeropuerto de El Palomar, y Mignone —entre políticos leales al ex presidente, sindicalistas, deportistas emblemáticos y estrellas del espectáculo— miró desde la ventanilla un cielo gris, gotas de lluvia y algo que no andaba bien. Las columnas de las diferentes ramas del peronismo de izquierda estaban a punto de ser emboscadas por el aparato armado de la burocracia sindical de la derecha peronista, decidido a abrir fuego. Cuando el avión de Alitalia tocó tierra, la Argentina hervía.

2
El golpe

El golpe de 1976 no tardó en llegar y los Mignone sintieron que el jefe de la familia estaba en peligro. El mismo 24 de marzo, una patrulla verde oliva llegó a las puertas del rectorado y tras patear las puertas se metió en la oficina de Mignone. “¿Dónde están las armas?”, lo apuraron. La universidad tenía en su oferta educativa varias carreras que a los militares les resultaban poco afines, como algunas tecnicaturas vinculadas al campo y al agro. En su lógica, los claustros no podían ser otra cosa que una cueva de izquierdistas que promovían una reforma agraria que acabase con las grandes estancias y el modelo agroexportador de la oligarquía argentina. Luego de aquel día, Mignone pasó algunas semanas durmiendo en casas de amigos, no sin antes pasarle algunos documentos e indicaciones a Chela por si algo malo le sucedía.

Mignone leía y leía, escuchaba, le llegaban datos de la calle. Analizó todo y describió tres elementos diferenciadores del plan de la dictadura. Se dio cuenta de que los derechos humanos fundamentales eran tenidos en cuenta en el mundo, armó el rompecabezas de una represión sistemática dirigida desde la máxima jerarquía del Estado y se asustó cuando vio que el plan no perdonaba a nadie: estudiantes, analfabetos, jóvenes, viejos, militantes, ignorantes, deportistas, intelectuales porteños, campesinos tucumanos, ricos, pobres, gays, heterosexuales, judíos, católicos. Era la guerra contra todos. Vio que todos podían caer. Vio cómo muchos caían. Un día no estaban más. Lo vio en su propia vida, con sus propios ojos, cuando le pasó a él.

Sus hijas Mónica, Isabel y Mercedes —en mayor o menor grado— militaban en la Juventud Peronista (JP). Fernando, en cambio, se había hecho sacerdote. Vivía desde los dieciocho bajo un techo del Opus Dei en una de las casas que la institución tenía en el barrio de Belgrano. A los veintiuno se recibió de abogado y, como era bilingüe, pronto estuvo listo para irse a vivir a Canadá con el Opus. Javier era demasiado chico aún.

Isabel Mignone era testigo de las crónicas discusiones entre Mónica y Fernando, sobre todo porque Fernando Mignone, ante la mirada incrédula de sus hermanos, se iba haciendo cada vez más de derecha y el resto de los Mignone se habían radicalizado bastante. Habían ido a

recibir a Perón las dos veces con gente de las villas. Los Mignone estaban compenetrados con el trabajo con los pobres, a quienes Fernando llegaba desde otro lado. Las hijas de Mignone chocaban con la idea de que su padre nunca había dejado del todo de ser aquel católico fanático y conservador. Faltaba poco para el comienzo del resto de sus vidas.

El 14 de mayo de 1976, Mignone escribió en una carta a sus vecinos: "Agentes de las Fuerzas Armadas se llevaron a nuestra hija". Mónica tenía veinticuatro años y no hacía mucho que se había recibido de psicopedagoga en la Universidad del Salvador. Mignone y Chela se dividieron la tarea de deslizar una copia de la carta por debajo de cada puerta del edificio de Santa Fe y Agüero donde vivían. Los vecinos vieron que no eran las expensas ni la convocatoria a otra reunión de consorcio, sino el estrecho resumen de lo que había pasado apenas unas horas antes.

Todo pasó a las cinco de la madrugada. La noche previa, Mónica había vuelto un poco resfriada a su casa después de su labor diaria junto con un grupo de curas villeros que hacían trabajo de base en el Bajo Flores. Cuando todos dormían, un grupo de tareas entró en la casa de los Mignone. Llevaban botas militares pero estaban vestidos de civil. En esa época, Isabel se había peleado con un novio y estaba pasando por un momento personal delicado, y por eso no solía estar en casa. Javier, que tenía dieciséis, quedó acurrucado en la cocina. La familia se sorprendió cuando a los gritos exigieron llevarse a Mónica en vez de a Emilio. Mercedes fue al baño y tiró la libreta de direcciones de Mónica. Luego la ayudó a vestirse. En la desesperación de la noche, Mónica sugirió escapar por la salida de servicio. Su padre, confiado en su buen andar como católico intachable y ex funcionario, la atajó: "Quedate tranquila y no te escapes, esto lo arreglo yo". Se equivocó.

Todo duró unos minutos. Sin hacer ruido, un par de "servicios" revisaron cajones, otro par buscó y arrastró a Mónica y el jefe del operativo le dijo a Mignone, con voz velada: "Denle plata para el regreso, en dos horas la tienen acá". Le dieron. Nadie en el edificio escuchó nada.

A pesar de que las horas pasaron sin que Mónica regresara, y de que las horas se convirtieron en días, los Mignone no llegaron a pensar en ese momento que Mónica podía ser una desaparecida. A esa altura, Mignone se moría de culpa por no haber exigido que lo dejaran acompañarla. No lo hizo por una razón simple: ni se le pasó por la cabeza que no volvería.

Emilio y Chela Mignone conocieron la experiencia de ser familiares de desaparecidos desde muy temprano. Y empezaron a decirlo públicamente, mientras otra gente trataba de minimizarlo u ocultarlo.

“Mi hija desapareció.” Sin más elocuencias ni medias palabras. Mignone empezó una búsqueda desesperada. Su agenda estaba llena de contactos de su pasado como funcionario. No dudó en llamarlos. Tenía el teléfono del general José Vaquero, comandante del Cuerpo III de Ejército, con asiento en Córdoba. Discó. “Yo no sé nada, cuánto lo siento”, le dijo Vaquero. “Ustedes mienten, usted lo sabe”, le dijo Mignone. Él y Chela decidieron que hablarían con honestidad brutal ante quien tuvieran delante. Nada de floreos del lenguaje, aunque nunca perdía las buenas maneras: una cosa es ser directo y otra ser un maleducado. Pero, entre su gente, Mignone ya acostumbraba hablar con asco de los militares.

Mignone logró atar algunos cabos sueltos: rastreó el camino de unos curas que habían sido detenidos y luego liberados. También consultó al marino-político Francisco Manrique. Ahí supo fielmente que Mónica y sus amigos habían sido detenidos y llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). De obstinado nomás, un día empezó una gestión a través de viejos contactos para sentarse frente a Emilio Massera, almirante de la Armada Argentina y miembro de la junta militar. No paró hasta tenerlo enfrente: “Ustedes los tuvieron en la ESMA”. Massera, por supuesto, negó todo.

Mónica había acompañado estrechamente a la gente de la villa que estaba con la JP. Como muchos otros militantes, había llegado a la política a través del trabajo social de base que luego se ampliaba en largas discusiones políticas. Era muy activa en esas reuniones y en las operaciones de publicidad, pero según su familia nunca se integró a Montoneros, solo formaba parte de un grupo de superficie, entraba y salía de su casa y nunca pensó en pasarse a la clandestinidad. Pero era compañera de militancia e íntima amiga de Mónica Quintero, quien, según Isabel Mignone, sí era un cuadro del grupo guerrillero. Emilio Mignone recibió esa especie de confirmación cuando un oficial, detrás de un escritorio, le sugirió que su hija era una más entre los “perejiles” que regalaban su vida a los planes ciegos de la cúpula montonera.

Para quienes lo conocían, Mignone no parecía un tipo demasiado cariñoso aunque tampoco arisco. Solo era un tipo que fue cambiando. Primero, con la mudanza de Luján a Buenos Aires. Después, con el viaje a Estados Unidos. Luego, con la desaparición de Mónica. Algunos lo veían como un gran contenedor, otros como una especie de cura pícaro. Lo de Mignone no era la política sino la educación. El destino lo hizo cambiar de andarivel.

Por aquel entonces, Robert Cox, director del *Buenos Aires Herald*, recibió en su escritorio una carta. Era la primera vez que se enteraba de la existencia de Mignone y, por extensión, de la nueva entrada que la Argentina le regalaba al diccionario de los derechos humanos: “desaparecido”. Cox quiso dar a conocer el caso, publicarlo. El

periodista lo fue a ver y empezaron a frecuentarse, con ciertas rutinas casi laborales. Mignone le mandaba gente a la redacción que le relataba otros casos de desapariciones forzadas. Cox le mandaba a su departamento familiares de víctimas que necesitaban un hábeas corpus.

Andrew Graham-Yooll, redactor del *Herald,* también paró las antenas y se solidarizó con los familiares que buscaban a sus desaparecidos. El gobierno militar prohibía mencionar las desapariciones y por supuesto el término "desaparecidos", salvo que existiese una confirmación oficial. Graham-Yooll sugirió pedirle a la gente que llevara un hábeas corpus que sirviera como la confirmación oficial. Mignone, en uno de sus frecuentes encuentros en su departamento, le llegó a decir que no lograba entender cómo era posible que él mismo (un ex funcionario de gobiernos militares, católico a ultranza, conservador y de derecha, pensaba Graham-Yooll) estuviera actuando así. Pero lo estaba haciendo. Y así iba a seguir.

3
Los organismos

Además de las oficinas militares y los pasillos de algún tribunal desolado, la búsqueda de Mónica lo llevó a Mignone a golpear las puertas en los organismos de defensa de los derechos humanos. No había muchos, pero eran lo suficientemente representativos como para ser considerados un camino válido para saber algo.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) fue el primer organismo de derechos humanos de la Argentina, creado en 1937. Por su experiencia de décadas en defensa de las libertades democráticas, la LADH fue una referencia para quienes buscaban a los desaparecidos. Los miembros de la liga les sugerían a los familiares la presentación de hábeas corpus y el envío de cartas dirigidas al presidente de facto Jorge Rafael Videla. La liga no se pronunciaba públicamente sobre las desapariciones, en línea con la política del Partido Comunista (PC), que prefería distinguir a los represores entre halcones y palomas, mientras Moscú y Buenos Aires hacían negocios con trigo y minerales.

En febrero de 1976 había sido creado el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), que agrupaba a referentes de distintos credos y sumaba a las iglesias evangélicas bajo el paraguas coordinador de Jorge Novak, obispo de Quilmes, donde el MEDH comenzó funcionar. También asomaba la cabeza la Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP), una agrupación local de la Iglesia Católica. Sin embargo, era el Vaticano el que ordenaba qué debían hacer o decir. Generalmente, les decía que no dijeran ni hicieran nada. Hasta que Adolfo Pérez Esquivel —integrante a su vez de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)— sintió que su misión dentro de esa organización no era asentir con la cabeza las órdenes que bajaban desde Roma. “Basta de silencio”, dijo un día. Dio vuelta las palabras y fundó el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). Para ese entonces, Pérez Esquivel ya era conocido en el ámbito internacional como defensor de los derechos humanos. Había fundado el periódico *Paz y Justicia* en 1973 y, dos años después, había sido detenido en el Aeropuerto de San Pablo por la policía militar de Brasil junto con Hildegard Goss-Mayr, del Movimiento Internacional de la Reconciliación. Ese mismo año, Pérez Esquivel participó en la creación

de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 1976, mientras en la Argentina desembarcaba la dictadura de Videla, Pérez Esquivel era nuevamente encarcelado, esta vez, en Ecuador, junto con un grupo de obispos y religiosos latinoamericanos y estadounidenses con los que viajaba para ayudar a campesinos, comunidades indígenas y movimientos obreros latinoamericanos. El 4 de abril de 1977, cuando hacía los trámites para renovar su pasaporte, fue detenido en el Departamento Central de la Policía Federal, en Buenos Aires. "A usted no lo va a salvar ni el papa. Somos señores de la vida y de la muerte, y a usted ni los obispos lo van a salvar", le dijo un suboficial de la Unidad 9 de La Plata, uno de los centros en los que estuvo alojado. Fue torturado e incluso sobrevivió a uno de los "vuelos de la muerte" que despegaron desde el aeródromo de San Justo. Fue liberado en junio de 1978, después de haber estado un año a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

La APDH nació como una organización apalancada por el PC, diestro en crear estructuras que no delataran su origen pero que terminaba controlando y, llegado el caso, neutralizando. Sin embargo, funcionaba por consenso. La APDH no tenía local propio y lo único que conseguía eran espacios prestados para sus encuentros semanales. Por eso, a principios de 1977 empezó a juntarse en una sala de una parroquia metodista de Flores, donde gente como el sacerdote Jaime de Nevares, Alicia Moreau de Justo, el obispo metodista Carlos Gattinoni, el referente radical Raúl Alfonsín, Oscar Alende, el militante de izquierda Eduardo Pimentel, Alfredo Bravo (por entonces, un reconocido líder sindical docente que en septiembre de ese año fue secuestrado), monseñor Jorge Novak, Graciela Fernández Meijide y el rabino Marshall Meyer, gente de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Partido Socialista (PS) se cruzaban cada vez con más frecuencia bajo el paraguas protector del Consejo Mundial de Iglesias. Era una fábrica de tejer acuerdos, pero no acción. No se usaba la palabra "desaparecido".

Ahí, una tarde de 1977, Mignone se reencontró con un viejo conocido, el abogado Augusto Conte Mac Donell, más de veinte años después de haberse saludado por primera vez en un pasillo del Ministerio de Educación. Conte extendió la mano. "Nos conocemos de antes", le dijo, en un tono que estaba a mitad de camino entre la pregunta y la aseveración. "Sí, nos cruzamos en el Palacio Pizzurno, cuando usted era funcionario." Lo único en común entre los dos momentos era que un grupo de militares había asaltado el poder. Todo lo demás era diferente. Se miraron y se vieron curtidos, se contaron un par de anécdotas profesionales intrascendentes y se dieron cuenta de que sus vidas se habían detenido cuando sus respectivos hijos

desaparecieron. Desnudaron los detalles de cada desaparición, cruzaron nombres y fechas. Se dieron cuenta de que ya no vivían una existencia en movimiento perpetuo. Todo se había congelado.

Después de ese día no volverían a separarse. Se encontraban en la APDH y al salir de cada reunión, Conte y Mignone caminaban juntos por la avenida Rivadavia con la mirada fija en la vereda, el puño manoseando el mentón, pensando lo que no lograban articular en palabras, hasta que, casi al mismo tiempo, uno dijo al otro: “La posición de la asamblea es demasiado prudente para lo que nosotros buscamos”. Esa prudencia se traducía en una especie de eslogan que se decía de mil maneras diferentes en las reuniones, en los pasillos, en los cafés posteriores, en los llamados telefónicos cruzados: “Si le hacemos frente al gobierno, nos la van a hacer muy difícil”. Eso no impidió que se publicara la primera solicitada, con mil cien firmas, para respaldar la denuncia sobre mil desaparecidos. Pero a Conte y a Mignone no les parecía suficiente.

Graciela Fernández Meijide notó claramente que ahí no estaban juntos detrás de una ideología (por eso no eran un partido político) sino de una desgracia. Pensar que todos podían opinar igual políticamente era un error, pero el grupo de la APDH parecía estar de acuerdo en cómo plantarse políticamente frente a la dictadura. En eso sí había una relativa comunidad de acción. Muchos de los que se conocieron allí provenían de ámbitos sociales tan diversos que era difícil pensar que se hubieran cruzado de otra manera.

Allí también estaba Hebe de Bonafini, una simple ama de casa que recordaba con resentimiento a su familia, que no la había dejado estudiar aunque se hermano se pudo recibir de médico. Algunos de los presentes en aquellas reuniones la escucharon decir que, antes de que desaparecieran, le costaba creerles a sus hijos que había persecución y matanzas. “La autoridad, el gobierno, no puede hacer eso”, pensaba.

Mientras tanto, en otro rincón de Buenos Aires se formaba un “nidito peronista” —según lo llamaban sus miembros— que también trabajaba algunas causas judiciales. Allí se juntaban, entre otros, Miguel Unamuno, Armando Caro, Nilda Garré y Alejandro Díaz Bialet. Alicia Oliveira también era uno de ellos, aunque también había gente de la Democracia Cristiana (DC), como Néstor Vicente y algunos marxistas, a quienes llamaban cariñosamente “el grupo del Circo de Moscú”.

El refugio nació en la calle Paraguay, en el estudio del viejo Vicente Saadi, el caudillo catamarqueño. Otros familiares de víctimas o de ex presos empezaron a llegar al estudio para encontrar una solución a sus problemas. Néstor Vicente quedó impactado porque fue allí donde escuchó por primera vez que a la dictadura se le decía así, se la llamaba “dictadura”, no “Proceso”, ni “los comandantes”, y mucho

menos “gobierno”.

Para algunos, las líneas de acción de la APDH eran resultado de los acuerdos entre el PC y Alfonsín y algunas pinceladas de De Nevares, quien más allá de coincidir en líneas generales con la política de la APDH, no se preocupaba por la cuestión política. Tal vez por eso a ellos les empezó a molestar la tendencia hacia una estrategia de acuerdo cívicomilitar que bajaba desde el PC. Como en el estudio de Saadi, casi nadie había escuchado la palabra “dictadura” en esas reuniones. El desaparecido era una “persona detenida de la que no se sabe”. Tampoco se metían con Videla, y como mucho le tiraban por elevación criticando al ministro de Hacienda José Alfredo Martínez de Hoz y la política económica.

Pero a los Conte y a los Mignone esa prudencia los empujaba cada vez más a pensar en otro marco para seguir buscando respuestas a la pregunta básica: ¿dónde están? Emilio y su esposa Chela —maestra y también colaboradora en varios proyectos de educación popular en las villas del Bajo Flores— y Augusto y Laura —psicóloga— encontraron en la APDH a otros, familiares o no, que buscaban la verdad por donde pudieran. La APDH ya sumaba cuatro mil casos documentados de desaparecidos, pero no tenía abogados para activar causas judiciales.

Conte y Mignone tenían claro que debían utilizar esas denuncias, según ellos, no contra la voluntad de las familias sino superando esa voluntad, sin necesidad de consultarlas. Como punto de partida había que cambiar la manera de llamar a quienes ya no estaban. Conte insistió dentro de la APDH para que los “desaparecidos” pasasen a llamarse “detenidos desaparecidos”. Buscaba poner en primer plano el origen del secuestro. “Así podemos plantear una verdad histórica”, decía. “Se los llevaron detenidos, están desaparecidos. ¿Dónde están?” Mignone rumiaba su bronca porque, según él, en la APDH no se podía hablar en ciertos términos porque se temía la reacción de los militares. La palabra “detenido” denotaba la acción de una autoridad pública, y la APDH no quería problemas con la autoridad pública. Para Mignone, la asamblea nunca quiso acusar al gobierno militar de las desapariciones. “Eso nosotros sí lo haremos”, desafió.

Conte y Mignone eran muy distintos, tal vez por eso se complementaban a la perfección. Mignone era vehemente, Conte era, por lo general, parco, reflexivo y analítico, más medido. Alguno podía creer en una reunión que Emilio dormía y de repente salía a decir algo tan claro, tan agudo, que cambiaba el curso de acción. Graciela Fernández Meijide pensaba que era un genio en disimular su inteligencia. Para ella, el cerebro lo ponía Emilio y Conte, el músculo. Mignone era impulsivo, osado, y no era raro que levantase la voz; Conte, según su mujer, no gritó nunca en su vida. Se respetaban y

apreciaban, y básicamente querían lo mismo: justicia.

Augusto era un creyente a medias, pero tenía una vocación social muy fuerte, al igual que Emilio. Para Laura Conte, era “esa cosa rara de cristianos comunistas”. Los dos se sentían muy atraídos por las figuras de Alicia Moreau de Justo y de Jaime de Nevares y de Jorge Novak. Cada vez que alguno de ellos asomaba su presencia en la iglesia de Flores donde se reencontraban y reunían cada lunes, o se acercaban desde la distancia a través de una carta leída en voz alta, Conte y Mignone se sentían un poco menos solos, como si la presencia de aquellos emblemas les bastara para seguir adelante.

Con lo que tenían en común y lo que los diferenciaba, empezaron a reunirse en la casa de Mignone. Isabel los veía sentados a la mesa del escritorio: Mignone en la máquina de escribir, Conte a su lado, un poco espantados y un poco fascinados ante su nuevo rol.

4
Momento cero

Hacia los primeros meses de 1978, las diferencias en el interior de la asamblea eran insalvables. La APDH creía que el tema de las desapariciones debía estar restringido al escenario y a una estrategia local para no incomodar a los militares. Tampoco quería iniciar causas porque sostenía que las denuncias eran confidenciales. Pero hubo otros que pensaban que debían abrir el juego al mundo entero. Para Mignone, la APDH reflejaba lo que era la sociedad argentina: prudencia y terror de ser identificados abiertamente con la guerrilla, una representación a escala del sistema de partidos, con dirigentes políticos e internas. Y eso, él lo sabía, no les iba a servir. Laura Conte olía que en la asamblea se la veían venir. Para ella, la APDH estaba muy quieta en esa voluntad de unificar ideas que aceptaba gente con visiones políticas demasiado diferentes. El grupo estiró el tiempo. En una reunión, los "disidentes" propusieron colaborar con la OEA en una futura visita que se estaba organizando, iniciar causas judiciales y hacer un centro de documentación. Como sabían de antemano, la iniciativa fue rechazada en votación.

Conte y Mignone por entonces ya eran vicepresidentes de la Asamblea. Pero estaban muy jugados y no les quedó otra opción más que comunicar la decisión. "Vamos a hacer un grupo aparte, es la única salida, pero no lo hacemos contra la asamblea, sino para sumar desde otro lado. No nos vamos, pero Augusto y yo pensamos que es razonable que renunciemos a la vicepresidencia." Como Laura Conte sospechaba, nadie se sorprendió demasiado. Los demás lo lamentaron, pero entendieron. En el comienzo, se improvisaron un nombre: Abogados de Apoyo a la APDH. Ya eran un grupo. Minúsculo, pero que logró arrastrar a otros.

Boris Pasik, también abogado, llegó con un largo camino transitado en la militancia socialista. Había sido miembro de la Comisión de Solidaridad con el Pueblo Chileno a partir de la caída de Salvador Allende y de una agrupación similar que nucleaba a los republicanos españoles en el exilio. Se habían llevado a Gustavo, su hijo. Tres días después de su desaparición logró escuchar su voz en una breve comunicación telefónica. Es lo último que supo de él.

Alfredo y Élida Galletti buscaban a su hija Liliana, quien tenía

treinta y un años al momento de ser secuestrada. Alfredo era un abogado constitucionalista muy respetado, miembro de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y autor de varios ensayos sobre política y sociedad. Élida ya era una de las primeras Madres de Plaza de Mayo, junto con Chela Mignone y Laura Conte.

José "Pipo" Westerkamp era catedrático del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Un científico bien relacionado con el ambiente académico europeo que había publicado artículos de divulgación en varias revistas. También estaba relacionado con la NASA, y tal vez por eso guardaba un anhelo de vivir en Estados Unidos, y una constante expresión de asombro, como todo el tiempo si se estuviera preguntando "¿Y a mí, por qué?". Se habían llevado a su hijo Gustavo.

Carmen Lapacó era profesora de Educación Física en algunos colegios de Buenos Aires. Había aprovechado la posibilidad de jubilarse con veinticinco años de trabajo cumplidos para dedicarse a la búsqueda de su hija Alejandra.

Matilde y Santiago Mellibovsky se unieron al grupo cuando desapareció su hija Graciela, entonces alumna del Colegio Nacional Buenos Aires.

Todo ellos se encontraron en medio de la tragedia y de a poco fueron dando forma a una organización. Otros se sumaron por fuera de la APDH.

Noemí Labrune trabajaba codo a codo con Jaime de Nevares y en la Asamblea de los Derechos Humanos neuquina. Algunos veían en ella una militante de izquierda sin partido, sin dogmas ni pertenencia orgánica posible, pero de izquierda. Ella sola era la resistencia a la dictadura en la zona del Alto Valle del río Negro y se decía que sabía el nombre de cada víctima, la fecha de cada desaparición, que había elaborado teorías sobre quién de qué fuerza de seguridad había participado en cada operativo. Labrune tomó contacto con Mignone a través de un trabajo que había preparado sobre la represión en Neuquén. "Es demasiado valiosa, muy tenaz, pero qué carácter difícil que tiene", dijo Mignone cuando la conoció, sorprendido cuando contrastaba el estilo polemista de Labrune con su cuerpo delgado y menudo y sus ojos celestes que parecían inofensivos. A los demás les pareció, simplemente, una mujer brillante. Ella no tenía familiares desaparecidos pero se consideraba directamente afectada porque en su casa habían secuestrado a una nena cuyo padre la había refugiado allí. Para las Madres, Noemí era una Madre más.

Alicia Oliveira ya era abogada penalista y se desempeñó como jueza de menores hasta que en 1976 la dictadura la incluyó en la primera lista de personal cesanteado de la justicia. Fue despojada de su función y cayó al refugio de Saadi. Cuando Mignone y Conte supieron

del trabajo en el estudio del catamarqueño, se acercaron para ver si podían complementar potencialidades, o por lo menos evitar perder tiempo, dinero y recursos por estar haciendo el mismo tipo de trabajo. Allí les propusieron a Oliveira y a Garré sumarse al grupo. Solo la primera aceptó la oferta. Oliveira estaba acumulando experiencia como una "pasillera cualquiera de Tribunales", según se autodefinía. Claro que en esos pasillos se empezó a encontrar con gente que le decía "Anoche se llevaron a mi hija". Se puso hacer hábeas corpus. La gente quería un papel para llevar a un juzgado y ella se los preparaba. Así conoció a Mignone, a quien reconoció como el motor de aquel puñado de personas, alguien que evolucionó políticamente a partir de la tragedia personal. Pensaba que lo que Mignone comenzaba a hacer, lo estaba haciendo para otros, porque para él Mónica no regresaría.

El grupo y todas sus angustias y esperanzas empezaron a habitar un espacio común. Era la casa de los Mignone, el departamento antiguo y amplio de techos altos en Santa Fe y Agüero, el lugar de donde se habían llevado a Mónica. El hogar de Emilio y Chela se transformó de a poco, a todas horas, en el sitio al que había que ir cuando ni los militares ni los curas ni los dirigentes de otras organizaciones de derechos humanos ni los políticos tenían una respuesta. En la casa de los Mignone no había lugar para declamar la fatalidad y el desastre, sino para accionar.

Los dueños de casa recibían cada vez más gente, comenzaron a recolectar firmas, a gestionar dinero para publicar solicitadas y cuadernillos para difundir lo que estaba pasando: "Hay gente que está desapareciendo". El living era grande y, de acuerdo con la cantidad de asistentes, a veces usaban la biblioteca. En un momento, la organización necesitó pasar al siguiente nivel y tener una oficina propia. También necesitaron a alguien para atender las cosas de todos los días, o sea, una secretaria. Carmen Lapacó le dijo por lo bajo a Chela Mignone: "Podría ser yo". Así, pensó, usaría su tiempo ocioso para estar más cerca de donde pasaban las cosas.

"Se llegó a la conclusión de que frente a la cerrada actitud de los poderes políticos y militares se hacía indispensable accionar tenaz y urgentemente en el área judicial como vía esencial para el logro de las soluciones posibles respecto de las violaciones ya sucedidas así como para evitar su continuidad", escribió Mignone. Ahí estaba la cuestión. El medio: meter en Tribunales instrumentos públicos (denuncias, escritos, pedidos de hábeas corpus) para que no se perdieran. "No nos van a dar pelota, pero eso no desaparece." El fin: constituir prueba. Núcleo pequeño, decisiones rápidas.

Primero llamó un familiar de un desaparecido buscando ayuda. Luego, otro tocó el timbre. Con los meses, había un mecanismo en marcha. Se respiraba un clima de trabajo y recibían más y más gente.

Cada uno se ponía con la tarea que le tocaba mientras buscaban oficina.

Noemí Labrune tuvo una idea. Cerca de Tribunales, en Viamonte al 1300, exactamente frente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), había un departamento minúsculo que se ofrecía en alquiler. El papeleo salió bien y el departamento se convirtió en la primera oficina del grupo. En la AFA el teléfono rojo de Alfredo Cantilo, su presidente, ardía en línea directa con el despacho de Videla. Pero ellos dos y el vicealmirante Carlos Lacoste, a cargo de la organización, no tenían demasiado tiempo para espiar a sus vecinos, ya que estaban ocupados terminando los detalles de los actos inaugurales del Mundial de Fútbol de 1978.

Noemí Labrune era la persona clave en la gestión diaria. Si bien seguía viviendo en Neuquén, cuando aterrizaba en la oficina empezaba a ponerle los puntos a quien hiciera falta, aun a Conte o a Mignone cuando a estos se les había quedado colgada la redacción de algún escrito para meter en algún juzgado. También se fue convirtiendo en un buen árbitro entre ellos, acercando posturas cuando hacía falta o aclarando el camino si todo parecía embarrarse. Algunos de sus compañeros le reconocían una especie de temor a que el nuevo grupo quedara demasiado a la derecha de la APDH. Una vez, revisando un escrito, gritó: "¿Cómo vamos a citar a un jurista como Soler, que apoyó el golpe de Estado del 55?". Cuando Noemí ponía un pie adentro, la oficina era un torbellino.

El departamento de Viamonte tenía un ambiente dividido en dos gracias a una biblioteca y unas cajoneras que almacenaban los documentos que se iban juntando. Había una mesa larga y sillas. Un teléfono. Una máquina de escribir. Una cocinita y el baño. Allí empezaron a acumular prueba sobre prueba. Carmen Lapacó recibía a la gente, armaba reuniones, hacía café, llevaba escritos y traía noticias. Los fundadores tenían energía pero también sabían comprarse problemas. Habían sacado algunos papeles de la Comisión de Denuncias de la APDH, lo que les valió algunas objeciones y críticas fuertes por parte de sus miembros.

Nadie esperaba resultados inmediatos, pero tenían la idea fija de que todos los elementos se empezaran a amontonar en los juzgados, con cada sello y cada timbrado puesto en su lugar. "Con eso es suficiente por ahora. Ya vamos a ver lo que hacemos", dirigía Mignone. Y la acción se aceleraba día a día. Conte quiso decir lo suyo: "Debemos decir que se los llevaron por algo, que se los llevaron porque eran militantes". Así planteó el paso de un dilema moral familiar a uno político. "La razón por la que se los llevaron no nos avergüenza y no los culpabiliza, no es un delito soñar con una sociedad más justa." Los demás lo frenaban, le decían que no, que lo

podrían procesar por apología del delito. Para Conte, militar en una organización no era ningún delito.

De todas maneras, nadie dejaba de reconocer el trabajo de la APDH. Con el dato de las cuatro mil denuncias en carpeta, el propio Mignone pensó en editarlo en un pliego y que se distribuyera de mano en mano, que se transmitiera de boca en boca. Fue hasta el bajo porteño y buscó a Robert Cox de nuevo. La imprenta del *Herald* era una de las únicas que podrían aceptar imprimir semejante denuncia. "Yo no puedo decidir", le dijo Cox, y lo mando a ver al empresario estadounidense dueño del diario, quien volvió a patear la pelota para adelante. "Vaya a la imprenta Alemann", le sugirió.

La imprenta Alemann editaba el *Argentinisches Tageblatt*, el periódico para la comunidad alemana en la Argentina. Mignone se apareció por ahí para hablar directamente con el encargado del taller, un suizo que solo entendía el rigor de los números. Aceptó el trabajo. A la semana siguiente sonó el teléfono de la imprenta. "¡¿Qué hizo?! ¡Está imprimiendo en mis máquinas una lista de gente desaparecida!", le gritó un desquiciado Roberto Alemann —recurrente miembro del *establishment* de la dictadura— al gerente. Y dio la orden de parar todo. Mignone lo fue a ver y sacó a relucir lo mejor de su oratoria, pero no hubo caso: "Dicen que no hay censura y no nos dejan imprimir eso, ¿cómo puede ser?". Alemann lo miraba imperturbable con sus ojos celestes, como de vidrio. Y fue más terco. "No puedo hacer nada por usted, y usted lo sabe", cerró Alemann. Mignone vio cómo el material terminó secuestrado antes de circular.

Mignone se dio cuenta de que necesitaban una dactilógrafa para tipiar un largo informe para la OEA. Se lo comentó en una charla telefónica a su amiga Cata Guagnini, una reconocida militante y miembro fundadora de Madres de Plaza de Mayo, quien en ese momento estaba con una amiga. Guagnini miró a la mujer que tenía al lado y volvió a hablar: "Emilio, le mando una chica ahora". Era Cristina Caiati, una periodista que recientemente había regresado de un pequeño exilio en Bolivia.

La primera vez que fue al departamentito, le abrió la puerta Alicia Oliveira. Al rato, la pusieron a tipiar en una máquina de escribir portátil. Caiati quiso impresionar a Mignone con su velocidad. Lo debe de haber logrado, porque el informe fue presentado a tiempo y Caiati se convirtió en la primera persona rentada de la oficina con un contrato de palabra. Y ahí se quedó. Los abogados dictaban y ella lo pasaba a máquina, trabajando con papel carbónico. Cuando las visitas de familiares se empezaron a hacer más frecuentes, más materiales se amontonaban en su mesa de trabajo. Alguien recortaba un diario, otros aportaban un informe. Algunos familiares llegaban desde el interior con ejemplares de diarios locales o alguna foto. Casi sin

quererlo, Caiati le fue dando forma al área de documentación y archivo.

5
La visita de la CIDH

Mignone no dormía. Le sonaba el teléfono a cualquier hora. Eran voces de familiares que repetían una y otra vez lo mismo: "¿Habrá alguna novedad para mí? Tengo la esperanza de que mi hijo esté vivo, de que vaya a aparecer". Como eso no sucedía, como nadie mostraba un cuerpo, unos huesos, como nadie decía "Ahí está su pariente, lo matamos", o "Lo encontramos muerto", los familiares seguían. Si a Mignone no lo encontraban en Viamonte, lo buscaban en la casa. Siempre daban con él. Y Mignone atendía el teléfono o abría la puerta. De día o de noche. A veces ni él mismo sabía en qué creer. Podía ser el más realista de los interlocutores y enterrar cualquier esperanza. O podía inundarse de piedad y balbucear: "Están vivos, hasta que alguien diga lo contrario". Conte tampoco pegaba un ojo.

El rumor de la visita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA se hacía cada vez más fuerte. Pero Conte y Mignone sabían que la comisión solo podía pisar la Argentina si era formalmente invitada. La dictadura no tenía ningún interés en que eso sucediera. Pasaban las semanas y el secretario general de la OEA, el argentino Alejandro Orfila, se las arreglaba para levantar obstáculos burocráticos, uno tras otro, para que nadie fuera a ver nada. Pero en un rincón del Vaticano, durante la ceremonia de asunción de Juan Pablo II como papa, el vicepresidente de James Carter, Walter Mondale, lo cruzó a Videla con una mezcla de notificación, consejo y advertencia: "Usted sabe que hay un crédito del Eximbank para su país que está trabado. Puede destrabarse si la comisión visita la Argentina". Videla resopló, pero luego de una reunión en Roma, horas después, todo pareció arreglado.

En el vuelo que lo llevó de regreso a la Argentina, pensó cómo convencer al almirante Massera y, sobre todo, al general Luciano Benjamín Menéndez —comandante del Tercer Cuerpo del Ejército en Córdoba—, quien no quería que nadie se le metiera en su dominio cordobés. Pero ante la promesa del préstamo, nadie puso demasiadas objeciones.

Sin embargo, la Argentina seguía negando la visita *in loco*, como pretendía Estados Unidos. Para Octavio Carsen, un abogado uruguayo que se había acercado para trabajar casos de compatriotas suyos

desaparecidos en la Argentina, fue una reunión en Washington a la que asistió Videla la que terminó de destrabar el asunto: el presidente de facto exigió que se liberara la venta de armamentos a la Argentina y ese fue su movimiento para negociar la visita. “Yo los recibo, pero liberen armamento.” Según él, Videla confiaba en que Orfila iba a poder o bien ganar tiempo con un tecnicismo respecto a la adhesión o ratificación de la Argentina a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos —suscrita en 1969— o bien neutralizar las consecuencias, o en última instancia, maquillar la visita sin mayores problemas. Pero Mignone tenía otros planes: él ya era una especie de ministro de relaciones exteriores del movimiento de derechos humanos. Días después, el 18 de diciembre de 1978, la invitación se hizo oficial a través de una nota. Se fijó para mayo de 1979, pero como entraba en vigencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se tuvo que postergar hasta septiembre.

El grupo seguía buscando su lugar en el mapa de los derechos humanos. Las urgencias de la agenda eran marcadas por la dictadura, pero Conte no se cansaba de repetir: “Este no es un espacio dramático”. Más bien se iba transformando en un lugar para hacer cosas concretas más allá de manifestarlas. Un día, un viejo conocido de Mignone llamó a la puerta. Era Tex Harris, un funcionario de la embajada norteamericana. Medía dos metros, tenía pelo tirando a rojo. Si no fuera por su sonrisa casi permanente, era un tipo que daba miedo. Llegó con un amigo, un tal Leonard Mikel, ex funcionario del Departamento de Estado, a quien Mignone ya conocía. Mikel tenía vínculos con instituciones académicas y estaba muy entrenado en la gimnasia de los *think tanks*, esos grupos de expertos que investigan temas de políticas públicas. Era un tipo hábil que había sabido cómo armar su propia institución de estudios en Derecho y sociedad con dinero del Departamento de Estado. De allí traía buena predisposición y 80 mil dólares en el bolsillo para apoyar una organización local. Algunas horas antes había pasado por la APDH, pero allí prefirieron ignorarlo. Mignone y Conte le abrieron la puerta. Lo escucharon. “Los recursos están disponibles para su organización”, dijo Mikel en un inglés patinoso. Conte y Mignone no necesitaron la traducción de nadie. Siguieron hablando, le sonrieron todo lo que pudieron y lo dejaron ir.

Apenas se cerró la puerta detrás de los norteamericanos, los fundadores invirtieron horas de charla pesando los pros y los contras de aceptar la donación. “Nos da esto cuando lo único que tenemos es una mesa y cuatro sillas”, trataba de convencer Mignone. “Pero es plata del Departamento de Estado”, le respondían. Mignone y Conte se tomaron su tiempo. Días después, en una reunión informal, Mignone habló ante todo el grupo: “Lo vamos a aceptar y vamos a hacer oficial

el nombre. Vamos a ser el Centro de Estudios Legales y Sociales, y nos vamos a dedicar a los juicios, a la documentación y a prestar servicios jurídicos, incluso a la asamblea si ellos no lo quieren hacer". Mikel ya dirigía en Estados Unidos su propio Center for Legal and Social Research. Traduciéndolo, constituyó el nombre. Pidiendo que mostrasen los cuerpos diseñó la acción.

"Muestren el cuerpo." De eso se trata un pedido de hábeas corpus. Se supone que un juez investiga si la persona está efectiva y legalmente detenida, y si lo está, lo informa, y si no lo está, la pone en libertad. El recurso del hábeas corpus fue la máxima apuesta y acaso la única con la que podían contar los abogados del recién bautizado CELS para saber algo de sus desaparecidos.

En un simple memo, redactado en un lenguaje que quedaba a medio camino entre las formalidades semánticas que nutren el mundo del derecho, las palabras coloquiales y la indiferencia hacia las mayúsculas, se hablaba de la formación de un proyecto. Con una energía que nadie sabía de dónde sacaba, Mignone escribió la fecha —3 de julio de 1979— y después tipió: "La propuesta es crear una asociación civil con los presentes y las personas a incorporarse. Este centro tratará todo lo relacionado al abuso de personas (detenidos, desparecidos, recursos de amparo a villeros desalojados, tortura policial, antisemitismo, etcétera)".

Mignone —experto en formalidades institucionales— se autoencargó la confección de los estatutos y puso manos a la obra para conseguir financiación del exterior. Sabía cómo y a quién tocar. Agarró la máquina de escribir una vez más. Empezó a describir el escenario que había y lo que proponía la nueva agrupación. Quería que afuera se enteraran de que se estaba gestando algo diferente de lo que ya había: "La APDH ha tomado a su cargo las actividades de gestión pública en materia de derechos humanos, ejercitando acciones judiciales de interés colectivo ante la Suprema Corte y recolectando datos sobre desaparecidos. No atiende casos individuales", ilustraba. Pintó al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos como "una institución creada por confesiones religiosas dedicada a prestar asistencia directa a las familias de los afectados" y habló de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre como una institución de "antiguo prestigio". El CELS se preparaba para lo que consideraban su debut en sociedad. Confiaban en que la llegada de la CIDH iba a echar algo de luz sobre las desapariciones.

Apenas Mignone se enteró de la confirmación del viaje, corrió de nuevo a la máquina de escribir y redactó otro memo. Siempre, primero, la fecha: 6 de julio de 1979. Después punteó ocho tareas para cada uno de los diferentes miembros del equipo del CELS ante la llegada. Había que movilizar familiares, proponer lugares de interés

para la recorrida de la comisión, elaborar una solicitada. A partir de la autorización de la APDH para trabajar con los cuatro mil casos, Mignone, Conte, Pasik y Labrune seleccionaron quinientos casos de desapariciones en los que estaba suficientemente probada la participación de fuerzas de seguridad del Estado. Mignone viajó a Washington y le entregó los documentos con los quinientos casos al chileno Edmundo Vargas Carreño, el jefe de la inminente *troupe*. Él y su equipo seleccionaron cincuenta.

Cuando Mignone regresó de ese viaje, compartió la impresión que se había llevado con sus compañeros: había una posibilidad razonable de que la CIDH difundiera una condena pública, y esa sensación fortaleció la estrategia de que el CELS tomara casos particulares. Graciela Fernández Meijide les advirtió a Conte y a Mignone: "Muchachos, yo no me quiero ir de la APDH, porque tengo una responsabilidad muy grande y además soy el mejor vínculo entre ustedes y ellos. Porque yo sé que cuando ustedes se terminen de ir, acá se va a armar quilombo".

Lo que pasaba era que en la APDH no se lo reconocía al CELS, no existía. Augusto y Emilio iban a las reuniones del secretariado, ellos —como individuos— existían, se los reconocía, pero al CELS no. La tensión en el interior de la APDH recrudeció cuando el PC manifestó su disgusto por la llegada de un organismo que respondía a la política de derechos humanos de Jimmy Carter. Es decir, no parecían mostrarse —a priori— muy colaborativos hacia la comisión, interpretando que esta esquina sudamericana apartada del mundo también era escenario de la Guerra Fría.

El 6 de septiembre de 1979 la CIDH aterrizó en la Argentina. Se abrieron oficinas temporales en la Avenida de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, para recibir las denuncias y el primer día la cola de los familiares que querían informar sobre desapariciones llegó a ocupar cinco cuadras. Se recibieron 7.500 denuncias. En la fila se improvisaron diálogos que parecían una colección de historias de terror y de ausencia.

Mientras la comisión visitaba la Argentina, los Mignone se iban resignando. Isabel Mignone pensaba que era imposible que tuviesen detenidos, alojados y alimentados a un número tan grande gente sin que nadie supiera nada. "Claro, los están matando a todos enseguida", pensó. Su padre le blanqueó por esos días que la comisión estaba sacando conclusiones similares. Pero no podía decírselo a los familiares, y menos a las Madres, porque se enfurecían. Nadie quería escuchar eso. En la desesperación de la búsqueda, algunos de los Mignone recurrieron a las ciencias paranormales para tener, si no un dato certero, al menos una mentira piadosa que les permitiera creer en algo.

No fue un día en particular, pero hubo un momento en el que todos lo dieron por sabido sin tener que confirmarlo con nadie más. Si la comisión no había logrado encontrar a nadie, era porque no estaban más. Un día, simplemente, hablaron de Mónica dándola por desaparecida para siempre.

Durante la visita, no solo Mignone y Conte corrieron una maratón. Todos los miembros del CELS orientaron a los oficiales de la comisión, les explicaron, les mostraron documentos, fotos, archivos, expedientes, objetos, lugares, viajaron con ellos al interior y los inundaron de material documental para la elaboración del documento final.

Una tarde, cuando los visitantes ya llevaban varios días en suelo argentino y habían visto demasiado, Vargas Carreño juntó a un grupo de gente que había seguido de cerca el trabajo. Mignone, por supuesto, estaba entre ellos. En una oficina del centro, frente a un puñado de personas, dijo: “Yo no puedo decir esto en público, porque voy a quebrar muchas esperanzas y puede ser muy cruel, pero estoy convencido de que los desaparecidos han sido asesinados”. Mignone, quien tenía la misma sensación, volvió a su casa dudando de si guardaría para sí el dato de alguien que parecía demasiado bien informado o si abriría el juego entre su grupo y los familiares que cada día esperaban de él lo que el gobierno escondía: la verdad.

Esperó algunas horas, pero Robert Cox terminó de decidir por él y, de paso, lo sumergió en un conflicto. Lo invitó a tomar un café, pero no para arreglar el mundo. Cox tenía información. Le dijo, sin floreos: “Conversé con algunos militares. Ante la llegada de la comisión, mataron a muchos. Como si quisieran limpiar el patio antes de la llegada de las visitas”, le soltó. Mignone y Conte se encontraron ante un escenario complicado: habían trabajado mucho para lograr que la CIDH visitara el país, y ahora debían entender que esa visita —como efecto colateral— había engendrado, según le contaba Cox, más muertos.

La comisión tenía programadas varias reuniones con referentes de los partidos políticos. Aprovechando ese atajo, los peronistas que se juntaban en lo de Saadi habían decidido redactar un documento para presentarlo a los visitantes. No estaba demasiado claro si lo darían a conocer como un documento orgánico o como el trabajo de un grupo de abogados peronistas. De todas maneras, se lo tenían que mostrar a Deolindo Felipe Bittel, el presidente del partido. Cuando fueron a llevarle el documento —redactado por Pedro Cámpora y Jorge Vázquez— pasó lo que imaginaban. El papel hablaba de desaparecidos, de cárceles clandestinas y, a medida que leía, Bittel —entre indignado por el texto e incómodo por lo que significaba respaldarlo— iba negando con la cabeza y aseveró: “No, de ninguna manera, no puedo firmar esto”. Fueron a ver a Herminio Iglesias, que

era el vicepresidente del partido. Pasó lo mismo. El reloj corría en contra y casi sobre la campana, el grupo logró que los jefes del partido pusieran la firma.

Cuando los visitantes regresaron a Washington, el 20 de septiembre, Mignone y Conte respiraron. Habían sido días demasiado intensos. Ahora iban a poder dormir un poco, aunque no por mucho tiempo. El 18 de abril de 1980 la CIDH dio a conocer su Informe Final, aunque a los miembros del CELS la alegría por la noticia les duró poco. La dictadura no solamente prohibió su publicación en la Argentina, sino que a través de su prensa amiga publicó un contrainforme, sumando un par de párrafos sumamente técnicos y vacíos de contenido expresivo tomado del Informe Final original. Mignone lo leyó entre los suyos y gritó, como quien larga un insulto: “¡Esto es puro palabrerío jurídico! ¡No dice lo que nosotros queríamos difundir!”. Es decir, que a los desaparecidos los desapareció el Estado a través de un sistema de aniquilación dirigido por los altos mandos del Estado Mayor y ejecutado por oficiales y soldados de las tres armas. Mignone y Conte masticaron la bronca. “Igual, seguimos sumando”, le dijeron al grupo. Se miraron y se creyeron a medias. “Tenemos que seguir con nuestra estrategia.” De eso estaban convencidos. El Informe Final real, el que no fue censurado, fue menos ambiguo. Habló de desapariciones, de muertos, de NN. Ya no quedaban dudas.

6
Madres, Abuelas

El rigor que el CELS ponía en la tarea de investigación, documentación y denuncia empezó a manifestar algunas contradicciones que había con las Madres de Plaza de Mayo y las demás organizaciones de derechos humanos. “Ellas nunca van a aceptar que les digan que están muertos. Nunca. Ellas quieren que los traigan vivos. Por eso se oponen a la exhumación de cadáveres. Eso es absurdo. Yo a Hebe no puedo explicarle nada, no me escucha”, postulaba Mignone entre sus íntimos.

Graciela Fernández Meijide había reparado, cuando la conoció, en su forma de hablar, de vestirse. Y observó que Hebe de Bonafini era una especie de anarquista sin saber que lo era, que detestaba lo que era la justicia sin saber exactamente qué era. Pensó que era una señora que si no la hubieran convocado desde la horrible cuestión del secuestro de sus hijos y de su nuera, habría seguido poniéndose los ruleros, hablando en su barrio, barriendo la vereda.

Con Azucena Villaflor, la primera líder de Madres, había concordia. Pero Mignone ya había tenido algunas polémicas privadas con Bonafini, la segunda líder del movimiento. Las diferencias entre el grupo fundador y Bonafini eran casi una cuestión de piel, de estatus, de clase, de formas. Ella venía de La Plata, de un hogar obrero, y se hizo un hueco en la dirigencia del movimiento a fuerza de carisma. “Resultó ser una mujer extraordinaria pero ha perdido la cabeza. Se ha convertido en una mujer autoritaria y ha perjudicado al movimiento”, sostenía Mignone. “Hebe no quiere unos huesos, siente que si no piden por los hijos, se desvirtúa su lucha. Las Abuelas vienen a poner contraste. Ellas tienen una actuación más lúcida y un objetivo posible de alcanzar: sus nietos. Ellos viven”, afirmaba. Abuelas de Plaza de Mayo se había profesionalizado y no buscaba utopías ni la movilización política permanente. Incluso logró que la comunidad científica también se interesara por su lucha. Mignone observaba a las Madres y comentaba que “Hebe sigue con la filosofía del cuerpo en vez de pensar a quiénes y cómo juzgar”.

Mignone conocía a las Madres desde el momento cero. La primera elección de autoridades se hizo en su casa. Se habían juntado veinte Madres y fue allí donde eligieron a Villaflor como su líder. Madres se había creado formalmente en abril de 1977, cuando Villaflor propuso

ir a la Plaza de Mayo. Mignone les aconsejó que formaran una asociación y les consiguió dinero del gobierno sueco para organizarse y comprar su primer local, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen. Azucena fue secuestrada el 10 de diciembre de ese año, cuando salía de su casa a comprar el diario para ver si había salido publicada una solicitada con los nombres de los desaparecidos. A ella, como a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, las señaló un muchacho rubio que decía buscar a su hermano desaparecido. Se hacía llamar Gustavo Niño, pero era el teniente de fragata Alfredo Astiz.

Las Madres se convirtieron en un emblema internacional de la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en el país y así viajaban por el mundo. Chela Mignone fue parte de más de una comitiva. Tal vez por eso, por conocerlas tanto y por haber radiografiado tan bien a Bonafini, Mignone sabía que su estrategia de denuncias, hábeas corpus y presentaciones judiciales podría sumar apoyos individuales, de organizaciones, de familiares, de ONG extranjeras y hasta de algunos gobiernos europeos, pero no de las Madres de Plaza de Mayo. “Ellas siguen oponiéndose a las apariciones de cuerpos como si ello significara algún tipo de derrota o claudicación”, pensaba.

Los familiares de los desaparecidos seguían caminando las calles y, cada vez que podían, trataban de hablar, de atravesar el silencio del espacio público. Cuando se acercaban a la puerta anexa de la Casa Rosada para averiguar sobre sus hijos, invertían más tiempo en explicarles a los curiosos el motivo por el que estaban ahí que consiguiendo información precisa. “Somos familiares de desaparecidos.” Y así decía el que vendía café a un oficinista: “Es gente que tiene familiares desaparecidos”. El taxista, a la secretaria: “Dicen que les llevaron a los hijos”. Deambulaban por Buenos Aires, de despacho en despacho: del Edificio Libertad a la Casa de Gobierno, de la Nunciatura a la Embajada de Estados Unidos. Muchos terminaban en la APDH, donde ya los esperaba un formulario modelo para elevar el hábeas corpus. Ningún abogado quería firmarlos. Los secretarios de los juzgados estaban saturados. La catarata de recursos los superaba, pero la mecánica era la misma: el juez libraba telegramas a los comandantes de cada fuerza de seguridad para requerir información sobre determinada persona y las respuestas castrenses eran calcadas: “No disponemos de información”. Entonces, el juez mandaba todo al archivo, al olvido.

“Son una farsa”, decía Mignone todo el tiempo. “Pero hacemos presión con eso”, se convencía. Él y Conte conocían muy bien los laberintos de la burocracia jurídica. Por eso instruyeron a los abogados del CELS para que no dejaran de interponer un recurso tras

otro. Mignone perdió la cuenta exacta de cuántos había presentado él por su hija, pero calculó unos veinte. Conte sostenía que en los juzgados de Capital Federal y del Gran Buenos Aires se amontonaban unos 80 mil pedidos.

Lucila Larrandart, una joven abogada recién incorporada al CELS, se sintió frustrada cuando escuchó en el pasillo de un juzgado que la presentación de hábeas corpus podría entorpecer o agravar la situación de la persona buscada. Pero la insistencia revalorizaba la estrategia jurídica ahí cuando se pensaba que nada podía ser eficaz.

En esa línea, treinta y siete abogados coordinados por el CELS jugaron una carta fuerte. Trabajaron durante el invierno de 1980 y el 23 de septiembre presentaron un recurso de hábeas corpus colectivo reclamando la libertad de 329 personas detenidas a la orden del PEN. La causa terminó en el Juzgado Federal de Pedro Narváiz, que armó treinta y dos expedientes. El juez no solamente rechazó todos los casos, sino que además apercibió a los abogados al sostener que la acumulación de casos complicaba la tarea judicial. Mignone y Conte suponían que algo así podía pasar, pero sabían darse manija mutuamente: "La máquina está en movimiento", se consolaban.

El CELS se metió en otra enorme tarea de investigación para recolectar toda prueba posible que sirviera para reconstruir el destino de los desaparecidos, recoger testimonios de sobrevivientes, detectar los centros clandestinos de detención (CCD) o denunciar a otras instituciones civiles como la Morgue Judicial, que se estaba convirtiendo en un eslabón más de la cadena terrorista estatal. "Mientras la justicia rechaza por arriba los hábeas corpus, por abajo procesa los cuerpos", se indignaba Mignone cuando se reunía en los bares de Tribunales con sus viejos conocidos de los juzgados que de vez en cuando le daban una mano.

El juez Carlos Olivieri no era uno de esos. Estaba prácticamente internado en su Juzgado de Instrucción de la Capital y fue uno de los pocos que empezaron, inundados de expedientes y en medio del silencio, a llevar causas y armar las pruebas que otros abogados del CELS iban recolectando. Un papel tras otro, otro y uno más, hasta que una mañana, comparando papeles y sellos, se dio cuenta de que por la morgue estaban circulando demasiados cadáveres acribillados a tiros. Olivieri, junto con los abogados del CELS, reconstruyó una trama que incluía a civiles y a militares para limpiar gente asesinada. Los médicos forenses hacían autopsias sin comunicarlo al juez de turno, y blanqueaban los cadáveres amoratados por los disparos despachándolos con certificados adulterados. Los certificados, en lugar de seguir la vía judicial, iban derecho hasta el escritorio del coronel Roberto Roualdes, el temible comandante de subzona de Capital Federal, quien autorizaba la inhumación de los cuerpos por vía

administrativa, para lo cual José Mateo, administrador de la morgue, y Heraldo Donnewald, su director, le daban luz verde. El CELS hizo pública la maniobra. La denuncia rebotó en la prensa y le hizo una pequeña marca al sistema judicial de la dictadura.

7
Jóvenes

A medida que aumentaba el *staff*, aumentaban el trabajo y las visitas. Y algunas visitas aumentaban el trabajo. “McNamara quiere visitar el CELS. ¿Qué dice, Mignone?” Un funcionario de la Fundación Ford —que ya brindaba apoyo al centro— llamaba desde Nueva York y quería tantear el escenario. Robert McNamara —todo un emblema del Departamento de Estado norteamericano desde que fue secretario de Defensa durante los años de Kennedy y defenestrado por medio mundo por ser la cara del imperialismo bélico— tenía mala prensa entre muchos de los allegados al CELS. Al otro día Mignone lo comunicó en una reunión. Y sondeó el ánimo de la gente para saber cómo caería un tipo así en un lugar como ese. Por entonces ya había algunos abogados jóvenes, a quienes el anuncio de la inminente visita no cayó nada bien.

“Por la presente le hacemos llegar nuestra más enérgica oposición a la probable vista que Robert McNamara de la Fundación Ford realizaría a nuestra entidad mañana, viernes por la tarde.” Se quejaron de que nada de aquello había sido consultado entre la gente del *staff*, y en jerga de barricada describieron lo que todo el mundo conocía acerca de McNamara. “Entendemos que quien posee este y otros antecedentes se contrapone a nuestros estatutos, nuestro programa y nuestra trayectoria.” Firmaban: Zamora y Parrilli.

Mignone no se sorprendió. Pero sí lo hizo cuando algunos otros miembros del grupo los apoyaron. No querían salir en la foto con el autor intelectual de los asesinatos de miles de niños vietnamitas. A otros, en cambio, les pareció una buena ocasión para que se difundiera la imagen del CELS o hasta lo consideraban un elogio.

Marcelo Parrilli, el hijo de los porteros del edificio donde vivían los Mignone, fue involuntariamente un testigo privilegiado del nacimiento del CELS y de las Madres. Había terminado su carrera de abogado sin haber pasado por la militancia política universitaria y no estaba afiliado a ningún partido. Con el diploma bajo el brazo, fue a verlo a Mignone y le pidió trabajo. “El CELS es un lugar peligroso. No vas a ganar plata, pero sí experiencia. Si te interesa, deberíamos ir a hablar con tus padres”, lo aconsejó. Fueron. Cuando escucharon la propuesta, los padres se miraron y recordaron lo que había pasado unos años

antes cuando secuestraron a Mónica. "Si él quiere, que trabaje", dijeron los padres. Noemí Labrune se opuso porque Marcelo no tenía militancia política. La discusión fue larga, pero se decantó para el lado del chico. A los pocos meses, Parrilli se convirtió en un estrecho colaborador de Conte en el CELS.

Otro que torció el camino que la vida le había trazado naturalmente era Luis Zamora, un muchacho nacido y criado en una familia tradicional de Belgrano. Lo educaron en el Instituto Esquiú, un distinguido colegio de curas en una tranquila y arbolada calle del barrio, rodeado de embajadas y palacetes. Jugó al rugby y se interesó en la filosofía, pero terminó su carrera de abogado en la Universidad de Belgrano. Todo parecía indicarle que seguiría el destino de su padre como abogado civil y comercial, que heredaría su estudio, sus clientes y sus hábitos. Fue profesor en una escuela secundaria y trabajó como procurador, además de unos cuantos meses en el estudio de su padre, pero la profesión no le gustaba. En la facultad se enteró del caso de una chica detenida a disposición del PEN y su mirada sobre la profesión, el sistema de justicia y la vida en general pegó un nuevo giro. Para esa época ya vivía solo en Once y, por venir de donde venía, y por no tener ninguna militancia política, no sabía cómo conectarse con el movimiento de derechos humanos. Ni siquiera sabía qué era la APDH, pero se acercó por su cuenta. Era una forma de manifestar su rechazo visceral contra la dictadura. De ahí a integrarse al CELS hubo un solo paso.

Dentro de la APDH, Zamora hizo un buen uso del respeto que se habían ganado Mignone y Conte. A él se le quedó pegado algo de ese respeto, y acaso por eso se animó a agitar un poco esas reuniones que para algunos eran demasiado tibias, diplomáticas, conducentes a enunciar más que a denunciar. En uno de los debates que se daban regularmente, Alfonsín enumeró la lista de las cosas que estaban mal en el país: habló de la educación, de la economía. Habló de lo que habla cualquier político en cualquier momento de cualquier época ordinaria en la vida de un país. Pero no habló de la represión, que era justamente el elemento extraordinario que, para gente como Zamora, no podía ignorarse. Terminó su exposición afirmando lo que se esperaba que dijera un abogado de pueblo: "Todas las fuerzas políticas, los organismos de derechos humanos, los sindicatos, etcétera, tenemos que mediar con las Fuerzas Armadas". Después de algunas preguntas, llegó el turno de Zamora. Le marcó que no era posible que no hubiera hablado de la existencia de desaparecidos, de detenidos sin proceso, de NN, de exiliados. Alfonsín no pareció tener una respuesta convincente. Al poco tiempo, Zamora fue uno más de los que dejaron la APDH —aunque sin peleas ni polémicas— para integrarse de lleno a su trabajo en el CELS.

Jorge Baños era un joven afiliado al Partido Intransigente (PI), del cual integraba la comisión de derechos humanos. El CELS necesitaba otro abogado joven y Mignone se lo comentó a Alfredo Galletti, quien también estaba afiliado al PI. Galletti le habló de Baños. "Es inteligente, trabajador, está comprometido y tiene una ventaja: le puede aportar otro matiz político al grupo, porque no es del MAS [Movimiento al Socialismo] ni de la Democracia Cristiana ni peronista o radical." A Mignone le cerró la propuesta y lo entrevistó. Era el profesional indicado para ese momento, en el que Mignone quería transmitir hacia adentro y hacia afuera signos de pluralismo. Galletti lo promovió porque lo creyó brillante. Para muchos, lo era. Su primera causa fue la de los desaparecidos alemanes. Octavio Carsen entendió que Baños, a quien de alguna manera consideraba su reemplazante, era un gran abogado. Para Graciela Fernández Meijide, solo era un tipo audaz, un poco mediático, otro chico de Belgrano "traidor de clase".

Cuando llegó, Pablo Llonto sintió que el CELS era un seleccionado. "Hay de todo, troskos, peronistas, del PI, de todo", pensó. Había entrado al CELS por Zamora y Parrilli, y los tres ya se conocían del MAS. Él fue uno más de muchos militantes partidarios que desde la Facultad de Derecho se sintieron atraídos hacia los organismos de derechos humanos. Llegar a trabajar en ellos era como jugar en Primera A. Entró a regañadientes, no porque no le atrajera la tarea sino porque no quería entrar a ningún lado donde tuviese que cobrar. Pablo Llonto fue quien acaso comenzó a tener más relación con Baños. Primero, técnica y profesionalmente. Luego, de amistad. Él veía que Baños era políticamente más setentista, al contrario que Parrilli y Zamora. "¡Cómo va al frente!", pensaba. Sin embargo, para él y para muchos otros, era un lugar algo frío en comparación con Madres, por ejemplo, o la APDH, aunque más prestigioso profesionalmente. En las marchas, los estudiantes como él querían ir en la columna de Madres, no en la del CELS, donde había demasiada gente de saco y corbata para su gusto. Una vez adentro, Llonto notó que no era una simple máquina que presentaba querellas y denuncias y se esmeraba por la cuestión técnica, sino que decidía y se posicionaba en un ámbito de confrontación, que por supuesto no llegaba al nivel de Madres. Descubrió que no era un lugar al que la gente solamente llegaba a buscar abogados.

El primer caso que le cayó a Zamora estaba relacionado con el CCD El Vesubio y la desaparición de Beatriz Perosio y otros detenidos de Vanguardia Comunista, una agrupación que se vio desmantelada de la noche a la mañana con la detención de unos noventa de sus miembros. Veinte de ellos no aparecieron nunca, pero algunos liberados los vieron en un centro clandestino, de modo que con eso podían empezar

a trabajar.

Zamora parecía sintonizar con Conte en todo. No le importaba que Conte había trabajado en una vieja dependencia de un gobierno militar porque siempre le llevaba alguna propuesta sorprendente. Y estaba fascinado por la cintura que les permitía ir a hablar con un obispo, un político o un empresario. Aunque tuvieran algunas diferencias políticas de otro orden, percibió rápido que coincidían en lo más importante: la actitud contra la dictadura. Vio que Conte y Mignone no especulaban, no querían quedar bien con nadie ni aceptaban almuerzos corteses con los militares, mientras se enteraba de que a través de las invitaciones a la APDH, Alfonsín se reunía con Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura. "Entonces este tipo no puede estar en una institución que podría sacar una declaración donde se decía que Harguindeguy era responsable de los crímenes", pensaba. Esa rosca en el CELS no existía. Lo confirmó cuando vio que Conte y Mignone les decían a los cardenales Raúl Primatesta y Juan Carlos Aramburu que la Iglesia era cómplice de la dictadura. "Yo me quedo acá, estos tipos no tienen pelos en la lengua", decidió. Mignone se portó con todos ellos como una especie de abuelo bueno, como un Perón del CELS. Por supuesto que tenía más trato con los abogados más viejos, pero el Pope, como ya le decían en los pasillos, trataba a los jóvenes como una siempre necesaria rueda de auxilio y se trataban, sobre todo, con mucho respeto.

Zamora, Parrilli y Llonto empezaron a vivir una época en la que el CELS estallaba con la presencia de familiares. Observaron y formaron parte de un crecimiento que, en lo que a ellos concernía, les caía como un goteo de los casos que los abogados más viejos no hacían a tiempo de patrocinar. Siempre supieron y aceptaron que si bien podría haber mucho diálogo intergeneracional, las diferencias se terminaban notando. Por ejemplo, los invitaban a las reuniones de Comisión Directiva, pero sus comentarios no eran tenidos en cuenta. Como seguían haciendo lo que querían, no lo tomaban como una frustración o como un choque. Los viejos no se comportaban como una elite, solo que se terminaba decidiendo lo que ellos querían. "Nos escuchan, pero no nos dan pelota." Como con lo de McNamara.

Luis Zamora estaba de licencia y, cuando se enteró de la visita, le produjo un enorme rechazo. Pensó que ya nada sería como antes. "McNamara va a venir, y el que no quiera venir, que no venga", zanjó Mignone. Al día siguiente, todos se prepararon. Esperaban desplazamientos extraños en la cuadra, gente del servicio secreto, autos blindados. Sonó el timbre y era McNamara, que llegaba solo.

8
El coloquio y el allanamiento

Durante el verano de 1981, la cúpula militar disfrutó poco del calorcito. Desde Europa le llegó un viento helado que la obligó a acomodarse el uniforme. En París, el Senado de la República de Francia y su Asamblea Nacional tuvieron una idea que asomaba como una amenaza para la imagen que la dictadura pretendía de sí misma. Se estaba organizando el coloquio "La política de la desaparición forzada de personas" y los comandantes se inquietaron cuando vieron la lista de invitados: el ex presidente Arturo Illia, Vicente Saadi, Eduardo Barcesat —de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre —, el premio Nobel de Física Alfred Kastler, Alberto Pedroncini —de la APDH—, Pérez Esquivel, algunas Madres de Plaza de Mayo y Julio Cortázar. También, Augusto Conte y Emilio Mignone.

Entre los apurones, a Mignone le negaron el pasaporte. Había que tener un plan B. Lo llamó a Zamora y le pidió que fuera él. "No, Emilio, tengo diez mil quilombos", le contestó Zamora, quien en los minutos siguientes tuvo que escuchar los argumentos de Mignone para convencerlo. Lo logró. Zamora entendió la importancia y sacó el pasaporte, aun con dudas de que se lo otorgasen. Se lo dieron, y viajó con Conte.

Por otro lado, Graciela Fernández Meijide viajó con Pimentel, Alfredo Bravo, Pedroncini y otros familiares. El viejo Saadi estaba allá para ver si encontraba la manera de arreglar ciertos asuntos que le permitieran abrir en la Argentina el diario *La Voz,* con capital de Montoneros.

París era un buen escenario para explicarle al mundo cómo la represión, el asesinato y la desaparición de personas se habían convertido en el modelo argentino. Para la ocasión, Mignone y Conte habían redactado un documento que de alguna manera también establecía el origen del CELS. Conte desarticuló minuciosamente la red de trabajo del Ejército. Interpretó y explicó el método represivo casi científicamente. Mignone tomó como base ese texto, de estilo muy jurídico, y lo hizo más narrativo, más visceral, menos técnico. "Está perfecto, pero necesita más pasión", se repetía mientras leía.

El documento se llamaba "El caso argentino: desapariciones forzadas como instrumento básico y generalizado de una política. La

Doctrina del Paralelismo Global". Por primera vez se explicaba el sistema, como si hasta entonces nadie lo hubiera entendido o no quisiera decirlo. Conte leía las correcciones de Mignone y asentía, disfrutaba. En la habitación parisina sonó el teléfono. Era Mignone. Después de felicitarse mutuamente, Conte le dijo, con una sonrisa: "Por culpa de esto nos van a meter presos a todos". El día de su ponencia, Conte leyó. Los asistentes escucharon hablar por primera vez —con un nivel de detalle asombroso— sobre la implicancia de los organismos de seguridad en distintos casos de secuestro y desaparición de personas. La ponencia se completaba con un estudio sobre el sistema represivo, las desapariciones, el funcionamiento de los centros clandestinos de detención, los grupos de tareas, las ejecuciones y cómo se conformaba el aparato represivo dentro de cada cuerpo de Ejército o de cada fuerza.

En aquel encuentro, uno de los últimos en subir al estrado fue Cortázar. Se acercó al atril, sacó un papel del bolsillo de su saco, lo desdobló y leyó un texto titulado "Negación del olvido". El grupo de los argentinos salió de París para Ginebra. Allí se reunía la Comisión de Derechos Humanos de la ONU —como cada febrero— y se iba a tocar el caso argentino. Las palabras que Cortázar había regalado en París eran muy bellas, y el trabajo del grupo argentino en Ginebra fue muy estimulante, pero no impidieron que la profecía de Conte sobre una cárcel inminente se fuera a cumplir casi de inmediato una vez terminada la gira europea.

De vuelta en la humedad de Buenos Aires, el viernes 27 de febrero de 1981 a las siete y media de la tarde, todos los oficinistas de Tribunales respiraban aliviados por la semana que terminaba y volvían a sus casas con la camisa pegada a la espalda por el calor. A esa hora, otro grupo de hombres empezaba su tarea. Estaban armados y vestidos de civil. Se metieron en la sede del CELS de Viamonte y se identificaron. "Policía Federal", gritó el comisario Martínez, que dirigía el procedimiento. Llevaba en la mano, lista para enarbolar, una orden de allanamiento firmada por el juez Martín Anzoátegui. Cristina Caiati ya se había marchado. Carmen Lapacó, Pipo Westerkamp y tres visitas —los únicos que estaban ahí en ese momento— se quedaron inmóviles. Los policías revisaron la oficina palmo a palmo, preguntaron, interrogaron. Ya sabían lo que iban a hacer: llevarse todo, salvo los muebles. Todo es todo: los teléfonos, la estufa, las máquinas de escribir —que ya eran tres—, un ventilador. Por supuesto, a los cinco que estaban ahí se los llevaron también. Detrás de sí dejaron una puerta sellada con una faja y un agente de consigna. En dos autos sin identificar se los llevaron detenidos a la sede central de la Policía Federal, en la calle Moreno.

Un poco aislado del bullicio del final de una tarde de verano,

Mignone trabajaba en su casa de Barrio Norte cuando otro grupo de tareas le interrumpió el trajín. Allanaron su domicilio y ahí mismo lo detuvieron junto con su esposa. La patota se llevó al matrimonio, sus papeles y carpetas.

Todos fueron a parar a la cárcel. Graciela Fernández Meijide estaba recogiendo sus cosas luego de una de las tantas reuniones en la APDH. La acompañaba Nilda Garré, quien le había llevado una planta de regalo. Ese día, Graciela cumplía años. Estaba cerrando la puerta cuando el ring del teléfono les interrumpió la huida hacia el fin de semana. Graciela corrió para atender. Era uno de los hijos de Pérez Esquivel: “Están allanando el CELS”, le dijo.

A Marcelo Parrilli el teléfono le sonó cerca de las nueve de la noche. Lo más rápido que pudo se acercó a la oficina de Viamonte y vio que se habían llevado muchas carpetas con información, causas, documentos. No tardaron mucho en llevárselo a él también. Lo cargaron en un Falcon. No sintió miedo de que lo estuvieran chupando. “Si querían, lo habrían hecho hace tiempo”, pensó. Sin embargo, contuvo la respiración mientras el auto avanzaba. Si el Falcon agarraba la calle Montevideo, significaba que iban a la Superintendencia de Seguridad Federal, o a Tribunales, o a un lugar de detención que, por lo menos, no fuera clandestino. “Si seguimos de largo, se complica”. El Falcon dobló. “Fenómeno”, pensó, con ironía.

Mientras tanto, Cristina Caiati se refugiaba en su casa. Graciela se contactó con Galletti y lo guardó en su casa hasta que, al día siguiente, otro amigo lo llevó a una quinta en el Gran Buenos Aires. El problema más urgente fue que era imposible comunicarse con Conte. Por esos días, le habían cortado la luz y su teléfono no funcionaba. Graciela y Nilda Garré no tuvieron más opción que ir a su casa directamente. Llamaron a la puerta y Conte, rodeado por las tinieblas de su casa a oscuras, les abrió en bata y con una vela en la mano. Al fondo lo vieron a Julián, el más chico de sus hijos. “Yo no me puedo ir porque lo estoy cuidando”, y miró a Julián. Y agregó: “Laura se fue a la facultad. Estoy solo. Yo no sirvo para andar escapando. Si tengo que ir preso…”. Y así pasó la noche. Oscura, incierta, aunque nadie fue a buscarlo.

Pero a la mañana siguiente, mientras hablaba con Graciela por teléfono, había llegado su hora. “Ahí vienen”, escuchó Graciela que alguien gritaba del otro lado de la línea. Conte apoyó el tubo del aparato en la mesa y dejó la comunicación abierta. Graciela escuchó todo el procedimiento en vivo y en directo. Minutos después, Laura Conte volvió a tomar el tubo del teléfono y, por si hiciera falta, se lo confirmó: “Se lo llevaron. Decime qué tengo que hacer”.

Hecha la cadena de alertas telefónicas, un grupo de abogados comenzó a moverse. Néstor Vicente integró ese grupo como el

profesional más vinculado a Conte. Aunque la especialidad de Vicente en el mundo legal eran los reclamos por reajustes jubilatorios, no tardó en rodearse de otros colegas que trabajaban en Derecho Penal, como Alberto Pedroncini. Lo primero que Conte le dijo a Vicente cuando lo visitó fue: "Negro, yo puedo estar preso dos años". Vicente creyó que ya le estaba queriendo definir el escenario.

El trabajo de los abogados se centralizó en la sede de la APDH. Allí se reunieron los hábeas corpus y se articuló la defensa de los presos del CELS. "Alguien que estuvo en París tuvo algo que ver con esto", pensaron. Es que la cúpula militar estaba alerta. Lo que Conte había dicho en el foro francés tenía tal nivel de exactitud que los militares pensaron que detrás había un arduo trabajo de inteligencia. Pero también hubo un motivo que dejaba menos lugar a la deducción: a raíz de la presentación en París, el presidente de la delegación argentina ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Gabriel Martínez, había elevado una nota que cayó en el Ministerio de Interior, bajo el mando de Harguindeguy, quien a su vez encontró motivos para sospechar sobre las actividades de los foristas que habían hablado ante la asamblea francesa. Harguindeguy hizo una denuncia en un juzgado federal, que fue luego al despacho de Martín Anzoátegui, un juez al servicio de la dictadura, de gran vínculo con la Policía Federal. El día que le llegaron los papeles, Anzoátegui largó la orden de allanamiento al CELS y la detención de sus miembros sin perder un segundo.

Los detenidos desfilaron delante del juez, quien cuando los tuvo enfrente, y sin que le temblara la voz, alternaba la mirada entre sus interrogados y una serie de papeles que tenía en su escritorio. "¿Por qué se nos detiene?", quiso saber Mignone, antes que nadie. El juez mostró la carátula del expediente, sin apuro. "Causa 14.179, Westerkamp y otros s/ infracción al artículo 224 del Código Penal." El artículo 224 penaba con hasta ocho años de prisión a quien tuviera "planos", "croquis", "datos" o "información" sobre instalaciones de las fuerzas de seguridad. "Es por el 224", repitió el juez, sabiendo que mentía.

Precisamente, los papeles sobre el escritorio eran una serie de croquis y listas, es decir, "información". Al juez le interesaron en particular dos documentos que supuestamente recibió de manos de los policías que habían participado en los allanamientos. Uno era un planito de Campo de Mayo; el otro, una lista de militares que habían prestado servicio en Córdoba en 1976. "Es la primera vez que vemos eso", dijeron los detenidos casi a coro.

Además, el material tenía poco de "confidencial". El croquis era una copia hecha a mano del perímetro de Campo de Mayo, trazado en birome en un papel cualquiera como si estuviera mal copiado de

cualquier mapa rutero de circulación pública. Y la lista de nombres parecía arrancada de algunos testimonios de ex detenidos. Al juez no le importó, porque basó la acusación en esos dos elementos. "¿Y qué es el CELS?", preguntó el juez. Mignone dibujó una respuesta para confundirlo y que sirviera, de paso, para zafar. "Es una organización que tiene el apoyo de la Fundación Ford. Su presidente —sin especificar si estaba hablando del presidente de la fundación o de la Ford Motor— estuvo con Videla esta misma mañana." Era verdad: Henry Ford III había estado con Videla. El juez levantó las cejas y masticó la respuesta con la mirada aún en los papeles. La respuesta lo sorprendió. No estaba preparado para escuchar algo así.

El día 4 les levantaron la incomunicación y los trasladaron a la entonces flamante U 22, en Viamonte entre Libertad y Cerrito, un prototipo de cárcel modelo para estadías cortas preparada para ser vista por la CIDH. El día 6 les comunicaron la libertad.

Mientras salían de las celdas, se imaginaron en un taxi, llegando a su casa, se vieron bajo la ducha, olieron su ropa limpia y avisando por teléfono a sus conocidos que todo había terminado, que estaban bien. Firmaron las planillas que les puso adelante el oficial de turno y casi extendieron la mano para que les devolvieran la plata que llevaban consigo, los documentos y las llaves. Pero no. No les devolvieron nada. Mignone miró a sus compañeros de detención y quiso preguntarles, como para romper un poco el hielo, si la pequeña maniobra discursiva alrededor de la Ford habría influido en algo para que les levantaran la detención, pero el cansancio y la rabia por las cosas no devueltas lo detuvieron.

Parrilli sabía que no los habían liberado los abogados, sino la repercusión que tomó el hecho y la moderada presión de la Embajada de Estados Unidos. "Y también debe de haber un sector de los milicos cagados en las patas", pensó.

Ese mismo día, Meijide visitó a Conte. Luego de una charla en la que le reveló detalles de los días de detención, Conte la miró y le dijo: "Si alguna vez me vi en la cárcel, pensé que iba a estar pensando en mi hijo todo el tiempo, pero no, pensaba en ustedes". Mientras escuchaba, Meijide observaba que algo en Conte había cambiado, en su rostro, en su lenguaje corporal o facial. Hasta que se dio cuenta y le contestó algo bastante menos lacrimógeno: "Che, Augusto, se te fue el tic". Conte parecía haber dejado atrás el hábito de parpadear locamente y tampoco movía los ojos a toda velocidad.

Algunos días después, Graciela Fernández Meijide le sugirió a Mignone una idea para capitalizar el atropello de la detención y lograr que el CELS dejase de ser invisible para la APDH. Fue entonces que Mignone mandó una simple nota formal a la APDH —entre otros organismos— agradeciendo por la defensa del CELS. En la APDH —

tan apegada a las rutinas de las burocracias también— tuvieron que dar ingreso a esa nota y archivarla. Así, la nota figuró en las actas del secretariado y, con un poco de muñeca, el CELS subió un escalón más en su grado de exposición pública como organismo defensor de los derechos humanos ante los demás organismos y ante la sociedad.

Algo parecido pero en la arena callejera sucedió durante una manifestación cuando los dirigentes del CELS, junto con otros de distintos organismos, salieron marchando desde Corrientes y Libertad camino a Plaza de Mayo. Parecía haber cada vez menos miedo. A la cabecera iban los obispos Novak y De Nevares. Aparecieron Alfonsín y también Simón Lázara (de la APDH) y Alende (a quien en el CELS muchos veían como un dirigente de compromiso muy limitado). Estaban todas las organizaciones. Entraron por Avenida de Mayo y un cordón policial les impedía entrar a la plaza. A cincuenta metros del objetivo, todos se empezaron a arengar: “¡Hay que entrar! ¡Hay que entrar!”. Avanzaron como pudieron hasta las narices de los policías y Novak, con su sotana, un rosario y un crucifijo, dijo: “Yo me mando”. Luis Zamora, que estaba al lado, sintió que algo fuera de guión estaba por pasar. Su tamaño y su empuje fueron demasiado para el policía, que rebotó. El cordón quedó desarmado y los oficiales fueron literalmente atropellados por Novak, quien era secundado por De Nevares, Aldo Etchegoyen y otros metodistas pertrechados con sus sotanas. Las agrupaciones ya también empezaban a tomar la calle, de a poco, como si ya tuvieran sus propias cosas que manifestar, además del apoyo crónico a las Madres. Pronto, la plaza volvería a poblarse.

9
Malvinas

La guerra en el Atlántico Sur también mereció una mirada amplia desde el campo de los derechos humanos y la resistencia a la dictadura hacia adentro de los organismos. El consenso general era que si la Argentina ganaba esa guerra, la dictadura se iba a perpetuar en el poder, por lo cual muchos de los referentes de los movimientos de derechos humanos solo esperaban la rendición final de los generales en Puerto Argentino. Otros, como Zamora y Parrilli, creían que Malvinas era una causa legítima y que si se daba la casi imposible victoria argentina en la guerra, la consecuencia lógica sería un proceso de apertura que la dictadura no iba a poder controlar y que llevaría al final de su ciclo.

Pero el grueso del movimiento de derechos humanos estaba "por la paz", lo que era un tanto abstracto e incluso ingenuo de enunciar en medio de un conflicto bélico ya desatado. Parrilli pensaba justamente eso: "Cuando estás en guerra, vos no podés estar por la paz, te tenés que pronunciar a favor de uno u otro porque la paz ya fue", comentaba a sus colegas más cercanos en el CELS. Él no tenía dudas de que el movimiento de derechos humanos se inclinaba y hasta deseaba la derrota.

Zamora coincidía: "Nosotros no somos neutrales. Si Margaret Thatcher, el imperio inglés, ataca la Argentina, no podemos ser neutrales. Si viniera Chile a atacar a la Argentina, diría 'No nos vamos a matar entre hermanos'. Pero Inglaterra, que es un país imperial que domina parte del mundo, no". Él creía que los pueblos del mundo tenían que rebelarse contra estos países. La discusión, entonces, fue por una declaración. Para él, Margaret Thatcher era "diez veces Videla".

Zamora y Parrilli habían conformado un minibloque en torno a Malvinas. Su posición no tardó en alterar un poco los humores de algunos de los directivos del CELS. Zamora, por ejemplo, notó que Galletti se ponía furioso frente a su postura. Los jóvenes habían redactado un borrador de declaración respecto al tema. "Tráiganlo y lo discutimos", les dijo Mignone, como siempre, contemplador. Pero Westerkamp no tenía muchas ganas de discutir nada y Galletti se refirió al borrador como "pasquín". Zamora escuchó cómo Galletti les

decía que Malvinas "no era una guerra en la cual el pueblo argentino debería inmiscuirse, porque la había desencadenado la dictadura", y que si se ganaba esa guerra se quedaban veinte años. Zamora trató de decirle que el mayor impulsor de una eventual victoria en la guerra era el pueblo argentino y que no se podía estar del lado de Thatcher, por mucho que en el bando opuesto estuviese Leopoldo Galtieri, entonces cabeza de la junta militar.

El dúo Zamora-Parrilli creía tener claro —al contrario que los directivos del CELS— que, además de la derrota y la muerte de los soldados argentinos, la victoria en Malvinas significaba el fortalecimiento del gobierno de Thatcher, las políticas de Reagan y, según ellos, su política de hambre y explotación de los países periféricos. Fue un diálogo duro, pero como antes que enfrentamiento había cariño y respeto, nunca llegó a la ofensa ni a la agresión. Zamora veía en Mignone a un Perón que solía equilibrar los excesos y templar la tensión. "Un poco más y crea una comisión", le dijo en tono de chiste. Mignone creyó poder reflejar en un comunicado algunas de las opiniones de los jóvenes, pero al final no lo hizo. La relación que se había creado entre ellos era demasiado estrecha y construyó lazos demasiado fuertes como para terminar dando un portazo. Sin embargo, el nuevo camino de Zamora y Parrilli ya parecía trazado, y estaba afuera del CELS.

Graciela Fernández Meijide creyó que los militares argentinos habían perdido toda posibilidad de garantizarse la impunidad a raíz de la derrota de Malvinas. Ella llegó a escuchar, en las reuniones de la APDH, cómo algunos referentes del PC alentaban a la "inclaudicable lucha de los pueblos" y que Malvinas era "un aporte más al comienzo de la revolución internacional y a lucha antiimperialista". Desde el Partido Comunista bajaba un eslogan casi publicitario, por vago e impracticable: "Paz con soberanía".

Las Madres, lógicamente, no querían saber nada con los militares, fueran victoriosos o derrotados en las islas. Las iglesias, como era de esperar, se manifestaron en contra de la guerra. Al mismo tiempo, los presos políticos pedían salir para ir a luchar o a dar sangre. En el exterior, se discutía si los exiliados apoyaban o no apoyaban. Alfonsín logró darse cuenta de que no podía ser un aplaudidor público y se excusó de viajar a las islas como integrante de una comitiva de la Multipartidaria (entre quienes estuvieron Oscar Alende y Arturo Frondizi), que apoyaba firmemente la recuperación y las tratativas diplomáticas para ello. Con fines acaso transparentes, si bien los miembros de esa comitiva sostenían que así se daba un primer paso hacia el regreso de la democracia, se subieron a un avión militar y tomaron el té con los generales en Puerto Argentino para manifestar su postura, lo que en la mayoría de las agrupaciones de derechos

humanos no cayó nada bien.

Las grandes convocatorias solidarias hechas a través de la televisión, las tapas de la revista *Gente* donde se afirmaba que la Argentina estaba ganando, las diatribas de Galtieri: nada de eso serviría para vencer en una guerra contra una potencia de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). La defensa de Puerto Argentino se rindió el 14 de junio de 1982. Las islas volvían a ser una colonia británica.

Meijide tuvo un pálpito parecido a una certeza. Creyó que los organismos podían comenzar a tener una fuerte credibilidad después de Malvinas porque la gente, tan enojada con el gobierno que había hecho fracasar la ilusión nacionalista, podría empezar a pensar: “Estos hijos de puta, si hacen esto, si nos hicieron creer que la guerra estaba ganada, capaz que es cierto lo que dicen los organismos de derechos humanos”.

10
Conte

Augusto Conte tenía cuatro años cuando su padre murió en un accidente. Su padre era joven, apenas tenía treinta años, y había dejado una carrera corta pero brillante: egresado a los veinte años con diploma de honor, líder de las reformas universitarias de 1918, profesor sobresaliente y colaborador de Alfredo Palacios. Conte hijo parecía tener el camino trazado, pero tuvo que seguirlo solo. Tenía con qué: ya desde muchacho siempre daba una imagen de seriedad y solvencia que lo habilitaba para ponerse al hombro cualquier problema. Mientras a Mignone se le demoraba la carrera por sus ocupaciones en la Acción Católica, Conte la terminó pronto —en la UBA— y empezó la rutina del abogado joven: pinche de juzgado, abogado en un estudio mediano, más cursos y conferencias, hasta que sus viejos contactos del Nacional Buenos Aires le empezaron a abrir puertas. Antes de los veinticinco se casó con Laura y tuvieron cinco hijos: Augusto María, Gonzalo, Fernando, Laura y Julián.

La identidad antiperonista de Augusto Conte asomaba cada vez más. Las oficinas de inteligencia de la época lo tenían fichado: hablaban de "antecedentes que lo caracterizan como de ideas marxistas-leninistas" o "adherente a la Unión Democrática". En los años cincuenta, Conte se acercó a la Democracia Cristiana. En junio de 1955, cuando los aviones de la Marina atacaron la Plaza de Mayo, Conte estaba ahí, indignado. Miraba y miraba al cielo, iba y venía con su cabeza siguiendo el planeo de los aviones que tiraban racimos de bombas que mataron a decenas de civiles. En los tranvías, en las calles, en los edificios. Días antes había nacido Augusto María, su primer hijo. Su esposa era joven y tardó unos días en recuperarse en el sanatorio, adonde una tarde Conte llegó con la cabeza vendada. Su oreja derecha pendía de una sutura quirúrgica. "No me pasó nada", le dijo a Laura. Venía de la plaza.

Conte no sufrió más agresión física durante el ataque que la de aquella esquirla fuera de control que fue a parar a su oreja. Ese día fue solo un tipo que estuvo por ahí, que quiso ver qué pasaba. Se levantó como siempre, antiperonista, pero cuando caía la noche era simplemente un hombre indignado por lo que había visto. Con el correr de los meses, su vocación política y su trayectoria en el partido

lo hicieron frecuentar los despachos de varias dependencias oficiales. Siempre era consultado como técnico.

Los ministerios habían sido puestos patas arriba por la autodenominada Revolución Libertadora. Lo primero que volaron fueron los afiches de Perón y Evita, y luego, a los funcionarios. Los despachos quedaron vacíos, así que Conte terminó ocupando uno de esos escritorios abandonados. Fue en el Ministerio de Educación, cuando el ministro era Atilio Dell'Oro Maini, nombrado durante las presidencias de Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu. El eje de su gestión estaba enfocado en la construcción de una universidad libre. A la hora en que todo el *staff* de la burocracia educativa se empezaba a ir a sus casas, cuando la secretaria agarraba su abrigo y su sombrero y saludaba, cuando los demás funcionarios se abotonaban el chaleco y se iban rumbo a las paradas de los tranvías, a la hora en que no quedaba nadie ni nada, salvo una revolución en marcha, Conte levantaba la vista y, sintiéndose seguro de que nadie lo estaba mirando, fabricaba tiempo para revisar los pesados ficheros de metal que guardaban esos legajos marcados, los de unos cuantos. Y Conte, el tipo que había ido a mirar a la plaza y ahora ocupaba un despacho, se llevaba las carpetas a la casa y las limpiaba para siempre. Después de la renuncia de Aramburu, las rutinas políticas de Conte apenas variaron durante los siguientes quince años.

A principios de los setenta, la fija de Conte era ir a los almuerzos en la casa de la calle Quintana de José Allende, uno de los referentes de la Democracia Cristiana de aquel entonces. Nunca eran más de cinco o seis a la mesa. Conte dirigía un estudio que ya había ganado cierto prestigio entre las empresas, pero su cercanía con la familia Di Tella —dueña del complejo industrial que fabricaba los automóviles y las heladeras emblemáticas de la Argentina dorada— lo convirtieron en el abogado del Instituto Di Tella, un centro de artes visuales y experimentación artística y cultural que tuvo su auge entre 1965 y 1970 y presumía de ser un refugio para las vanguardias. Con ese gancho, sumó a su agenda eventos menos solemnes y se hizo conocido entre algunos de los artistas emergentes de aquella época.

Conte también presidía la FAPES, una fundación directamente vinculada a la Democracia Cristiana respaldada por la Fundación Konrad Adenauer. Lo hicieron apoderado nacional del Partido Demócrata Cristiano, parte del Frejuli que en 1974 se subió a la fórmula Perón-Perón.

Tras el huracán de votos llegó el reparto de cargos. A Conte le tocó algo en una dependencia del Ministerio de Economía, al mando de José Ber Gelbard. Seguía teniendo una fuerte vinculación con su partido, pero la visión del peronismo de Conte había cambiado mucho desde 1945. Su hijo mayor ya militaba en el peronismo

revolucionario.

A los Conte, el terror se les comenzó a insinuar algunos meses antes, con una bolilla de lotería. En la casa de los Conte el sorteo del servicio militar para la clase 55 se vivió con cierta tensión. Ser militante del peronismo revolucionario en 1975 y salir sorteado para hacer la colimba en la Marina equivalía casi a una sentencia de muerte. A Augusto María Conte, el hijo mayor de Augusto, nacido prácticamente bajo las bombas de la Revolución Libertadora, le sucedió eso. Número alto: Marina.

Augusto María tenía que incorporarse durante el verano de 1976. Conte y su mujer lo debatieron cien veces. Iban y venían sobre dos opciones. Se lo decían de todas las maneras posibles: "O desertás, y nos quedamos todos tranquilos, o te incorporás y vivimos con miedo". Los Conte sabían que del otro lado lo estaban esperando. La Marina sabía quién era Augustito, sabía que militaba, sabía que una vez adentro podría hacer inteligencia. Los Conte sabían que la Marina sabía. El debate familiar iba decantando. Augustito tampoco quería pasar a la clandestinidad. "La voy a hacer", les dijo una noche a sus padres. Cada uno prefirió creer lo que le convenía: que lo hacía por la patria, que lo hacía por su organización, que lo hacía de valiente o de indeciso.

Días después, Conte agarró el coche y manejó hasta la base aeronaval de Punta Indio y pidió hablar con el jefe. El marino lo atendió. "Exijo todas las garantías para que mi hijo no sea perseguido cuando se incorpore", le dijo Conte. "Por supuesto", le aseguraron.

Podrían haberlo sacado del país, haberle conseguido certificados médicos falsos, podrían haberlo hechos zafar sin mayores inconvenientes. Pero Laura vio que el destino era inexorable y sintió que su hijo tenía un espíritu militante demasiado fuerte. Sabía que estaba en la lucha armada, sabía que iba a espiar, le pidió que se hiciera cargo de la decisión, pero también le suplicó de rodillas que no se incorporase. Augustito les dejó sus ahorros a sus compañeros y marchó a la colimba.

El miércoles 7 de julio de 1976, Augusto María, ya incorporado, salió de la base rumbo a Buenos Aires para su primer franco. Hizo una combinación de ómnibus y tren para llegar a Constitución, como siempre. Nadie sabe si llegó a tomar el tren, o si llegó a Constitución y logró tomar el taxi que lo llevaría a la casa. Lo esperaban en el departamento familiar de la avenida Callao y Vicente López. Nunca llegó.

Conte y su mujer hicieron lo que tenían que hacer: desfilaron por los juzgados, mandaron cartas, plantearon recursos de hábeas corpus, aceptaron el resultado negativo de los jueces. De tanto mirar el cuarto y el ropero de Augustito, o una puerta que nunca se abría, un teléfono

que no sonaba, la cama y el ropero igual, esperando, los Conte se dieron cuenta de que Augustito tardaba demasiado en volver. No pasó mucho tiempo hasta que lo supieron muerto sin que nadie se los confirmase. Tanto, que una noche de septiembre de 1976, Conte llamó a sus amigos más íntimos y los invitó a una cena para despedir a su hijo.

Aun dando a su hijo por muerto, Conte quiso saber qué le había pasado. Su agenda era importante. La aprovechó y habló por teléfono como nunca en su vida. Movió hilos, buscó una explicación, una palabra oficial, un favor, algo, cualquier cosa, un dato. Se le metió en la oficina a Harguindeguy, a Martínez de Hoz, a Armando Lambruschini y a Roberto Viola. Hasta recordó que un compañero del Nacional Buenos Aires estaba a cargo del Primer Cuerpo de Ejército. Era Guillermo Suárez Mason. Conte fue a verlo. La respuesta fue calcada: “No tenemos ninguna información que pueda ayudarlo”. Harguindeguy le dijo: “Quedate tranquilo, le va a hacer bien, va a crecer”.

Sus clientes dejaron de llamar. El miedo y las líneas pinchadas los empujaron a buscar otros abogados con menos problemas. Entonces Conte le escribió a Videla. “No es un secreto para nadie la existencia en el país de grupos que se arrogan el derecho de imponer su propia violencia [...], la anécdota diaria se puebla de ejemplos de secuestros, de crueles torturas, de desapariciones de personas y de muertes producidas por grupos que parecen escapar al control estatal”. Todavía faltaba un poco para que Rodolfo Walsh escribiese su “Carta Abierta a la Dictadura Militar”, las palabras que comenzaron a desnudar el modelo de la dictadura que unas horas después lo desapareció.

En los primeros días que siguieron al golpe, había caído detenido Guido Di Tella, uno de los herederos del imperio que llevaba su apellido. Di Tella venía de la Democracia Cristiana, como el propio Conte y como uno de los rostros más emblemáticos de la dictadura: José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía. No le costó mucho a Conte entrar en el despacho del entonces poderoso ministro para tramitar la libertad de su cliente: se conocían desde el colegio, habían sido compañeros en el Nacional Buenos Aires y en la facultad. Luego de los estudios se volvieron a ver poco. Una sola vez, cuando sus hijos eran chicos, los matrimonios compartieron un día de campo en la estancia que los Martínez de Hoz tenían en Chapadmalal. Los Conte se acercaron a un camino rural y un peón de la estancia los fue a buscar con un carruaje tirado por caballos. Laura se aburrió enseguida cuando la llevaron a recorrer los distintos rincones del establecimiento.

Conte no dudaba de que gestionar ante Martínez de Hoz la libertad

de Augusto María iba a ser mucho más fácil que la de Di Tella. Pero se equivocó, tal vez porque para ese momento las cartas ya estaban echadas. Martínez de Hoz volvió del despacho de Videla con una seca respuesta: “No hay nada que se pueda hacer”.

Un día, Jacques Perriaux, un abogado muy ligado a intereses corporativos y viejo conocido de Conte, se acercó a su despacho, siempre a media luz, y le confirmó: “Augusto fue asesinado”. Laura estuvo dos años sin salir de su casa.

A Alicia Oliveira, que conoció a Conte cuando él era profesor de una academia en San Isidro donde ella era secretaria, le costaba terminar de aceptar que Conte, estando su hijo marcado, pudiera abrigar alguna posibilidad de regresar sano y salvo al cabo de su año en la Marina. “Si a mí me hubiesen dicho que tenía un militar en la puerta de mi casa, saco a mi hijo por cualquier lado, así no tuviera nada que ver”, le decía. Oliveira —a pesar de haber tenido militares en la familia y de haber estado de novia con un cadete del Colegio Militar— desconfiaba de los militares en esencia, pero Conte —y Mignone—, no. Ellos no desconfiaban *en esencia* porque habían sido amigos de los militares, habían trabajado para ellos, y en cierto punto adherían a su manera de ver y ordenar el mundo.

Néstor Vicente vio todo eso en primera fila, pero sin saber qué era lo que estaba pasando. Vicente, abogado e hincha enfermizo de Huracán, conocía a Augusto desde 1969, cuando la militancia los reunió en la DC. Fue a pedido de Conte que lo nombraron en un cargo en FAPES. Le llamó la atención una especie de calidez distante. No gastaba con él muchas palabras. Solo marcaba el objetivo, las coordenadas políticas y Vicente acataba. Nunca dejaba de ser el atildado Conte Mac Donell.

Vicente apenas conoció a Augusto María, pero por otras cuestiones de la vida conyugal y social era más cercano a Julián, el más chico. De hecho, Augusto Conte era tan reservado sobre su vida familiar que Vicente solo se enteró de que entraba a la colimba cuando era casi un hecho. Tampoco estuvo al tanto del debate familiar acerca de la incorporación o la deserción. Conte nunca llevó el tema a la DC. Sin embargo, alcanzó a comprender que la relación entre padre e hijo era muy intensa, y hasta llegó a pensar que el hijo estaba empezando a ser lo que el padre nunca se animó a ser. Para Vicente, la tragedia le permitió a Augusto padre ser más excepcional.

11
El Informe Final y la campaña

Otoño de 1983. La cúpula militar publicó su Informe Final y nadie en el CELS podía creer lo que estaba leyendo. “Se habla de personas desaparecidas —decía el texto—. Todo esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos, ya que en la república no existen lugares secretos de detención, ni hay en los establecimientos carcelarios personas detenidas clandestinamente. Debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentren exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos, aun cuando no puedan precisarse hasta el momento las causas y oportunidad del eventual deceso ni la ubicación de sus sepulturas.” Mignone se tomaba la cabeza. Conte ardía de rabia ante semejante manifestación de cinismo desarrollada en el estilo ampuloso del lenguaje castrense.

Mignone se sentó frente a la máquina de escribir y enrolló el papel rápido. Los dedos sobre el teclado flotaron durante un instante sin teclear nada y estaban listos antes que las palabras. Redactó un comunicado en el que habló sobre el desprecio hacia la opinión pública, sobre la inhumanidad ante el dolor de miles de familias argentinas, y advirtió que “el pueblo juzgaría la responsabilidad de las Fuerzas Armadas a través de las leyes penales que ellos no supieron respetar”. Ese era su lenguaje, que fusionaba una estrategia política que apelaba a la defensa de derechos y pura bronca acumulada.

Los abogados del CELS seguían trabajando, metiéndose de cabeza en la documentación, entrevistando familiares, discutiendo las pruebas para las causas y armando la estrategia política y jurídica.

La Comisión Directiva seguía activa y sus miembros se habían convertido en metódicos militantes contra la impunidad en el debate sobre la autoamnistía. Mignone, tan cristiano, detectó que para oponerse no podía contar con la Iglesia. Fue cuando vio que el entonces obispo Antonio Quarracino estaba a la cabeza de los que pedían una Ley del Olvido. Reunidos con los otros abogados del equipo, les dijo: “Mientras nosotros pedimos un Núremberg, los militares quieren autoperdonarse”.

La medida se presentaba como una ley de carácter general, pero era obvio que solo pretendía proteger a los militares. Mignone, sin salir de

su asombro, comentaba, como quien descubre un secreto: “Estos tipos están admitiendo una responsabilidad ante hechos delictivos que hasta ahora negaban”, decía riendo amargamente mientras estudiaba los diarios del día.

La gente ya no tenía tanto miedo de marchar. No hacía falta que fuera un reclamo colectivo ni un caso que involucrara a varios detenidos, no tenía que ver con la letra grande de la Constitución. Bastaba un solo abuso para que se pidiera justicia, como el caso que protagonizó el grupo de oficiales que en una oscura noche mató a Rubén Álvarez al costado de una ruta salteña o, un poco antes, durante la marcha de la Multipartidaria que terminó con la muerte de Dalmiro Flores.

Llegó el anuncio del llamado a elecciones para el 30 de octubre. Era la noticia más importante de los últimos siete años, pero en el CELS se vivió con más alivio que con algarabía. Laura Conte se sintió tranquila, pero no tenía motivos para festejar. También pensaba que el CELS venía trabajando para que eso sucediera. “Los militares estaban convencidos de que iban a estar siempre, pero se cayeron solos, acababan de cometer el segundo genocidio, el de Malvinas”, decía. “Ahora tenemos una responsabilidad.” Conte, comenzando a hacer algo de futurología, le confesó a Zamora que el desafío se iba a restringir a juzgar a la junta —Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti—. Zamora renegaba y quería enjuiciar a todos. “¿Cómo nosotros vamos a pedir el juzgamiento de los tres solamente?”, lo apuraba. Conte no reculaba: creía que ante un eventual triunfo del Partido Justicialista (PJ), la única vía posible era esa o la impunidad total.

El día de las elecciones de 1983 aún no tenía una fecha definida en el calendario pero ya había pegado en el ánimo de la gente, de las agrupaciones de derechos humanos y de los partidos políticos. Conte no regulaba su ritmo de trabajo en el CELS, pero de la noche a la mañana se vio metido de vuelta en una maratón de reuniones de la Democracia Cristiana. Se empezaba a hablar de rearmar el partido, de candidaturas, de fechas.

Un mediodía de otoño de aquel año, Conte caminaban por la zona de Tribunales con Néstor Vicente. Acababan de despachar expedientes en los juzgados de Lavalle y se pararon en la esquina de la calle Uruguay mientras seguían hablando de política. Vicente lo midió. Ya venía rumiando la idea de darle la oportunidad. Le veía todos los atributos de un líder que podría representar al partido con la bandera de la lucha por los derechos humanos. “¿No querés ser el candidato a diputado?”, le preguntó. En el partido era una fija que el candidato natural era el propio Vicente, quien manejaba el distrito Capital de la DC. Conte lo sabía, así que lo miró y pensó: “¿Por qué el candidato

obvio me estaba ofreciendo el cargo?". Vicente lo miraba. "¿Por qué?", le preguntó Conte, bien racional. "Porque te quiero", le contestó divertido Vicente.

La esquina era un hormiguero de abogados en estado de pleito que los cruzaban por los cuatro costados, los rozaban y empujaban. Conte seguía pensando en silencio. "Muy bien, discutámoslo con el grupo", zanjó Conte. A los pocos días, se juntaron en una de las oficinas del amplio estudio que Vicente tenía en la calle Paraná casi Córdoba, en una gran mesa de madera. Pero ya tenía el sí. Cuando algunas horas después Conte pasó el umbral de la puerta del CELS, lo primero que hizo fue comunicárselo a Mignone. "Yo te apoyo, por supuesto", le respondió.

Zamora fue más ambiguo. "No te metas en la Democracia Cristiana. Es un partido que no hizo nada en contra de la dictadura", le dijo. Conte lo aceptó, y trató de hacerle ver que había que aprovechar dos cosas: el espacio a ocupar para los derechos humanos y la personería jurídica. Acaso entonces se manifestaron un poco aquellas viejas diferencias políticas que saltaron al principio. Zamora se reconocía como una persona de izquierda, pero seguía rescatando la acción valiosa de Conte contra la dictadura. "Mucho más valiosas que las de la izquierda, empezando por el PC", sostenía. Sin embargo, a pesar del respeto y la admiración, sintió que durante la campaña sus caminos se empezaban a separar.

Para Conte, aquel invierno fue de mucha rosca partidaria. Se metió de lleno en la política de comité, que lo obligó a gastar horas en disputas internas con los otros sectores del partido que solían ir a las reuniones "para el diálogo" convocadas por el presidente de facto, el general Reynaldo Bignone. Eso, para Conte, era imperdonable. Igual le tomaba el tiempo a la campaña desde un localcito que le habían prestado a Carlos Auyero —compañero de militancia y dirigente— en Rivadavia casi Pasco, donde se pasaba buena parte de ese momento en que la tarde se va convirtiendo en noche. Quien llegaba a verlo por primera vez, lo reconocía fácilmente. Era el tipo que estaba de traje impecable o de camisa a cuadros. Allí convocó a todo el *staff* del CELS para debatir su candidatura. Algunos estuvieron en contra, pero Mignone zanjó la cuestión a favor del candidato.

Por otro lado, si bien los jóvenes del CELS seguían trabajando normalmente, decidieron seguir firmes junto al MAS. Zamora se postuló nada menos que como presidente de la Nación y, naturalmente, empezó a ser figura clave de la izquierda. Parrilli también se estaba haciendo conocido como figura política del partido. Él pensaba que el hecho de que fundaciones norteamericanas financiaran el CELS equivalía a que él y Zamora tuvieran sus días contados. Ahí todos olieron problemas, o por lo menos rupturas. Ya

para entonces Mignone pensaba que el partido había buscado a Zamora por lo que representaba políticamente a través del CELS.

Mientras Conte se deshacía de sus rivales en las elecciones internas por el doble de votos, la dictadura seguía sondeando la proclamación de su plan. Desde un estrado en la cancha de Atlanta, una noche de acto, dijo lo que pensaba: “No nos vengan ahora con una autoamnistía amañada y cobarde ni con querer detener la justicia, porque los que así lo hagan serán responsables de los resultados de la justicia popular”. Con palabras parecidas a las que usó Mignone para hablar de aquel Informe Final, Conte se refería al proyecto de la dictadura para autoindultarse ante eventuales futuras investigaciones sobre sus crímenes.

Los militantes respondían cantando “¡Milicos, cuidado, Conte diputado!”. La amnistía pretendía incluir tanto a militares responsables de “excesos” como a civiles “condenados por actos calificados como subversivos, cuando los inculpados hubieren tenido menos de veintiún años en el momento de cometerlos, o sufran penas de prisión menores de cinco años”. Es decir, un número insignificante.

El equipo de Conte repartió volantes en las plazas, en las puertas de los cines, a la entrada de los partidos de fútbol. Había que movilizar gente. Había que ganar la interna y proyectar un piso de votos para conseguir esa banca en el Congreso. Como punto de partida de fuerte carga simbólica, Conte voló a Neuquén para lanzar su candidatura. Consideraba a la ciudad del obispo Jaime De Nevares la capital nacional de los derechos humanos. El eslogan cayó de maduro: “Los derechos humanos al parlamento”. Laura, su mujer, vio que el día a día de la campaña lo alejaba del dolor por la pérdida de su hijo. Si bien no había dejado de lado su estilo de experto en denuncias contra la dictadura, Conte ahora jugaba en la política partidaria durante el momento más emblemático de la democracia argentina.

Graciela Fernández Meijide afianzó la relación con Conte no porque no le fuera placentero trabajar con Mignone, sino porque aquel tenía un proyecto político al que le puso el hombro. Ella, atea, no se afilió a la DC, pero afilió a toda su familia para votar en la interna. También estaba dispuesta a llevar y traer gente para que votase ese día.

Tanto en las oficinas del CELS como en la DC la campaña se estaba tornando tragicómica. El partido necesitaba afiliados, así que Conte junto con sus compañeros de militancia y amigos empezaron a tratar de inscribir a todo el mundo. “¿No te querés afiliar?”, rogaban. Aun en broma. Repetían el chiste varias veces al día y salía en cada anécdota, sobre todo cuando se cotejaban los números. En el circo del período electoral, Enrique Fernández Meijide, el marido de Graciela, afilió a la Democracia Cristiana a 132 judíos. Se mataban de risa cada vez que miraban las planillas.

Conte también sufrió un duro golpe cuando se enteró de que uno de los jóvenes que lo apoyaban en la campaña era un servicio de Aeronáutica. Lo tenían presente como “el hombre de las corbatas”, porque algunas las regalaba, otras las vendía. Fue por una de esas corbatas que alguien le dijo a Conte, en una marcha en la Embajada de Estados Unidos: “Augusto, el tipo que te regaló esa corbata es un espía”. Era verdad. Y la tensión aumentaba.

Por la mañana, Conte ojeaba los diarios. “Hoy también salgo en todos lados.” Tenía razón. Cuando no era un reportaje, era una reseña o un recuadro de objetivos programáticos o una mínima crónica sobre un pequeño encuentro partidario en algún barrio porteño. Era el hombre de los derechos humanos y la prensa no paraba de resaltar esa ventaja que lo diferenciaba de los otros candidatos. Conte se miraba a sí mismo en las fotos en blanco y negro, pero mientras tomaba el café pensaba: “Tenemos más prensa que posibilidades electorales”. Y siempre se lo decía a Laura. “Hay esperanza, aunque en la tele ni aparezco.” El *prime time* televisivo era para peronistas versus radicales, la boina blanca, el saludo de Alfonsín, el gesto desabrido de Ítalo Argentino Luder y la cara de Perón en gigantografía. Actos masivos. Se mezclaba todo: aires de democracia, sentido futbolero, pulsión de libertad, alegría general. Primavera.

Sobre el final de la campaña, Conte dejó de lado para siempre el “Mac Donell”, su segundo apellido, que hasta entonces formaba parte de su firma. “Es un apellido que provoca esquizofrenia —decía—. Mi primer apellido es el natural. Es más cortito, más rápido. Además, Mac Donell… mmm. Es inglés. No va”, sintetizaba. Así cerraba la polémica que ya acarreaba desde que iba al colegio, ahora por una cuestión de cartel que estaba relacionada con cierto espíritu de campaña sin solemnidad. Él pensaba que el “Mac Donell” imponía distancia.

El grupo de la DC trabajó intensamente en la campaña y más de uno se sorprendió de su candidato. En un armado de listas, Conte reaccionó a la manera de un político profesional: le impuso a Vicente un nombre que no era el que le convenía a Vicente sino a él mismo. “Le dimos máquina a un muñeco y ahora no vamos a saber cómo controlarlo”, les dijo Vicente a sus otros compañeros. Ya lo notaban como queriendo apartarse de lo que era la DC, con ganas de refundar el partido o de fundar otro. Sin embargo, fue él quien se ganó el reconocimiento de sus compañeros por su esfuerzo para lograr la personería y también por conseguir apoyo económico. El grupo tenía una certeza: “Parece que en la Capital la cosa está entre Alfonsín y nosotros”.

Por entonces, él y Mignone valoraban mucho la actitud del candidato radical, quien había sido uno de los pocos políticos convidados que se habían negado a asistir a aquellas reuniones que

convocaba el presidente Bignone. Pero en julio de 1982 Mignone había tenido la necesidad de escribirle a Alfonsín para felicitarlo por el acto que había encabezado en la Federación de Box. Allí Mignone se esperanzó con ese hombre que había recitado el Preámbulo de la Constitución y que parecía traer bajo el brazo la esperanza y la capacidad de desmantelar los laberintos operativos del aparato represivo.

Mignone, Conte y Alfonsín habían compartido horas de debate en la APDH. En una sobremesa, Mignone le susurró a Conte: "La sensación es que si Alfonsín gana, al día siguiente van a aparecer todos los desaparecidos". Conte asintió con una mueca de resignación, deseando que pudiera pasar, sabiendo que era imposible. Era el peronista Ítalo Luder —según todos los sondeos— quien se perfilaba para ocupar el cargo.

Un panfleto pasó de mano en mano. "Contra la autoamnistía nos reunimos en Cerrito y Córdoba." Faltaba poco para las elecciones, para la restauración democrática, y la gente estaba agotada de pedir respuestas a la cuestión de los detenidos-desaparecidos. Mignone, Conte, el *staff* del CELS y miles de otros volvían a desfilar por las calles de Buenos Aires para rechazar el intento de cubrir con una ley de olvido los crímenes de la dictadura. "Esa ley nace muerta", presagiaban.

El día del último acto proselitista explotó como nunca ese espíritu de campaña sencilla y alejada de la etiqueta política que Conte perseguía. Los organizadores pensaron un gran acto al aire libre, en Parque Lezama. Tocaron Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y León Gieco, que era la cara musical del fin de la dictadura. Pero esa noche, a pesar del éxito que había sido el acto de Parque Lezama, Conte no logró dormir en paz. Tenía grabado en la frente el piso electoral del tres por ciento que necesitaba para acceder a una banca. Buscaba desesperadamente, hasta en sueños, 70.254 votos. La DC tenía una presencia relativa en todo el país, por no decir modesta. "No nos sobra nada", decía mientras estudiaba los números, las planillas de afiliación, lo que le contaban sobre cómo venía el reclutamiento de fiscales de mesa en los barrios.

El 30 de octubre se despertó temprano y vio letras gigantes en los titulares de los diarios. Hizo las rutinas de un político en día de elecciones: pasar por el comité, sufragar, dar notas, posar para alguna que otra foto, guardar un rato para la familia. A la hora del recuento, los medios se ocuparon primero de Luder y Alfonsín. Los números dijeron que Alfonsín había ganado. Conte se alegró a medias. Que un compañero de la APDH fuera presidente significaba una apertura hacia la verdad y la justicia, sin atajos, con respaldo del gobierno para investigar causas.

Como cada militante de los movimientos de derechos humanos, Conte se imaginó archivos desclasificados y mucha información oficial de los años de dictadura a disposición para que los familiares pudieran rastrear lo que había pasado con sus desaparecidos. Pero por más que supiera toda la verdad, a su hijo no lo vería más. Un rato más tarde recordó que él mismo también era candidato. Preguntó por los sufragios. Le tiraron el número: consiguió 73.965 votos. Lo había logrado. En esa noche de fiesta ni se imaginó lo que le esperaba en el Congreso. Según Vicente, allí empezaron sus problemas de salud. “No sé si estoy para esto”, le dijo a su esposa Laura el mismo día que ganó su banca. Laura se daba cuenta, porque siempre veía lo mismo y lo atribuía a que cada vez que a su marido le iba bien, aparecía el recuerdo del hijo desaparecido.

Caiati fue la única que dentro del CELS se había opuesto a la candidatura de Conte, acaso porque era de esas personas que están a gusto en un entorno en el que nada ni nadie cambia. Pero nadie le hizo caso. Caiati no desconfiaba de las cualidades de Conte, sino más bien al contrario: desconfiaba de los demás parlamentarios que se perfilaban para ocupar las bancas, desconfiaba del sistema de poder que todos sabían que iba a regir en el Congreso, y sabía que lo más probable era que Conte se quedase solo. El tiempo le daría la razón.

12
Alfonsín presidente

El espíritu que flotaba sobre la Plaza de Mayo el 10 de diciembre de 1983 —día de la asunción de Alfonsín como presidente— duró lo que dura una foto. Por lo menos para algunos de los que ese día asumían sus funciones. Conte no se sintió bien. Ni en ese día ni en los siguientes. Luego de sondear el aire y a sus futuros colegas en el Congreso, temió que iba a estar tan aislado como puede estarlo un cuerpo extraño en un engranaje político que siempre supo arreglárselas para seguir vigente, a pesar de la interrupción durante la dictadura. Pero igualmente iba a intentar ser el diputado de los derechos humanos y de convertir su despacho en el Congreso en una casa abierta para todas las organizaciones.

Mignone no tardó en cruzarse con el presidente Alfonsín. Fue en una reunión que tuvo con dirigentes de otras organizaciones de derechos humanos. Aquel día, en la Casa Rosada, se le acercó. Alfonsín ya no lucía el uniforme obligatorio del abogado de provincias que tenía dos o tres trajes medio gastados para toda ocasión. Lo saludó, recordaron los tiempos de la asamblea y se felicitaron mutuamente. Se trataron de "usted", como siempre. Pero ahora había algo que Mignone esperaba de Alfonsín. "Como jefe de las Fuerzas Armadas y del Ejército, usted estaría en condiciones de saber dónde se encuentra cada desaparecido", le dijo. "Los datos están en el Servicio de Informaciones del Ejército. Vaya a Callao y Viamonte, pida los expedientes. Abra los cajones, los archivos. Ahora usted puede, doctor. Haga el acto simbólico. Vaya a la SIE, doctor. Ahí está todo", le pidió.

Alfonsín sabía lo que iba a escuchar de boca de Mignone y sabía lo que iba a responderle: "No —lo paró—. Antes los van a hacer limpiar, si es que no lo hicieron ya".

Mignone había entrado a la Casa Rosada con una sonrisa. Sintió la impotencia de Alfonsín de no poder darle una respuesta. Salió por el acceso de la calle Rivadavia con el semblante tan rígido como el que lucía uno de los granaderos que cruzaban la explanada.

Galletti contó entre sus más cercanos su firme sensación de que Alfonsín estaba yendo hacia un pacto. Zamora entendió que Galletti arrastraba su rechazo por el presidente electo desde la época de la APDH, cuando Alfonsín se esmeraba demasiado en neutralizar

cualquier acción mínimamente arriesgada que pudiera llevar al esclarecimiento de los crímenes de Estado.

Apenas pisó el Congreso, Conte, acompañado sobre todo por Carlos Auyero, algunos del PI y un par de peronistas, empezó una maratón para constituir una comisión bicameral parlamentaria que pudiera investigar los crímenes de la dictadura. No era una idea de Conte: la mayoría de las organizaciones de derechos humanos, y la gente del CELS en particular, venían abogando desde hace tiempo por ella.

También existía otra manera de abordar la tarea: se suponía que una investigación llevada adelante por un tribunal civil era menos objetable que una investigación parlamentaria y por supuesto mucho menos que un encargo presidencial. Se suponía que el principio de inocencia le quitaba a la derecha protogolpista cualquier tipo de excusa legal para quejarse a priori de presuntas cacerías de brujas. Se podría escribir una nueva historia oficial, aunque alguien tenía que impulsarla desde el gobierno. Pero nadie lo hacía.

No era fácil. Algunos jueces estaban designados hacía poco, es decir, eran unos inexpertos sin cintura política ni experiencia tribunalicia. O podían ser todo lo contrario: una banda de funcionarios judiciales autoritarios de la vieja guardia, designados por la dictadura. Y también podían ser una mezcla de las dos cosas. Para muchos de los integrantes del CELS y de todo el movimiento de derechos humanos, la transición empezó a bailar en la cubierta del *Titanic*. La iniciativa era de la sociedad civil, pero el aparato era de las fuerzas militares y policiales. Determinar cuál era un crimen, quién debía ser considerado el autor y quién debía ser castigado comenzó a ser un tema que excedió el debate mediático y se metió en las casas, en los bares, en las oficinas. Alfonsín tenía claro qué hacer: una investigación lo más completa posible que se pudiera conociendo de antemano, con ciertos límites y, luego, impartir castigo. Aunque fuera a algunos. Buscar la verdad, sí, pero asignando grados de responsabilidad.

El mismo día que Conte introdujo el proyecto de la bicameral, el Congreso sancionó la derogación de la autoamnistía que habían decretado los militares antes de entregar el poder. Por esas horas Alfonsín introdujo la idea de desarrollar la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), una comisión presidencial que investigara los crímenes de la dictadura. A Conte no le gustó nada. Él quería la bicameral. Tanta inteligencia cruzada sobre el tema más sensible para la sociedad argentina en el transcurso de tan pocas horas parecía demasiado. “Es un juego para obstruir a una verdadera comisión que investigue”, sostenía, mientras negaba moviendo la cabeza, resignado.

Los que apoyaban la idea tenían una razón simple: nadie creía que Alfonsín fuera a ganar, y Luder, suponían, iba a garantizar la

autoamnistía. Si él ganaba, ni investigación ni justicia. Lo que pedían era una condena política y moral. Sin embargo, el Congreso no podía condenar. Graciela Fernández Meijide miró alrededor y notó que todos estaban convencidos. También fue testigo de cómo la bancada radical —impulsada por la Coordinadora— al principio apoyó el proyecto de una bicameral. También estuvo cerca cuando la iniciativa perdía fuerza. “Llegó la orden del Ejecutivo de no joder”, le explicaron.

Para el grupo primario del CELS, el nuevo gobierno radical era apático. En casi todos despertó amargura, pero en Alfredo Galletti encontró un punto de no-retorno. “Este es el moño de oro que Alfonsín le pone al drama de los desaparecidos”, dijo cien veces cuando se enteró de los lineamientos para la creación de la Conadep. “Un informe testimonial que acaso sirva para saber todo sobre las víctimas y nada sobre los verdugos.” En el caso de Galletti, la realidad lo rebalsó. No lograba recuperarse del enorme vacío que le provocaba no saber nada sobre su hija Liliana, que permanecía desaparecida. Liliana había estado viviendo en Chile durante la presidencia de Allende y luego llegó a colaborar con la APDH en la elaboración de informes. Se había recibido de historiadora con medalla de oro y tenía treinta y un años cuando la vieron viva por última vez. Ahora su padre no sabía siquiera si podría contar con una esperanza. El último día de 1983 salió al balcón de su casa, miró la calle por un instante y se arrojó al vacío desde el octavo piso.

Las aguas estaban divididas. Algunos, como Mignone, creían que el nacimiento de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas era un gesto necesario, aunque no suficiente. Mignone dio la orden de poner toda la documentación del CELS a disposición. A los pocos días, los empleados contratados por la Conadep empezaron a pasar por el CELS para llevarse cajas con decenas de papeles, historias y denuncias. En alguna medida, cuando las veían irse, Mignone, Conte y los demás sentían una puñalada. A Mignone lo tentaron para ser consultor del proyecto, pero luego de pensarlo un rato rechazó la invitación. “No quiero cobrar. No puedo ser un profesional de los derechos humanos. Me hubiera encantado. Vamos a colaborar en todo, pero esto es mi historia personal”, explicó. Del otro lado entendieron.

El CELS se convirtió en un hormiguero de gente dando y recibiendo información. Había un cruce permanente entre abogados, jueces, familiares, gente del centro de documentación y referentes de partidos políticos. “Mientras se pueda, hay que hacer todo lo posible para evitar la impunidad. El juicio a los comandantes está bien, pero debemos seguir machacando con más pruebas y todos los documentos que podamos encontrar”, dirigía Alicia Oliveira.

Ella sabía que la Conadep había sido una decisión política. Según Oliveira, era algo que se le había ocurrido a Alfonsín y a Antonio

Tróccoli, su ministro del Interior, y en parte a Leopoldo Moreau, flamante diputado y uno de los referentes de Renovación y Cambio, la corriente interna del radicalismo que lideraba el flamante presidente. Ellos pensaron que si había una bicameral iban a tener "un desfile en el Congreso".

Tróccoli fue quien convocó a Hilario Fernández Long, un ex rector de la UBA, eminencia de la ingeniería e introductor de la informática en la Argentina durante la década de 1960. "Usted ocúpese de que haya una lista completa de los desaparecidos en computadora." Cuando se enteró, a Meijide no le gustó nada. Le pareció algo similar a una tomadura de pelo: "Si nosotros ya tenemos esa lista hecha a mano, no se necesita una computadora". Como si jugaran a las escondidas, el gobierno ya delineaba su comisión.

Poco tiempo antes, varios organismos se habían reunido para proponer algo concreto: la APDH había comprado computadoras —financiadas, como toda su estructura, por el Consejo Mundial de Iglesias— y se propuso juntar un corpus de prueba para llevar a cada bancada, pensando en allanar el trabajo de una futura bicameral. Se propuso reunir toda la información disponible sobre desaparecidos y detenidos legales. Para cargar los datos, otros sugirieron contratar gente joven que trabajara ochos horas por día. El CELS se había entusiasmado y ponía la plata. Todas las organizaciones estuvieron de acuerdo, menos Madres. El argumento: "Madres siempre tiene gente voluntaria, nunca paga".

A lo largo del año, el equipo jurídico del CELS junto con el Serpaj, la APDH, Abuelas, el Movimiento Ecuménico y Familiares de Desaparecidos de contribuyeron a crear una Comisión Nacional de Recopilación de Datos para concentrar y sistematizar toda la información que el movimiento de derechos humanos había reunido durante la dictadura. Consiguieron toneladas de datos: cuándo, dónde, por qué, quién pudo ver algo, quiénes eran las víctimas, quiénes participaron de los operativos. Habían entrevistado a ex detenidos, a familiares y consultaron todas las guías que tuvieron a mano para desentrañar la maraña judicial que servía de estructura legal para desaparecer gente.

El archivo y departamento de documentación del CELS ya estaba en vías de informatizarse: Daniel Frontalini —un colaborador del centro de documentación— había descubierto, sin ser un experto y luego de volverse loco con los manuales, cómo se usaban los softwares dBASE I y dBASE II para usar en una computadora Kaypro que Mignone había recibido como donación en uno de sus viajes a Estados Unidos. Cristina Caiati, además de su trabajo en el archivo, se ocupaba de prensa y difusión.

El equipo alimentaba la Kaypro que Frontalini ya dominaba. A

todos los guió como un mantra el objetivo de tener datos para probar hechos. El primer documento de esa comisión se presentó en el Congreso mientras los senadores evaluaban ascensos militares. Tenía los nombres de casi mil protagonistas activos de la represión —incluidos los de algunos militares cuyos ascensos estaban siendo evaluados por el propio parlamento— y un listado de los centros clandestinos de detención.

La Kaypro había dejado de ser un depósito de números y palabras para convertirse en un instrumento fundamental para el centro de documentación. El archivo del CELS empezó a ser rico e interesante. Los recortes de diarios clasificados, los libros importados y sobre todo las fotocopias de las órdenes secretas de la represión o documentos de la dictadura que no eran públicos, eran codiciados como tesoros.

Al mes siguiente presentaron la segunda parte del informe, más detallada. Tenía seiscientos nombres más, mapas y gráficos. Esos datos cruzados permitieron sacar variables que hasta entonces sonaban escondidas: "temporadas" de picos represivos, la forma de actuar según el arma, según la zona o si tal día se dibujaban más o menos enfrentamientos. Por primera vez se empezaba a descorrer el velo sobre la dinámica de la dictadura ante la sociedad. Pero en algunos lugares del país parecía que poco había cambiado.

Se juntó toda esa información en el lugar que tenía la estructura necesaria, que era la APDH. Ese cuerpo de datos fue a parar a la Conadep. Cuando comenzaron las declaraciones, la información se duplicó. Unos seiscientos sobrevivientes se habían acercado a dar testimonio. Apareció gente que había estado secuestrada un día o dos meses. Algunos tuvieron que escuchar de parte de los empleados del Ministerio del Interior que los recibían la consabida pregunta: "¿Su familiar era subversivo?".

Ante la inminencia de la conformación de la Conadep, se armó un pequeño revuelo en la APDH. Habían sido convocados casi todos. Conte y Mignone también estaban allí cuando Meijide llegó y contó que sabía que Tróccoli ya estaba digitando la lista de los futuros miembros de la comisión. Ahí aparecían Raúl Aragón, ex rector del Nacional Buenos Aires y miembro de la APDH, quien ya había aceptado ser secretario de la Conadep pero no decía nada. Marshall Meyer tenía casi convencido a Pérez Esquivel para que hiciera lo posible para integrar la comisión también. Era natural, el premio Nobel de la Paz había sido casi el primero de los convidados.

En esa reunión no había otra gente del CELS, tampoco de Madres, ni de Familiares de Detenidos Desaparecidos ni de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Meijide preguntó: "¿Alguno de ustedes, si son convocados, piensa salir de acá y decirle a Alfonsín que rechaza el cargo?". Carlos Gattinoni, el obispo metodista y uno de los fundadores

de la APDH, le contestó: “A mí el presidente me dijo que lo hiciera por la patria”. Los demás asintieron. A partir de entonces la discusión fue otra: había que decidir si le daban a la Conadep todo el apoyo o si dejaban que se arreglara como pudiera. “Yo estoy porque le demos todo el apoyo, porque bicameral no va a haber”, dijo Graciela, quien días después fue nombrada secretaria de la comisión. Parecieron ponerse de acuerdo.

El día en que De Nevares le pidió a Graciela que lo recogiera en Aeroparque, los dos sabían de qué iban a hablar. “Tenés que venir a trabajar con nosotros al secretariado, si no, nos vamos a la mierda”, le pidió. Meijide preveía que la iba a invitar a trabajar a la comisión, lo que la sorprendió fue la parte de irse a la mierda. “Dejámelo pensar”, le respondió. A los pocos días, volvió a reunirse con De Nevares y con Ernesto Sabato, quien ya había sido designado al frente de la Conadep. “Acepto”, les dijo. Y agregó: “Siempre y cuando me acepten dos condiciones: una, quiero estar presente en todas las discusiones políticas con voz aunque no tenga voto. Y la secretaría la armo yo”. Le dijeron que sí.

Sin perder tiempo, salió a recorrer la ciudad y tocó la puerta de todos los organismos con que tenía relación. Les quería pedir prestado lo mejor de su *staff* para la nueva tarea. La llamó a Noemí Labrune: “Vos vas a ser mi súper yo acá”. A la movida se sumaron la mayoría de las organizaciones de derechos humanos de todo el país. Abuelas no tardó un minuto y acercó documentación. La LADH puso gente a trabajar. Madres, otra vez, quitó su colaboración. Si bien Nora Cortiñas —posteriormente, parte de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora— se acercó a trabajar en el área de documentación, Hebe de Bonafini no apareció y aceleró el camino hacia la ruptura por su intención de prohibir cualquier tipo de ayuda. Otros integrantes de la comisión recogieron testimonios en el exterior.

El CELS tal vez habría preferido otra cosa. Aun discutían cómo pararse frente al alfonsinismo. Sin ser abiertamente críticos del nuevo presidente, estaban a una considerable distancia de la APDH, una organización a la que se relacionaba directamente con el radicalismo, cuando no al propio Alfonsín. De todas maneras, no dudaron en apoyar el nacimiento de la comisión. Cuando todo arrancaba, Mignone hizo una visita oficial. A Conte también lo habían sondeado para ser miembro o consultor, pero en su calidad de diputado. Al final fueron tres radicales un tanto ignotos los diputados que, en representación del Congreso, integraron la comisión: Santiago López, Hugo Piucill y Horacio Duarte.

El milagro de una comisión que echara luz sobre los crímenes del Estado parecía posible. Incluso parecía servir para algo. Muchísima gente, no necesariamente militante, albergó algo parecido a la

esperanza luego de un período negro y completamente despolitizado.

Marcelo Parrilli vio que el sistema de trabajo de la comisión generaba más confianza y muchas personas accedieron con tranquilidad a presentar su denuncia. Pero lamentaron que no hubiera conseguido absolutamente nada de información de los militares. Era claro: la comisión no tenía ninguna facultad investigativa. Galletti no estaba equivocado. Octavio Carsen también rescató que la comisión estaba obviando algo pesado: “No están publicando la lista de los milicos”, se quejaba. Tal vez en ese momento hizo su aporte la independencia del CELS para no dejar pasar la oportunidad de seguir iluminando esa zona oscura que el sistema institucional del Estado proponía. Así, publicó un informe llamado *Impunes para la ley, culpables para la sociedad*.

Con algo de ánimo, Conte había terminado de apoyar la iniciativa de la Conadep. “Es muy empeñoso lo que hacen, muy digno, pero aporta poco a la condena pública, porque la comisión no puede ser la caja de resonancia política del tema. Para eso hace falta la bicameral”, comentó entre los suyos. Aun creía que aquella idea sería posible, aunque más no fuera por la presión y sugerencia que la propia Conadep pudiese generar. Pero eso no pasaba. De todas maneras, la Conadep estaba haciendo un trabajo histórico al reunir información clave que fue la base para el Juicio a las Juntas.

Parrilli, Zamora, Oliveira y Larrandart asumieron la iniciativa del equipo jurídico del CELS. Mignone se limitó a confirmar lo que el equipo armaba. Conte, en cambio, tratando de encontrar su lugar en el laberinto de los cabildeos del Congreso, empezó a ir poco al CELS y a incidir menos en sus estrategias. Cuando hizo falta, el equipo pateó los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero en los albores de la democracia los directores del CELS pensaron que había que sembrar en el interior.

Así, también viajaron para tratar de armar la red nacional de corresponsales del CELS en las provincias. Mignone se anotó en casi todas. Chela lo seguía. El objetivo principal de la agenda era preciso: contactar a otros colegas, generalmente miembros de asociaciones de abogados que trabajaban en derechos humanos y que estuvieran interesados en armar redes para reconstruir el mapa nacional de la represión, completar las bases de datos y construir pruebas para los juicios.

Pero también había espacio para sentarse largas horas frente a familiares de desaparecidos, políticos y funcionarios de todas las líneas de los gobiernos locales. Dieron decenas de entrevistas a radios ignotas, salieron en las tapas de periódicos locales y se sometieron a reportajes en los desangelados estudios de los canales de televisión provinciales donde sabían que algunos televidentes les prestarían

atención. Fueron al Noroeste, al Litoral, a Córdoba, a Mendoza. Las jornadas de trabajo empezaban muy temprano y terminaban a la madrugada.

A fines del verano de 1984 Mignone y Chela viajaron a Salta y Jujuy. Mignone también aprovechó para dar una serie de conferencias y charlas. Ya tenía algo de prensa, de modo que no se sintió incómodo cuando en San Salvador de Jujuy también lo invitaron al canal de televisión local para un reportaje. Se acomodó la corbata, dieron la orden de "aire" y, cuando le tocó responder las preguntas del anfitrión, muy a su estilo, se lanzó a un largo monólogo que no daba pie para que su entrevistador repreguntase. Lo invitaron a una radio local y pasó lo mismo. Después se dio una vuelta por la Legislatura provincial, guiado por el diputado José Antonio Casali, un alfonsinista que había estado muy activo en la APDH local. "Se nos acerca mucha gente pero no hacen denuncias. Tienen miedo todavía. La presencia militar aun es fuerte, y entre el Ingenio Ledesma, la mina Aguilar y Fabricaciones Militares dominan todo", le informó el diputado. Decenas de delgados y obreros de Ledesma habían sido desaparecidos durante la dictadura. "Hay una comisión investigadora, pero está muy desorientada, no concreta nada, no avanza con los casos", explicó Casali.

Mientras escuchaba, Mignone se dio vuelta y los vio. Dos tipos de traje gris. Hizo un poco de memoria y recordó que también los había visto por la mañana en el canal de televisión y en la radio. También los había visto llamar desde un teléfono público sin ningún ánimo de esconderse.

Cuando giró para seguir hablando con Casali, sintió que le tocaban el hombro. Era uno de los hombres de traje que, sin ruborizarse ni mucho menos, al presentarse lo interrogó: "¿Qué anda haciendo por acá? ¿Qué anduvo haciendo todo el día?", lo interrogó. Mignone solo atinó a preguntar si eran de la policía. "Somos de un nivel superior", le contestó el hombre, sin precisar si el "nivel superior" se refería al SIE. Esa noche, Mignone dio una conferencia en el auditorio de un hotel y con el rabillo del ojo volvió a ver a los tipos de traje en el fondo del salón. Como en una mala serie de televisión, los saludó en público y los señaló.

El auditorio se dio vuelta, los miró, y después siguió escuchando, como si nada. También, como si nada, vio que el diputado Casali, después de la conferencia, tomaba una cerveza con los dos espías.

13
Los juicios

El 13 de diciembre de 1983, tres días después de su asunción como presidente, Raúl Alfonsín había firmado el decreto 158/83, mediante el cual ordenó someter a juicio sumario “a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes, teniente general Jorge R. Videla, brigadier general Orlando R. Agosti, almirante Emilio A. Massera, teniente general Roberto E. Viola, brigadier general Omar D. R. Graffigna, almirante Armando J. Lambruschini, teniente general Leopoldo F. Galtieri, brigadier general Basilio Lami Dozo y almirante Jorge I. Anaya”.

De acuerdo con lo establecido en al artículo 122 inciso 1 del Código de Justicia Militar, el juicio debía ser tramitado ante Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. El decreto firmado por Alfonsín agregaba que la sentencia del tribunal militar sería apelable ante la Cámara Federal, de acuerdo con una reforma al Código de Justicia Militar que debía votar el Congreso.

El 9 de febrero de 1984, el Congreso sancionó la ley 23.049, que determinó que la jurisdicción militar comprendía “los delitos y faltas esencialmente militares”, y que cualquier otro delito cometido por un militar debía ser atendido por la justicia civil. Además, estableció que “los pronunciamientos de tribunales militares” debían ser apelados ante la Cámara Federal y que, si cumplidos seis meses desde el inicio del proceso, “se advertía una demora injustificada o negligencia en la tramitación del juicio”, la cámara se haría cargo directamente de la causa.

Una vez aprobada la reforma del Código de Justicia Militar, la cámara le otorgó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas un plazo de ciento ochenta días para investigar la existencia de un método de violaciones a los derechos humanos —durante el gobierno militar— y para determinar si ello podía “haber sido responsabilidad de los miembros de las juntas militares”. El 22 de agosto, ante el silencio del tribunal militar, se le concedió un plazo extra de treinta días. El 25 de septiembre el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas comunicó una resolución en la que sostenía: “Se hace constar que, según resulta de los estudios realizados hasta el presente, los decretos, directivas,

órdenes de operaciones, etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables”.

El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal anunció su decisión de desplazar al tribunal militar para hacerse cargo del juicio, amparándose en lo dispuesto por la ley 23.049. El juicio comenzó el 22 de abril de 1985.

Más de un general trató de meter miedo a sus subordinados en las mateadas de los cuarteles. Para ellos, los juicios que se avecinaban solo podían ser una fase más de la guerra contra la subversión. Veían el país tomado por guerrilleros enquistados en los partidos, apoyados por la prensa y secundados por un puñado de organizaciones no gubernamentales que, según ellos, solo buscaban venganza. Y los oficiales inocentes escuchaban lo que, según los oficiales culpables, se les podría llegar a venir: procesamiento, la cárcel, la degradación, el deshonor, la ruina. Sin importar el arma o el grado, ya no pensaban en el poder sino en la impunidad. Lo único que tenían a mano, ahora, eran las amenazas veladas en forma de bombas callejeras o declaraciones periodísticas. No nos vamos a presentar ante un tribunal civil a defendernos por haber ganado la guerra contra la subversión, decían casi a coro.

En el juicio, la fiscalía de Julio César Strassera y su adjunto Luis Moreno Ocampo acusó a las juntas por setecientas historias que eligió como casos testigo. Los testimonios de Mignone y Westerkamp fueron clave para armar la acusación. Entre ellos circulaba por entonces a quien todos definían como el periodista estrella de la cobertura de los juicios, Horacio Verbitsky, quien escribía crónicas magistrales que publicaba en el semanario *El Periodista* gracias al estudio de las causas, pero sobre todo a la relación que había cultivado con jueces y fiscales. “No podemos oponernos, aun si nos gusta más o menos el tribunal o más o menos el juicio. Lo importante es que se está juzgando y tenemos la obligación de aportar pruebas. Si los resultados son malos, nos quejamos después. Pero no podemos no aportar nada y ahí decir que los resultados fueron malos”, sostenía Alicia Oliveira, una de las abogadas del CELS que más se estaban involucrando con el tema.

Por entonces, el abogado Julio Raffo estaba llegando del exilio —había sido asesor de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)— y, una vez que hubo aterrizado, se había integrado al Serpaj. Allí conoció, entre otros, a Carlos Alberto “Quito” Burgos, quien dirigía la revista *Paz y Justicia*, en la que también colaboró Verbitsky.

Raffo comenzó a ir a reuniones de organismos donde se diseñaban los pasos a seguir, la convocatoria a marchas, las declaraciones públicas. En esas ocasiones lo conoció a Augusto Conte. No pasó

mucho tiempo para que lo invitara a ser otro de sus asesores en Diputados. Durante un tiempo, Raffo trabajó en el Serpaj y como asesor de Conte, quien un día lo sorprendió con otro ofrecimiento: “Estamos creando el cargo de coordinador ejecutivo en el CELS. Te quiero ofrecer el puesto”, le dijo. Y Raffo dijo que sí, para lo que tuvo que dejar el Serpaj. Una de las cosas que Raffo destacaba de su nuevo trabajo fue que le permitió estar en el Juicio a las Juntas. Él y los demás miembros del CELS tenían entradas y las repartían mayormente entre los familiares, pero de vez en cuando una se la quedaba él. Sentía que quería estar.

Las Madres no podían asumir orgánicamente que los desaparecidos estaban muertos. Madres llegó a impedir procedimientos judiciales que ordenaban la apertura de fosas comunes. En la Conadep habían quedado 117 denuncias sobre entierros de cadáveres NN. Cuando se ordenó relevar esos lugares apareció en escena un actor nuevo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que se formó por accidente pero también por una necesidad. El EAAF comenzó a realizar exhumaciones con una metodología científica y dejó atrás el modelo desprolijo de exhumaciones hechas por obreros al mando de retroexcavadoras y personal judicial que improvisaba a medida que encontraba restos humanos. El objetivo se hizo claro: saber cómo y cuándo, e identificar a las víctimas. O sea, conseguir pruebas nuevas con las que hasta entonces no podía contarse de cara a los juicios. Los cementerios clandestinos habían estado guardando cadáveres con signos de violencia, golpes y balazos. Cuando los antropólogos cruzaron las listas de desaparecidos con las características de las lesiones en los cuerpos que iban encontrando, se dieron cuenta de que estaban haciendo las cosas bien.

Por esa época, aun con la prudencia que los hacía sentir vulnerables a recibir información falsa, en el CELS comenzaron a abrir las puertas a diferentes personajes que caían, supuestamente, con datos valiosos. Julio Raffo lo vivió como el primer momento delicado desde su llegada. Entre tantos documentos escritos llegaron unas fotos. La mayoría eran de hombres con bigote y uniforme como si estuvieran posando para el DNI o la cédula. Luego había otras fotos —ahora de frente y perfil—, de otros hombres y mujeres, menos arreglados, vestidos de civil, más ojerosos. Los hombres llevaban la barba crecida. Las mujeres salían en musculosa, algunas con ese tipo de abrigos que tejen las abuelas. Después aparecieron más imágenes, estas del lugar. Playas de estacionamiento, oficinas con pesados y gigantescos archivos de metal, una fotos de una camioneta con cajón cerrado, un modelo que parecía desvencijado si no fuera porque adentro se había montado una sala de tortura y estaba equipada con equipos de comunicación y picanas. Luego estaban las fotos de los seguimientos.

Tipos que caminaban por la calle y no sabían que alguien los fotografiaba para confirmar una identidad que serviría al secuestrador unos días después.

Esas fotos pasaban por las manos del detenido Víctor Basterra, cuando luego de dos años encarcelado en la ESMA lo llevaron a trabajar al servicio de documentación. Imprimía por pedido de sus secuestradores todo tipo de documentación falsa. Un día se le ocurrió hacer copia de las fotos que pasaban por sus manos. Después, cuando lo dejaban salir, empezó a pegarse las fotos en los genitales, en las pantorrillas, en el omóplato. Al llegar a su refugio en La Plata, se las despegaba y las metía en un hueco en la pared. Se lo contó a alguien. Por si lo fusilaban o lo tiraban drogado al mar, el modo de ejecución que algunos detenidos ya sospechaban como destino. Por lo menos, que alguien supiera.

"Fui secuestrado, torturado, maltratado, obligado a prestar servicios a cambio de la vida y la libertad de mi hija y de mi mujer. Fui humillado durante cuatro años y medio, sistemáticamente. No fue casual." Así empezó el testimonio milimétrico y riguroso hasta el detalle que Víctor Basterra brindó en su querella criminal por privación ilegítima de la libertad, respaldado por los abogados del CELS. Durante semanas brindó el testimonio más largo (casi seis horas) del Juicio a las Juntas.

El 18 de septiembre, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes quedaron vibrando de emoción en la sala del Palacio de Tribunales donde se desarrollaba el juicio luego de escuchar el alegato histórico del fiscal Strassera, que concluía con un pedido: "Señores jueces, nunca más". El 9 de diciembre llegó la sentencia, que dio por probada la existencia de un plan sistemático de exterminio. Videla y Massera fueron condenados a cadena perpetua. Agosti, a cuatro años y seis meses de prisión. La Argentina entraba en una nueva etapa.

Cuando el juicio terminó, existían centenares de causas (algunas iniciadas en la dictadura) que habían sido armadas por el CELS contra responsables de todos los rangos en la cadena de mandos. A Alfonsín le habría encantado que las Fuerzas Armadas dijeran "Lo que hicimos fue una catástrofe". Aun creyendo que castigar era iluminar el futuro, sabía que era una operación delicada que podía fallar. También esperó alguna declaración por parte de las organizaciones de derechos humanos que condenara los métodos de la guerrilla. Pero los militares no vieron más allá de su ombligo. Y las organizaciones de derechos humanos se limitaron a lo que buscaban: castigo total y juzgamiento a todos y cada uno de los responsables y subordinados, cueste lo que fuere, aun si implicara la disolución de la sociedad tal como era, o un nuevo golpe o una invasión marciana. A nadie se le pasaba por la cabeza traer al debate la actuación de la guerrilla.

Una de las primeras cosas que había hecho Raffo cuando llegó al CELS fue poner una foto de Galletti en su oficina. Se sintió conmovido cuando le contaron los detalles de su muerte. “¿Cómo puede ser que no haya un reconocimiento en el CELS?”, pensó. Raffo se focalizó en presentar proyectos en Diputados para lograr el esclarecimiento de las condiciones de detención de los diecisiete presos políticos que quedaban en el gobierno de Alfonsín, que habían sido condenados por tribunales militares. Respondía directamente a Conte, que tomó como tarea conseguir su libertad utilizando el latiguillo de “los presos políticos de la democracia”.

Las cosas parecían tomar un cauce natural de trabajo, una velocidad crucero aceptable para una organización que sabía muy bien qué era y qué había hecho durante la dictadura, pero que tendría que revisar su identidad en democracia.

Con el paso de los meses, Raffo empezó a incomodarse cuando advirtió las dificultades que se generaban en el CELS cuando fallaba la sintonía fina entre la comisión directiva y los abogados —Zamora, Parrilli, Oliveira—, que ya venían ganando prestigio. Raffo iba todos los días, supervisaba el trabajo y trataba de hacer justicia al cargo recién creado. Entre la rutina y algunas satisfacciones, se encontró con otro problema: qué se consideraba una causa judicial. Muchas causas eran una denuncia penal, pero él tenía otro criterio: si la causa no avanzaba, el abogado que la patrocinaba no tenía derecho a decir “Tengo una causa”. Algunos abogados no lo entendieron así y hubo algunos roces.

Raffo también tuvo la novedosa idea de hacer una especie de museo de la memoria. Lo llegó a comentar entre algunos miembros de la comisión directiva. Siguió los pasos obligatorios para estos casos en una institución que observaba rigurosamente las reglas de la burocracia: antes de todo, redactó un memo. Se imaginó el museo con computadoras para consultar fotos, biografías, mapas y gráficos de los centros clandestinos, el “quién es quién” de los represores. Un lugar donde la maestra pudiera ir con sus alumnos a aprender sobre la historia reciente. Tuvo esa idea pero, a pesar del lobby interno y del memo, no pude concretarla. Luego tuvo otra idea que tampoco prosperó: sugirió crear la especialización universitaria en derechos humanos. También quiso llevar un registro actualizado al día sobre cada conflicto social en cada rincón del país. Nada.

Además, empezó a tener cortocircuitos con Conte, pero no se trataba de peleas ni diferencias. Raffo notó que cuando le sugería algo, Conte —acaso abstraído de la realidad por los vaivenes en su estado de ánimo— le decía que sí pero luego hacía lo contrario. Ahí terminó de darse cuenta de que en ese momento las decisiones ejecutivas las terminaba de tomar Mignone, y por eso se sintió desautorizado. Para

colmo, Conte hacía más frecuentes sus ausencias, así que ya no tenía a su principal respaldo. Tanta fricción empezó a marcar su salida del CELS.

En el Centro de Estudios Legales y Sociales algunos empezaron a sentir lo mismo que sienten las estrellas del espectáculo cuando, luego de una abrumadora y súbita fama, las revistas y los productores empiezan a olvidarlos. En Mignone, esa sensación se manifestó una mañana de octubre de 1985, cuando se levantó con el impulso de dar vuelta la página. Jorge Baños presentó una catarata de ideas de programas y ejemplos concretos para refrescar la organización, pero en el fondo no estaba criticando nada, más allá de una serie de desórdenes de funcionamiento atribuibles a una burocracia que solía fallar y ya era comentario de "radio pasillo". Pero sí, como otros abogados, propuso la renovación del sector jurídico y ampliar la base de penetración del CELS, y volver a llamar la atención de la opinión pública y de los medios, algo aletargada tras los impactos producidos en los albores de 1983 y luego del Juicio a las Juntas. Pero también, en sus propuestas, dejaba ver cuál era su identidad como sujeto político: pensó en acciones contra las "multinacionales cómplices" y otra serie de iniciativas que tenían que ver con programas de educación "que se nieguen a servir a los intereses del imperialismo".

El núcleo de Madres terminaba de resquebrajarse también. Sus diferencias políticas internas, y entre ellas y el gobierno, se volvían más claras a medida que la presidencia de Alfonsín avanzaba. Al reclamo de "Con vida los llevaron, con vida los queremos", Alfonsín respondía que ni siquiera sabía dónde los habían matado. Incluso la Conadep ayudó a marcar las divisiones entre el grupo, cuando el sector más ligado a Bonafini no se acercó a ver qué pasaba en el Teatro San Martín, donde funcionaba la comisión.

En enero de 1986, el grupo de las fundadoras llegó a impugnar una asamblea general. Acusaron a Bonafini y a su grupo de autoritarias y de mostrar unas cuentas demasiado dudosas. Hebe respondió dejando de usar la palabra "compañeras" cuando se refería a quienes la cuestionaban, y las subestimaba por ser demasiado alfonsinistas. Ese día, las disidentes abandonaron la reunión para no volver.

El tema de los restos fue lo que terminó de manifestar la ruptura. Algunas de las Madres querían una tumba para llorar. Chela Mignone era una de ellas. Enfrente, Bonafini solo quería a sus hijos vivos, regresados jóvenes, bellos, heroicos. No quería huesos, no quería ningún otro tipo de justicia. Por eso se las arregló para impedir una pericia de reconocimiento de restos óseos. A las fundadoras no les gustó nada. Un mes más tarde de aquella asamblea, la división ya estaba en los diarios.

14
Obediencia Debida y Punto Final

El equipo jurídico del CELS sabía que si no se juzgaba a la cadena mandos, las causas se iban a cerrar. El día que temían llegó. La Ley de Punto final, que amnistiaba a la mayoría de los militares que habían participado en la represión, se sancionó en diciembre de 1986. Una abrumadora mayoría de radicales alzó el brazo y logró que se aprobara tanto en Senadores como en Diputados.

Conte y su compañero Auyero votaron en contra. No podían creer cómo esos radicales que se llenaron la boca y el ego abrazando a la democracia perdonaban a quienes la habían volteado. Vieron el momento exacto cuando César Jaroslavsky, Leopoldo Moreau, Horacio Massaccesi, Marcelo Stubrin y Jorge Vanossi —entre los que más salían en los medios— levantaban su mano. Vieron cómo Federico Storani se abstuvo. Se asombraron cuando vieron que votaban con los Alsogaray. Se indignaron con la ausencia de ciento tres diputados peronistas que ese día fundamental no aparecieron en el recinto. Para las organizaciones de derechos humanos, incluido el CELS, fue un duro mazazo.

Mignone escribió sin corrección política un folleto que mandó imprimir para repudiar la Ley de Punto Final. Estaba indignado. Habló de traición, de claudicación moral, de debilidad frente a los militares. Supo que a Alfonsín le habían torcido el brazo. “La ley asegura que el destino de miles de ex detenidos y desaparecidos seguirá siendo desconocido. Ya no se podrán investigar ni proseguir investigaciones”, dijo hasta el cansancio. Y recordó lo que tantas veces le había dicho el propio Alfonsín: “Hay que distinguir entre quienes dieron las ordenes, quienes las ejecutaron y los que cometieron excesos”.

Mignone pensó: “Pero entonces este señor quiere sancionar a los que dieron las órdenes y exonerar a quienes las ejecutaron”. Recordó que el brillante filósofo y jurista Carlos Santiago Nino, que asesoró a Alfonsín, le había dicho en una conferencia en Yale: “Yo también estoy convencido de que Alfonsín tiene un acuerdo con los militares”. Según Mignone y el equipo jurídico del CELS, se estaba condenando a la angustia perpetua a una generación de familiares y a un país entero, se estaba fabricando un trauma irritante y se estaba hipotecando la vida normal del país. “A partir del 22 de febrero del 87 se cierra para

siempre la posibilidad de que los autores de delitos aberrantes puedan ser juzgados o condenados", decía el folletito. Pero quedaba un resquicio. De la letra de la ley se desprendía que durante los siguientes sesenta días se pudiesen presentar denuncias contra militares.

Para Alicia Oliveira, el trabajo que sobrevino en esos dos meses tuvo un efecto paradojal. Ella fue una de las que se quedaron durante el mes de enero en Buenos Aires, pateando Tribunales, contando con que algunos secretarios de la Cámara Federal les tendiesen una mano a ella y a los demás integrantes del equipo jurídico. "Ahora que corre el reloj, hay mucha más gente que se va a acercar a testimoniar, hay mucha gente que va a reaccionar con furia contra esto", se ilusionaba. Y se quedó a esperar que cayesen nuevos testimonios. No le fue mal. Para la causa ESMA aparecieron muchos más testigos con mucha más prueba. Ella tenía la esperanza de alcanzar el procesamiento de un puñado de oficiales. Consiguió procesar a veinte.

Cuando el 22 de febrero los empleados de Tribunales volvían a sus casas y los despachos cerraban, Oliveira miró a sus compañeros y con gestos mudos se dijeron "algo es algo". Aunque enfrentado con los grupos de derechos humanos, Alfonsín iba consiguiendo a grandes rasgos sus objetivos estratégicos en esa área: una investigación manejada y controlada desde el interior del ámbito presidencial, el *Nunca más*, un juicio histórico y condenas a los responsables. Para muchos militantes había motivos para festejar. A otros no les quedó otra opción más que pensar que después del Punto Final la impunidad había triunfado.

A Raffo le encargaron la misión de viajar a Londres para hacer un poco de lobby y dar a conocer las dos caras de una misma moneda: una nueva agenda de los derechos humanos en la Argentina y los viejos vicios de las democracias débiles o en transición. Ya no llevaba casos y, más que un militante o un representante de una organización, se sentía un funcionario.

Zamora se quedó en el llano y sintió un rechazo en el estómago cuando Alfonsín mandó todas las denuncias —restringiendo así la competencia— a la justicia militar. Pero él además le daba una vuelta de tuerca: "Tampoco tienen que ir a la justicia civil", pensaba. El argumento era que la justicia civil estaba copada por los mismos jueces. "Ahí están los tipos que nos rechazaron los hábeas corpus. Tenemos que plantear este problema. Por ahí podemos agarrar la Constitución y plantear el artículo 24: juicio por jurados. Tenemos que ver algo así", propuso entre sus compañeros.

Sin embargo, a pesar de su bronca, le dio la derecha a Conte: "Hoy hay que juntar fuerzas contra la justicia militar. Hay un montón de gente a la que le cae mal la justicia militar". Lo que Conte le decía era que si, además, ellos se ponían a plantear la discusión sobre la justicia

civil, todo empezaría a restar: menos tiempo, menos recursos, menos foco y menos maniobra de acción para lograr objetivos. La cuestión se decantó por la pelea para denunciar públicamente a Alfonsín. Hubo actos, charlas, marchas con Madres y Familiares, pero todos parecían nadar en el lodo fangoso de los arreglos de cúpulas que pocas cuentas tienen que dar a las organizaciones intermedias o de base.

Las consecuencias no tardaron en manifestarse, pero una de las que Meijide más lamentó era que fue esa estrategia de Alfonsín la que había previsto Galletti y que lo había llevado a suicidarse hacía ya tiempo. "Estoy convencida", decía Graciela. Como si Galletti no hubiera querido ver lo que finalmente pasó. "Los tipos no investigan, no hacen lo que tienen que hacer. Algo en la ley no funciona", sostenía.

En el Congreso, los asistentes de Conte estaban preocupados. Sentían que su jefe y referente se estaba aislando demasiado. O mejor dicho, lo aislaban. Peronistas y radicales le pateaban las reuniones de comisión, sellaban pactos a puertas cerradas y él era de los últimos en enterarse de lo que se armaba, incluso en torno a las políticas de derechos humanos.

Conte visitaba los despachos de los jefes de bloque, de los presidentes de las comisiones, y daba lo mejor de sí en un intento de lobby que nada tenía que ver con la rosca, ni con conseguir favores a cambio, ni con concesiones de ningún tipo. Conte vendía ideales que quería convertir en leyes. Conte era una máquina de generar ideas y proyectos. Y los bloques mayoritarios eran una máquina de impedirlos. "Cómo no, doctor", le decían. Y al momento de votar en el recinto, los referentes del juego radical-peronista bajaban línea y ya no había nada que hacer. Le daban la espalda. Y así fue en cada sesión con cada presentación de proyecto. Todos terminaban cajoneados.

El diputado Conte revivió un poco gracias a un viaje a Cuba y Nicaragua —junto con Néstor Vicente— que le hizo tomar aire por un tiempo. Compartió charlas y viajes con Daniel Ortega y los sandinistas. Se sintió joven y volvió con ganas, con una sonrisa. Pero muy pronto la sonrisa se le borró.

Luego de la Conadep y del Juicio a las Juntas, Conte percibía al movimiento de derechos humanos como un organismo vivo que estaba un poco agotado y desconcertado ante la falta de respuesta del gobierno. Pensó que eso lo movilizaría más, pero se quedó sin fuerzas. Su vitalidad desapareció como el agua que se escapa por las rejillas. Empezó a bajar cada vez menos al recinto, y luego comenzó a ir menos a su despacho. Familiares y amigos se fueron dando cuenta de que Conte estaba enfermo. Depresión.

Cuando alguno de sus colaboradores en el Congreso se pasaba por el CELS, no podía evitar contar lo que veía. "Se pasa horas en el

despacho sin hablar, mirando los papeles en su escritorio. Incluso si estamos hablando con otra gente delante de él, o si alguien entra a hacerle una consulta puntual.” El sistema de *lobbies* y presiones cruzadas en el Congreso no parecía ser un buen entorno para que Conte desarrollara su capacidad de análisis, su visión integral de los procesos políticos. El Congreso, así, pareció ser un mal lugar para él. Sus horas allí parecían contadas.

15
Resabios

“Les pido a los pueblos del mundo que por encima de estos lamentables episodios comprendan perfectamente bien hasta qué punto está galvanizado en el corazón de los argentinos un estilo de vida democrático”, dijo Alfonsín en el balcón de la Casa Rosada. A su lado, el peronista Antonio Cafiero aplaudió. Atrás estaba José Luis Manzano, otro político peronista, mucho más joven, a quien Conte conocía y definía como “un joven brillante, pero rey del cinismo”. Manzano sonreía. El prehistórico *videograph* de Argentina Televisora Color (ATC), la emisora pública, corrió de derecha a izquierda de las pantallas de todos los televisores del país: “Democracia o dictadura. Todos a la Plaza de Mayo para esperar al presidente”. En Campo de Mayo, los rebeldes también tenían un televisor encendido. El teniente coronel Aldo Rico hizo su presentación en sociedad pintándose la cara y tomando el cuartel militar más emblemático de Buenos Aires para exigir dos demandas principales: que se pusiera fin, según él, a las “injusticias y humillaciones a las que se ha sometido a las Fuerzas Armadas” —en referencia a los juicios— y que se fuera el general Héctor Ríos Ereñú, jefe del Ejército. Quería era una amnistía. Sus soldados entregaron un bando con sus reclamos a los periodistas que hacían guardia en el portón de acceso.

A unos treinta y cinco kilómetros del cuartel, en la Casa Rosada, Alfonsín siguió improvisando su discurso: “También demostramos que no estamos contra los militares cuando los militares cumplen con su deber”, siguió el presidente desde el balcón. En las pantallas de los televisores, el *videograph* pareció acompañar las palabras como si todo fuera parte de un guión arreglado de antemano: “La democracia la consolidamos entre todos”, leyeron los televidentes.

Alfonsín dijo: “Esto es mucho más que un absurdo golpe de Estado. Estamos arriesgando el futuro”. Entonces hizo silencio y miró hacia los lados. “He tomado una decisión —dijo—. Dentro unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos.” La gente lo ovacionó. Gritó: “¡Al-fon-sín, Alfonsín!”, como dándole un abrazo a un familiar que estaba por emprender un viaje riesgoso. “Les pido que me esperen acá”, dijo el caudillo radical. “¡Raúl, querido, el pueblo está contigo!”, le contestó la multitud. “Si

Dios quiere, dentro un rato volveré con la noticia de que cada uno de nosotros podremos volver a nuestros hogares." Habían pasado unos minutos de las dos y media de la tarde y el día era soleado. Se parecía a la jornada del 10 de diciembre de 1983, solo que un poco más fría.

Cuando el presidente volvió, el sol ya no brillaba en la plaza. Estaban los mismos que a la mañana, salvo que se había sumado Luder, el histórico dirigente peronista que había sido su rival por la presidencia cuatro años atrás. Alfonsín reingresó al balcón y lo ovacionaron. Miles de manos lo aplaudieron. Él aplaudió a la multitud. "Compatriotas…", dijo tres veces, colando una voz ronca entre los gritos. Al final lo dejaron hablar. "Felices pascuas", dijo. La multitud estalló. "Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia." ATC puso un *videograph* que cubría toda la pantalla: "Democracia para siempre", titilaba el cartel.

"Un conjunto de hombres, algunos héroes de Malvinas…" Unos silbidos lo incomodaron. "No quisieron dar un golpe de Estado". Silbaron. "Pero de todas formas llevaron al país a esta situación. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones al Ejército para que no se procediera a la represión, y hoy podemos dar gracias a Dios: la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina."

Luego mandó a la gente a sus casas, a besar a sus hijos. Alfonsín no contó todo lo que había charlado con los sublevados. La Argentina pareció entrar en una nueva dimensión. Ese día marcó el fin del romance.

Los dirigentes de todos los partidos políticos —salvo los del Partido Obrero (PO) y del MAS— se pusieron de acuerdo para firmar el Acta de Compromiso Democrático. Y sumaron a los sindicatos y a los empresarios. Las organizaciones de derechos humanos —excepto Madres de Plaza de Mayo— también se sumaron. A Mignone lo sondearon y tuvo que decidir aun sabiendo que algunos puntos del acta le iban a dar un dolor de cabeza dentro del CELS. El acta hacía referencia a los niveles de responsabilidad en la represión. Pero Mignone no tuvo tiempo para pensarlo demasiado e iniciar un debate interno. "El momento es demasiado dramático. Hay que apoyar al sistema", sostuvo.

De ahí a la sanción de la Ley de Obediencia Debida solo hubo que dejar pasar menos de dos meses. Los jueces fueron obligados a presumir que quienes actuaron en la represión solo habían seguido órdenes del personal jerárquico.

Aun cuando tiempo después se produjeron los alzamientos de Monte Caseros —en enero de 1988, también liderado por Aldo Rico— y de Villa Martelli —en diciembre de ese año—, según Mignone, nunca existieron condiciones internas ni externas para un nuevo golpe. Sin

embargo, el escenario se parecía demasiado. Un grupo de militares rebeldes se pinta la cara, agarra las armas, amenaza, exige. No los reprimen. “No pretenden el poder en la república, pero sí situarse en una posición de privilegio por sobre los demás. Esto pasa por no haber sido más ofensivos cuando se podía, cuando se los podía desmantelar. Pero Alfonsín fue débil”, sostenía Mignone.

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron para Conte el golpe de gracia y ya masticaba su renuncia a la banca. En público decía que era por razones de salud, pero la mala salud era una consecuencia del lugar que ocupaba en un Congreso que, según él, no había hecho lo que tenía que hacer para investigar cómo y quién había desaparecido a su hijo y a los demás.

Pensó que la única manera de matar el origen de la angustia era abandonando el cargo de diputado. Por entonces, Julio Raffo —quien seguía asesorándolo en el Congreso— prácticamente le manejaba el despacho junto con David “Coco” Blaustein y Roque Bellomo, un dirigente de la DC al que amistosamente llamaban “el infiltrado” porque era el único de esa fuerza política que trabajaba en un despacho que, si bien estaba al servicio de los organismos de derechos humanos, era de la DC.

Aun así, le quedó tiempo para promover su “plan antilujo”. Acaso influenciado por su visita a Nicaragua y a Cuba, sabiendo lo que producían las desigualdades, a Conte se le ocurrió plantear que prohibiendo o limitando la fabricación de yates gigantes y mansiones de veraneo los argentinos iban a terminar de entender “la realidad de nuestro contexto. No lancemos contra el rostro de nuestro pueblo la insolencia y el desafío del gasto más que suntuario”, escribió. A través de su proyecto pretendía dar testimonio. Él no estaba en contra de los ricos, sino contra la ostentación en un territorio lleno de gente miserable. Difícil meter una ley así en un cuerpo salpicado de representantes que viven en mansiones. Como era previsible, nadie le hizo caso. Días después, redactó una nota: “Me dirijo a usted a fin de elevarle mi renuncia al cargo de diputado nacional fundada en motivos de salud”, le escribió a Juan Carlos Pugliese, el presidente de la cámara.

Néstor Vicente, acaso un poco tarde, descubrió la desproporción entre lo que imaginaban y lo que finalmente resultaba ser. En una reunión en El Molino, Conte se lo graficó: “Yo me opuse a la Conadep, aunque después adherí. Pero yo lo que quería era entrar a los cuarteles, quería ver los papeles que tenían. ¡Eso me imaginaba yo!”. Luego le comentó que se sentía muy mal aunque, como siempre, no le dio muchos detalles personales. Así lo vio Vicente, siempre, aun en sus picos de tristeza, representando el papel del “atildado abogado Conte Mac Donell”.

Días después, Pugliese lo llamó para discutir la renuncia. “No, diputado Conte, tómese licencia o simplemente no venga.” Pero Conte no tenía resto: “No, muchas gracias, si yo no estoy en condiciones de cumplir con el mandato, renuncio”. Le aceptaron la renuncia y se convirtió en un ex diputado.

16
La transición de la transición

La democracia pareció poner de moda la temática de derechos humanos. Los sindicatos y los partidos políticos empezaron a tener secretarías donde se debatía o trabajaba el tema.

Casi sin darse cuenta, Augusto Conte iba dejando atrás los vaivenes de su depresión, que solían dejarlo fuera de combate. Por su parte, Mignone empezó a visitar muy seguido al médico. Un dolor insoportable. Le diagnosticaron gota. Pero por lo menos no le cobró. Además del malestar físico, la realidad argentina no lo dejaba en paz.

Sintió que la tormenta seguía cuando un día lo llamaron desde la oficina de Amnistía en Londres. “Doctor Mignone, nos han llegado datos no muy precisos sobre inestabilidad política. ¿Usted cree que hay riesgos? Tenemos entendido que la situación es peligrosa”, preguntaron del otro lado. Mignone se sobresaltó, pero en menos de un segundo, en un inglés que él mismo calificaba como malo, intentó explicar un escenario que suele ser intraducible e incomprensible para un extranjero. “Esteee… no. Lo que sucede es que siempre hay gente que está dispuesta a tomar ventajas, a intentar tomar protagonismo para exagerar una supuesta valentía que no tiene. La SIDE [Secretaría de Inteligencia de Estado] y la Policía no pierden las mañas de asustar a la gente con su vieja tónica. Pero de vez en cuando algo ocurre. De vez en cuando han metido una bomba en un local partidario, pero eso es todo.” Del otro lado entendieron a medias, pero ahí terminó la explicación. Colgó el teléfono y el directivo de Londres siguió con sus cosas. Mignone se quedó mirando por la ventana. Sus cosas eran estas. Londres quedaba lejos.

Un día, Jorge Baños golpeó la puerta del despacho de Mignone. “Me voy. Me voy a dedicar a la política pero desde otro lugar”, le contó. Más tarde, Conte quiso saber los detalles. “Dice que se va, que se va a dedicar a ese Movimiento Todos por la Patria.” Baños parecía harto de la política partidaria tal como se la conocía en aquella época. “Además, renuncié al partido. Todos quieren acomodarse, quieren cargos, hay una interna tremenda”, le dijo a Mignone. Se refería al PI. Mignone siempre había sido muy prudente con los “puristas que perseguían utopías”, como él llamaba a los que “terminan volviendo a su casa y no hacen nada, o peor, se meten en pseudo revoluciones que

siempre terminan en catástrofes", según teorizaba. Mignone trató de contenerlo. "La política es así, el ser humano es así, hay conflictos y ambiciones en todos lados." Baños se negaba a escuchar. "Eso no va a servir de nada", siguió aconsejando Mignone. Nada. "Me voy a Jujuy, a trabajar con las bases, con los indígenas, con los sindicatos." Se despidió y se fue. Mignone se quedó mirando la puerta que se cerró detrás del ex director jurídico del CELS. Luego volvió a sus asuntos.

Baños solamente regresó al CELS un par de veces a buscar papeles. Algunos familiares de detenidos querían que Baños se siguiera ocupando de sus causas, aun estando fuera del CELS. Luego nunca más supieron de él. Por lo menos, no personalmente.

Alfonsín supo retirar de la SIDE a varios agentes ligados a la dictadura, pero reincorporó a algunos cuyos nombres que causaron cierto escozor, como Pascual Guerrieri, un ex torturador, a quien el CELS denunció. Para Mignone el modelo militar-policial seguía intacto y se tejía en un nuevo entramado con nuevas mafias que en el conurbano sucumbieron a las viejas prácticas del gatillo fácil. Sobre todo, como decía Conte, contra los hijos del peronismo de base, esos chicos a quienes la policía suele agarrar haraganeando en los barrios populares mientras ven cómo el futuro se les va como arena entre los dedos. Si los policías no habían perdido las mañas, los militares tampoco. Pero Mignone seguía siendo un tipo con cierto grado de coherente esperanza. "La dictadura influyó tan profundamente en la sociedad argentina que se llegó a un estado de cosas donde no hay vuelta atrás. Si se quisieran repetir los hechos de la época militar, ya no sería factible", pensaba. Era una verdad a medias.

Los abogados más jóvenes vieron que en ese momento el CELS parecía perder el rumbo al cabo de la batalla que se dio contra la Obediencia Debida y el Punto Final. Mucho trabajo que se perdía o empantanaba, pasillos que conducían a ninguna parte. Las consecuencias de una derrota. Según Llonto, eso empezó a impactar en todos los colaboradores que no supieron cómo seguir haciendo pie ante un nuevo escenario. Fríamente, fue una derrota profesional, pero sobre todo fue un nocaut para el ánimo de la mayoría. Todo el mundo era tan profesional y se movía tan cómodo en su rol de resistencia a la dictadura, primero, y en la lucha por el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado, después, que no supieron muy bien cómo reaccionar cuando la realidad les cambió el tablero.

Alicia Oliveira también comenzó a notar diferencias. Ella creía que había llegado el tiempo de actualizar un poco la agenda, que había otras situaciones y realidades que proteger, como el sistema carcelario, las villas, la salud. A Oliveira le pareció que los fundadores del CELS —excepto Conte y Mignone— estaban dando un mensaje claro: "Nosotros estamos para esto, nada más". Tuvo esa certeza

cuando una de las mujeres, muy activa en las reuniones, dijo algo que le sonó demasiado despectivo cuando le comentaron que a los presos políticos no les dejaban pasar comida y todo lo tenían que comprar adentro. “¿Por qué a mi hijo, que es un encanto, no le podés llevar comida y a esos negros ladrones de los presos les dejan entrar de todo?” Oliveira quedó muda.

El propio Llonto empezó a espaciar su presencia y se acercó más a Baños, con quien borroneaba un proyecto para hacer una especie de “CELS laboral”. Baños, quien había tenido una experiencia de trabajo con los obreros de los ingenios jujeños, lo recibía en su departamento de la calle Rodríguez Peña para impulsarlo a él también a batallar ese tipo de iniciativas desde adentro del CELS.

Sin embargo, el entusiasmo de Baños por eso —por moverse dentro del pulcro y rígido sistema de las instituciones formales— no duró mucho más. Algunos se dieron cuenta tarde de que Jorge Baños se había enganchado en el Movimiento Todos por la Patria (MTP), una célula reciclada del desmantelado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de la década anterior. Parrilli y Zamora también estaban muy activos políticamente en frentes de izquierda, pero siguieron creyendo en los caminos formales que las democracias otorgan para cambiar las cosas: postulaciones, elecciones, el acceso al poder, el Congreso Nacional, el sillón de Rivadavia. Para elevar su perfil político, no les quedaba otra opción más que dejar el CELS. Mignone miraba el escenario y empezó a dudar si Parrilli y Zamora eran más hombres del CELS que militaban en un partido o a la inversa.

Una tarde de fines de 1988, Baños lo invitó a Raffo a tomar un café al bar que estaba abajo de la nueva sede del CELS, en la calle Rodríguez Peña y Sarmiento. “Me gustaría que te integres a la conducción nacional del MTP.” Raffo creyó que Baños y su MTP sentían como una deficiencia su accionar durante la época de la guerrilla, y acaso olió que estaban reciclando la vieja idea de la lucha armada.

Por su parte, Llonto había visto que Baños estaba radicalizando muchas de sus posiciones, sobre todo hacia los militares. Lo notaba cansado de los caminos judiciales. De hecho, en una audiencia había mandado al carajo a un secretario de un juzgado porque tenía un cinturón con una hebilla con el Escudo Nacional, lo que para Baños era “muy de milico”. Sin embargo, nunca le escuchó decir nada sobre ninguna acción futura.

A comienzos de enero de 1989, Llonto se encontró con él y le entregó unos libros que le había traído de un viaje a Cuba. Discutieron un poco sobre la política de Fidel Castro y dejaron para un futuro incierto el proyecto de trabajar en Derecho Laboral. Fue la última vez que lo vio.

17
La Tablada

“La pelea hay que darla dentro del peronismo, de los radicales no se puede esperar nada.” Había pasado la interna peronista y Carlos Menem había dado un batacazo al eliminar al histórico Antonio Cafiero de la carrera presidencial para las elecciones de 1989. Conte parecía conocer el camino a seguir. Su pensamiento seguía una lógica: Alfonsín lo había defraudado y Menem fue una víctima de la dictadura. Previó que un nuevo tiempo de más empatía con el Poder Ejecutivo estaba llegando. Por eso, él y su Democracia Cristiana serían parte del frente que llevaba a Menem a la candidatura por la presidencia. En eso estaban cuando llegó el 23 de enero de 1989.

Ese lunes de sol y calor Mignone se levantó temprano. Tenía un largo viaje por delante. Lo esperaban en Irlanda para dar una serie de conferencias. El avión y la escala en Londres lo irritaban. Pero antes de tomar el primer vuelo se enteró de que un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria se había metido a los tiros en el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 del Ejército, en La Tablada, provincia de Buenos Aires. “Hay explosiones, heridos, muertos, nadie sabe lo que pasa”, le contaron. A Mignone se le hizo un nudo en la garganta y lo primero que pensó fue en Jorge Baños. Con esa preocupación y con muy poca información se subió al avión. En La Tablada siguieron los disparos. Entre el caos desatado por el MTP, la represión del Ejército y la dudosa actuación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que estaba siendo televisada en directo a todos los hogares del país, cayó la noche. Pero los tiros y las explosiones siguieron.

Al otro día, Augusto Conte se abalanzó sobre los diarios. Cuando vio la tapa de *Crónica* se puso blanco. Sonó el teléfono. Era Mignone, desde Dublín. “¿Qué está pasando?”, le preguntó, ansioso. “Baños estuvo en el ataque. En *Crónica* hay una foto tuya con él.” Del otro lado se hizo silencio. Nadie sabía la suerte de Baños, hasta que los medios comenzaron a dar listas de bajas. El nombre de Baños figuraba en todas. Mignone regresó de su viaje europeo y la Argentina le pareció sacudida de nuevo.

“Cuando se metió en ese movimiento yo lo desalenté, pero sin suerte”, le dijo a Conte apenas lo vio. No había necesidad de aclarar a

quién se refería. “Yo sabía de la influencia de [Enrique] Gorriarán Merlo, pero no le recuerdo ninguna formación marxista”, reflexionó, como haciendo memoria. Todo le sonó a ya visto. Se inquietó. “Los esquemas ideológicos que conducen al aislamiento, al autismo político y a la soberbia siguen vivos. Del otro lado el poder militar y la reacción de la derecha se reavivan. Todo debilita más y más a la democracia”, se amargó.

Alicia Oliveira quedó desconcertada. Baños, pensaba ella, había dejado muy pegado al CELS. “El CELS no hizo el copamiento de La Tablada. No tiene un carajo que ver”, exclamaba. Ella había pasado diez días en el Tigre con sus hijos y a las pocas horas recibió un llamado de Horacio Verbitsky: “Tené cuidado”, le dijo. Camino al CELS, en una casa de artículos para el hogar, el dueño, que la conocía, le dijo: “Alicia, cuidado”. Luego de unas horas, no lo dudó: “El CELS tiene que intervenir”, afirmó. “Porque se torturó gente. Yo quiero defenderlos.” Para ella era perfectamente evidente cómo los sobrevivientes del ataque fueron ejecutados.

Graciela Fernández Meijide fue al programa televisivo de Bernardo Neustadt y lo dijo claramente: “La APDH condena el ataque a La Tablada”. En sintonía con lo que manifestó la APDH, Mignone dejó de lamentarse y tuvo que salir a dar explicaciones. Junto con Conte, elaboraron comunicados y escribieron una “Carta a los amigos del CELS”. El 23 de febrero el CELS publicó una solicitada en *Clarín*. Sentían la necesidad de aclarar que, a pesar de la foto, el CELS repudiaba el ataque. Explicaron que el CELS se oponía a cualquier tentativa terrorista, civil o militar, que no intervendría en la defensa de los implicados pero que apoyaba la necesidad de una defensa en juicio. “Los abogados, aun los del CELS que quieren defender a los implicados, lo hacen porque son profesionales, no porque sean terroristas ni compartan ideologías”, escribieron. Lo mismo les repitieron a los abogados del CELS: “Hay algunos que no se expresan tanto contra la violencia. Yo quiero ser explícito. El día del asalto, Hebe de Bonafini dijo que la violencia no conduce a nada. Pero los días fueron pasando y lo decía cada vez menos, hasta que ya no la condenó y propuso a los abogados de Madres defender a los acusados. La posición nuestra es la posición común con otros organismos de derechos humanos. No vamos a tomar la defensa de los guerrilleros detenidos, pero si ustedes a título personal sienten que quieren hacerlo, pues adelante”, se les dijo.

Carsen estaba de vacaciones en Puerto Madryn. Dos días después, luego de leer la declaración del CELS, habló con Mignone y le dijo: “Mire, eso no puede ser. Este episodio me hace acordar mucho al clima que había con ustedes en la época de la dictadura. Esa declaración no puede ser. Es embromada. Yo reclamo para mí el

derecho a ejercer la defensa. Nosotros reclamamos la libertad de hacerlo y seguir siendo abogados del CELS. Te tenés que poner del lado del defendido en determinado momento". Mignone los autorizó y nadie fue obligado a renunciar.

Mignone encontró en el ataque a La Tablada un elemento desestabilizador muy fuerte, pero se vio frente a un espejo que le devolvía una contradicción: desde lo institucional, el CELS tenía que condenar un ataque armado y despegarse de Baños, y también desde lo institucional tenía que apoyar la defensa en juicio de los guerrilleros. Ahora bien, ¿qué clase de defensa había que plantear? ¿Qué clase de defensa podría plantear una ONG de derechos humanos para unos guerrilleros que entraron a los tiros —en democracia— a un cuartel militar y mataron a los que estaban en el camino?

Parrilli, aunque ya alejado formalmente del CELS, quedó impactado por la acción en sí misma, como también por la participación de Baños y por ver su foto al día siguiente en la tapa de *Crónica*: "Nunca creí que el MTP pudiera hacer esto". Cristina Caiati lo sintió como el cimbronazo más fuerte que vivió el CELS y que lo dividió entre quienes creían que había que intervenir y quiénes pensaban que no.

Carsen, quien siempre pareció dispuesto a que el CELS defendiera orgánicamente a los presos, decidió participar. Alicia Oliveira, también. Fue ella quien —junto con Carsen—, unos días después, recibió a un grupo de allegados a los detenidos que se habían acercado a las oficinas del CELS. Les preguntaron: "¿Ustedes quieren una defensa jurídica?". "No —replicó uno de ellos hablando en nombre de los demás—, queremos una defensa política." En una discusión posterior, Mignone no se privó de opinar. Según él, lo más idóneo era una defensa técnica para determinar el nivel de responsabilidades. "Sobre todo de los muchachitos que habían sido llevados el día anterior, o que se enteraron ese mismo día de lo que estaban por hacer. Pero no, ellos quieren una defensa política. Van a decir que fueron a salvar a la patria y reivindicar lo que han hecho. Eso tiene sentido en un clima social revolucionario, en el cual se puede levantar la bandera del hecho que cometieron, pero acá… ¿qué clima revolucionario había?" Para él, un crimen era un crimen, y punto. "Está la gente que dice que los crímenes de la guerrilla no son tales, y que solo son crímenes los de los militares. Estamos divididos entre los que justifican el crimen cuando los autores son de su propia ideología y quienes condenamos todos los crímenes", apuntó.

Una tarde le sonó el teléfono. Alguien, en nombre del sacerdote capuchino Antonio Puigjané —un religioso que estaba relacionado con el comando del MTP—, quiso sondearlo para pedirle ayuda legal. "¿Se puede entrevistar con él?", le preguntó. Mignone se negó, pero del otro lado insistieron. Y le preguntaron cómo tenía que proceder el

sacerdote. Le explicaron que Puigjané no estaba enterado de la incursión militar, que no estaba de acuerdo y que no participó. Mignone escuchó y luego dijo: "Que se presente, porque si no lo van a ir a buscar y va a ser peor", aconsejó. Fue Alicia Oliveira quien lo buscó y lo acompañó en la presentación indagatoria. Sin embargo, los detenidos insistieron en una defensa política. Ante ese escenario, Alicia Oliveira y Carsen dieron marcha atrás y se desvincularon del proceso. Con los abogados vinculados al Partido Comunista y a Hebe de Bonafini que tomaron la defensa, lo que predijo Mignone (los argumentos políticos, el reclamo de que estaban salvando a la patria) parecía camino de cumplirse.

La Tablada desató una cadena de acusaciones, delaciones, pactos y persecución de los viejos sectores que extrañaban al autoritarismo. Mignone previó que el miedo de la gente le iba a dar más argumentos a la derecha para que avanzase en el autoritarismo. No se equivocaba.

Por esos días, un denominado Comando Héroes de Tablada entró en acción como supuesto reivindicador de los militares que murieron en el asalto al cuartel. Y difundió una lista de blancos, entre los cuales estaban Alicia Oliveira y Marcelo Parrilli, cuyos nombres estaban junto con el de Hebe de Bonafini, entre otros. "Se han iniciado operaciones que pueden concluir con la ejecución", estipularon las amenazas. Oliveira ya estaba al tanto sin que hubiera tenido que escuchar ninguna formalidad. Ella misma vio cómo la perseguían, cómo la vigilaban.

Carsen le escribió a Enrique "Coti" Nosiglia, el ministro del Interior: "Usted será responsable si le pasa algo". Del ministerio nunca contestaron. La Tablada hizo que el Poder Ejecutivo sancionara una ley antiterrorista que daba el marco legal para prevenir o reprimir hechos como el ocurrido o levantamientos como los de los carapintadas. La Ley de Defensa de la Democracia alarmó al CELS, desde donde se pensó en una sociedad vigilada de cerca por espías del Ejército, donde un grupo de oficiales tomaría la decisión de quién era terrorista y quién no. La ley, incluso, dejaba traslucir que habría luz verde para ejecutar gente en las eventuales zonas de operaciones. Por una razón o por otra, al CELS no le faltó mucho para ser catalogado como una de las organizaciones terroristas a vigilar.

El juicio oral contra veinte acusados del ataque al cuartel de La Tablada comenzó tres meses después. La Cámara Federal de San Martín juzgó a los detenidos con la Ley de Defensa de la Democracia en la mano. Mignone siguió las alternativas del juicio. Hasta el final. Para él, el proceso fue inobjetable y sucedió lo que había predicho. "La defensa justificó la incursión en un predio militar con una defensa política. Ese día iba a haber un alzamiento militar contra el gobierno democrático, y ellos lo fueron a evitar y lo evitaron. ¿Conclusión?

Veinte años para todo el mundo", evaluó. De todas maneras, creyó que los jueces habían aplicado penas excesivas. "Pero hay que decir que la defensa fue estúpida, y en eso hay deshonestidad de los abogados de la LADH. Por eso Puigjané se ganó veinte años, por haberse dado manija los unos con los otros en la cárcel. Terminó diciendo que lo justificaba y que lo apoyaba. Los chicos estos tendrían que haber dicho que los llevaron, que los impulsaron, exagerar un poco, disminuir su responsabilidad. Pero no. Los abogados han querido hacer grandes alegatos, discursos políticos, como si el país y el mundo estuvieran pendientes de su oratoria. ¡¿Pero a quién le interesaba?! ¡A nadie! Para un tribunal dispuesto a caerles con un martillo, eligieron la peor opción", pensaba.

La hiperinflación y los saqueos a los supermercados aceleraron el fin del alfonsinismo. De cara a las elecciones de mayo de 1989, Augusto Conte seguía respaldando la candidatura de Carlos Menem. "Hay que apoyar al peronismo, no podemos dejar que gane [Eduardo] Angeloz." El triunfo categórico de Menem y la entrega anticipada del poder parecieron dejar atrás una época en la que la sociedad argentina solo podía enfocarse en repasar la dictadura, buscar justicia, rastrear la verdad. Menem pensó más en el bolsillo.

El tema de La Tablada aún estaba caliente. Carsen se metió en sus expedientes cuando pidieron que se investigara una foto. En ella, Pablo Ramos se está rindiendo ante los oficiales del Ejército. Pablo Ramos apareció entre los muertos. La pericia sobre esa foto era fundamental para desmentir o afirmar lo que se sospechaba: varios atacantes que se habían rendido fueron ejecutados. Además, Conte y Mignone entregaron una carta a Menem en la que manifestaron su preocupación por la tardanza en investigar las torturas en la alcaldía de Tribunales a los acusados del ataque y reclamaron seguridad jurídica. "El silencio es total y, por lo tanto, alarmante." La reivindicación militar estaba a la vuelta de la esquina, aunque en el CELS también daban por sentado que la resurrección armada tampoco tenía posibilidades de desarrollarse.

18
El efecto Menem

El propio Conte empezó a darle la espalda al menemismo cuando este desnudó sus planes. Y luego lo enfrentó como si no pudiera creer que alguna vez pudo haberlo apoyado y no le alcanzó todo el tiempo del mundo para reprochárselo a sí mismo. Se arrepintió por siempre. Y durante un tiempo siguió sin ver ni un solo resultado de su lucha.

Si bien Mignone no acompañó a Conte en su entusiasmo peronista, se permitió escribir algunas palabras que iban más allá de cualquier bandera partidaria. "Existe una expectativa favorable hacia las nuevas autoridades, que han emprendido un camino pragmático. La era de los gobiernos de facto ha terminado en la Argentina." Pero estaba preocupado. Ese mes habló sobre "la corporación militar que gana espacio cada día". Los rumores sobre indultos y amnistías se le hacían insoportables.

Con eso en la cabeza, en agosto de 1989, Mignone y Conte aterrizaron en la Casa Rosada junto con otros referentes de los movimientos de derechos humanos. No se impresionaron por las escaleras de mármol ni por la belleza del Patio de las Palmeras. Ya conocían la locación. Llegaron con una idea clara: sabían que se volverían sin información precisa, pero querían despejar rumores. Vieron al riojano y sintieron que su sonrisa no era de fiar. Los minutos pasaron en diplomacia vaga. En un momento, las cuestiones relacionadas con los militares salieron a la luz. Cuando se estaban por ir, Menem abrió el paraguas. "Haga lo que haga para resolver el problema militar, no lo consideren como una cachetada al trabajo de ustedes", les dijo el presidente. Se miraron pero no se dijeron nada. Las agendas de los presidentes están detalladas al minuto, y no hubo tiempo para más. Salieron más inquietos de lo que entraron.

Hacia fines de 1989, Menem no hizo más que alimentar los rumores de un indulto. El oficialismo jugaba con las ambigüedades: "Todo quedará resuelto antes de fin de año", deslizó Eduardo Menem —hermano del presidente y titular del Senado— en el marco de una avanzada discursiva por la reconciliación y la tan mentada unidad nacional. Luder, convertido en ministro del Interior, reunió a los corresponsales extranjeros y les dijo: "El gobierno está decidido a aplicar el indulto, pero no puedo decir nada sobre la fecha y el modo".

Menem usó la suma de su poder para firmar una primera tanda de indultos que benefició a algunos jerarcas militares (los generales Guillermo Suárez Mason —ex jefe de Estado Mayor del Ejército, acusado de cuarenta y tres asesinatos y más de cuarenta secuestros, incluyendo robo de bebés— y Juan Sasiaiñ —ex jefe de la Policía Federal durante la dictadura—, entre otros) y a los carapintadas.

La sociedad civil les contestó con La Plaza del No, un acto encabezado por Luis Zamora, quien ya se había alejado del CELS en buenos términos y en las elecciones de 1989 había buscado revancha como compañero de fórmula de Néstor Vicente, el gran amigo de Conte, que se postulaba para presidente. También era una acción que le plantaba cara a La Plaza del Sí, la demostración en el terreno de la avanzada neoliberal impulsada por Bernardo Neustadt desde la televisión y la radio y por decenas de avisos pagos en los principales diarios nacionales. El "sí" de la consigna, supuestamente, era sí al cambio, sí a lo nuevo, sí al desarrollo, sí a enterrar el pasado. La Plaza del No pretendió reunir a todo el arco opositor para rechazar las políticas neoliberales de Menem y el perdón a los militares. Miles de personas dieron el presente, pero apenas resultaron lo mismo que un rasguño en un elefante. Nadie se imaginó que faltaban pocas semanas para que los ex comandantes también recibieran un indulto.

Días después del encuentro, Conte envió al presidente una carta pública. "Compañero presidente, usted fue afortunado si comparamos su caso con el de otros treinta mil argentinos, en su mayoría militantes peronistas. Las medidas por usted aludidas herirían de muerte al sistema democrático. La liberación de los ex comandantes forzaría mi automático alejamiento del Frente." Conte creía que sería una doble derrota. A los familiares y activistas los laceraba para siempre, y su propia creencia en la verdad y la justicia se derrumbaría sin remedio. Para los militares iba a significar una reivindicación. Menem jamás leyó esa carta. Uno de sus secretarios, sí. Pero la terminó de leer y pensó en otra cosa.

La asonada de diciembre de 1990 del coronel Mohamed Alí Seineldín pareció complicar más el escenario. El día amaneció con un calor espantoso. Como siempre, Mignone fue uno de los primeros en llegar a la oficina. En el camino ya se había enterado por la radio de lo que estaba pasando. Desde su reclusión en San Martín de los Andes (donde cumplía pena de arresto por haber liderado otro alzamiento, el del cuartel de Villa Martelli, dos años antes), Seineldín comandaba a control remoto a un grupo de oficiales que tomaron la sede del Regimiento de Patricios —en el barrio porteño de Palermo—, la fábrica de tanques TAMSE —en Boulogne, provincia de Buenos Aires — y la sede del Estado Mayor, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Otro comando naval tomó el edificio de la Prefectura en la

entrada a la Costanera Sur. Los tiros entre carapintadas y “leales” empezaron a sonar desde la madrugada.

Conte no fue para el CELS. Pensó que algo tenía que hacer y desvió su marcha hacia la sede del Estado Mayor. Se acercó a la zona y le pareció estar viendo una película sobre la caída de Berlín a manos de los rusos. Pero no. Era Buenos Aires. Vio un grupo de gente apiñada junto al portón. Desafiando los tiros, periodistas, camarógrafos y enfermeros trataban de hacer cada uno su trabajo. Se acercó y lo primero que vio fue un oficial, tocado con una boina y la cara pintada. “¡Atrás!”, gritó enfurecido el uniformado. Conte retrocedió. El ruido de las ambulancias lo obligó a gritar para averiguar algo. Alguien le tiró la cifra de muertos. Eran doce.

Un rato después salió el capitán Gustavo Breide Obeid, el cabecilla del alzamiento. Fue una mezcla de conferencia de prensa improvisada y la declaración de bando militar. “Esto no es un golpe de Estado —explicó en tono castrense—. Nosotros no reconocemos la autoridad de la actual conducción del Ejército. Solamente reconocemos la autoridad del coronel Seineldín.” Cuando lo tuvo a centímetros de distancia, Conte le pidió explicaciones. Les dio vuelta a las palabras haciendo un intento de mediación. Se sorprendió cuando Breide Obeid lo atendió con cortesía. Su familia, sus amigos y algunos empleados del CELS lo vieron en directo por televisión. El sonido de un helicóptero malograba la conversación. El tableteo de las ametralladoras hizo imposible seguir el diálogo. Se dio vuelta y se fue, dejando atrás humo, corridas y sonidos que creyó irreales cuando relató lo que había vivido.

“No fue coraje. Yo creo que los oficiales jóvenes están un poco hartos de violencia y represión. Hasta creo que a muchos de nosotros nos admiran. O por lo menos sienten vergüenza. En los ojos de Obeid vi eso”, le contó a Mignone cuando lo cruzó más tarde en la oficina. Sin embargo, los dos sintieron que el indulto flotaba en el aire. Para ellos, Videla y Massera eran los primeros responsables de las rebeliones. Y si se confirmaban los presagios, pronto estarían en la calle. Cuando terminaron la charla, la rebelión había sido sofocada. Los carapintadas se rindieron sin condiciones.

“Algo anda mal en el sistema de educación castrense que a lo largo de los años produce generaciones de individuos delirantes que utilizan las armas que la nación les confía para levantarse contra las instituciones. Seineldín y Rico son el paradigma de esto. Es increíble cómo personajes funambulescos como ellos tienen quién los defienda en público, tienen audiencias, reciben visitas y apoyos. Hay compatriotas que son políticamente incultos y tienen voluntad de esclavos o de sicarios”, dijo Mignone.

Los presagios se confirmaron menos de un mes después. Los

integrantes de las organizaciones de derechos humanos vieron cómo la bola de nieve se iba agrandando a medida que bajaba de la montaña y se dirigía directamente hacia ellos. De frente. Videla y Massera estaban libres. Fueron cuatrocientos los indultados, remanentes de los que no habían sido beneficiados con el Punto Final y la Obediencia Debida, y los que se rebelaron contra la democracia. También los jefes de organizaciones guerrilleras. A Conte se le vino el mundo abajo.

Inmediatamente el CELS se presentó en varias causas ante la Corte Suprema sosteniendo la inconstitucionalidad de la medida. “Si no nos llevan el apunte vamos a la Corte Interamericana, pero lo que seguro vamos a hacer es seguir trabajando para mantener la memoria y salvaguardar la verdad y la justicia”, sostuvo Mignone. “Las actuales Fuerzas Armadas se convirtieron en una banda de terroristas, insubordinada, responsable de innumerables violaciones a los derechos humanos y, lo que es más grave, con la pretensión de alcanzar una rehabilitación moral ante la sociedad y sin arrepentirse de nada. El indulto no es más que un perdón político pero por delitos sancionados y comprobados penalmente. Después vendrá la etapa en que van a querer el monumento”, ironizó en un escrito.

Sin embargo, pudo ver algo positivo. “Ahora estamos en un momento de declinación, pero este mismo episodio del indulto agita a la opinión pública, algo impensado veinte años atrás. El impacto está hecho, hay conciencia, no se va a volver atrás, con todas las limitaciones, las contradicciones y los problemas internos, la conciencia de los derechos humanos ya es algo que excede a las organizaciones. Hubo conflictos internos, lucha de partidos, pero siempre se ha logrado salvar la unidad de los organismos de derechos humanos. Ya no se discute la negación del drama de los desaparecidos”, se consolaba. Y esbozó una idea que llegó a sorprender hasta a quienes lo conocían: “Las armas en su poder significan una amenaza constante. No hay posibilidad de paz con estas Fuerzas Armadas. La única forma de eliminar el riesgo es su disolución”. De pronto quiso difundir un plan que contemplaba una campaña popular para explicar las bondades de desviar los recursos destinados para las Fuerzas Armadas y volcarlos a salud, educación y vivienda, y movilizar a la gente para la defensa civil.

Las fiestas de fin de año pasaron sin motivos para el festejo. Antes del fin del verano, con poca energía pero con algo de ilusión, Conte empezó a escribir algo parecido a una plataforma para un nuevo país. Lo bautizó *Hoja de ruta para un nuevo proyecto nacional y popular*. Estaba entusiasmado con el llamado Grupo de los Ocho, un puñado de diputados peronistas disidentes con la política de Menem, entre ellos Germán Abdala y Carlos “Chacho” Álvarez.

19
El financiamiento

Además de las responsabilidades institucionales, el CELS debía hacerse cargo también de su rol de empleador. Tenía que pagar sueldos, viajes, cintas para las máquinas de escribir, café. Además, litigar nunca fue barato. Con los años, el financiamiento de ONG extranjeras —como la holandesa CEDEMO— se hizo vital para que el CELS pudiera funcionar, pero el rol de la Fundación Ford fue clave. Primero, para que la institución no se cayera; luego, para que tomara un nuevo envión y pudiera seguir creciendo. El gran logro de Mignone fue asegurarse los fondos de la Ford sin ser condescendiente ni mucho menos dejarse imponer criterios. Sin embargo, era algo que siempre les molestó, sobre a todo a los abogados como Zamora y Parrilli, que ya no estaban. Había algo generacional, sí, pero sobre todo ideológico.

Parrilli siempre sintió que buena parte de su alejamiento había sido porque nunca se buscaron fuentes de financiamiento alternativas, o por lo menos no las que él imaginaba. En la medida que él y Zamora tomaban más compromiso público con el MAS y con la izquierda, menos simpático le caía a la Ford. No lo sintieron sobre el filo de la dictadura ni durante buena parte de la etapa alfonsinista, nunca nadie les decía qué tenían que hacer o dejar de hacer. Pero esa incomodidad que se manifestaba afuera de las paredes del CELS finalmente terminó impactando adentro. Caiati siempre los miró como a los únicos disconformes. Según ella, a nadie más le hacía ruido que los bancase la Ford. Además, decía, “al Pope lo pueden financiar, pero no lo condiciona nadie”.

Meijide sabía que Mignone siempre se terminaba arreglando con la Ford, aunque conservaba un amplio contacto con los demócratas y otros organismos de derechos humanos en Estados Unidos, como Human Rights Watch. Pero esos otros no abrieron la billetera cuando Mignone y Conte miraron los libros contables y vieron que les faltaba poco para el rojo total, es decir, el cierre. Para muchos donantes, la Argentina no era prioritaria. La consideraban un país con una economía en desarrollo y una transición democrática sólida. El pasado de la resistencia a la dictadura ya no los conmovía.

Por otro lado, entre los familiares de víctimas también el tema del dinero era un punto de polémica. Las reparaciones económicas para

las víctimas de la dictadura (sobrevivientes y familiares) dividieron a Madres y a la Línea Fundadora. “El que cobra se prostituye”, había dicho Bonafini. Durante el menemismo, la funcionaria más cercana al CELS fue Alicia Pierini, quien había sido designada al frente de la flamante Subsecretaría de Derechos humanos dentro del ámbito del Ministerio de Defensa. No era poco: para la comunidad de los derechos humanos, el único logro de Menem en el área había sido justamente subir de jerarquía esa oficina, que antes era una dirección. Durante un tiempo, fue la única funcionaria del Ejecutivo con la que el CELS tuvo una relación sustantiva.

Para Estela de Carlotto, Alicia Pierini era “un genio”. Tuvieron un diálogo fluido cuando la funcionaria se convirtió en interlocutora durante las negociaciones por las reparaciones. Ya todo el mundo conocía la negativa de Bonafini a cobrar una indemnización por la muerte de sus hijos, pero la mayoría pareció estar dispuesta a aceptar la reparación del Estado. A Mignone le parecía que la decisión era una cuestión muy íntima de cada familia, no algo que se pudiera decidir en bloques orgánicos.

Internamente se manifestaron algunas diferencias. Boris Pasik no estaba demasiado convencido, pero en una reunión de la comisión directiva se decidió acompañar a aquellos que querían iniciar los trámites para cobrar, por lo que el CELS puso a dos abogadas a trabajar para patrocinar a los causahabientes. “Esto además es una estrategia, ya que detrás de la reparación civil se manifestaba el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y luego lo podemos usar para las estrategias penales”, analizaba Mignone. Fue entonces que elaboró un nuevo documento, reformulando ciertas pautas de trabajo como para volver a atraer fondos y, una vez más, sangre nueva. El financiamiento que les dio cierto aire para el futuro llegó a medias; más fácil fue atraer a nuevos abogados interesados en el trabajo en derechos humanos.

En la Facultad de Derecho de la UBA, Martín Abregú hacía la revista *No hay Derecho* junto con Víctor Abramovich, Manuel Garrido y Roberto Saba. Los miembros del grupo se consideraban discípulos del gran jurista Carlos Nino y tenían la idea de desacartonar el estricto mundo del Derecho, o por lo menos empezar a modernizar un poco las publicaciones sobre leyes, jueces y abogados.

En 1993 Abregú se incorporó al CELS un poco por voluntad propia y otro poco por la nueva política de puertas abiertas. Decenas de estudiantes y abogados recién recibidos llegaban al CELS para ver cómo era eso de trabajar en derechos humanos y generalmente se quedaban un tiempo acotado haciendo pasantías. Abregú era parte de esa generación, pero su acercamiento a la institución fue un poco más intenso que el de otros, tal vez por la buena química que generó con

Mignone.

El CELS estaba comenzando a dejar de ser aquella agrupación de los "fundadores familiares de víctimas" para convertirse en una institución profesional de los derechos humanos. La profesionalización iba atada al tema de los recursos, un nuevo acuerdo con donantes y otra manera de ejecutar el financiamiento, redefiniendo las áreas de trabajo. Se empezó a diversificar el financiamiento y llegaron fondos de la Tinker Foundation (una antigua institución con base en Nueva York) y el Foreign Office. También tocaron la puerta de los Rockefeller, pero no les pudieron sacar nada.

Un tarde, Mignone le hizo un comentario a su hija Isabel que de alguna manera estaba asentando el "momento cero" del CELS que se venía. Había estado conversando con Alex Wilde, el representante de la Ford en América del Sur que tenía su base de operaciones en Santiago de Chile. Mignone le contó que Wilde le marcó el camino: "Usted tiene que empezar a pensar en el futuro, tiene que ir preparando gente para cuando usted no esté".

Entre tantos pasantes que poblaban los pasillos del CELS en esa época, Mignone clavó el ojo en Abregú. Y a través de Wilde —de su consejo y de su influencia—, luego de unos meses, le consiguió una beca para que hiciera un máster en el colegio de leyes de la American University, de Washington, un centro de formación en Derecho y políticas públicas de elite. Con esa invitación, la historia del CELS estaba marcando un antes y un después.

20
Abregú

Martín Abregú creció en Olivos, en una típica familia de clase media suburbana. Su padre trabajaba en el entonces Banco Francés del Río de la Plata, donde empezó como cadete y finalizó como gerente. “Terminamos en un lugar más alto de la escala social del que empezamos”, solía decir Abregú. Vivía cerca de la estación, en un PH sobre la Avenida del Libertador, e iba al tradicional Colegio Jesús en el Huerto de los Olivos (El Huerto, como le dice todo el mundo), al que definía como un colegio privado “medio pelo”.

En la secundaria dio el ingreso para el Nacional Buenos Aires y le fue bien, casi por sorpresa. En la familia no veían que el Buenos Aires fuera un destino predecible. La formación en el colegio le cambió el recorrido. Entró al secundario en 1980 —con la última etapa de la dictadura— y salió en 1985, con los juicios, que determinaron su inscripción en la carrera de Derecho.

Entró a la facultad justo con el cambio del plan de estudios, lo que supuso un impacto enorme en su formación. Cursó la orientación con un grupo pequeño pero compacto, de no más de quince (entre los que se encontraban Roberto Saba y Alberto Bovino). Todos eran muy estudiosos y creían tener a los mejores profesores: Carlos Nino, Eugenio Zaffaroni y Julio Mayer, por ejemplo.

Cuando entró a hacerse cargo del CELS, en 1994, se sintió un sapo de otro pozo. Emilio Mignone le había pedido a Laura Conte: “Ayudalo a Martín, hacésela fácil, porque es un tipo con sus costumbres, sus horarios, una formalidad diferente a la nuestra”. Él mismo se dio cuenta de que era un bicho raro y reconocería el *shock* cultural que tuvieron que soportar tanto el propio Abregú como la institución. La primera vez que se arremangó la camisa para hacer una gran limpieza junto con Gastón Chillier vio mugre por todos lados, una cantidad de papeles fuera de control, basura acumulada por meses. Él las definía como condiciones llanamente “deplorables”. Más sorprendido se quedó cuando una de las “históricas” le dijo: “Este mes vamos a tener un gasto demasiado grande en jabón”.

También veía que además de la mugre había limitaciones de todo tipo. “No tenemos un peso”, pensó durante la primera semana de gestión. Además, se le hacía muy difícil conseguir profesionales a los

que seducir con un trabajo en una ONG, porque en ese momento no era una opción atractiva para nadie, según evaluaba. “Claro, los anteriores abogados del CELS o trabajaban de otras cosas o *part time*; ser abogado *full time* de una ONG no existe”, pensaba.

Sin embargo, logró ver el vaso medio lleno: tener un CELS diezmado era una ventaja comparativa para desarrollar nuevas estrategias con un nuevo *staff*. Además de poder modelar un equipo controlable desde lo operativo, nadie le opondría demasiada resistencia, más allá de los previsibles tironeos con los históricos. Con la certeza de que no había ningún grupo que desde adentro le estaba boicoteando el trabajo, se metió de cabeza a liderar la transición.

Abregú —bajo el mandato de Mignone— se propuso transformar una organización de familiares con un mandato militante a una institución más profesional. Cuando se fue, en 2000, vio que el CELS ya estaba empezando a consolidar un equipo y una situación económica, aunque reconocía que no era un “producto terminado”, como solía decir. También creía que quedaba algo de incertidumbre para lo que se venía, pero confiaba mucho en lo que consideraba el gran desafío de su gestión: convencerlo a Víctor Abramovich para que aceptara sucederlo en el cargo.

21
Un frágil equilibrio

En la primavera de 1983, la proyección internacional de Alfonsín y el prestigio ganado por el CELS y la APDH parecían construir una democracia imbatible, sólida, que rompía para siempre la remota posibilidad de una vuelta a una dictadura militar. Pero a medida que se desgajaba la relación entre esas organizaciones con el alfonsinismo, la influencia del movimiento de derechos humanos parecía perder peso. El rechazo a la impunidad, la búsqueda de sanciones penales, las acciones públicas hacia adentro y hacia el exterior, la presión sobre legisladores y jueces chocaron con una especie de muro impenetrable que, desde el poder, les replicaba que, en realidad, todo eso podría debilitar el frágil equilibrio de la democracia. Los indultos de 1990 resumieron ese escenario.

Mignone entendió que la lucha durante la dictadura era clara, directa, sin eufemismos. Conte soñaba con disputar votos en las elecciones legislativas de septiembre de 1991. Le quedaban pocos cartuchos, pero los usó para organizar un encuentro partidario en Viedma. Ya tenía sesenta y cinco años. “Tenemos que ir a elecciones”, sostuvo entonces. “Quiero política grande, política de poder. Somos capaces de convertirnos en la tercera fuerza. Y después pongamos entre todos al próximo presidente de la Nación”, arengó.

Dos días antes de los comicios, el empresario Mauricio Macri apareció con vida luego de estar doce días secuestrado. Menem volvió a pedir la pena de muerte, que había empezado a batallar discursivamente un tiempo antes, cuando Guillermo Ibáñez, el hijo de su amigo y sindicalista Diego Ibáñez, apareció muerto en Mar del Plata. En las elecciones, el Partido Demócrata Cristiano obtuvo menos de diez mil votos. Conte sintió que esa fue su última batalla política.

Miró la historia pasar delante de sus ojos y leyendo en los diarios el impulso reeleccionario de Menem para las aun lejanas elecciones de 1995, recordó un pronóstico que le develó aquella ingenuidad notable: la ilusión de que su facción de la DC pusiera al próximo presidente. Al evocarlo, sintió una amargura solo comparable al momento en que uno se da cuenta de que la verdad no tiene remedio.

Conte y su facción de la DC no solo no tenían ningún atisbo de posibilidad de poner un presidente, sino que prácticamente no había

Democracia Cristiana como fuerza a tomar en serio a escala nacional, por no mencionar que a Menem las encuestas lo daban ganador por más del cincuenta por ciento de la intención de voto, en buena medida, gracias a la devolución de favores de las clases medias endeudadas en cuotas que aspiraban a seguir pagando.

También en 1991, el 19 de abril, Walter Bulacio, un pibe de Aldo Bonzi que tenía diecisiete años, salió excitado de su casa. Se iba para Obras. Esa noche tocaban Los Redondos. En la esquina del McDonald's lo vieron. Llegó sin entrada. Algo iba a encontrar, pensó. Dio unas vueltas. A un par de cientos de metros, el camarín de Obras volaba con los preparativos del show y el folklore del rock. En la calle, cada vez eran más los pibes que se agolpaban sobre la puerta del estadio a medida que bajaban del colectivo 29. Otros llegaban caminando desde la estación Núñez del ramal Mitre. Los agentes de la Federal de la Comisaría 35.ª vigilaban todo desde sus patrulleros, motos y camiones. Había empezado el otoño, pero el aire era húmedo y caliente. Walter caminó unos metros y merodeó la puerta del estadio. "No hay más entradas", escuchó por ahí. "Algo tiene que aparecer", pensó, y siguió merodeando. De todas maneras, para él, estar ahí ya era cumplir con el ritual. Dio más vueltas y buscó caras amigas. Encontró la de un oficial de la Federal.

Entre varios policías lo hicieron entrar a un camión celular. Cómo él, setenta y dos chicos más fueron sacudidos, pateados, golpeados, metidos a los empujones en transportes para presos. Nadie les dijo nada. Ni por qué, ni por cuánto tiempo, ni adónde iban. Solo pegaban. Les dieron en la cabeza, en el torso, en la espalda, en el cuello. Con los puños y con los bastones. A Walter le dieron con todo.

El camioncito partió hacia la comisaría con otros diez chicos. El comisario Miguel Ángel Espósito creyó estar haciendo lo correcto, que se los llevaba por averiguación de antecedentes, aunque la ley prohíbe detener a menores por averiguación de antecedentes, menos cuando no están haciendo nada. Pero para el comisario era suficiente respaldo un edicto policial de 1965 y su correspondiente interpretación sobre los movimientos de Walter y los otros chicos: "No tienen causa justificada para estar acá".

En Obras, cuando el show arrancó, a seis mil chicos los sacudió la emoción. En ese momento, Bulacio ya estaba tirando en un rincón de un calabozo de la 35.ª con el cuerpo destruido por dentro. Walter salió de la comisaría a la mañana siguiente, pero en ambulancia, camino al Hospital Pirovano. Sus padres no se habían enterado. Tampoco ningún juez. A la tarde lo llevaron al Hospital Fernández. Allí, un médico miró las placas y consultó con unos colegas. Traumatismo de cráneo, lesiones internas, golpes con objetos contundentes por todos lados. Hasta en la planta de los pies. El día 26 murió. Le habían pegado

demasiado.

Espósito fue procesado por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero el expediente empezó a rebotar por los juzgados de menores como si fuera una brasa caliente.

La violencia policial parecía haberse desatado contra los jóvenes. Meses después, en Lanús, treinta policías de fajina golpearon e insultaron a otro grupo de chicos que también habían ido a ver a Los Redonditos de Ricota. Los hicieron desfilar por la avenida Pavón y volvieron a pegarles. Los chicos fueron obligados a ponerse contra la pared del túnel bajonivel de la estación de Lanús, entre golpes e insultos. Una mujer policía se ensañó con Norberto Sempe Etchart y José Gaziano. Les descargó cachiporrazos sin parar, con toda su fuerza, por todo el cuerpo. No paró hasta verlos tirados en el piso, chorreando sangre.

El escenario se repetía, como si fuera parte de un modelo. En Capital, en Lomas, en Moreno. Chicos detenidos arbitrariamente, torturados, asesinados. Al poco tiempo, a pedido del CELS, la justicia exhumó otro cadáver de un chico muerto por la violencia policial. Era Gustavo Ramón Silva, de veintiún años. Oscar Vélez, de veintiséis, una noche cualquiera se subió al tren en la estación de Tapiales. La policía lo vio y algo en su cara no le gustó. Lo hicieron bajar. Una semana después apareció muerto en la comisaría del barrio. Según la policía, se suicidó en el calabozo. “Se ahorcó con un piolín”, le dijeron a la familia. Cuando lo velaron, la madre abrió el cajón y vio que tenía el cráneo hundido, los genitales magullados, los dedos fracturados. El juez Jorge Rodríguez, de Morón, dio por probado el suicidio, por lo que no inculpó a ningún uniformado.

Los asesinatos a manos de la policía encontraron en las notas publicadas por Horacio Verbitsky en el diario *Página/12* otro canal para trascender. La publicación de la serie sobre ejecuciones ilegales hizo rebotar la cuestión en la agenda pública. El equipo jurídico y de documentación del CELS comenzó a notar que el método aplicado a estos procedimientos policiales era muy similar al que se había usado en tiempos de la dictadura.

La estrategia de nuevas alianzas (como las que habían nacido con las organizaciones villeras de base) sirvió de modelo para establecer otros vínculos, con legisladores, con la UBA o con ONG del exterior. La Tablada no dejó de ser un foco de atención. El CELS denunció al Servicio Penitenciario por las torturas a los presos durante los traslados. Para el juez Miguel Pons no fueron apremios ilegales. “Nadie les quiso arrancar información”, justificó. El juez llamó a los denunciantes a reconocer a los policías que les habían pegado recién dos años después de los hechos.

El presidente Menem no colaboró demasiado para que la comunidad de los derechos humanos encontrara algo de serenidad. En San Miguel de Tucumán, durante un acto patrio, advirtió en su medio tono sobre la inminencia de la mano dura: “No vaya a ser cosa que haya nuevas Madres de Plaza de Mayo”. “Pero ¿qué dice este hombre? ¿Nos amenaza con más desaparecidos?”, se preguntó Mignone en un editorial del *Boletín*.

Las *razzias* que terminaron con la vida de muchos jóvenes de la periferia o hijos de familias humildes eran parientes directas de los edictos policiales, una especie de marco orgánico que la policía había usado históricamente para combatir el delito desde la prevención, como si fuera la técnica idónea para detectar personajes susceptibles de pertenecer al “mundo del hampa”.

Los datos filiatorios, la técnica dactiloscópica, los antecedentes policiales y los trucos conocidos de los delincuentes más famosos de la primera mitad del siglo XX formaron un corpus de información que inundaron de severidad cada rincón habitable de la sociedad. Prácticamente ningún aspecto de la vida en comunidad quedaba a salvo de los edictos. Armar desórdenes en la vía pública, meterse en escándalos de polleras, jugar al truco en los bares, escupir en el suelo, tomar sol en un parque, pasear sin remera. Los edictos contemplaban todo y, gracias a ellos, cualquier policía podía detener e interrogar a quien quisiera sin necesidad de una orden judicial.

Las fuerzas policiales de la dictadura ya contaban con un sistema de chequeo instantáneo de los datos filiatorios de una persona. Sin embargo, andar sin documentos por la calle calificaba para ser sujeto de un paseo a la comisaría, o de ser chupado, en el peor de los casos. Los hijos del peronismo de base, a quienes Conte solía referirse en sus charlas y escritos, esos chicos de los barrios populares, eran presa fácil para la policía: a comienzos de los noventa, de setecientos homicidios en la provincia de Buenos Aires, el treinta y cinco por ciento fue fruto de la violencia policial, según un rastreo del propio CELS.

Por entonces arreciaba una ofensiva de “ley y orden” cuyos voceros pretendían ahorcar en la plaza pública a los ladrones de autoestéreos. Eugenio Zaffaroni se había desempeñado como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal hasta 1990 y había empezado a colaborar con el CELS, sobre todo a partir de su larguísima amistad con Alicia Oliveira. Desde aquel año se dedicaba casi plenamente a la vida académica. Para esa época ya era un penalista con prestigio en todos los países de América y había recibido varios nombramientos como profesor honoris causa. Tenía muy claro que estas campañas de “ley y orden” querían dar la sensación de que el poder civil era incapaz de controlar el crimen. “Así los políticos se asustan y dan piedra libre a las agencias

policiales, les dan más poder, más armas, y los asuntos pasan menos por los tribunales", escribió en un informe. La consecuencia fue que el autoritarismo iba contagiando a buena parte de las clases medias altas y altas. Ya les había empezado a entrar la idea: deben volver los militares a restablecer el orden.

Para Zaffaroni, en lugar de prevenir el delito, la violencia policial solo generaba violencia en espiral. "Los policías culpan a los jueces, los guardiacárceles al sistema judicial, los jueces hacen lo mismo y el policía termina siendo la cara de un sistema que funciona mal, que naturaliza las muertes distorsionando el poder disciplinario." Según él, todo conducía a reducir el sistema penal a la frase "Quien mal anda, mal acaba".

Los integrantes del equipo jurídico del CELS siguieron rastreando causas, casi repitiendo un modelo de trabajo al de los tiempos de la dictadura, solo que ahora eran casos de la democracia. Nadie lo hubiera pensado. Pero era un trabajo sin rumbo. Se trataba solamente de contabilizar algunas muertes en apariencia inconexas aunque, buceando un poco, muchas variables que desfavorecían a los sectores vulnerables se empezaron a cruzar.

A Mignone le parecía que las herramientas legales y la interacción con el Poder Judicial eran lo suficientemente importantes como para hacer hincapié en acciones puntuales y seguir trabajando en ese perfil nuevo que el CELS empezó a encontrar.

El Programa de Apoyo Jurídico Popular nació por iniciativa de Octavio Carsen, el coordinador ejecutivo que tomó el mando luego de la salida de Julio Raffo a fines de 1987. Decenas de familias de los barrios marginales de Buenos Aires se acercaron al CELS. Esa gente, de pronto, tuvo alguien que los escuchara como sujetos de derecho, algo que hasta entonces desconocían. "Pero parece que solo estamos haciendo asistencialismo", comentó alguien en la mesa de reuniones. Para cortar esa sensación, el CELS instaló un equipo jurídico estable en la Villa 15, llamada Ciudad Oculta, cerca del barrio de Mataderos. Hasta compraron una casa precaria para trabajar más cómodos.

Augusto Conte se empezó a sentir un poco mejor. Dejó el aislamiento de su hogar y tibiamente volvió a meterse en las políticas directivas del CELS. El trabajo del Programa de Apoyo Jurídico Popular fue lo que más lo entusiasmó. "Esto trasciende el análisis de escritorio, la gente no exige de nosotros un marco teórico, sino una práctica social que los contenga", sostuvo mientras se sentó a diseñar otra tarea pesada: el trabajo con migrantes, con indocumentados y el monitoreo de procesos eleccionarios locales en las villas. El tema de la adjudicación de tierras lo metió en los laberintos de la kafkiana Comisión Municipal de la Vivienda.

Aquellos temas que ocuparon los titulares de los diarios hicieron

hablar a muchos doctores, pero no les llamaron la atención a los inmigrantes pobres de los países fronterizos que cada día tenían que cruzar la avenida General Paz para ganarse la vida en la Capital Federal. En una calle de Liniers, unos policías de la Federal pararon a Hugo, un boliviano que con insistencia cada día probaba suerte en los talleres textiles coreanos del Bajo Flores. Tenía menos de treinta años pero parecía de cincuenta. Le pidieron documentos, sabiendo que no tenía. Le pidieron plata, sabiendo que tenía poca. No importó. Era el peaje por cruzar la General Paz, la avenida que divide por el oeste la Ciudad de Buenos Aires de los suburbios populares. Le sacaron lo que pudieron. A él, a sus familiares, a sus amigos y compañeros. En esa esquina y en otras. Ese día y el siguiente y el siguiente. En Liniers, en La Tablada, en Ciudad Madero, en Valentín Alsina. Hasta que todos se acostumbraron. Bolivianos, peruanos, chilenos y policías.

"¿Cómo es eso?", preguntó Conte cuando un peruano llegó a contarle lo que le pasaba a él y a gente como él. El peruano era tímido, pero contó más. Habló de las humillaciones, de los insultos, del trato denigrante hacia sus mujeres, de la burla a sus costumbres. Del saqueo de sus bolsillos y billeteras escuálidos. El muchacho siguió hablando y Conte no tardó en entender que esos policías que patrullaban la frontera entre el conurbano turbio y el glamour de Buenos Aires no eran los únicos oficiales del Estado que se habían propuesto molestar a los inmigrantes.

Conte puso manos a la obra y se movió por oficinas y despachos para ver hasta dónde llegaba la gimnasia de la caza al inmigrante. Alicia Oliveira se sumergió en documentos y comprobó que Migraciones podía hacer operativos amparados por una ley de la dictadura que le permitía sin orden judicial hacer allanamientos en domicilios particulares, desalojar a sus ocupantes y hasta expulsarlos del país sin proceso. También se enteró de que los allanamientos podían ser apelados. Sin embargo, ningún comisario se tomaba la molestia de informarlo en medio del allanamiento. "Ellos entran y arrasan con todo", explicaron las víctimas de manera casi calcada. El CELS atendió una denuncia múltiple de setenta inmigrantes que fueron detenidos en la avenida Corrientes. Once de ellos no tenían ningún tipo de documentos. "Van a tener que dejar el país", les dijeron los oficiales. Después se los llevaron detenidos. Cinco días después les avisaron que tenían derecho a un abogado para la apelación.

La Dirección Nacional de Migraciones era solamente una agencia administrativa pero estaba decidiendo el destino de un montón de gente que llevaba años viviendo, trabajando y teniendo sus hijos en la Argentina. Como asistentes legales de decenas de inmigrantes, una de las primeras cosas que hicieron los abogados del CELS fue conseguirles

documentos. Del otro lado estaba Hugo Franco, el director de Migraciones. El hombre, íntimo amigo de Menem, contraatacó cuando respaldó una idea nacida de la bancada justicialista en Diputados que propuso delatar a los inmigrantes indocumentados a cambio de recompensas a través de una línea 0-800. “Basta de falsos turistas. El ochenta por ciento de los que llegan, llegan para quedarse y trabajar”, gritó Franco ante cuanto micrófono le pusieran adelante. También propuso multar a quienes contratasen o albergasen a inmigrantes ilegales. Para quien delatara a los empleadores también habría recompensa. “Eso no es delatar, es cumplir con la ley”, se defendió Franco. “Eso no es delatar, es denunciar un delito”, dijo el diputado Pascual Rampi, uno de los autores del proyecto. El CELS se empezó a mover para detener una ofensiva que, según ellos, era absolutamente contraria al espíritu de la Constitución. Pero no tuvo que hacer demasiado. La propuesta fue tan burda que hasta puertas adentro del Poder Ejecutivo generó rechazo. Carlos Corach, ministro del Interior, se sintió incómodo con la idea, y no le costó mucho convencer a Menem de que había que desactivar todo.

El CELS ya no eran Conte y Mignone y los miembros fundadores. Los nuevos abogados de la generación de la transición democrática trabajaban y acompañaban, y además influían. Fue la primera camada que empezaba a presenciar y protagonizar el debate académico sobre el drama de la dictadura. Si bien los miembros fundadores eran depositarios de la memoria, los nuevos abogados también tenían algo para aportar en la misma búsqueda, solo que no eran víctimas ni familiares.

Conte y Mignone a veces creían sentir en la cara el viento de un CELS renovado, pero el entusiasmo se convertía en una mueca de disgusto cuando miraban los números. Para la cooperación internacional, la transición democrática se había afianzado y los recursos bien podrían canalizarse hacia otros países. “Los números están en rojo. Tenemos que hacerlo saber. Hay que poner un cartelito en el *Boletín* del mes que viene”, sugirió Conte. Unos días después, Mignone se acercó a Cristina Caiati con un avisito mecanografiado para que incluyera en la contratapa del *Boletín,* formado por dos humildes pliegos. “Las innumerables tareas que se realizan, cuya información les brinda este boletín, insumen gastos que cada vez nos resultan más difíciles de solventar”, decía. Estaba pidiendo plata.

22
La muerte de Conte

Fe me sobra, ganas de pelear también.
AUGUSTO CONTE, *Hoja de ruta*, 1991.

Repuesto a medias de su depresión, Conte no terminaba ni de abandonar ni de reactivar su trabajo en política o en el CELS. La espiral de euforia y frustración quedó detenida entre la angustia y el duelo inacabable por su hijo desaparecido. Mirando esa *Hoja de ruta* que su compañero había publicado unos años antes, Mignone se dio cuenta de que esas palabras daban cuenta de la alarmante derrota popular, una derrota que también era propia, pero que sabía que en Conte pegaba y dolía más porque vivía la decadencia menemista como propia, como si todo el daño que las políticas menemistas habían hecho en los sectores populares se lo hubieran hecho a él. Y no solo por los indultos.

El ajuste, la pobreza y la exclusión crearon tales condiciones que Conte fue solito a poner el hombro en el DESC, el programa de derechos económicos sociales y culturales que nació como una manera alternativa de usar el Derecho. Desde allí trabajó junto con los abogados más jóvenes para crear estrategias de judicialización ante algunas de las manifestaciones de la crisis: criminalización de la protesta social, exclusión, represión y precarización de derechos.

El CELS también intentaba hacer el pasaje de trabajar procesos de justicia “cuerpo a cuerpo” —para personas con nombre y apellido en determinadas situaciones puntuales— a una especie de batalla estratégica global, donde hubiese una justicia madura y que partiese del Estado de derecho, que trabajara en causas ejemplares para influir en la propia justicia buscando que el Estado les diera un respuesta a las víctimas y que en todo el proceso las instituciones se afianzaran. Pero lo que no se afianzaba era el estado de ánimo de Conte.

A comienzos de 1992, Augusto seguía sintiéndose en una montaña rusa. A pesar de unas vacaciones familiares en Uruguay, ya se parecía a un boxeador el día después de quince largos *rounds* y un fallo unánime adverso al final. No tenía más fuerza.

A comienzos de febrero, como era habitual, Mignone se fue a pasar unos días a Luján. Acaso como una premonición, le dejó un número de teléfono de emergencia a Cristina Caiati. "Por si pasa cualquier cosa." El 5 de febrero Conte se pegó un tiro en su departamento de la avenida Callao. Agonizó durante horas. Caiati se enteró pasada la medianoche y no pudo dormir pensando si era buena idea llamar a Mignone para darle la noticia a esa hora. A las cinco de la mañana no aguantó más y llamó. "Ya salgo para allá", le dijo Mignone al otro lado del teléfono. Augusto ya había muerto.

Algunas horas después, Julio Raffo se presentó en la morgue y se encargó de los trámites para recibir los restos. Era un día lluvioso. Más tarde, Laura Conte le pidió un favor: recuperar el arma con que Augusto se había matado. Raffo se angustió, quedó paralizado, no sabía para qué podría quererla. "No te preocupes, la quiero para destruirla. No quiero que la policía la use para reprimir", le explicó Laura. Cuando volvía a su casa, Raffo recordó el día en que durante un almuerzo en el restaurante El Ruedo Conte le dijo que Menem podría ser un buen presidente y que había que ayudarlo. Y que algunos osaron pensar que Conte podría ser un buen vice para el riojano. No supo si reírse o llorar.

Para Mignone y los demás colegas la noticia fue un golpe durísimo, aunque más de uno se la vio venir. Mignone tuvo un duelo corto y riguroso, como si estuviera tan curtido que su carácter le permitió, luego de llorar a su compañero de lucha, pasar la página para planear el trabajo sin Augusto. Es como si alguien hubiera pateado el hormiguero y las hormigas, en lugar de huir, se hubieran organizado con más rigor para que no las siguieran pateando.

Ya en 1994, el *Primer informe anual sobre derechos humanos en la Argentina* comenzaba a testimoniar el cambio. Mignone se decantó por un trabajo casi académico puertas adentro del CELS, como si fuera una especie de tutor de tesis, pero teniendo muy en claro que los casos que llovían en el centro no eran trabajo de laboratorio sino que pasaban en la vida real, en las casas de la gente, en la calle.

Como cuando excarcelaron al comisario Espósito, que estaba procesado dentro del marco del caso Bulacio por el delito de privación ilegal de libertad en contra de setenta y tres personas. Los querellantes no pudieron creer cuando se enteraron de que Espósito seguía una ascendente carrera policial que lo paseó por distintos cargos jerárquicos. Tampoco cuando comprobaron que mientras el expediente seguía quieto en la justicia argentina, el comisario daba clases en la Escuela de Cadetes Ramón Falcón. De Conte ya quedaba un lugar destacado como miembro fundador del CELS y una placa de bronce en una tumba del Cementerio de Olivos.

En eso estaban cuando los *papers* con ideas que Mignone redactaba

y repartía sobre la reorganización del CELS se tenían que hacer realidad o morir con el CELS mismo, según sostenía. “Insisto: las agencias filantrópicas se están yendo de la Argentina, ya no somos prioritarios en materia de derechos humanos. Encima, ahora todos estos países tienen gobiernos conservadores y además están en recesión. Ya está, ya nos bancaron en el nacimiento y en el desarrollo lo que pudieron. No podemos esperar que nos financien para siempre”, dijo una mañana en la reunión de rutina de la comisión directiva. Tenía la idea fija. Y quienes lo escucharon sabían que los cambios eran inexorables. “Además, estamos viejos”, dijo mirando a cada uno a la cara. Los demás hicieron una mueca que estaba a mitad de camino entre una sonrisa falsa y la resignación.

Para eso se había ocupado de escribir las tareas que tenía pensado encomendarle a quien llegara a ocupar el cargo de director ejecutivo. Era una lista larga, llena de responsabilidades, que iban desde pensar las estrategias hasta comunicarse con la prensa u ocuparse de los afiches y las planillas de gastos e ingresos. Los demás empezaron a apiadarse del candidato. Demasiadas cosas quedaban en sus manos. Un ida y vuelta con Boris Pasik y Carmen Lapacó terminó de delinear las funciones del futuro cerebro ejecutor del CELS. Mignone repetía como un mantra, o como una bendición, una frase en la que realmente creía: “Hay que renovarse sin perder la mística”.

Un día menos místico, Carmen Lapacó necesitó mover dinero de la cuenta que el CELS tenía en Estados Unidos. El operador local con quien siempre hacía esos trámites, en lugar de darle unos billetes, le dio una novedad negra. “No hay fondos”, le dijo. “No puede ser, la cuenta no fue tocada en las últimas semanas. Tiene que haber un error.” El empleado la compadeció en su desconsuelo. La explicación apareció unos días después. Alguien logró desaparecer los dólares de la cuenta sin dejar rastros gracias a un burdo ardid realizado por fax. En el expediente, la imputada fue la propia Carmen Lapacó.

Puertas adentro, los problemas no se limitaron a la caja. Octavio Carsen propuso una línea de trabajo ligada a la acción política de base, donde no había demasiado lugar para el trabajo académico, de incidencia, de batallar estrategias judiciales o de armar alianzas con otras organizaciones locales o internacionales. Los planes de Carsen siempre le hicieron un poco de ruido a la vieja guardia, pero lo sobrellevaron con decoro gracias al entusiasmo con que Conte había respaldado algunas de esas iniciativas, como el trabajo en las villas. Con Conte muerto, Carsen quedó un poco más solo, no se sentía entre pares. Le rechazaron algunos proyectos para trabajar “en las bases” y hacían muecas cuando escuchaban de boca del propio Carsen algunos eslóganes de corte “antiimperialistas” o se refería a los demás integrantes del CELS como “compañeros militantes”. Carsen no quería

saber nada de tecnocracia. “El CELS no puede ser eso”, afirmaba en reuniones formales e informales.

Mignone seguía maquinando el cargo de director ejecutivo. Le daba la talla de un técnico-administrativo muy formado, una especie de jefe de gabinete que sería el enlace entre diferentes áreas del CELS y entre la institución y la sociedad. “Además, tenemos que contar, siempre que se pueda y donde se pueda, lo que pasó en la Argentina. Tenemos que ser el contrapeso de los militares que defienden la impunidad.” Pero con la estructura de costos que había no era fácil llevar el plan adelante.

Ahogado financieramente, el CELS pidió auxilio una vez más en las páginas de ese mismo *Boletín*, pero sin eufemismos. “La crisis golpea, y pese a la supuesta estabilidad anunciada por el gobierno, peligra la continuidad de esta publicación.” La situación se puso tan apremiante que a Mignone se le ocurrió vender a terceros el servicio de microfilmación como una manera de sumar algunos fondos. A pesar de los autoavisos en el *Boletín* y de los pedidos de auxilio, las cuentas siguieron en rojo y no daban para tener a tanta gente en planta. Mignone afinó el lápiz, pero aun así vio que empezaba a peligrar el pago de los sueldos.

Una tarde juntó a varios colaboradores y les habló con franqueza. Expuso el escenario y remató, esperanzado: “Les doy la opción de irse, no les podemos seguir pagando. Pero apelo al compromiso que tienen con nosotros y les pido que se queden”. Mignone les sostuvo la vista con ojos emocionados. Los otros la desviaron y miraron el piso. Al otro día le contestaron con el bolsillo. Algunos renunciaron y fueron indemnizados. Otros fueron recontratados, en blanco, y otros empezaron a facturar. La sangría no terminó ahí.

Luego de los indultos, muchos familiares de desaparecidos, colaboradores de la primera hora, dejaron de asistir a las reuniones o de visitar el centro. Habían tirado la toalla. De pronto, no dieron más. ¿Para qué seguir trabajando en una institución de derechos humanos cuando después de más de diez años de lucha viene alguien y vuelve todo a foja cero de un plumazo? Eso le preguntaban retóricamente a Mignone. Él ya no tenía respuestas. Sobre todo después de que otros familiares se sintieran maltratados cuando el CELS dio a conocer que estaba trabajando en derechos humanos con jóvenes villeros. “Mi hijo no es un pibe chorro. No acepto la comparación”, justificó uno de ellos. Mignone sentía un dolor inmenso cada vez que le decían algo así. Pero, otra vez, prefirió no polemizar. Solo pudo quedarse viendo cómo la energía se diluía entre la falta de justicia y la falta de fondos, gracias a las idas y vueltas de la realidad argentina.

A Carsen no le cayó para nada simpático que le sugirieran a los empleados que tenían que autodespedirse. “No pueden pedirle al

personal que ellos mismos decidan quién se queda y quién se va. Habría que reformar el estatuto del CELS, además", sostuvo en una reunión. Y agregó: "Si el personal no participaba de las resoluciones en la época de bonanza, no tiene por qué participar en las resoluciones en la época de reducción de personal. Es en las buenas y en las malas", afirmó. Como el grupo fundador se reservaba el derecho de decidir, Carsen sabía que luego de esas palabras no le quedaba mucho resto para continuar en su cargo.

Mignone quiso agarrar su maletín, irse a casa y regresar a su antiguo *métier*. "Volveré a dedicarme a lo mío: la educación", apretaba. Nadie lo quiso escuchar. Las diferencias entre lo que Carsen y Mignone esperaban del CELS eran tan evidentes que el Pope supo enseguida que el momento de pegar el gran volantazo había llegado. Estaba preparado para eso y tenía un as guardado en la manga. Carsen se terminó yendo con la mitad de los empleados que habían llegado con él.

En la macropolítica, el Pacto de Olivos que garantizó la reelección de Menem dejó de ser un secreto y la reforma de la Constitución se hizo realidad. En las oficinas del CELS se festejó que el Estado había dejado sin efecto el memorándum n.º 40 (el que permitía detener gente sin intervención de un juez), lo que luego llevó a la reforma del Código Procesal en materia criminal. Ya no había peligrosidad sin delito ni detenciones preventivas en materia contravencional. Era para celebrar.

Con un resto de esperanza en el espíritu pero aun sin resto financiero, Mignone trabajó varios días en algo que solo se conoció una vez que lo hubo terminado. Ese día convocó a una reunión. Tenía listo un documento de catorce páginas para una propuesta de reestructuración. El CELS ya era un actor público en temas de violencia institucional, policial, en la aplicación del Derecho Internacional en derechos humanos y en la exigibilidad de derechos económicos, culturales, sociales. Mucho *background*, aunque pocos billetes.

Con su estilo rígido, muy cuidadoso de las formas y con el aire docente de siempre, explicó qué era lo que buscaba. En principio, Mignone quería integrar socios nuevos —referidos por los integrantes del CELS o que se acercaran por voluntad propia—, caras nuevas, no solo familiares de desaparecidos, abogados o gente del movimiento de derechos humanos. Sin límite de número, los socios ayudarían a ampliar la agenda, según él. También propuso ampliar la comisión directiva con consejos consultivos integrados por referentes de distintas áreas. Se vio obligado a sugerir el cambio del modelo financiero para tratar de conseguir fondos locales y no depender tanto de la cooperación internacional que se iba extinguiendo. "Además —

dijo—, los dirigentes nos estamos poniendo viejos, y si la renovación no sucede en poco tiempo el CELS cerrará sus puertas.” Propuso alquilar nuevas oficinas, tener un *staff* fijo, tener menos reuniones, hacer más eficientes las comunicaciones. Entusiasmado con el uso regular de la computadora y el correo electrónico, hizo mucho hincapié en las nuevas tecnologías.

Pero su gran apuesta era el nuevo cargo. Un director ejecutivo —cargadísimo de tareas— era una pieza fundamental en una nueva estructura. Como un signo de los nuevos tiempos, postuló: “El CELS debe ocuparse de las violaciones a los derechos humanos tanto civiles como políticos y socioeconómicos que subsisten. El CELS tiene como objetivos la defensa de los sectores marginados, de los refugiados, de los discriminados, los defiende contra la tortura y todo tipo de violencia ejercida por las fuerzas armadas, policiales y carcelarias”.

Mignone se estaba esforzando por adaptarse no solo a los nuevos tiempos sino a los diferentes escenarios. Según él, a medida que el gobierno militar empezó a declinar, los jueces se prepararon para el futuro, es decir, para que cuando fueran a echarlos, ellos pudieran tener a mano un argumento que les permitiera decir: “Un momento, yo investigué”. Él creyó que durante el último período de la dictadura el CELS había avanzado en ciertas causas no por una cuestión de conciencia, sino por una cuestión de autopreservación de los propios jueces. “Quisieron tener elementos con los que defenderse en el futuro.”

Mignone sí se sentía sólido y seguro con su conciencia. El solo hecho de juntar un dato sobre otro ya lo diferenciaba, lo hacía avanzar en algo concreto, con consecuencias en el mundo real. “Pero esa tendencia convive con la otra corriente, la de la declamación, la afirmación de tipo utópico, a todo o nada, el caso de Hebe: ‘O me traen a mis hijos vivos o todo esto no sirve para nada’. De ahí viene eso de paralizar la exhumación de cadáveres.”

23
El yuppie

"Martín, llegó el momento." Hacía casi un año que Mignone no hablaba con Martín Abregú, que seguía en Washington con su beca y sus cursos, acaso esperando que un llamado desde Buenos Aires lo volviera a sacudir con un poco de realidad entre tantas clases y *meet and greets* con tecnócratas de lujo, lobbistas, funcionarios y profesionales de las ONG globales. Abregú empezó a probarse el traje de director ejecutivo. Para eso lo estaban preparando.

Un par de semanas antes de la fecha señalada para su regreso a la Argentina a tomar las riendas del CELS, Mignone volvió a sacudirlo con un llamado. "Escuchame, hay un temita, nos afanaron la guita de la cuenta: ochenta mil dólares. Este es tu primer problema, ¡pero mirá qué buena oportunidad!" Luego Abregú supo que en el CELS todo empezaría de cero. Mignone le confesó que una manera de conseguirlo era que muchos de los que estaban se fueran para empezar de nuevo. "Qué huevos, qué fuerza, qué coraje", se quedó pensando Abregú cuando colgó.

Cuando aterrizó, lo primero que le dijeron era que en la causa de la desaparición del dinero la imputada era Carmen Lapacó. "Qué situación de mierda", pensó. Días después comenzó a creer que habían sido los servicios. De la investigación judicial no surgió nada concluyente. Mientras volvía a caminar por las calles del centro, lo único que se le pasaba por la cabeza era una frase: "Hay que conseguir guita urgente".

En pocas semanas algo consiguió. Pudo contactar a Diakonia, una ONG sueca ligada a diferentes congregaciones cristianas, y le hicieron juicio al Barclays, el banco al que se le había escapado en sus narices una buena cantidad de dólares por un simple fax que pedía girar la plata a otra cuenta. Les ofrecieron arreglar y la pérdida quedó casi neutralizada.

Era evidente que desde la Fundación Ford tenían especial interés en el desarrollo de la carrera de Abregú. No solo le habían financiado la maestría en Washington, también le hicieron fácil la continuidad del apoyo financiero y lo tenían siempre entre algodones, como si esperaran mucho de él en el futuro. Sin embargo, al cabo de un año de gestión, Abregú consideró que había sido el líder de un fracaso.

La situación con la vieja guardia no era fácil. Abregú tuvo bien claro que algunos miembros de la comisión directiva, sobre todo Mellibovsky, Westerkamp y Pasik, se la estaban haciendo muy cuesta arriba. Le hacían notar que él no solo era demasiado joven, sino que además no era sobreviviente, ni familiar, ni siquiera militante. Ni siquiera estuvo exiliado. No era "del palo". Expectativas no les faltaban, pero tampoco desconfianza. Algunos se lo hacían saber con su ninguneo, como Pasik, con quien estaba abiertamente enfrentado, incluso ideológicamente. Otros, como Matilde Mellibovsky, le hacían pasar momentos incómodos a propósito, como cuando preguntó delante de él: "¿No había alguien de HIJOS para el cargo? Esa es la generación que debería estar dirigiendo el CELS". Nunca se afianzó la relación con ella.

Cristina Caiati vivió la llegada de Abregú con expectativa y era la testigo silenciosa de los debates en torno a su rendimiento. "Es el elegido del Pope, algo debe de tener", pensaba. De alguna manera, le daba una oportunidad. Lo que no le daba era la llave del archivo, que cerraba con candado. Abregú comenzó una ardua tarea de ablande con ella: no podía prescindir del archivo, tampoco de su encargada.

Abregú supo qué veían en él: un yuppie de los derechos humanos, un joven profesional, no un militante. Sabía que los otros se preguntaban: "¿Quién es este tipo que no tiene ningún vínculo con desaparecidos, que tampoco es familiar ni fue víctima...?". Entendió que les estaba cayendo mal. Mignone, como un alquimista al que se le caen sus frascos mágicos, trataba de contemporizar: "Martín está preparado para lo que se espera de la conducción del CELS, y además era muy joven durante la dictadura". Ahora también seguía siendo joven. Tal vez por eso Mignone lo exigía como se le exige al mejor atleta de un plantel que baje los tiempos, que sea capaz de dar todo lo que tiene y un poco más. Cada mañana lo llamaba antes de las siete para comentarle las noticias de los diarios recién salidos de las imprentas y puntear las actividades para el resto del día. Abregú obedecía, le manejaba los problemas y le era funcional. Pero además tenían una buena sintonía ideológica. El joven aprendiz compró encantado el proyecto del viejo.

Pero el ambiente que generaban los demás le devolvía tensión. Pensó en irse. "Eso sería complicado para el CELS", le dijo Alex Wilde, su referente de la Ford en Santiago de Chile. "Estoy un poco harto, no me dejan hacer nada", se quejó Abregú. Pero decidió quedarse —como si entre Wilde y Mignone ya hubieran pensado por él— pero tratando de ubicarse y de ubicar a los demás de la manera más razonable y llevadera para que el CELS no se desplomase sobre sus cimientos.

La reforma constitucional de 1994 lo empujó a Abregú a pensar en un programa jurídico y a usar los tratados para impugnar la

legislación de los noventa, regresiva en materia social. Víctor Abramovich venía de trabajar Derecho Laboral y derechos sociales, y en un principio se incorporó para eso: hacer litigio estratégico en temas de derechos humanos aplicando tratados y cuestionando legislación en torno a temas de violencia policial, cárceles, acceso a información pública, libertad de expresión, independencia del Poder Judicial y derechos sociales.

Sin embargo, a pesar de los modestos éxitos, la nueva gestión parecía avanzar un paso y retroceder dos. Un viernes de agosto de 1995, Abregú se propuso imitar a Mignone. Escribió un documento de seis páginas en el que básicamente les decía a los de la comisión directiva: "Si quieren me voy, si me quedo es con estas condiciones". Convocó a una reunión e hizo tomar asiento a Mignone, a Boris Pasik, a Carmen Lapacó y a Laura Conte. Les entregó una copia del documento a cada uno. Leyó las seis páginas en voz alta. Los otros hacían silencio y se miraban entre ellos, alternaban la vista entre las páginas y el joven yuppie que leía en voz alta. "Listo, ahora yo me retiro. Discutan en mi ausencia", les ordenó con seguridad. Y salió de la sala de reuniones.

Cuando la puerta se cerró, los fundadores quedaron un rato en silencio hojeando sus copias del documento. No tardaron mucho en empezar a hablar, primero en voz baja, luego con el tono de voz que usa la gente para convencer al que tiene enfrente. Habló Laura Conte: "Él es bueno, pero tiene que dirigir en una especie de triunvirato junto al centro de documentación y Carmen", propuso. Eso era justamente lo que Abregú menos quería, es decir que proponerle eso era esperar el rechazo y acordar su salida. Habló Pasik: "Es un chico capaz, pero sin legitimidad. El poder se construye de abajo hacia arriba, no al revés, como pretende él. Por mí, que se vaya", aseveró. Habló Carmen Lapacó, sin vueltas: "La gestión de Abregú es un fracaso. Se tiene que ir". Siguieron hablando de propuestas, detalles, marchas y contramarchas, pros y contras. El que menos hablaba era Mignone, que tomaba notas y analizaba cada palabra.

Una hora y media después salió el viejo. Abregú esperaba en su oficina tratando de concentrarse en sus papeles cuando lo único en que podía pensar era en lo que pasaba del otro lado de la pared. "Venite a mi casa a las seis", lo sacudió Mignone. Fue y escuchó las conclusiones que Mignone le resumió. Abregú negaba con la cabeza. "Tranquilo", le dijo. "Sigamos el lunes y evaluamos bien." El viejo, como un gran ajedrecista, ya tenía pensado su movimiento. Ese lunes, se volvieron a juntar todos, y el primero y el único que habló fue Mignone. "Si Martín se va, yo también", dijo casi sonriendo. Cada uno de los presentes pensó lo mismo: "Nos cagó a todos". Tanto Abregú como los demás pensaron que no podían permitir que Mignone se

fuera. Fue jaque mate.

24
Scilingo

En 1956, Rodolfo Walsh entró a un café de La Plata y se sentó. En la mesa había dos vasos de cerveza y del otro lado había un tipo. "Hay un fusilado que vive", le dijo Juan Carlos Livraga. Fue el origen de la investigación sobre los fusilamientos de militantes peronistas en los basurales de José León Suárez del año anterior y convertido en el libro *Operación Masacre*, biblia del periodismo argentino.

Casi cuarenta años después, en otro lugar, Horacio Verbitsky, que recién había entrado a un vagón del subte de Buenos Aires, vio que un hombre se le acercaba. "Yo estuve en la ESMA. Quiero hablar con usted", le dijo. Verbitsky lo consoló. Lo creyó una víctima. Vio en el otro a alguien que podría ser un par. Cerca de cincuenta años, camisa, bigotes. Un tipo normal. "No. Yo fui compañero de [Juan Carlos] Rolón", le aclaró el hombre. Se trataba de Adolfo Scilingo, ex oficial de la aviación naval.

La frase quedó zumbando en la cabeza de Verbitsky como si no pudiera irse ya jamás y se convirtió en una confesión, en un dato, en una certeza, solo equiparable a la que Walsh escuchó en un café de La Plata décadas antes. La diferencia fue que entonces los sobrevivientes no podían ni siquiera darse el lujo de soñar con encontrar a los culpables, y mucho menos castigarlos. Ahora se podía.

Apenas unos meses antes, el Senado había empezado a discutir precisamente los pliegos de ascensos de Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías, dos de los nombres más terroríficos de la ESMA, con la excepción del propio Massera. Tal vez por eso a Verbitsky el nombre de Rolón le hizo más ruido que el que le habría ocasionado si solamente hubiera quedado en los archivos como un oficial represor más.

"La Armada era capaz de movilizar aviones", le dijo luego. Scilingo parecía o un loco o un ex represor molesto por los ascensos de sus ex camaradas. De una forma u otra, lo que decía era la punta de un ovillo que se desataría pronto: la sospecha macabra que rondaba a los sobrevivientes de los campos de exterminio argentinos sobre los vuelos de la muerte —en los cuales los detenidos eran arrojados vivos al Río de la Plata— estaba a punto de ser confirmada.

El Senado estaba analizando los pliegos para los ascensos de la

Marina y cuando aparecieron las objeciones a algunos de los candidatos acusaron la falta de respaldo del arma. Scilingo supuso que era una injusticia que les negaran los ascensos a algunos de ellos, ya que había decenas de otros oficiales que habían participado en la represión y habían sido promovidos por el mismo Senado. Para Scilingo, eran todos o ninguno.

La confesión de Scilingo no pudo haber caído en fecha más simbólica: faltaba un día para que se cumplieran veinte años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Sus palabras retumbaron en todo el mundo, pero acaso un poco menos en la Argentina. El gobierno menemista, en lugar de investigar, prefirió sancionar a Scilingo para que sus dichos no afectaran a la oficialidad y para que otros no siguieran su mismo camino. Mignone quedó *shockeado*. Él ya sabía que Mónica había estado en la ESMA. Mónica podría haber sido una más de esos pasajeros. Mignone vio cómo una idea nacía en su lógica de abogado, pero también en su corazón de padre de una víctima: el derecho a la verdad.

Con la consolidación de Abregú, el CELS había comenzado a diversificar aún más la agenda. Si bien ya se había abierto un poco en relación a causas de violencia policial —que había impulsado en su momento Alicia Oliveira—, el nuevo director ejecutivo comenzó a trabajar con legisladores y en el Derecho Internacional aplicado a derechos humanos, una faceta que le interesaba mucho a Mignone. Cuando se discutió el inicio de los procesos por la verdad, había un debate de fondo: Mignone quería utilizar las declaraciones de Scilingo y se discutía si el CELS podría utilizar la palabra de un represor para avanzar en un proceso judicial por la verdad. Cuando Scilingo pisaba el CELS, la comisión directiva chirriaba. El argumento de Mignone, que Laura Conte compartía, era "ir por verdad es funcional a ir por justicia".

El otro tema de debate era hacia dónde estaba yendo el CELS. El proceso de profesionalización que dirigía Mignone planteaba dos grandes ideas: abrir la agenda e incorporar al CELS abogados que combinasen el activismo social con un trabajo técnico-jurídico. "Necesitamos militantes profesionales", sostenía, como síntesis. Laura Conte lo apoyaba sin objeciones. Pero el plan era levemente resistido por la mayoría de los demás históricos. La propia Alicia Oliveira olía que algo nuevo se estaba cocinando y decidió, de a poco, volver al ruedo. Ella estaba bien instalada en su estudio, pero había hecho demasiada fuerza para el ingreso de Abregú (también quería sangre joven) como para no hacerse cargo del devenir de su gestión. Ya no integraba el equipo jurídico ni trabajaba como abogada, pero como miembro de la comisión directiva conservaba algo de influencia, por lo menos la suficiente como para decidir tomar algún caso y volver a

litigar.

A ella siempre se le reconoció que quería abrir la agenda a temas sociales, aunque las causas relacionadas con desaparecidos nunca dejaron de interesarle. Algunos de los que ya no estaban en el CELS habían escuchado que Carmen Lapacó, por ejemplo, creía que distraerse de los temas de desaparición era una especie de traición a ellos, a "sus hijos". Por esos días también surgieron algunas discusiones en torno al pasado. Un importante ex miembro del CELS sostenía que no decir que los desaparecidos eran militantes de organizaciones revolucionarias guerrilleras era matarlos dos veces. "Les están matando la biografía también", sostenía. Decir eso en el CELS, ante los fundadores, era polémico. Una de las fundadoras le contestó: "¿Así que vos pensás que mi hija…? No lo puedo aceptar, porque así los militares algo de razón tendrían".

A pesar de su interés en temas de índole social, Oliveira prefería planificar hacia adelante para entender más el pasado reciente: "Si quieren, vengo a trabajar *freelance*. Creo que se pueden hacer cosas aun por el derecho a la verdad. OK, no los podemos condenar, pero yo quiero saber qué pasó", le planteó a Mignone, sin sustento jurídico que la respaldara pero con una convicción inapelable. "¿Qué hacemos?", se sorprendió el Pope. Aunque presumía que sería difícil conmover a una Corte Suprema que no hacía mucho había sido cómplice de los indultos, le entusiasmó la idea, esa mecánica de meter escritos, presentaciones. "Tenemos que saber la verdad, tenemos derecho al duelo", se daba manija. El planteo podría consistir —pensaron— en exigir que la justicia penal investigara adecuadamente los hechos aún ante la imposibilidad de sostener una acusación o de imponer castigo. "Tenemos que elegir bien los casos y aprovechar el vendaval que desató Scilingo. Y que otros familiares y víctimas se aprovechen de lo que hagamos nosotros", sugirió.

Ese fue el momento cero de uno de los certeros golpes de efecto que tuvo la gestión de Abregú: él y Oliveira decidieron patrocinar al propio Mignone para saber la verdad. Cuando se lo plantearon a Mignone, la respuesta no podría haber sido más contundente y menos dubitativa: "Por supuesto: usemos la causa de Mónica", propuso. Se hizo un silencio. El caso de Mónica reflejaba de manera perfecta y ejemplificadora los métodos que usó la dictadura para consolidar su régimen represivo, en este caso, con la ESMA como sede central de la represión. No hizo falta agregar más nada. O sí: "¿Algo más? ¿Alguno más?", preguntó Mignone mientras anotaba algunas palabras en un papel. "Usemos la causa de Alejandra", dijo Carmen Lapacó. "Va a servir para involucrar al Ejército." Los dos expedientes habían quedado congelados en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires. "Información sobra", se

entusiasmaron. “Sí, pero ahora se trata de hacerle a la justicia una pregunta muy simple: ¿dónde están?” Scilingo siguió tratando de redimirse haciendo caso a lo que su conciencia parecía ordenarle. Él empujó la primera ficha de un dominó que aparentó reabrir el debate sobre la dictadura, algo que el gobierno no tenía entre sus planes.

Así, Abregú y Oliveira pulieron los dos escritos por la causa ESMA y Cuerpo I. Básicamente, estaban pidiendo, por un lado, el esclarecimiento sobre lo que pasó con Mónica, Alejandra y los demás detenidos que corrieron la misma suerte, y por otro, la lista de desaparecidos en la ESMA. Estaba en juego el derecho inalienable de las personas y los pueblos a conocer los hechos, a la dignidad y al duelo como patrimonio cultural que el Estado tiene el deber de garantizar, según los demandantes. O, como decía Mignone, “tener derecho al muerto” como un derecho humano. Según el escrito, había que reconocerles la muerte como símbolo que nos diferencia de los animales. Negándoles el derecho de enterrar a sus muertos, les negaban a las víctimas su condición humana. Le pidieron al tribunal que reconociera ese derecho como parte del ordenamiento jurídico argentino, que determinase el modo, tiempo y lugar del secuestro, y la posterior muerte y detención y el lugar de inhumación de los cuerpos de las personas desaparecidas.

“En tal virtud vengo a solicitar que este tribunal avance en el esclarecimiento de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos en la ESMA durante el período transcurrido entre el 24 de marzo de 76 y el 10 de diciembre 83. Ante la respuesta del Estado argentino negando la existencia de registros que documenten el destino final de esas personas, solicito a V. E. que en función de las pruebas oportunamente acreditadas se procure obtener información detallada sobre la suerte de los detenidos desaparecidos. He llegado al estado actual de las presentes actuaciones después de un prolongado trajinar para conocer el destino de mi hija. Consta en el expediente mi legitimidad para actuar. Soy parte. Por ello pido por el postergado cumplimiento de la obligación básica de investigar e informar sobre lo ocurrido en esa época. Es en este contexto que adquiere importancia el derecho a la verdad que en los últimos años ha comenzado a forjarse y que hace referencia al inalienable derecho de las personas y la sociedad a tener un conocimiento pleno de todo lo ocurrido.” Así se presentaron. Mignone firmó al pie.

Habían dado el primer paso dentro de otro objetivo demasiado ambicioso: institucionalizar el debate sobre la dictadura e incidir en el Poder Judicial comprometiéndolo con los derechos humanos, buscando respuestas al destino de los desaparecidos a través del desarrollo de causas judiciales. No largar la presa y que el Poder Judicial no se hiciera el distraído.

25
El caso Carrasco

En marzo de 1994, la madre del conscripto Omar Carrasco fue al cuartel polvoriento de Zapala, en Neuquén, a llevarle milanesas en una primera visita. Pero a Omar nadie podía ubicarlo. A ella y a su marido un oficial les dijo que el chico no estaba. Estaba, pero muerto. Lo habían asesinado días antes en una de los folclóricos “bailes” a los que los oficiales del Ejército someten a los nuevos reclutas. Algunos meses después, la prensa empezó a desnudar la cadena de irregularidades, complicidades y protección que los jerarcas militares estuvieron traficando alrededor de la investigación de la muerte de Carrasco.

Los pasillos del Edificio Libertador hervían de datos, confirmaciones y desmentidas, sin saber que a cien metros de ahí a Menem se le había ocurrido otra cosa. El presidente sorprendió a todos con una idea que hizo sonreír a miles de jóvenes: derogó la Ley de Servicio Militar Obligatorio. Menem volvió a tener altos porcentajes de popularidad.

Durante el proceso Carrasco citaron a declarar al capitán del Ejército Rodolfo Correa Belisle y cuando le preguntaron si existieron tareas de inteligencia en el batallón donde mataron al conscripto dijo que sí, y denunció encubrimientos. También expuso al general Martín Balza —por entonces jefe del Ejército—, quien lo sancionó. Correa no tenía derecho a defensa, y fue a consultar al CELS. Hubo muchos debates sobre la idea de aceptar patrocinar a un militar, pero primó la postura de Zaffaroni —el abogado que tomó directamente el caso— de representarlo. Él creía que a Correa lo estaban usando. “Lo primero que tendría que hacer es nombrarnos defensores ante el Consejo de Guerra, pero nos van a sacar a patadas, y a usted le van a dar la baja. De modo que lo único que podemos hacer es preparar el camino para llevar esto al plano internacional”, le dijo al militar apenas lo vio. El CELS llevó el caso a la CIDH y logró una recomendación de solución amistosa y tiempo más tarde la reforma del Código Militar. A Correa le devolvieron el grado y, a partir de entonces, comenzó a participar en las asambleas del CELS como socio.

En los bares y restaurantes vecinos del Congreso, los hombres políticos seguían analizando las consecuencias de la reforma de la Constitución. En el CELS, Emilio Mignone deslizaba una serie de

memos que fueron a parar naturalmente a las manos de sus compañeros de la comisión directiva. Mignone dejó pasar unas cuantas semanas y se mantuvo firme en sus ideas sobre el cambio que debía atravesar el CELS. Con su estilo didáctico y un poco acartonado —aun entre sus íntimos— siguió diciendo que el CELS definitivamente tenía que dejar atrás la lucha contra la dictadura como eje principal del trabajo. Y eso ya había empezado a pasar sin que nadie se hubiera dado mucha cuenta.

Mientras el área jurídica generaba más trabajo con nuevos temas, algunas tensiones inflamaban los pasillos del CELS e indefectiblemente estallaban cerca del archivo. Cristina Caiati continuaba con su política de zona restringida. No dejaba entrar a nadie en su sector salvo que se estuviera cayendo el mundo, y conservaba celosamente la llave del candado. Muchos ya la notaban incómoda desde la llegada de Abregú. Si había que tirarse al río, ella lo haría por Mignone, sin saber si había agua o no, pero por Abregú no se mojaría ni los dedos de los pies. Solo lo aceptaba formalmente, por ser el depositario de la confianza de su adorado jefe, pero no se ahorró cuestionamientos, como cuando criticó las asesorías a legisladores. “No tenemos nada que hacer ahí con esa gente”, bramaba.

Además, al personal nuevo empezó a caerle mal su estilo frontal y algo hosco. Ella y Mignone tenían una relación entrañable, con códigos propios, que acaso descolocaba a los demás, como cuando Mignone le sugería algo y ella le decía: “Pope, no me repita lo que ya me dijo porque ya lo sé”. Además, a Caiati le caía antipático que en otras áreas el gasto se incrementara y en el archivo no. A partir de entonces, percibió el comienzo de una movida para que el archivo pudiera ser gestionado de otra manera, más moderna, más dinámica. Caiati interpretó lo peor: “Me quieren sacar”, pensó.

Por supuesto que ante cada diálogo espinoso que ponía en duda su idoneidad (o que cuestionaba su terquedad) ella contestaba con algo que en rigor era una verdad a medias: “Yo nunca he retaceado información”. Ya había pasado tiempo desde que el archivo generaba información valiosa, como cuando cruzando datos impugnaban represores o informaban sobre los ascensos militares y nombramientos diplomáticos.

El archivo del CELS era un archivo de la resistencia, pero la nueva conducción entendía que además tenía que estar organizado. Además, ese lugar ya no era solo de la resistencia sino de la democracia. Lo veían como un lugar estanco y querían que entrase la luz. “Esto está muy mal organizado. Hay cosas que faltan y cosas que están duplicadas, o multiplicadas”, le dijo a Abregú un colaborador que había logrado meter la nariz en algunos de los ficheros. Según el testigo, por ejemplo, el programa de DESC (derechos económicos

sociales y culturales) iba armando su propio archivo, el de violencia otro y el de litigio internacional el suyo. Había que digitalizar y redefinir las políticas de acceso.

Las tecnologías informáticas de procesamientos de la información y manejo de archivos avanzaban más rápido de lo que Caiati estaba dispuesta a aceptar, interesarse y seguir. Por lo tanto, dejó de ser efectiva, por lo menos todo lo efectiva que los nuevos tiempos estaban demandando según la nueva dirección entendía. Pero, además, los lenguajes ya eran diferentes. De todas maneras, Caiati siguió en su lugar, mientras Abregú se había hecho la idea de tener paciencia de cara a un conflicto que no era solo tecnológico sino tal vez también ideológico: un archivo *user friendly* como quería Abregú contra el viejo archivo de la resistencia.

Las directrices del CELS ya no salían desde los ideales, desde el romanticismo ni desde la militancia, ni siquiera desde el dolor generado por ser familiar de una víctima. Parrilli y Zamora ya veían, desde lejos, que ese CELS poco tenía que ver con el que ellos habían integrado. Cuando se juntaban a intercambiar sus observaciones sobre la vida política, no podían dejar de comentar algo sobre el lugar que los vio nacer como abogados y como referentes de los derechos humanos. El CELS de ellos era el de los desaparecidos, los asesinados, los presos del PEN, los presos a disposición de los Tribunales de Guerra, como enumeraba Parrilli. Ellos dos entrevistaron y defendieron a decenas de presos, como Carlos Kunkel y Jorge Taiana (ambos ex miembros de la JP y detenidos durante la dictadura), Julio Piumato (gremialista y también dirigente de la JP) y Francisco "el Barba" Gutiérrez (militante peronista y ex detenido desaparecido).

Para ellos, desde mediados de la década del noventa, el CELS se había convertido en un organismo de derechos humanos similar a cualquiera de Estados Unidos. "Es absolutamente superestructural, no lleva casos, no tiene contacto con la gente", sostenía Parrilli. El CELS lo hacía, pero como ya los objetivos eran otros, los medios tenían que ser otros también. Era otro tiempo, otra gente, otra realidad. Era lógico que nada fuera lo mismo.

26
Violencia

El verano de 1997 parecía uno más en Pinamar, donde los bosques, la playa y el mar juntaban una vez más a políticos que hacían acuerdos, empresarios que calculaban negocios, modelos que protagonizaban olvidables campañas publicitarias estivales y, por supuesto, los periodistas que cubrían la temporada. Todos parecían a gusto cumpliendo su rol, excepto los hombres que tenían demasiado para perder.

Los negocios se habían mezclado con la política y el fotógrafo José Luis Cabezas tal vez lo sospechó. Había hecho la foto de tapa de *Noticias* donde se mostró por primera vez la cara del empresario Alfredo Yabrán, cuestionado por sus negocios amparados por el menemismo. Días después otro empresario postal se metió en la vida de Cabezas cuando lo invitó a su tradicional fiesta de temporada. Oscar Andreani lo recibió, lo saludó, se divirtió con él. Cabezas hizo lo que sabía hacer: sacar fotos y, aprovechando la noche, la pasó bien charlando con amigos y colegas, trago en mano. Cuando Andreani lo despidió, unas líneas de luz, las primeras del día, se dibujaron sobre la noche. Al rato Cabezas se subió al Ford Fiesta alquilado por la editorial para volverse al departamento, también alquilado por la editorial. No llegó nunca. Un grupo armado lo detuvo, lo desvió hacia una cava en las afueras del balneario, lo esposó, le metió dos tiros y en su propio Ford Fiesta le prendió fuego.

La Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (ARGRA) solicitó al CELS que la patrocinara como particular damnificada en la causa por el asesinato del fotógrafo, para lo que acordaron un convenio en diciembre de 1998. Para eso hubo que tramitar una solicitud de intervención para que ARGRA pudiera ser aceptada como querellante. No era normal que organizaciones sociales o gremiales actuasen en casos de este tipo y el Juzgado de Instrucción de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, donde estaba radicada la causa, rechazó el pedido. Pero meses más tarde la Cámara de Apelación aceptó que ARGRA interviniese con un argumento contundente: a Cabezas lo mataron por ser fotógrafo. El abogado Alberto Bovino tomó el caso y, como tenía que interrumpir su trabajo en Buenos Aires e instalarse en Dolores por un tiempo, ARGRA hizo una “vaquita” para financiar esos

gastos del juicio. Fueron a pedirles ayuda financiera a Horacio Verbitsky y a Magdalena Ruiz Guiñazú, entre otros. Ambos colaboraron.

Semanas después, la Argentina empezó a parecer más violenta que de costumbre, por otras razones, en otros pueblos y ciudades, como Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Cutral Có y Plaza Huincul, Tartagal y General Mosconi. Del sur helado al trópico salteño, el país ardió primero —como el auto de Cabezas— y se cortó después. La villa y los bolsones de excluidos formados por cada vez más desocupados se transformaron en espacios políticos. Ya no había delegados sindicales que representaran a los trabajadores en el escenario de un conflicto laboral, porque ya no había huelgas que hacer ni fábricas que tomar: era el tiempo del piquete. Los piqueteros no buscaban interpelar a un gerente de planta, al presidente del directorio o al de recursos humanos. No les importaba nada lo que un intendente de pueblo tuviera que decir. Los excluidos y los vecinos improvisaron asambleas a la vera de la ruta para interpelar al gobierno. “Esto es un pueblo fantasma”, “Somos un ejército de excluidos con hambre”, “Nos quedamos sin nada”, decían los carteles de los manifestantes. Eran empleados estatales cesanteados, obreros despedidos por las privatizaciones o docentes que hacía meses no cobraban su salario. Con las manifestaciones llegó la represión.

La lectura de Mignone no podía ser más sencilla cuando buscaba la explicación: “Los derechos básicos no están garantizados”, decía. Para él, los espacios públicos habían dejado de ser de dominio exclusivo de las burocracias para convertirse en escenarios de los reclamos de la gente. “Miles de participantes en protestas legítimas soportan la persecución penal como consecuencia de su acción antes que como reacción a la infracción de la ley penal”, escribió.

Aquella gran masa de manifestantes ya tenía bajas emblemáticas. El trabajador metalúrgico Víctor Choque había caído bajo las balas policiales en abril de 1995, en Ushuaia. Teresa Rodríguez quedó entre dos fuegos y recibió un balazo de la policía dos años después, en Cutral Có. En Salta, la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fabricó tantos nuevos pobres que hasta el propio gobernador Juan Carlos Romero tuvo que acercarse al borde de la ruta para negociar con quienes reclamaban. En cada foco de conflicto, no solo se cortaban las rutas sino la vida normal. No abrían los negocios ni los juzgados, los chicos no iban al colegio.

Gran parte del Poder Judicial criminalizó la protesta. Quienes reclamaron fueron rotulados como sediciosos, no como manifestantes. El juez Leónidas Moldes, de Bariloche, condenó a tres meses de prisión a la docente Marina Schifrin por haber participado en una marcha que repudiaba los recortes salariales y en defensa de la educación pública.

“Impedir y entorpecer el normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra y aire”, decía el escrito de la fiscalía. De paso, la acusaba por la rotura del parabrisas de un auto y el incendio de neumáticos, con lo que la maestra no había tenido nada que ver. Algo similar sucedió en Salta con los piqueteros del norte. El CELS trabajó intensamente para promover amparos colectivos que brindasen un paraguas legal que garantizara el derecho a la participación política de cualquiera que quisiera manifestarse.

27
La muerte de Mignone

El CELS pasó a ser un anhelado lugar de paso para cualquier junior en la etapa final de la carrera o abogado recién recibido. Al que no enganchaban con un caso, lo ponían a trabajar en alguno de los nuevos programas, en las clínicas jurídicas o en los nuevos proyectos de intercambios e integración con una red latinoamericana de universidades privadas como la Diego Portales de Chile, la Católica de Perú o las del Comahue y Palermo en la Argentina.

El panorama político local le hacía un guiño a Mignone. El triunfo de la candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires de Graciela Fernández Meijide, su vieja compañera de lucha de los comienzos, en las elecciones legislativas de 1997, lo entusiasmó. Lo que le borró el entusiasmo fue una dolencia que lo tenía a maltraer mientras preparaba un viaje a Alemania. Fue a ver al médico, quien lo esperaba con los resultados de sus análisis en la mano. Cuando lo saludó, el médico puso esa mueca que quiere reprimir la expresión de derrota pero no logra disimularla del todo. “Es cáncer”, le dijo. La próstata. En un segundo, la vida de Mignone tenía un nuevo antes y un nuevo después. El viaje a Alemania se canceló, pero eso fue lo de menos.

Entre las novedades más significativas que proponía la reestructuración, estaba un ambicioso programa de DESC creado y ejecutado por Víctor Abramovich a instancias de Abregú, que así estaba abriendo una forma de ejecutar ideas y un camino propio que si bien se manifestaban bajo el ala de Mignone, no eran los de Mignone sino una manera nueva de litigar casos de una manera innovadora y creativa.

El programa tuvo dos grandes éxitos que le permitieron continuar. El primero fue una acción por el caso de las vacunas del hantavirus, una enfermedad transmitida por los ratones que sacudió a Bariloche y en la segunda mitad de los noventa se estaba tornando epidémica. El laboratorio estadounidense que fabricaba la vacuna había decidido discontinuar su producción porque perdía dinero, lo que terminaría afectando potencialmente a una población de casi dos millones de personas en la otra punta de América. El CELS presentó un amparo y en 1998 la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo obligó al

Estado a producir la vacuna.

También ese año se desarrolló el otro caso. Fue cuando se apeló al Panel de Inspecciones del Banco Mundial —un mecanismo que nadie sabía que existía— para denunciar el mal manejo de los fondos destinados para el Programa Pro Huerta (un plan de agricultura social). Durante la gestión del presidente Menem, el Ministerio de Economía había desviado parte de la financiación para ese programa con el objetivo de cubrir otros baches del presupuesto. Luego de una investigación del CELS, se elevó un informe al Panel de Inspección, que a su vez intimó al gobierno para que reanudara y restableciera el presupuesto.

Además de hacer su trabajo, de meterse en las causas y revisar los números, Abregú tuvo que salir a improvisar la construcción de una unidad y de recomponer una fractura de la que nadie hablaba pero que se podía sentir en el aire. Había que ganar tiempo, porque en ese momento la enfermedad de Mignone redefinía el tablero de relaciones puertas adentro del CELS, las tribus se miraban unas a otras, se estudiaban y, sin quererlo, empezaban a quedar si bien no enfrentadas, divididas, o por lo menos con bastante conciencia de las diferencias, y esas diferencias iban a ser insalvables, sobre todo porque Mignone tenías las horas contadas.

El 16 de septiembre les escribió una carta a sus hijos con detalles sobre los bienes materiales que había en la familia pero sobre todo expresándoles su preocupación por Chela, con quien había compartido cuarenta y nueve años de su vida. “Soy creyente cristiano y estoy cierto de que me encontraré con Mónica en la casa del Padre y alguna vez con todos ustedes”, les dijo en esa carta. Cristina Caiati no lo veía desde hacía semanas. Prefirió no visitarlo. Laura Conte vivía con amargura la inminencia de su muerte.

El 21 de diciembre de 1998 encontró a todo el plantel del CELS reunido. Todos menos Mignone, que estaba internado hacía algunos días en el Hospital Alemán. Discutían, precisamente, qué pasaría ante su eventual fallecimiento. Hacía semanas que ya no iba por la oficina, y si bien todos sabían que estaba cada vez peor, no tenían el detalle de su deterioro, algo que los familiares de un enfermo de cáncer sí manejan al minuto. Ellos sí saben contar las horas.

Pero mientras Mignone siguiera vivo —aun si fueran unos pocos minutos más, hasta el final del día, al menos— las caras contemplaban un futuro en el que el enfermo aún flotaría en el CELS, recuperado o deteriorado o invisible, pero estando. Muerto, no. Hasta que sonó el *pager* de Abregú. Se llevó la mano a la cintura, desprendió el aparato de su contenedor de plástico y leyó la pantalla monocromática. Era un mensaje de Isabel Mignone. “Papá murió.” Lo hizo aferrado a la mano de su hijo Javier y rodeado de toda su familia, salvo Fernando, que

estaba haciendo un retiro para ordenarse diácono.

Abregú se quedó viendo el mensaje durante medio segundo y no supo si hacer un silencio dramático y luego decir la noticia, si no decir nada, si esperar hasta que el debate llegara hasta su conclusión. Levantó la vista y vio que muchos de los presentes seguían debatiendo. Le mostró el *pager* a Laura Conte, que estaba a su lado junto a otro estrecho colaborador del CELS, Agustín Colombo, un abogado que tenía dos hijos desaparecidos y a quien se le reconocía su compromiso y su amplio *insight* sobre geopolítica. Se miraron.

Del otro lado de la mesa el debate seguía como si lo que importara fuera la agenda, no la muerte. Pasaron otros cinco segundos, ninguno de los enterados atinó a decir nada, a decir qué, cómo o cuándo. Sin introducción, Colombo cortó el cotorreo: “Basta de pavadas, Emilio acaba de morir”. Se hizo un silencio helado. Por alguna extraña razón, lo primero que hizo Abregú fue darle un abrazo a Caiati.

Lo velaron en la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada, donde su padre había sido director. Decenas de funcionarios y ex funcionarios de todas las épocas y de distintos partidos, ex alumnos, colegas y obviamente gente del movimiento de derechos humanos pasaron por el velatorio. Hasta fue León Arslanian, entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y recordado ex miembro del tribunal que condenó a la Junta Militar de la dictadura durante el histórico juicio. Menem y Alfonsín mandaron coronas. Lo enterraron en el cementerio Parque Los Pinos, en la ruta 192.

Al cabo de pocos días, el camino era claro: Abregú y Laura Conte tomaban la posta bajo un eslogan cuasi partidario: “Hay que cuidar su legado y construir la unidad”. Simpática e integradora, una frase que respetaba el pasado y proponía futuro. Pero también polémica, por lo menos para algunos de los recién llegados al CELS, que sintieron que Abregú los estaba traicionando, que se estaba pasando al bando equivocado, a los melancólicos, a los obsesionados con la dictadura. Porque cuando Mignone en sus últimos años se dedicaba a proteger la historia, Abregú estaba generando el futuro del CELS. Era joven, tenía entusiasmo, desafíos. Estaba en otra cosa. Pero ahora él tendría que hacer lo mismo: cuidar el legado. El planteo también incluía un nuevo análisis de la legitimidad, la de él y la del cargo. “No puedo ser yo el que se cague en la historia”, pensó.

Algunos años después de su muerte, la socióloga e investigadora en temas de memoria María Eugenia Mendizábal se ocupó del archivo personal de Mignone. Trabajó en su casa, cerca de Chela, cuando su salud también estaba deteriorada. Había insistido mucho para hacer algo con ese legado, hasta que Víctor Abramovich se convirtió en director ejecutivo del CELS y consideró que, por supuesto, ese archivo

era demasiado valioso. En 2007 pidieron y obtuvieron el financiamiento para ordenar y clasificar rigurosamente casi ciento cincuenta cajas con material.

Mendizábal contaba que entre los papeles sobre muertos, desaparecidos y juicios históricos encontró las cartas que Mignone le escribió a Chela a lo largo de toda su vida, casi hasta el día en que murió. “Cartas llenas de amor”, decía Mendizábal, que empezaban con “Mi queridísima”. Chela las tuvo consigo hasta su último día. Las escondía debajo de la cama para que no se las sacaran.

28
Cambios

La comisión directiva no era una figura simbólica, pero a esta altura tampoco era una usina de energía. Entre que se juntaban cada quince días y que algunos empezaron a faltar por cuestiones de salud o particulares, quedó algo debilitada al cabo de unas semanas tras la muerte de Mignone. Ellos hacían y discutían la política, la relación con los organismos, cuestiones macro, pero siempre enfocados en los temas de memoria y acaso en derechos sociales. Los casos de violencia policial, por ejemplo, pasaban algo inadvertidos ante sus radares.

La reforma de la policía bonaerense que llevaba adelante Arslanian parecía marcar un nuevo rumbo en el área de seguridad, pero la vieja política y un entorno social y político favorable a la idea del gatillo fácil no le permitían desarrollarse. Arslanian no la tenía fácil en su cargo del Ministerio de Seguridad bonaerense bajo la gestión de Eduardo Duhalde. En plena campaña para su sucesión, el candidato oficialista Carlos Ruckauf sintetizó su doctrina de seguridad en una frase: "Hay que meter bala a los delincuentes". El ministro, que llevaba algo más de un año en el cargo, razonó que si el candidato de su partido planteaba una política de seguridad como la que él estaba intentando desguazar (básicamente, la de la "maldita policía" y su estructura de poder corrupta manejada por oficiales de la escuela represiva de la dictadura) ya no tenía nada que hacer en su función. Sintió que le empezaban a soltar la mano y, antes de que lo largaran por el precipicio, en agosto de 1999 renunció, según él, para no malograr las posibilidades ni del candidato a gobernador (Ruckauf) ni las del candidato a presidente (el propio Duhalde). Abregú comenzó a arrepentirse de no haber sido más activo en el acompañamiento de esa reforma. "La apoyamos, pero hasta ahí, y era estratégica", se castigaba.

Pero Abregú no iba a estar para siempre. Ya desde fines de 1997 había empezado a trabajar en su sucesión. Le empezó a pedir a Víctor Abramovich que trabajara gratis coordinando algunos casos. "Pero te pago unos juniors para que hagan el trabajo pesado", le concedió. Ariel Dulitzky y Marcela Tenembaum eran otros dos candidatos bien posicionados, pero Abramovich ya tenía un pie y medio adentro de la organización y partía como favorito.

La Fundación Ford, que había impulsado la carrera de Abregú hacia el CELS, ya parecía querer recuperarlo para sí misma. Le ofrecieron el cargo de *program officer* de derechos humanos, es decir, reemplazando a Alex Wilde pero con otro cargo, mientras que el chileno Augusto Varas sí tomó el cargo de “representante”, aunque con funciones distintas de las que tenía Wilde, que se estaba yendo a enseñar relaciones internacionales en la Universidad de Notre Dame. A muy poca gente le daría por rechazar una oferta semejante, y menos aún si de alguna manera había un gran par de gentilezas por devolver (la gestión para la maestría y el impulso para dirigir el CELS lo eran). Abregú aceptó, como era previsible. “Eso sí, me voy si hacen una donación para que al nuevo director le paguen el doble, si no nadie del perfil que ustedes quieren va aceptar trabajar por esta plata.” Le dijeron que sí, naturalmente.

La elección estaba bastante cantada. Abregú participó de la decisión, aunque sin voto. Cuando Abregú y la comisión del CELS estaban tirando la moneda en el aire para ver quién quedaría al frente, Abramovich estaba acabando una maestría en Washington. No era un yuppie, pero tampoco un militante, ni familiar ni exiliado. Era un abogado que de atender casos de Derecho Laboral en San Justo con humildes clientes particulares había pasado casi a jugar en primera. Antes de terminar su estadía en la capital de Estados Unidos ya lo habían designado para ser el sucesor. Abregú sentía que ese había sido el gran éxito de su gestión.

Cuando en agosto de 1993 se marchó a Washington, Abregú no era nadie en el CELS. Casi cinco años después se iba como máximo responsable y, a ocho de su llegada, dejaba un equipo sólido de veinticinco personas y muchos jóvenes que estaban preparados para influir. Entre ellos, se destacaban Andrea Pochak, Gustavo Palmieri y Carolina Varsky, todos abogados recientemente recibidos en la UBA que habían ido a hacer los prácticos de final de carrera y se habían quedado.

29
El Perro

No faltaba mucho para la partida de Abregú y con el vacío institucional que había dejado la muerte de Mignone, la comisión directiva del CELS pensó que necesitaban un presidente. Abregú le sinceró a Isabel Mignone que él era demasiado joven como para haber cultivado la visión política que la institución necesitaba. Laura Conte, que era la vice, ocupó la presidencia durante un año. Pero el grupo sabía que necesitaban un referente, una figura clave.

Salieron a buscar presidenciables, alguien que tuviera perfil alto. No asomaba un candidato claro, pero a alguien le sonó Horacio Verbitsky. Entre los miembros de la comisión cayó bien la idea, aunque temían que se "comiera" la institución. Sin embargo, tenían muy claro que su solvencia periodística lo había convertido en alguien muy valioso en la lucha contra la impunidad, comenzando por su cobertura del Juicio a las Juntas hasta sus artículos en *Página/12* y sus libros.

El plan contemplaba dos etapas: primero lo incorporaban como miembro, como para que fuera conociendo al CELS desde abajo hacia arriba, sabiendo que en un año lo harían presidente. A Caiati, la llegada del Perro —como le decían a Verbitsky— le parecía lo mejor que le podía pasar al CELS. Para Abregú, un candidato con ese perfil no recibiría objeciones dentro de la institución, pero no todos en el mundo de los derechos humanos estarían tan complacidos con su llegada.

Robert Cox quedó desconcertado cuando supo del nombramiento. No le cerraba que el cargo quedase para alguien que había estado en una organización armada y a quien nunca se le había escuchado decir que aquello había estado mal. "Es completamente desacertado", pensó. Graciela Fernández Meijide tenía hacia Horacio Verbitsky una admiración de tipo profesional. Y, como solía decir, "una lejanía afectiva" que se traducía como desconfianza. "Es ese tipo de personas que nunca quieren hablar de un tema y van creando un abismo. Vos te sentís juzgado y monitoreado por alguien que no permite que lo fiscalicen. Todos sabemos su historia y él nunca la cuenta", comentaba entre los suyos. Se refería a que toda la comunidad de derechos humanos sabía que había sido oficial de inteligencia de Montoneros.

Cuando Marcelo Parrilli se enteró del nombramiento de Verbitsky

también se sorprendió. “La verdad es que nunca tuvo nada que ver con la lucha del CELS. Es como si lo hubieran nombrado director de la Biblioteca Nacional o presidente de CARBAP [una organización de ruralistas]”, pensó. Zamora, en cambio, fue más cauto. Si bien se consideraba crítico del accionar de Montoneros, él separaba aquello de la lucha por los derechos humanos y más aún del CELS. Para él, la lucha por los derechos humanos era una lucha política.

En 1999, durante unas jornadas por los veinte años del CELS, Isabel Mignone reparó que Verbitsky estaba por ahí, moviéndose y ya actuando, naturalmente, como anfitrión. “Qué raro”, pensó. Le hacía ruido. Ella sabía que Verbitsky y su padre tenían buena relación por el libro *El vuelo*, y cuando Mignone quería publicar algo en *Página/12* solo tenía que hablar con Verbitsky para que sucediera. Sin embargo, Isabel Mignone nunca escuchó decir a su padre algo así como “me parece que Horacio Verbitsky sería bueno para dirigir el CELS”. Pero ahí estaba, ya como dueño de casa, heredándolo. Para Alicia Oliveira, la presencia de Horacio Verbitsky en el CELS y su investidura le dictaron un diagnóstico más contundente: “Es lo mismo que nombrar a Videla asesor en Derecho Constitucional”.

Segunda parte

1
Verbitsky

Horacio Verbitsky nació en 1942 en Buenos Aires y vivió la infancia de cualquier chico de la era dorada del peronismo en el seno de una familia modelo de la clase media suburbana, en Ramos Mejía. Su padre, Bernardo, era un periodista relativamente conocido que había prácticamente inventado la expresión “villa miseria” en unas crónicas publicadas en 1953 en el diario *Noticas Gráficas*. Su madre, Jana, fue una de las primeras ingenieras recibidas en el país.

Muy pronto Horacio se acercó a la realidad de lo que marcaría el primer día del resto de su vida cuando vio de cerca las bombas de la Revolución Libertadora. El 16 de junio de 1955 tomó el tren que lo llevaba desde su casa en Ramos hasta el Colegio Nacional Buenos Aires. Cuando salió del subte se topó con los aviones que abrían fuego contra los civiles que deambulaban en Plaza de Mayo. Un desconocido que lo sacó de la línea de fuego y un portafolios de cuero resistente lo salvaron de las balas. A contramano del espíritu “gorila” que reinaba en el colegio, y en sintonía con la simpatía que su padre había tenido por los primeros años del período, Verbitsky empezaba a reconocerse como peronista. Su padre ya estaba reformulando aquellas crónicas sobre la sordidez urbana en la novela *Villa Miseria también es América*. Cinco años después llegó el tiempo del periodismo para Horacio.

Una tarde de diciembre de 1960 fue a la redacción de *Noticias Gráficas* para pedirle dinero a su padre. Necesitaba comprar un tratado de anatomía para sus inminentes estudios de medicina. Su padre no estaba, pero lo atendió Orlando Daniello, uno de los editores. El encuentro le redefinió la vocación. Daniello le sugirió trabajar en vez de pedirle plata a su papá. “Venga mañana”, le dijo.

Al día siguiente, Horacio Verbitsky entraba en la redacción de *Noticias Argentinas* para empezar su carrera como periodista. Al principio le encargaron el pronóstico del tiempo. Después de escribir durante meses sobre el frío, el calor y la lluvia, una noche tormentosa le llegó el momento de demostrar que podía hacer algo más que llamar al Servicio Meteorológico. Ante le ausencia de otro cronista disponible, lo mandaron corriendo hacia un hotel de Flores donde la policía estaba sacudiendo el barrio con un operativo de desalojo. Un grupo de familias se estaba quedando en la calle. Le subalquilaban

habitaciones a un tercer inquilino que llevaba meses sin pagar y la policía no dudó en agarrársela con ellos. Mientras los oficiales controlaban los colchones sobre la vereda y confiscaban cacerolas, Verbitsky tomaba nota. Quedó muy impresionado por la escena y su talento le permitió transmitir la emoción que sintió en las páginas del diario. Al poco tiempo pasó a la sección "Espectáculos", donde se dedicó a escribir críticas de cine.

Para 1963, Verbitsky ya había pasado de *Noticias Gráficas* a *El Siglo* y *El Mundo*, donde conoció a Jacobo Timerman, que lo llevó a su primer gran desafío profesional. Horacio tenía apenas veintidós años cuando lo nombraron jefe de redacción de *Confirmado*. A excepción de Carlos Ulanovsky, todos los periodistas a los que tenía que dirigir eran más grandes que él. Ese mismo año conoció a otro periodista rionegrino que ya habla dado que hablar como cuentista. Era Rodolfo Walsh, quien recién volvía de la experiencia cubana de Prensa Latina. En 1968 Walsh lo convocó para trabajar en el *Semanario de la CGT de los Argentinos*, junto con su amigo Rogelio García Lupo. Para ese momento, el Horacio Verbitsky periodista y el Horacio Verbitsky militante se estaban convirtiendo en uno solo.

Dos años después, trabajó junto Francisco "Paco" Urondo y Milton Roberts en la corresponsalía de un diario mendocino armado por Timerman. Fue por entonces que Urondo lo bautizó con un apodo que le duraría para siempre: el Perro. En 1971 otra vez Timerman lo convocó para armar el equipo que formó *La Opinión*, junto con una especie de seleccionado conformado por Juan Gelman, Enrique Raab, Osvaldo Soriano, Tomás Eloy Martínez, Miguel Bonasso y Urondo, entre otros. Pero la relación entre Verbitsky y Timerman ya estaba rota y el Perro duró apenas seis meses en el diario.

Al año siguiente Verbitsky ya estaba en *Clarín* y daba un paso fundamental en su vida política: se integró a las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), aunque tras el primer regreso de Perón decidió ser parte de la fusión de FAP con Montoneros. Junto con Bonasso, Walsh, Urondo y Gelman fundó el diario *Noticias*, que era el órgano del grupo guerrillero.

Luego de la muerte de Perón, en una época de bombas, atentados y violencia cruzada dentro del peronismo, Verbitsky llegó a Lima, donde lo esperaba una vieja amiga, Patricia Valdez. Ella se había casado con un militante de izquierda y trabajaba dando apoyo a los argentinos, chilenos y bolivianos exiliados. Nadie, excepto sus compañeros dentro de Montoneros, supo nunca si Horacio Verbitsky iba y venía de la Argentina a Perú, si entraba y salía clandestino, o si trianguló el dinero del secuestro de los hermanos Born, como acusó el mítico montonero Rodolfo Galimberti, miembro de la Columna Norte que realizó el secuestro. Verbitsky siempre negó tener algo que ver con

eso.

Cuando llegó el golpe y trabajo y militancia eran una misma, fue parte de la Agencia de Noticias Clandestinas (Ancla) junto con Walsh y otros compañeros. En 1977 y tras la desaparición de Walsh, dejó Montoneros. Según escribió Gabriela Esquivada, Verbitsky cotejaba las evaluaciones de la conducción de la organización con la información que recopilaba en Ancla sobre lo que pasaba en los centros clandestinos de detención y concluyó que Mario Firmenich —jefe y uno de los fundadores de Montoneros— mentía. “Llegaban grabaciones sobre las caídas de los compañeros falseando las cifras, negando que hubiera gente colaborando bajo tortura.” Eso y la idea de una conducción que planteaba que había que reivindicar la sangre de los compañeros como único capital lo terminaron desencantando.

Verbitsky no tuvo que exiliarse. Según le contó a Eduardo Blaustein en una entrevista para la revista *Rolling Stone*, se las arregló para sobrevivir escribiendo recetas de cocina y un libro de yoga, se alquiló como escritor fantasma y abrió también un estudio de traducción. En 1977 Verbitsky seguía paseando por Buenos Aires con su propio DNI y trabajando a la luz del día como *ghostwriter*. Uno de eso trabajos le dio algunos dolores de cabeza décadas después. En su plan de escritor y periodista *freelance*, contactó con el comodoro Juan José Güiraldes, un viejo amigo de su familia desde que su padre Bernardo había escrito un perfil sobre Ricardo Güiraldes, el autor del clásico gauchesco *Don Segundo Sombra* y tío del comodoro. Güiraldes era un hombre de la Fuerza Aérea, pero estaba retirado desde 1951. Como civil, fue uno de los pilares de la primera etapa de Aerolíneas Argentinas. En plena dictadura, se le ocurrió escribir un estudio sobre el transporte aerocomercial en la Argentina y su potencial desarrollo. El entonces *ghostwriter* Verbitsky lo ayudó con la estructura del libro y las herramientas del lenguaje periodístico. Güiraldes lo tituló *El poder aéreo de los argentinos*, lo editó el Círculo de la Fuerza Aérea y en la dedicatoria aparece una nota inapelable: “Este libro no hubiera podido llegar a la prensa de no haber recibido el permanente aliento y la eficaz colaboración de Horacio Verbitsky”. No pasó mucho tiempo para que Horacio Verbitsky fuera rotulado de colaboracionista o doble agente. Nadie podía explicar, además, su supervivencia.

Décadas después, en el marco de las incipientes disputas políticas en los albores del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el escritor Marcos Aguinis recordó aquel vínculo con Güiraldes e insinuó insidiosamente sobre la paradoja que implicaba que un reconocido montonero paseara tranquilo durante la época más feroz de la dictadura. Meses después, Pedro Güiraldes, hijo del comodoro, pretendió confirmarlo en la revista *Noticias*. Añadió, además, que dado que su padre era el autor de los discursos de los brigadieres Agosti y

Graffigna, jefes de la Fuerza Aérea durante aquel período, era seguro que Horacio Verbitsky hubiera ayudado en la redacción de esos discursos, dijo Pedro citando comentarios de su padre ya muerto.

Verbitsky se hizo cargo de su trabajo en el libro de Güiraldes, pero siempre negó cualquier acusación de colaboracionismo y atribuía esas estocadas a los servicios menemistas luego de sus denuncias por corrupción. La única herramienta que tuvo para la desmentida fue una carta que el propio comodoro Güiraldes había mandado a *Ámbito Financiero* y que su dueño, Julio Ramos, nunca quiso publicar. Esa carta aclaraba los hechos de la manera en que Verbitsky las relataba, es decir, que su trabajo fue solo una colaboración técnica entre dos viejos conocidos. "Me sorprende que se vincule mi libro *El poder aéreo de los argentinos* y, por carácter transitivo, a Verbitsky, con el gobierno militar de 1976-1983 [...] No trata tema alguno que tenga que ver con la Fuerza Aérea, de la que fui retirado en 1951, un cuarto de siglo antes de los sucesos con los que se procura asociar a Verbitsky", escribió el comodoro. Julio Ramos le creyó, aunque a medias. Para él, si había sido escrito en esa época, junto a un comodoro y estaba editado por una dependencia de la Fuerza Aérea, era suficiente.

Jorge Lanata, ya convertido en editorialista estrella del Grupo Clarín, lo destrozó en una columna en el diario. Lo acusó de ser cómplice del golpe de Onganía contra Illia orquestado desde la revista *Confirmado*. También puso el dedo en la herida sobre el *affaire* Güiraldes al agregar que la oficina donde iba a trabajar estaba frente al estacionamiento de la Fuerza Aérea (aunque en realidad allí funciona la Biblioteca Aeronáutica) y cita a Güiraldes hijo, quien afirmaba que en esa oficina funcionaba el "lobby militar". Finalmente, se burló de él al decir que lo único que Horacio Verbitsky esgrimía en su defensa era la carta de Güiraldes, a la sazón, un lobbista militar. Su viejo compañero Rogelio García Lupo masticó bronca. "Es un delirio. Horacio nunca tuvo absolutamente nada que ver con los militares de la dictadura. Güiraldes para esa época estaba afuera de cualquier cosa", sostenía. El célebre Pajarito lo sabía de primera mano porque además era amigo también del comodoro, y él, como otros amigos, solo veían en Güiraldes un *dandy* que estaba en otra y andaba vestido de gaucho más que un "lobbista militar". También remarcaba que muchos ex guerrilleros tenían amigos dentro del Ejército.

La vuelta de la democracia reencontró a Verbitsky con periodistas y amigos exiliados y lo devolvió de lleno a su oficio. En *El Periodista* de Buenos Aires, donde trabajó entre 1984 y 1987, compartió nuevamente la redacción con Rogelio García Lupo y Tomás Eloy Martínez, y se dio el gusto de publicar una semblanza de Walsh, con el pretexto de la reedición de *Operación Masacre*. En el semanario, Verbitsky se encargó de la escritura de largas crónicas sobre el Juicio

a las Juntas. "En veinticinco años de profesión nunca tuve una tarea tan apasionante ni tan terrible", escribió en la publicación al cabo de la segunda semana de audiencias.

También estuvo en *El Porteño*. Cuando hicieron un suplemento sobre lucha armada y guerrillas, al corrector se le escapó la ortografía de su apellido y dejó que se publicara las dos veces con V corta. Además, el suplemento mostraba disparos de bala como parte de su diseño gráfico. La combinación de las dos cosas lo hizo explotar. Sus compañeros recordaron su bronca por varios días.

Por esa época, antes del nacimiento de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y con todo el exilio retornado, un grupo de periodistas empezó a armar una agrupación gremial bautizada Rodolfo Walsh. Un día, en una reunión, Eduardo Blaustein estaba explicando algo y dijo: "Nosotros, los periodistas jóvenes…". Verbitsky no lo dejó seguir: "¿Periodistas jóvenes? Yo a los veintidós ya era jefe de redacción de *Confirmado*", le cortó. Su soberbia ya se estaba convirtiendo en una de sus marcas registradas. Para otros era simplemente demasiado orgulloso porque tenía con qué.

Tres años después recaló en *Página/12*, donde hizo un aporte invalorable en la lucha contra la impunidad. Pocas veces solía ir a la redacción; trabajaba desde su búnker en la zona de Tribunales. Tenía un control férreo sobre su título y su bajada. Ernesto Tiffenberg, el director, tuvo que luchar durante años para que despiezara sus notas en diferentes recuadros para que no fuera una sola pieza kilométrica. En el diario, siempre apostó y movió su influencia a favor de su gente de confianza: Martín Granovsky, Claudia Acuña, Marcelo Zlotogwiazda y sobre todo a Gabriela Cerruti.

Quienes lo han visitado en su oficina, siempre vieron a un hombre con dedicación de monje, concentrado en su trabajo en un espacio sin ventanas, fuera del mundo, escuchando al saxofonista John Coltrane. Algunos lo definían como un operador político que traficaba influencias con fines nobles, otros lo siguieron tildando de guerrillero durante toda su vida. Y mucho más cuando a fines de los noventa se integró al CELS para militar por los derechos humanos desde una organización civil que ya era célebre por su trabajo en la búsqueda de justicia por los crímenes de la dictadura.

Cuando Verbitsky llegó al CELS, una de las primeras impresionadas fue Andrea Pochak. Fue cuando el entonces presidente Fernando de la Rúa enfrentaba una pequeña crisis política porque los presos de La Tablada estaban en huelga de hambre. En el CELS estaba convencidos de que había algunas desprolijidades en torno al debido proceso, por lo que Verbitsky dispuso intervenir. "Vamos a llevarle un documento a De la Rúa", propuso. Pochak le sugirió un *amicus curiae*, pero luego se quedó pensando: "¿Pero quién nos va a recibir? ¿A quién se lo vamos

a llevar?”. Días después Verbitsky la llamó. “Te vas para Olivos y te anuncias como CELS, te mandás y se lo entregás en mano al vocero”, le ordenó. Ese sábado, Pochak se fue para la Quinta de Olivos. Lo primero que pensó cuando se acercó al portal de la calle Villate fue: “Este me mandó al pedo”. Pero se abrió una puerta y luego otra. Pochak caminó hasta entregar en mano eso que el vocero de De la Rúa estaba esperando. Lo entendió como un cambio de épocas, las puertas que se le abrían a ella en Olivos eran las puertas que Verbitsky le abría al CELS. Carlos Acuña y Gastón Chillier coincidieron en que los beneficios de contar con Horacio Verbitsky serían incontables y que el saldo sería positivo, pero que tendría un costo: heredar todas las grandes peleas personales que Verbitsky venía arrastrando desde hacía años.

A Verbitsky lo respetan hasta quienes lo odian, pero todos tienen la sensación de que aún le queda algo por contar sobre su pasado en Montoneros. “Yo fui militante, de la FAP primero, de Montoneros después. Trabajé en la militancia en la organización, hacía informes de análisis de coyuntura política. ¿En qué hechos armados participé? No lo voy a decir. Nunca hablé ni tengo ganas de hablar. Cualquier cosa que diga será usada en mi contra”, decía. Muchos le reprocharon que nunca hiciera una investigación sobre casos de corrupción sobre la era K tal como las hizo durante el menemismo.

Se casó tres veces. La primera vez con Laura Yusem, dramaturga y directora teatral. Su segunda mujer fue María Wagner de Reyna, hija de un diplomático del Perú. La tercera es Mónica Müller. Tiene dos hijos varones. Blaustein lo retrató como una máscara, alguien de gestos mínimos. Solo le notó tristeza en los ojos cuando hablaba de sus amigos desaparecidos. En todo, Horacio Verbitsky prefirió siempre conservar otro tipo de memoria, como le escuchó decir Blaustein: “Nuestro tiempo ya pasó, la felicidad de entonces ya no vamos a volver a conocerla”.

2
Aterrizando

Gustavo Palmieri se había incorporado plenamente al CELS en 1997 y trabajaba en temas de Derecho Constitucional y violencia policial, y al poco tiempo vio que Verbitsky no estaba entrando para reemplazar a Mignone, acaso por el simple hecho de que Mignone estaba vivo y activo cuando desembarcó en el CELS. Pero cuando vio que a los pocos meses ya estaba tomando decisiones, empezó a pensar que la idea de Abregú viajaba más rápido de lo que todos pensaban. Horacio Verbitsky no era una presencia testimonial, era una figura muy fuerte que le iba a dar visibilidad al CELS y, al mismo tiempo, iba a transformar a la comisión directiva en un órgano no limitado solamente a la figura de Mignone. No porque los demás estuvieran de adorno; simplemente, no tenían demasiado peso del CELS hacia afuera. Si bien cuando entró a la comisión directiva nunca creyó que estaban formando a Horacio Verbitsky para presidente, a Palmieri le gustó la idea de que fuera más joven que el resto de los miembros de la comisión y que no fuera un familiar de víctimas de la dictadura. A Santiago Felgueras le llamó la atención que no convocaran a nadie de los organismos para ese cargo. "Qué raro, alguien que viene del periodismo, pero bueno, se irá viendo", pensó. Sabía de su solvencia profesional desde los tiempos en que trabajaba en Fiscalía y Horacio Verbitsky iba a buscar datos para *Robo para la corona*.

Por otro lado, Abramovich tenía fama no solamente de tipo intachable, sino de gran docente y de ser un abogado sabelotodo hasta la exasperación. Sin ser pedante, nunca nadie lograba agarrarlo en *offside*. Los más jóvenes alucinaban con su saber técnico, su conocimiento de cada ley, de cada resolución, ya fuera de un juzgado del Gran Buenos Aires o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Conocía cada "recomendación" de Naciones Unidas, cada acuerdo marco entre Estados, cada carta de intención firmada en alguno de los bloques regionales de América Latina, cada anteproyecto, cada acordada. Si bien pensaba que Verbitsky tenía una posición "compleja" sobre la lucha armada, su relación se iba haciendo no solamente más cercana sino más productiva. Bob Cox, en cambio, albergaba algunas dudas en relación con Horacio Verbitsky, pero sobre el pasado. Lo veía como el tipo que estuvo involucrado en

una organización armada. “Yo no sé si él renunció completamente a la violencia”, pensaba por entonces. Cuando un miembro del directorio le sugirió que fuera a ver al Perro a su oficina de Tribunales, Verbitsky tuvo que responder una pregunta muy directa de Cox. “Yo nunca maté”, fue la respuesta. Pero Cox esperaba que dijera algo más, algo parecido a “estuve mal”. Empezó a creer que la llegada de Horacio Verbitsky al CELS era una pequeña revolución personal del propio Verbitsky, que usó los derechos humanos para realizarla y que la gente lo dejó hacer.

Isabel Mignone ya olía que otro de los campos en disputa era el archivo. Cristina Caiati adoraba al Perro, pero quería más a los papeles que fue acumulando. Los demás detectaban una pelea sorda por la valiosísima documentación que la histórica responsable de los archivos del CELS guardaba celosamente. Caiati había tomado buena nota de las frecuentes reuniones de Horacio Verbitsky con Abregú y Laura Conte primero y sobre todo con Abramovich después. Ella nunca se enteraba de nada. Tan pendiente de eso estaba Caiati que tal vez por eso un grupo de mujeres de la vieja guardia salieron a hablar en defensa irrestricta de ella. Caiati juraba que no las había mandado, y que eran ellas las que temían por su permanencia en un área clave. Un día se le acercó Verbitsky: “¿Por qué algunas mujeres de la junta directiva vienen a preguntarme qué va a pasar con vos?”. Caiati ensayó algo relacionado a los vientos de cambio y que por ahí esos vientos la levantaban a ella también. En ese momento, Horacio Verbitsky zanjó la charla y la tranquilizó: “Con Cristina no va a pasar nada”. Su admiración por el Perro llegó hasta las nubes.

Por otro lado, el gran talento de Abramovich para la diplomacia lo hacía buen interlocutor para los funcionarios y para varias de las otras organizaciones de derechos humanos, excepto con Hebe de Bonafini, con quien casi no tenía relación. Aunque Hebe, de hecho, prácticamente no tenía ninguna relación con ningún organismo. Más de una vez Sergio Schoklender —entonces abogado de Madres y con un pasado que lo había marcado como el parricida más famoso del país junto con su hermano Pablo— le derivó algún caso, pero luego de que Hebe manifestara que “celebró” los atentados del 11 de septiembre de 2001 y Horacio Verbitsky le recriminara esa actitud en *Página/12*, las relaciones se congelaron. También María del Carmen Verdú —fundadora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)—, que venía trabajando el caso Bulacio, era otra de las personas que veían al CELS y sobre todo a Abramovich un poco lejos, tal vez por un contraste demasiado pronunciado de estilos. “A este tipo hay que pedirle audiencia para que te reciba”, pensaba cuando empezaron las charlas entre las dos organizaciones para ver si podían avanzar en bloque con la causa del adolescente asesinado por

la policía en Obras. Por eso días, Andrea Pochak pensaba lo difícil que le resultaría irse del CELS en un futuro. Ella había empezado a colaborar con el CELS en 1996, cuando aún era estudiante. Quería ser penalista y había sido convocada por Abregú para organizar un seminario de capacitación interna sobre Derecho Internacional de los derechos humanos. No lo pensó dos veces, para ella el CELS era lo máximo. Valoraba demasiado tenerlos a Abramovich y a Verbitsky juntos para charlar, debatir y aprender. Una sola vez ella y Horacio Verbitsky discutieron más de lo normal sobre un asunto político-legal relativo a la idea de montar una dependencia penitenciaria en Campo de Mayo. "Este tipo me escucha, pero gana todas las discusiones", creía. Estaba en lo cierto.

3
Los cinco presidentes

La mudanza de Rodríguez Peña a la sede de la calle Piedras fue un hito que también partió la historia en dos: se pasó de estar apiñados a circular cómodos por los pasillos amplios de la nueva sede, una casona reciclada con mucho cemento alisado, luz por todos lados, sala de reuniones, espacios para el *coffee break*.

Un par de años antes de que terminase el siglo XX, Roberto Saba había iniciado conversaciones con Augusto Varas —el representante de la Ford para la región andina y Cono Sur— para analizar la compra de una propiedad para Poder Ciudadano. “Los del CELS me están pidiendo lo mismo”, le dijo un día Varas. Claro, desde el punto de vista del donante, era mucho más factible una gran casa para dos ONG que dos casas, además de que existía una idea de dinamizar la sinergia entre ambas organizaciones. Varas dio el OK y Saba y Abregú decidieron darle para adelante. “Trabajemos juntos, armemos un buen propuesta, la presentamos a nuestros directorios a ver qué dicen. Si la quieren rechazar, que la rechacen y perderemos la casa”, acordaron.

La donación contemplaba cerca de un millón de dólares para la compra y una refacción integral del espacio para convertirlo en una oficina moderna. Entre Abregú y Saba pidieron presupuestos y eligieron un enorme inmueble sobre la calle Piedras al 500, no muy lejos de la Plaza de Mayo. También entre los dos improvisaron una serie de mecanismos de control de gastos de la obra que por poco se sale de presupuesto porque la viga principal estaba vencida. El nuevo edificio no los protegió de las andanzas institucionales de la Argentina. El caso de las Banelco en el Congreso y la renuncia de Chacho Álvarez como vicepresidente anunciaban malas noticias institucionales en el horizonte. En efecto, meses después, la fase más surrealista de la democracia argentina bajó a De la Rúa del poder e hizo desfilar por la presidencia a Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y finalmente a Eduardo Duhalde, elegido por el contubernio radical-peronista mediante una asamblea legislativa. Durante los picos de la crisis, entre el 19 y el 21 de diciembre de 2001, Carolina Varsky y algunos juniors corrieron para sacar gente de las comisarías, hablando con los comisarios y presentando hábeas corpus. La excitación del momento se mezclaba con la angustia. No

hubo descansos y trabajaron hasta cualquier hora, muertos de calor. “La incertidumbre en ojotas”, llamaban a esas trasnoches de no saber qué iba a pasar al otro día, no ya con los expedientes que iban acumulando sino con el país. Varsky estaba preocupada, pero de todas maneras alucinaba con su trabajo, se veía en el centro de una dinámica que la obnubilaba, parada en un lugar en el que podía trabajar militando en las causas que le interesaban.

Para esa época, Abramovich y Verbitsky se intercambiaban veinte mails por día, se veían dos veces por semana, y luego compartían la reunión del comité cada quince días y de comisión, cada mes. Cuando Abramovich llegó, el CELS tenía diez empleados; ahora esa cantidad aumentaba mes a mes y se encaminaba a las cincuenta personas. Ya eran equipos de trabajo. Parte fundamental de su función era combinar las visiones de la comisión directiva con los diferentes equipos, porque muchas veces esas visiones no eran compartidas. La primera discusión había sido por los hábeas data presentados por los militares. Abramovich pensó que no tenían que contestarlos porque no procedían. Verbitsky lo vio más políticamente y dijo: “No, los podemos usar para pedirles información”. Abramovich se inquietó porque él lo había pensado como abogado, pero a partir de entonces empezó a reconocer su olfato político. Otro caso fue la firme sugerencia de que el CELS debía acompañar al Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo), una iniciativa surgida desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y organizaciones gremiales y sociales que reclamaban algo muy concreta: “Ningún hogar pobre en la Argentina”. Esta vez Abramovich pensó que era meterse muy de cabeza en el tablero político, pero a la larga le hicieron ver que era importante y les permitía afianzar la relación con organizaciones sociales y con los sindicatos.

4
Un final para Bulacio

“Tenemos que encontrar un espacio orgánico donde militar esto, no podemos ser cinco pelotudos por la vida, con el cartelito de ‘BASTA DE GATILLO FÁCIL–BASTA DE REPRESIÓN’.” Para María del Carmen Verdú y sus compañeros de facultad, la masacre de Budge —ocurrida en 1987— catalizó la necesidad de dar un paso al frente y había convertido a un grupo de abogados recién egresados en una agrupación. La bautizaron Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Ese año, ya se daban cuenta de que Correpi nacía porque los demás organismos se resistían a tomar como parte de su agenda las distintas vertientes de represión policial e institucional vinculadas con el gatillo fácil, con las desapariciones ocurridas en democracia y las torturas en cárceles y comisarías.

Salieron a golpear puertas. Primero, a los ochos organismos tradicionales. Tuvieron respuestas muy variadas, en un sentido y en otro, pero dentro de la gama de los rechazos. Lo que a Verdú y su grupo les terminó de enseñar cómo estaba conformado el escenario y quiénes eran los actores en el ámbito de los derechos humanos fue la rotunda negativa de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que desecharon cualquier posibilidad de trabajo conjunto. “¿Cómo tienen la osadía de comparar a nuestro hijos revolucionarios de los setenta con tres negros en una esquina chupando cerveza?”, les retrucó una histórica y celebrada militante de la agrupación. En el CELS les brindaron una respuesta lo suficientemente vaga como para que no supieran si era un sí o un no. Solo en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre les prestaron atención, pero no por su genuino interés sino gracias al vínculo de León “Toto” Zimerman, un miembro de Correpi, quien a través del Partido Comunista pudo apenas negociar un saloncito donde reunirse.

A una de esas reuniones, un día fue a golpear la puerta el papá de Walter Bulacio. Ahí cambió la historia para Correpi. Entraron a la causa y a los pocos días estaban a la cabeza de una movilización de cuarenta mil personas.

Con los años, la gente de Correpi y del CELS comenzó a cruzarse en charlas y debates. Abregú y Gastón Chillier, un abogado del CELS, empezaron a derivarles casos: “Tenemos un gatillo fácil”, les decían.

Verdú se vinculó de buena manera con ambos. Con Chillier, como era vecino, se cruzaban en el supermercado.

Durante el proceso por el caso Pavón —un chico de dieciséis años fusilado por un policía en Dock Sud— Chillier la llamó: "Queremos copatrocinarlo para aprender", le dijo. El otro punto de la necesidad de trabajar con Correpi fue que Chillier no tenía matrícula de provincia. Acordaron avanzar juntos y una tarde Verdú lo llevó a un corte en Puente la Noria donde lo notó atemorizado, fuera de su lugar, mirando para todos lados por detrás de su hombro.

Las conversaciones de pasillo y el buen vínculo llevaron a que un día les pidieran una reunión formal. "Estamos muy preocupados por el crecimiento del gatillo fácil y las detenciones arbitrarias", le adelantó Chillier a Verdú por teléfono. En la reunión se volvieron a ver ellos dos, además de Abregú y dos miembros más de Correpi. Luego del repaso de casos, Abregú dijo: "El caso Bulacio es absolutamente paradigmático en ese tema. Nos gustaría que llevemos en conjunto el caso ante la Comisión Interamericana". Verdú se autotradujo al criollo: "Claro, nosotros tenemos el caso y ellos tienen el *know-how*". Ella no tenía ningún problema en reconocer que no tenía ni idea de cómo litigar ante la CIDH. El CELS estaba manifestando así la nueva impronta de Abregú: trabajar según los flamantes objetivos institucionales, llevando casos a cortes internacionales y establecer nuevos estándares de jurisprudencia. Como la defensa del acusado había optado por el mecanismo escrito, que iba a demorar la causa durante años, la gente de Correpi no necesitó pensarlo demasiado. Al cabo de unas horas decidieron que era una buena forma, por un lado, de mantener viva la causa y de aventar la posibilidad de la prescripción y cierre, y por otro, les permitía mantenerlo visible. Claro, una causa que está paralizada no es noticia.

Además, en el invierno de 2002 todos los titulares de la prensa eran para los militantes sociales Darío Kosteki y Maximiliano Santillán, muertos por los disparos de un comisario de la Policía Bonaerense en la estación Avellaneda durante una marcha. Los muchachos pasaron a la historia contemporánea de la democracia argentina como dos víctimas más de la violencia policial. *Clarín*, por su parte, se aseguró un lugar en los manuales del periodismo fallido cuando tituló en primera plana "La crisis causó dos nuevas muertes".

Fue entonces que CELS y Correpi estipularon una especie de acuerdo de actuación para el caso Bulacio. El planteo de las dos partes fue muy franco: "En lo que podamos andar juntos, vamos juntos, y en lo que no, cada uno hace la suya sin comprometer al otro". El acuerdo les parecía sólido, aunque no dejaba de ser divertido para ambas partes. Entre otros detalles, arreglaron un menú de palabras que no se podían usar. El CELS no "celebraría" tal o cual disposición del Estado

argentino y Verdú no contestaría ningún traslado escribiendo pestes sobre el "Estado burgués y opresor". Es decir, la posición enfrentada de ambos con relación a la concepción de Estado era lo que necesariamente cada uno quería mantener en alto. Verdú notaba que en las bases de fundación del CELS el eje central era el fortalecimiento de las instituciones democráticas, y el de Correpi hablaba de la necesidad de "deslegitimar las instituciones de la democracia burguesa" porque, según ellos, el Estado es un "órgano de clase que tiene como objeto garantizar y profundizar la opresión".

A pesar de esas miradas enfrentadas, siguieron trabajando juntos de manera muy eficaz. Incluso cuando Abregú dejó el CELS y su trabajo en el caso lo tomó Pochak. Ella y Verdú comenzaron un vínculo personal más cercano y abiertamente amistoso.

Verdú se felicitaba por el devenir de la causa. "Si no hacemos esto, estamos al horno y todo se va por la alcantarilla", se convencía. Pero sufría cuando tenía que tratar con la comisión. "Es que tengo un problema con los protocolos", les había advertido a sus colegas del CELS. En las audiencias, Pochak le pasaba notas: "No podés tutear a los jueces", "Ojo, apercibimiento por faltar al decoro".

En el juicio, CELS y Correpi se repartieron los alegatos y lo hicieron de manera separada. El CELS propuso cerrar el tema a través de una solución amistosa y se encargaron del lobby con los funcionarios de Duhalde para que, además, aceptaran la responsabilidad del Estado.

Finalmente llegó el día. Tras un puñado de audiencias en Washington, la CIDH impulsó la solución amistosa en la cuestión de fondo respecto al caso Bulacio. El 6 de marzo de 2003, la corte determinó que el Estado argentino había aceptado su responsabilidad y que las partes habían "llegado a un entendimiento básico sobre los hechos violatorios de la Convención Americana". Luego, encomendó al Estado reparar a la familia de la víctima. Cuando llegó ese momento, la evaluación de Verdú sobre el trabajo conjunto de las dos organizaciones se redujo a una sola palabra: "Impecable".

5
Llega Néstor

Néstor Kirchner representó un papel que se inventó para él mismo, para ese momento, para ese lugar. Como un autor afinado, eligió el vestuario: saco cruzado y mocasines. Era multimillonario, pero prefirió jugarla de pícaro con los de abajo y con los de arriba. El cuerpo de sus alocuciones tenía que ver con la memoria, la verdad, la igualdad. Plantar cara a “los garcas del pasado que fundieron al país”, sugiriendo sus simpatías montoneras al hablando de “los compañeros” de los setenta, de los ideales. Una épica de la resistencia, del individuo por sobre el sistema, de lo colectivo por sobre lo individual. La clase media que no lo conocía, compró. Estela de Carlotto, también. La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo había conocido a Cristina Fernández de Kirchner cuando la inminente primera dama era parlamentaria. El primer momento de entrecasa que compartieron fue en un domicilio particular durante una visita del escritor portugués José Saramago. Esa fue la primera vez que se sentaron a una misma mesa, una junto a otra, y al lado del famoso novelista.

Sin embargo cuando Menem se retiró del *ballotage* y le sirvió a Kirchner la presidencia con el veintidós por ciento de los votos, Carlotto les preguntó a sus compañeras de Abuelas: “¿Quién es este hombre?”. Empezó a averiguar y solo consiguió algunos datos duros de sus mandatos en Santa Cruz. Néstor Kirchner dejó de ser un extraño cuando un día Cristina la llamó a la casa para hacerle una consulta. Sin ser amigas, la citó en su domicilio porteño, no lejos del Congreso de la Nación. Ahí conoció al futuro presidente. Vio a los hijos moviéndose por la casa y luego la nariz de Kirchner asomándose por una puerta. “Hola, Estela, qué gusto”, le dijo. Luego le informó a su esposa: “Cristina, me voy a comprar zapatos para la asunción”, avisó. “Bueno, pero no te compres mocasines”, mandó la inminente primera dama. “Sí, me voy a comprar mocasines”, le retrucó el marido. “Pero por lo menos que no tengan hebilla”, zanjó Cristina. Días más tarde, en la asunción, Estela ya era una de las invitadas especiales y la duda o el misterio sobre el patagónico se fue transformando de a poco en ilusión. Néstor Kirchner recibió a Abuelas y a otras organizaciones de derechos humanos y sociales antes del primer mes de iniciado el mandato. Todos querían plantarle su agenda

y entregarle un petitorio. El de Abuelas era realmente amplio. Carlotto estaba muy asombrada: “Alfonsín tardó más de tres años en recibirnos y este nos invita enseguida”, le comentó a una de sus acompañantes mientras esperaban en un salón de la Casa Rosada. Había gente del MEDH, del Serpaj, de la APDH, de la LADH, de Familiares de Detenidos y del CELS. Las agrupaciones le pidieron por los pobres que había dejado el neoliberalismo, por los afectados por la inundaciones en Santa Fe, por los indígenas, le pidieron que bloquease cualquier intención de rubricar una ley antiterrorista, le rogaron que no reprimiera la protesta social, que sostuviera el “no” al ALCA, que no firmase ningún acuerdo con Estados Unidos que excluyera a ciudadanos norteamericanos de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional y, finalmente, lo más importante: solicitaron al presidente que enviase al Congreso un proyecto de ley para declarar nulas las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. Estuvieron hablando horas, con Néstor Kirchner en la punta de la mesa, haciendo desfilar a ministros y secretarios, según se sucedían los petitorios, para que ejecutasen los pasos necesarios. “Todo lo que ustedes piden hay que hacerlo. Pero si no empezamos con la justicia, nada de lo demás sale”, empezó a cerrar el presidente. Cuando salió de la Rosada, Carlotto se sintió encantada con el desconocido. Néstor Kirchner ya sabía que iba a transformar la Corte Suprema.

La derecha, por su parte, ya había avisado que no solo le iba a tener nula paciencia sino que lo iba a tirotear desde el principio, cuando Claudio Escribano (el único hombre fuerte del directorio de *La Nación* que no lleva apellido Mitre o Saguier) pretendió apretarlo con un pliego de cinco puntos al que adherir durante su primer año de mandato, según Verbitsky publicó en *Página/12*. Lo que era un problema si se consideraba especialmente el punto dos, donde Escribano le ordenaba al presidente electo que no debía revisar la lucha contra la subversión y le exigía una reivindicación de las Fuerzas Armadas por esa “misión”.

6
El cambio

Las reuniones en la Casa Rosada entre el CELS y los demás organismos eran cada vez más frecuentes. “Esta lógica no va a ser sencilla de manejar”, pensaba Santiago Felgueras, que se había estremecido cuando Kirchner dejó entrever en su agenda la intención de apoyar la reapertura de causas contra los jefes de la dictadura. Para esa época, Luis Moreno Ocampo estaba partiendo hacia La Haya para ser fiscal de la Corte Penal Internacional, donde lo estaban esperando varios casos de atrocidades en África. Desde que había sido fiscal y sobre todo luego tras los indultos, sentía que tenía un montón de información que no servía para condenar a los comandantes, pero sí para explicar lo que pasó. Había tratado de escribir un libro por el solo hecho de que consideraba riesgoso en la Argentina de Menem negar, relativizar o neutralizar la historia de crímenes de la dictadura. Casi mientras se estaba yendo, vio que Néstor Kirchner se estaba dando el lujo de fabricar un nuevo espacio, porque en 2003 los derechos humanos no significaban ningún riesgo político o institucional, no había ni golpe ni sublevación posible, y lo hacía creando rivales y usando la mística de los setenta como medio y poniendo a los organismos en un lugar central, cuando siempre habían sido marginales.

Carolina Varsky se dio cuenta de que Néstor Kirchner iba a meterse seriamente con los derechos humanos cuando anuló el decreto que impedía las extradiciones, un tema que venía trabajando el juez español Baltasar Garzón. A partir de entonces, si no se concedía la extradición, por lo menos se liberaba la vía para investigar en la Argentina a personas acusadas de crímenes de lesa humanidad. Pero no creía que iban a poder cambiar la Corte Suprema. “No sé si lo vamos a lograr, pero sé que tenemos razón”, reflexionaba. Abramovich advirtió que lo que más le convenía era conservar una posición acorde con la línea histórica: “Una organización de control con contacto político”, según pensaba, una metodología que se podía resumir en “No te hago un *paper* secreto”. No lo estaba consiguiendo del todo. La comisión directiva y los “nuevos”, además de Verbitsky, solían tener algunos desencuentros. Él miraba más desde el CELS hacia otras audiencias y escenarios, y los otros estaban, si no obsesionados, por lo menos muy sensibilizados en cuanto a cómo plantear la relación con

el gobierno.

Mientras avanzaban los contactos cruzados con otras organizaciones para elaborar un proyecto para renovar la corte, el gobierno —desde Presidencia— los convocó para ayudar a pensar un marco regulatorio de servicios públicos. La reunión fue reservada y Abramovich llegó con Horacio Verbitsky y Horacio Basualdo, economista y miembro de la comisión directiva del CELS. Los estaban esperando Néstor, Cristina y Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico. Salieron luego de casi tres horas sin demasiadas certezas, excepto por el hecho extraordinario de que estaba llegando un tiempo en que las personas más poderosas de la pirámide política argentina les pedían consejos. No era la primera vez que Basualdo se sentaba a hablar con Néstor Kirchner: tiempo antes había sido convocado para hablarle de una idea que rondaba por su cabeza: "Estuve hablando con Lula [da Silva] y se me está cruzando por la cabeza pagarle al FMI", le sinceró en ese momento. Luego los volvieron a tener del otro lado de la mesa de discusión cuando se proyectó el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, que era muy resistido por las provincias. Entonces el interlocutor más regular era Alberto Fernández, además de Eduardo Luis Duhalde —secretario de Derechos Humanos— y el propio presidente, a quienes les llevaron a la Rosada un informe de varias decenas de páginas que también se tuvo que discutir en las sombras, porque hacerlo público era anticipar el pataleo de los gobernadores. Mucha de la energía de una organización civil se va en el armado de planes y equipos de trabajo que generan proyectos, informes de escenarios, informes preparatorios, informes evaluatorios, informes pre-cumbre y post-cumbre. Los miembros del CELS egresados de las universidades norteamericanas venían muy habituados a ello y empezaron a llamar cada vez con más frecuencia "lobby" y "*advocacy*" a hacer cosas como reunirse o hacer gestiones diversas, conseguir entrevistas para pedir fondos, o reuniones para abrir la puerta a otras reuniones. Toda esa dinámica puede llegar a ser muy frustrante si ninguna de esas gestiones y tareas de "incidencia" terminan no incidiendo en nada y solamente generando papeles para las áreas grises de los ministerios. Pero eso estaba por cambiar.

7
Néstor y yo

Ya había pasado el día de la elección, el *ballotage* frustrado con la fórmula Carlos Menem–Juan Carlos Romero y las chicanas por el veintidós por ciento de los votos de los votos obtenidos. Una cifra miserable para asegurar representatividad y manifestar poder. Pero a Kirchner no le quedaba otra. Faltaban algunos días para el 25 de mayo, la fecha programada para la asunción.

Entonces, sonó el teléfono de Horacio Verbitsky. “Mirá… Kirchner quiere saber si estás dispuesto a hablar con él.” Era Artemio López, el dueño de la consultora eQuis, que venía creciendo bastante en los años anteriores, disputando prestigio y clientes con Gallup, Graciela Römer y Rosendo Fraga, las históricas consultoras del escenario político local. “Sí, por supuesto”, le contestó sin dudar. Tuvo presente que el CELS siempre había buscado una relación institucional con el Estado. “Claro, ¿cómo no voy a querer dialogar con el presidente?”, le confirmó. Verbitsky siguió con sus cosas y a la media hora volvió a sonar su teléfono. Era Kirchner, desde Santa Cruz. Luego de saludarse y presentarse, el presidente electo fue al grano: “Estoy armando el gabinete. Yo he seguido mucho el trabajo del CELS. Ustedes han trabajado mucho en el tema de los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas, y yo tengo ahora que decidir la designación de las cúpulas militares. Quiero consultar con ustedes y ver algunas cosas sobre ese tema”, le propuso.

Verbitsky se sorprendió pero no se achicó. Le pareció estar a medida de la demanda: “Mire, hay un tema previo. Hay gente de su equipo de trabajo, de su futuro gobierno, que está planteando la amnistía para los crímenes de la dictadura, que quieren cerrar ese capítulo”, aventuró a decirle el Perro. “De ninguna manera. Quien haya dicho eso miente, porque la política de mi gobierno, en esa materia, va a ser memoria, verdad y justicia, y nada más que eso. No me voy a apartar de eso”, le aseguró Néstor Kirchner. Verbitsky respiró, le pareció una buena noticia, pero no podía sino creerle a medias.

Tomó aire y empezó a darse el lujo de aconsejar al presidente electo: “El jefe del Estado Mayor tiene que ser una persona de confianza del presidente. ¿Usted conoce al jefe de la Brigada de Santa Cruz? ¿Usted lo conoce bien?”, indagó Verbitsky. “Sí, sí, lo conozco.

Sí, sí, le tengo mucha confianza", le contestó Néstor Kirchner. Se estaba refiriendo a Roberto Bendini, jefe de la Brigada Mecanizada XI, de Río Gallegos. Sin embargo, a los ojos de Kirchner no parecía destacarse lo suficiente como para comandar el Ejército. "¿Y por qué le parece un buen candidato?", le replicó Néstor. Verbitsky continuó su explicación: "El jefe del Estado Mayor tiene que ser una persona de confianza del presidente. Si usted lo conoce, si tiene confianza en él, nadie puede objetar que usted elija una persona de su confianza. Y la enorme ventaja que tiene esto es que, por tratarse de un general de brigada, y de una brigada que no es de las más importantes, pasa a retiro a todos los que están adelante y hace una limpieza de este partido militar que con [Ricardo] Brinzoni está tratando de reaparecer. Es una purga fantástica con veintisiete generales que se van a retiro", le sermoneó Horacio Verbitsky. "Y bueno, parece que ese debería ser el candidato", concluyó.

Verbitsky no conocía a Bendini, pero institucionalmente había evaluado que significaba una idea firme tendiente a sacarle el peso de la "ideología" del tema. A todo eso, José Pampuro —futuro ministro de Defensa— estaba convencido de que su base de acuerdos con la cúpula militar implicaba que sus jerarcas continuaran por lo menos hasta el final de ese año. Verbitsky tenía otra mirada: "Es una marca, un gesto de autoridad del nuevo gobierno, que es fundamental que se haga en el primer día. Condiciona todo lo que viene después", le agregó a Néstor, quien solo tuvo espacio para replicar que no lo había pensado.

Cuando Kirchner llegó a Buenos Aires, volvió a llamar a Verbitsky para charlar personalmente. Ya era el presidente. Luego de los abrazos y las felicitaciones, lo primero que le mencionó —medio entre risas— fue la reacción de Pampuro cuando le comunicó que Bendini era su candidato a jefe del Ejército. "Entonces tengo que renunciar, ya les prometí a varios que se quedaban", le comentó Pampuro a Néstor, quien por supuesto sabía que estaba escuchando algo conocido. "No, no te vas a ir por eso, la decisión la toma el presidente. Vos no podés hacerte responsable de una decisión que no tomás vos", aleccionó a su inminente ministro de Defensa. Con el correr de los meses, Verbitsky se sintió más influyente que antes, porque no solo había aconsejado cómo manejarse con respecto al jefe del Ejército, sino que vio cómo Kirchner replicaba ese esquema de "vecino conocido". En la Marina nombró como titular al almirante Jorge Godoy —ex jefe de la Base Naval de Ushuaia— y en la Fuerza Aérea, al brigadier Carlos Rohde, destacado en la Base Aérea de Río Gallegos, en Santa Cruz.

A partir de ese momento, Verbitsky y Kirchner empezaron una relación tan cercana y de tanta complicidad como la del CELS con el gobierno. Como en los albores de cualquier matrimonio, todo sonaba a

futuro en común y concordia, pero también sabían que llegado el momento nada ni nadie los iba a exceptuar de los pases de factura. En el caso de aquellos militares designados, los nombramientos de Néstor Kirchner tampoco los iban a salvar de nada. En marzo de 2015 el almirante Godoy fue condenado a dos años de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El CELS lo denunció por actividades de espionaje ilegal en la Base Aeronaval Almirante Zar y la justicia dio por probado que ese accionar era habitual y constituía una práctica institucional del Sistema de Inteligencia Naval.

8
El cuadro de Videla

Kirchner le dijo "Proceda" y Bendini procedió. Bajó el cuadro de Videla y el ordenanza, con guardapolvo azul limpio, lo recibió para perderse por un pasillo con el retrato bajo el brazo. Unos segundos después, el jefe del Ejército descolgó el cuadro de Reynaldo Bignone. Otro ordenanza lo atajó de sus manos y tomó el mismo camino que su compañero. Los dos se perdieron detrás de una puerta de vidrio donde otros trabajadores de guardapolvo azul miraban congelados.

Del otro lado, en la galería donde cuelgan todos los retratos del Colegio Militar de Palomar, Kirchner respiró. A Bendini todavía lo esperaba una reunión con los casi treinta generales que estaban presentes ahí. Quería explicarles por qué fue él quien se había hecho cargo. Todo el gabinete estaba cerrando filas detrás del presidente. Fue el primer aniversario del golpe de Estado de 1976 de la gestión presidencial de Kirchner.

Los generales seguían tan incómodos como cuando un rato antes habían escuchado el discurso. "Que el 24 de marzo se convierta en la conciencia viva de lo que no debe hacerse en la patria. Nunca más se tiene que volver a subvertir el orden institucional en la Argentina", dijo Kirchner. Los militares sabían que se los decía a ellos. Desde allí partió rumbo a la ex ESMA y, cuando llegó al predio de Núñez, la historia de los derechos humanos en la Argentina ya era otra. En el más emblemático centro de detención clandestino de la dictadura volvió a pronunciar otra frase que marcaba el antes y el después: "Vengo a pedir perdón en nombre del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante veinte años de democracia tantas atrocidades". Fue el símbolo de que Néstor Kirchner iba a hacer todo o casi todo lo que las organizaciones siempre quisieron.

De hecho, según Verbitsky, la idea había sido de él. Cuando en su momento se lo plantearon a los gobiernos anteriores, no les prestaron la más mínima atención. "Se lo sugerí a [Ricardo] López Murphy cuando era ministro de Defensa de De la Rúa y a [Horacio] Jaunarena, que era el ministro de Duhalde. Los dos se rieron, directamente se burlaban", recordaba.

Pero con Néstor Kirchner sería diferente. Todo empezó cuando el ministro de Defensa Pampuro visitó el CELS y Verbitsky le propuso la

bajada de los cuadros. “Qué propuesta interesante”, dijo el ministro. Hizo una mueca de aprobación pero se lo notaba nervioso. Días después, a Verbitsky le sonó el teléfono. “El presidente los va a recibir para hablar del tema de los cuadros”, le comunicaron. Verbitsky llegó a la Casa de Gobierno y luego de los apretones de manos fue al grano y empezó a argumentarle al presidente, que lo escuchaba atento del otro lado del escritorio: “La idea es básicamente mostrar que el período de la dictadura es un agujero negro en la historia de las Fuerzas Armadas, que no hay una continuidad. No son las Fuerzas Armadas que empiezan con San Martín y tienen una continuidad hasta ahora. Hay una catástrofe en el medio, como fue el nazismo en Alemania, y que nada de aquello puede ser reivindicado ni considerado dentro de la normalidad institucional. Y por eso en el lugar donde se forman las nuevas generaciones militares no puede haber una galería de honor donde están los dos dictadores. Por eso hay que bajar los cuadros, Néstor”. Kirchner, sabiendo que tenía que estar más tranquilo que su interlocutor, esbozó una media sonrisa y le propuso: “Lo hacemos en veinticuatro horas”. Horacio Verbitsky quedó congelado de la sorpresa. “Que vengan todos los organismos conmigo y bajamos los cuadros”, agregó.

Pero Verbitsky tenía pensada otra cosa. Con confianza en sus ideas y en la relación que había florecido con el presidente, que le permitía tutearlo, le contrapropuso: “A mí me parece que hay dos alternativas: un acto puramente institucional donde el comandante en jefe da una orden a sus subordinados, los subordinados cumplen la orden en una ceremonia castrense, sin presencia de nadie más. La otra, si se quiere darle un contexto político, es que se invite a sectores muy diversos de la sociedad, a organizaciones sindicales, empresariales, culturales, religiosas, no solamente a los organismos…”. El presidente lo cortó y cambió de tema. A los pocos minutos lo despidió. Estela de Carlotto, por esas horas, le iba a decir lo mismo.

El 23 de marzo por la mañana Kirchner volvió a llamar a Verbitsky. “Bueno, mañana vamos a bajar los cuadros, venís conmigo”, le propuso. Verbitsky se sintió un poco incómodo porque otra vez tendría que corregirlo. “Mirá, Néstor, me parece que yo te planteé otra cosa…” Néstor Kirchner lo tomó como una objeción. “Si no te animás, voy yo solo.” Y fue solo.

No hubo gente del CELS en Palomar. Varsky sabía que Verbitsky había conversado la idea de descolgar los cuadros con el presidente algunos días antes y sentía que algo de aquello le pertenecía. Ese día, ella estaba volviendo a trabajar luego de su licencia por maternidad. Nunca había estado en la ESMA, así que fue para allá. Le hicieron un tour, la llevaron por todos lados. Las garitas de guardia estaban llenas de jóvenes y todo el mundo se metía por todos lados, entraba y salía

por pasillos y corredores, cruzaba puertas. Algo le impactó: una bandera gigante del Che Guevara colgada en lo más alto de la fachada, junto al Escudo Nacional. Compartió el acto con una persona cuya familia estuvo secuestrada. Cuando terminaron los discursos, se abrazaron como si fueran compañeros de toda la vida. “Aquí podemos, este es nuestro”, pensaba. Estaba movilizada y como golpeada en el rostro por una sensación de esperanza. No tenía mucho más tiempo para quedarse. La niñera estaba esperándola, así que tuvo que correr a tomar el 130 para volver a su casa y luego seguir a la Plaza de Mayo. Recién cuando el colectivo volvía hacia los barrios céntricos por Avenida del Libertador se puso a reflexionar con más tranquilidad sobre lo que significaba ese señor que era presidente y había abierto las puertas de la ESMA. Le pareció una ficción, pero pronto se le hizo una mueca de enojo. “Pidió perdón en nombre de la sociedad como si fueran los que inventaron esto”, pensó. Kirchner ni nombró a Alfonsín, no hizo referencia al Juicio a las Juntas, y a Varsky tampoco le pareció justo que el presidente se haya olvidado de todo el trabajo del movimiento de derechos humanos, empezando por la inconstitucionalidad de las leyes que el CELS había promovido en una causa de Abuelas tres años antes. Pero en ese momento priorizó el festejo.

Muchos pensaron que el cuadro de Videla y la ESMA con la bandera del Che Guevara eran un poco sobreactuados, pero ya se estaba gestando el envío del decreto que declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y el decreto que anulaba las extradiciones. El proceso parecía pensado para evitar tener que liberar a represores, porque si no se conseguía la extradición, por lo menos estaba habilitada la vía para investigarlos en la Argentina. Esto ya no sería ni una puesta en escena más o menos poderosa ni un símbolo. Esto iba camino a convertirse en ley.

9
La reapertura de los juicios

El presidente parecía saber lo que quería y qué hacer para conseguirlo. La orden de avanzar con la derogación de las leyes del perdón no tenía vuelta atrás. La idea había sido resistida por algunos sectores de la UCR pero empujada en bloque por el PJ —decidido a alinearse sin fisuras con Kirchner— en el parlamento. Sin embargo, el entonces vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, Daniel Scioli, había puesto nerviosos a unos cuantos cuando dijo: "En un país serio, las leyes no se anulan". El 21 de agosto de 2003 el Congreso sancionó la ley 25.779, que declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Ese mismo día, dio rango constitucional a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de la ONU.

Trece años antes, el CELS se había constituido en querellante en el marco de la causa por la desaparición de la familia Poblete, en la que estaban acusados, entre otros, los jefes del Primer Cuerpo de Ejército, como Suárez Mason, y otros tristemente célebres represores, como Julio Simón, alias El Turco Julián. En la calle Piedras tenían motivos para celebrar. El camino hacia la reapertura de los juicios lo terminó de abrir el histórico fallo del juez Gabriel Cavallo en marzo de 2001, cuando declaró "inválidas, inconstitucionales e insanablemente nulas" las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Tras la decisión política de Kirchner, la posibilidad de avanzar con la reapertura de los juicios por crímenes cometidos durante la dictadura quedó en manos de la justicia. En junio de 2005 la Corte Suprema —con las firmas de Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Antonio Boggiano— declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y reabrió el desfile por Tribunales de todos los militares cuyo enjuiciamiento se había interrumpido en 1986. Iba a ser un camino largo, caso por caso.

Tiempo después, Gastón Chillier, el nuevo director ejecutivo del CELS, en reemplazo de Abramovich ratificó la postura de la institución —que era la del gobierno— en una extensa columna que le publicó *La Nación*. Allí defendió la reapertura de los juicios y argumentaba que las críticas buscaban deslegitimar los procesos de justicia cuando

comenzaban a ser investigados los civiles que tuvieron responsabilidades en los crímenes de Estado. También defendió la política de búsqueda de verdad y justicia, mientras denostaba el proceso sudafricano post-apartheid, donde el perdón había dejado los procesos legales huérfanos, a las víctimas sin justicia y a los culpables sin castigo. Además, se cubrió ante las críticas sobre cierto tipo de garantismo diferenciado al afirmar: "Se cuestiona el tratamiento que brinda el sistema penal a los imputados por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, la situación de los detenidos por estos crímenes no es peor que la de los detenidos por otros delitos".

Lo que escribía Chillier era verdad, solo que resaltaba un matiz del CELS que también había objetado el díscolo Roberto Gargarella, quien además de miembro de la Asamblea de Socios del CELS y abogado constitucionalista era alguien que tenía la virtud de caerles bien a algunos oficialistas y a muchos opositores. Ese análisis de doble estándar implicaba relativizar o excluir de aquellas garantías a los presos por crímenes de lesa humanidad pero defenderlas rabiosamente en el caso de delincuentes comunes. Gargarella había escrito en su blog y en algunas páginas de *La Nación* que había que ser más cuidadoso con esas garantías "aun cuando se tratara de los peores militares". "Tengo una posición sobre el tema carcelario que es bastante extrema y que no se limita ni comienza con los grandes criminales de la dictadura", afirmaba.

En el medio —o a lo largo— del debate, otro de los actores era Eugenio Raúl Zaffaroni, quien para Gargarella había defendido una posición que era muy típica en muchos militantes de derechos humanos, es decir, "una posición hipercrítica sobre la institución carcelaria que se transforma en un aval a la prisión" como respuesta a los casos de lesa humanidad. "Mi posición es de crítica extrema a la respuesta carcelaria como sinónimo de justicia. Creo que se puede pensar en otro modo de responder frente a los grandes crímenes, lo que para mí es obvio cuando uno ve lo que implica estar encerrando una persona de ochenta años en silla de ruedas. Eso yo no lo veo como sinónimo de justicia sino de injusticia. Lo contrario de impunidad no es cárcel. Hay muchas formas en que uno puede, desde el Estado, mostrar una respuesta fuerte, contundente, un posicionamiento y un compromiso, desde cuestiones a favor de la memoria, reivindicaciones de los derechos humanos, condena a la actitud anterior del Estado, repudio a lo ocurrido y hasta sanciones económicas", argumentaba. La idea de pensar que solamente se hace justicia cuando un anciano entra en prisión no tenía, para Gargarella, nada de verdad. "Es un problema que el Estado haga este uso e imposición deliberada del dolor que supone el castigo. Y las consecuencias se sienten en la cuestión de la verdad, porque se pierde verdad en vez de ganarla. Y a mí me

interesaba problematizar eso, lo que implicaba revisar la extrema dureza en cuanto a las detenciones de procesados, o el hecho de que se avalen las detenciones sin condena, no por un año o dos años sino diez años, catorce años, en el caso de militares más comprometidos. Y el CELS no fue lo suficientemente crítico de eso", afirmaba. Para Gargarella, una cosa era la camiseta y otra, el Derecho.

Sus opiniones sobre los juicios apenas fueron las primeras de una corta pero sólida lista de objeciones que hizo ante sus compañeros del CELS. Hasta se podría decir, casi, que las suyas eran las primeras objeciones hechas en voz alta por cualquier socio en cualquier momento de la historia del CELS. Claro, esto no caía nada simpático puertas adentro, pero el hecho de que además sus críticas rebotaran en columnas, blogs y programas de radio solo aseguraba que en adelante Gargarella iba a encontrar en el CELS caras de pocos amigos.

Mirna Goransky también entendía que había que separar sus simpatías de lo que la Constitución le ordenaba. Goransky era fiscal general adjunta de la Procuración y había sido designada por Esteban Righi. Trabajó durante 2007 en el primer juicio de la ESMA y junto con sus colegas comenzó a preparar el siguiente, con dieciocho imputados —Astiz y Jorge "el Tigre" Acosta, entre ellos— y ochenta casos. Para eso, en 2009 jueces y fiscales se juntaron con las querellas para analizar estrategias de procedimientos. La fiscal veía que los organismos discutían permanentemente entre ellos, pero hacia afuera lucían increíblemente sólidos y unidos. Pero lo que más la incomodaba era el caos operativo que se avecinaba. "Los tribunales no estaban acostumbrados a un proceso de esta magnitud, no por la complejidad o la sensibilidad, sí por lo enorme. No había costumbre de hacerlo", evaluaba. Luego, una vez iniciado el proceso, confirmó su diagnóstico. "Todo parece bastante poco profesional", pensó en su momento mientras era testigo de cómo la mujer de Rolón abandonaba su lugar para llevarle una bolsita a su marido que estaba en la banca de los acusados, o cómo el juez Daniel Obligado —que venía de trabajar en juzgados de la provincia de Buenos Aires— se quedaba dormido, mientras otro llegaba tarde y se sabía que estaba jugando al golf.

También sostenía que los fiscales no solamente tenían que acusar, al contrario que los abogados querellantes. "Nosotros nos debemos a la legalidad como todo límite y estamos obligados a la objetividad, por muy antipático que sea", creía. Por eso, entre otras cosas, tuvo un pequeño debate privado cuando Carolina Varsky, quien era la abogada por el CELS, llegó hasta su oficina para plantear que las acusaciones deberían ser por genocidio, pero a Goransky no le cerraba. Varsky se había presentado en su despacho de la fiscalía junto con el abogado José Nebbia, quien también trabajaba por la querella del CELS. Le

llamó la atención que durante esa entrevista y durante casi todo el juicio Nebbia había estado prácticamente callado. En aquel segundo juicio de la ESMA hubo doce condenas y para 2014 se empezaba a preparar el tercero (conocido como ESMA III) contra setenta imputados por unos ochenta casos. A pedido del tribunal se preparó una propuesta de juicio con criterio de priorización, utilizando estándares internacionales que permitían abreviar las megacausas, por ejemplo, no enjuiciando a aquellos que habían sido condenados a cadena perpetua, lo que a Goransky le parecía una buena idea.

En una nueva reunión con los querellantes, todos parecieron estar de acuerdo en esa metodología. Pero de un día para otro se dieron vuelta. Según Goransky, fue a instancias del abogado Roberto Yanzón (patrocinante de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas), a quien veía como un tipo demasiado prepotente como para dialogar. El CELS acompañó la movida y se alineó con las querellas de los demás organismos, aunque más ambiguamente. Durante un intercambio de palabras, Goransky percibió que Varsky le pedía las disculpas del caso, pero le daba a entender que el CELS no podía cortarse solo. “Perdimos”, pensó. “Ahora habrá que hacer un juicio de cuatro años, ¿le voy a dedicar otros cuatro años de mi vida a esto? ¿Vamos a leer el comienzo del procedimiento de diecisiete mil páginas?”, se preguntaba. Todo se preveía inmanejable. “¿Dónde se va a hacer, dónde se van a meter sesenta y cinco imputados, más dos defensores, más el tribunal, más la prensa, más la policía y la seguridad?”, se preguntaba. Pero lo que la terminó de inquietar fue la decisión del tribunal de que cada parte se llevase los videos con los testimonios de los testigos de los anteriores juicios a la casa y los viese cuando quisiera, lo que le quitaba a la defensa sobre todo la posibilidad de repreguntar. En todo caso, eso lo harían por escrito, se había pensado. También, el tribunal había sugerido a los fiscales que tendrían un determinado tiempo para acusar. Goransky se sorprendió: “¿Cómo me van a marcar a mí el tiempo que tengo para acusar? Los fiscales somos custodios de la legalidad”, se autoconvencía Goransky, y lo de los videos fue la gota que derramó el vaso. Cuando llegó el momento de otra reunión preparatoria con las querellas, Goransky tomó aire y dijo: “Esta propuesta no es un juicio constitucional, no se están respetando las garantías. Por lo tanto, este juicio es nulo”, disparó. Los abogados querellantes no lograban salir de su asombro por lo que acababan de escuchar. Los defensores se sorprendieron. Todos quedaron en silencio y Goransky supo enseguida qué pasaría. “Los abogados defensores de los represores aplaudieron, los de los organismos me putearon de arriba abajo”, contaba luego. También supo que las agrupaciones de derechos humanos irían a pedirle a la recientemente designada procuradora Alejandra Gils Carbó —quien

había reemplazado a Righi— que sacara a Goransky del camino. Pero Goransky se adelantó y la llamó. Aprovechó que la conocía y tenía un mínimo nivel de confianza, y le dijo: "Te van a ir a ver y te van a pedir mi cabeza. Antes de decidir, escuchame". Y le contó su evaluación de los hechos.

Al otro día, las querellas fueron a ver a la jefa de los fiscales, efectivamente, y todo parecía arreglado ya sin Goransky en el medio. Mientras tanto, Varsky visitó nuevamente a Goransky para zanjar diferencias. Después de todo, eran viejas amigas. "Yo no me banco escuchar durante siete horas a [Enrique] Cachito Fukman", le dijo Varsky en referencia a los largos testimonios que había dado el ex detenido Fukman durante el juicio anterior y que, como tantos otros, debería volver a repetir pero en el marco de otras causas y con otros acusados. La abogada del CELS estaba tratando de motivarla con las supuestas ventajas de los videos. Goransky le dijo que no. "Yo este juicio no lo voy a hacer, no se está cumpliendo con las reglas. Me vuelvo a la fiscalía de Saavedra", le retrucó. Además, ya había visto, según ella, demasiada información insostenible en los expedientes que el proceso daba por buena como para mantener las acusaciones. "Uno no puede tolerar que en un juicio haya personas con prisión preventiva que están en esa situación por los desaguisados del expediente que nadie se ha preocupado en reparar", observaba. Para ella, los organismos han decidido ser cómplices de esas desprolijidades que, además, consideraba ilegales. Su renuncia le resolvía un problema a Gils Carbó, pero su relación con el CELS se vería resentida. A pesar de que consideraba que su vínculo con Chillier estaba roto desde que ella se consideró tres veces plantada cuando lo convocó por temas urgentes, Goransky y el CELS eran parte de la misma cosa, casi de una misma familia, incluso guardaba mucho cariño por Pochak y por Varsky. Tenían un pasado y una mirada común sobre las políticas de derechos humanos. El punto más sensible fue que Goransky era, además, la esposa de Martín Abregú, que por ese entonces tenía el cargo de director regional para el Cono Sur de la Fundación Ford y seguía construyendo una carrera muy sólida en una organización poderosa que, además, era el mayor donante del CELS. Sin embargo, ni una gota de sangre llegó al río de sus finanzas. Abregú sabía perfectamente cómo separar las cosas y nada lo apartó del camino institucional que desde su altísimo cargo seguía trazando en su oficina de Santiago de Chile para que a su querido CELS no le faltara nada. El dinero no sería problema.

Los juicios recorrían todo el país y, además de convocar a organismos, militantes, querellas y defensas, empezaron a necesitar de nuevos elementos que apuntalaran un buen proceso. La historiadora e investigadora del Conicet Vera Carnovale había trabajado en Memoria

Abierta (MA) desde el año 2000 y de allí conocía a Valeria Barbuto, quien ocho años después se había consolidado como una de las caras de la renovación dentro del CELS cuando pasó a manejar el Área de Archivo y Documentación que había sido históricamente controlada por Cristina Caiati.

Carnovale tenía una sólida carrera académica, había llegado a MA para constituir un archivo sobre terrorismo de Estado en Buenos Aires y se consideraba una profesional que no tenía ningún vínculo con el movimiento de derechos humanos. Ella, Barbuto y Carolina Varsky solían intercambiar información y se consultaban por diversos trabajos que estaban haciendo. En 2011, Carnovale empezó a hacer sus investigaciones en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina (Cedinci) y un día sonó su teléfono. Era Barbuto, que le hacía un pedido especial: "Necesitamos un perito de contexto para el juicio Trelew". Carnovale se quedó pensando: "¿Perito de contexto? ¿Trelew?". Luego se enteró de que la reapertura de los juicios había llevado a los tribunales a esta suerte de analistas históricos normalmente presentados por las querellas que buscaban consolidar su estrategia acusatoria. En el caso de Trelew, que la masacre de diecinueve detenidos (guerrilleros de Montoneros, Fuerzas Armadas Revolucionarias —FAR— y ERP que habían intentado fugarse) fue un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. Barbuto le explicó en qué consistía su requerimiento, que básicamente era explicar el marco político y social que se vivía a comienzos de los setenta y que en la Base Aeronaval Zar hizo implosión en 1972 cuando, durante un intento de fuga parcialmente frustrado, los guardiacárceles de la Marina ejecutaron a los detenidos que no alcanzaron a huir. Carnovale preguntó los detalles y tardó cinco segundos en contestar. "Cuenten conmigo", dijo.

En agosto de 2012 volvió a sonar su teléfono. Era Carolina Varsky: "Llegó el momento", le dijo. Carnovale había estudiado para ampliar su ponencia, pero como había sido madre hacía poco, no podía viajar, por eso dio su testimonio vía teleconferencia. Cuando volvía a su casa, le mandó un SMS: "¿Estuve bien?", preguntaba. "Fue muy importante tu testimonio", le respondió Varsky. Fue la última vez que se comunicaron.

A partir de ese momento, Carnovale vio con un poco más de claridad el peso del CELS en su rol de actor principal en toda la operatoria legal que derivó en la reapertura de los juicios y en las acciones que siguieron. "Yo le asignaría la delantera en la formulación de estrategias jurídicas para juzgar los crímenes cometidos. Y, en consecuencia, en la instauración de un vocabulario, de un conjunto de nociones que tienen que ver con la represión que no han sido puestas en duda, pero que podrían serlo", consideraba. No le parecía raro que

el gobierno capitalizara estos avances en cada etapa de los juicios, porque todo gobierno capitaliza todo lo que puede. “Son las reglas del juego, la política viene con ese paquete”, pensaba. Sin embargo, veía el vaso medio vacío: “Este pegoteo entre movimientos de derechos humanos y gobierno sí me parece nocivo en el largo plazo. Porque la figura, la idea, la noción misma de derechos humanos quedó empastada con una facción política”.

Algo de ese pegoteo se manifestó con el nombramiento de fiscales, otra de las razones por las que Mirna Goransky y el CELS enfriaron su relación. Cuando el Ministerio Público Fiscal empezó a nombrar fiscales *ad hoc* o subrogantes, se sintió obligada a hacerle un comentario muy poco simpático a Pochak, quien ya era parte del círculo íntimo de Gils Carbó: “Estos nombramientos son ilegales y es grave porque dejan el antecedente de que se está actuando discrecionalmente, nombrando a cualquiera en cualquier lado”, le dijo. Uno de los nuevos fiscales designados era, justamente, José Nebbia, el abogado al que Goransky había notado muy callado, quien había sido nombrado fiscal en Bahía Blanca.

Para Goransky se trataba del desembarco de los abogados de los organismos en el Ministerio Público Fiscal, una mezcla que no era buena para la legalidad, según ella. “Fueron puestos ahí a dedo, sin ningún antecedente, sin atravesar procesos de selección, y están ahí para bancar reformas que son movidas de ellos”, pensaba. Su análisis era que la idea de arrasar con la justicia se justificaba para que los juicios se movieran. “El fin está bien, pero el modo es ilegal”, evaluaba.

Además, lo que más le dolía era que, según ese análisis, el CELS lo estaba convalidando. Eso quedaba expuesto en el caso del nombramiento del fiscal Pablo Pelazzo en Salta y Jujuy. El problema era que Pelazzo había sido abogado querellante que patrocinó a los organismos de derechos humanos en el proceso contra Carlos Blaquier, investigado por prestar colaboración con la dictadura en la desaparición de treinta trabajadores de Ledesma, su emporio azucarero. Cuando Pelazzo fue separado de la causa a pedido de Blaquier, el CELS se presentó como *amicus* para respaldar la designación. A Goransky le pareció una aberración que alguien fuera designado fiscal en la misma causa en la que se venía desempeñando como abogado de la querella.

Goransky y Pochak no cortaron su vínculo amistoso, pero cierta incomodidad quedó flotando en el aire. A esa altura, Martín Abregú ya había sido ascendido. Toda la familia se había mudado a Nueva York porque lo habían nombrado vicepresidente de la fundación, a cargo del Programa de Democracia, Derechos y Justicia, es decir, uno de los tres tipos más importantes de la Ford a escala mundial. Además de

diseñar programas de derechos humanos y civiles, transparencia y salud sexual y reproductiva, Abregú empezó a controlar el programa de financiamiento en América Latina, una de las regiones más beneficiadas en el reparto de una gran parte de los casi 500 millones de dólares anuales que la Ford destina a sostener organizaciones no gubernamentales. De vuelta, cada uno siguió haciendo su parte. En 2013, el CELS recibió trescientos mil dólares de financiamiento.

10
Una corte para la democracia

En enero de 2002, luego de la debacle del gobierno de Fernando de la Rúa y de la indignación popular por el corralito y el toque de queda, un grupo personas provenientes de organizaciones no gubernamentales pensó que una democracia sólida y estable requería de un Poder Judicial legítimo, creíble, neutral. La Corte Suprema menemista, la de la mayoría automática, la impresentable, era justamente lo contrario. Ese grupo de personas creó la red Una Corte para la Democracia (UCPD), integrada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Unión de Usuarios y Consumidores, y el CELS. Los borradores de un plan empezaron a ir y venir entre las partes. Sabían que se estaban jugando una carta casi imposible, pero continuaron adelante y elaboraron un documento llamado, precisamente, *Una Corte para la Democracia*.

La propuesta había empezado a rebotar en los medios y hasta el circunstancial ministro de Justicia de la presidencia de Eduardo Duhalde, Jorge Vanossi, los convocó para discutirla. Pero fue Gustavo Béliz, el ministro de Justicia de Néstor Kirchner, quien articuló los primeros pasos para que ese documento fuese la columna vertebral de las medidas que su ministerio estaba listo para discutir y aplicar. Cuando Kirchner comenzó a instalar el tema del juicio político a la corte, Andrea Pochak empezó a creer que algo podía llegar a pasar. Lo confirmó cuando Horacio Verbitsky le dio una noticia determinante: “Me llamó Béliz, quiere hablar del documento”. También lo había llamado a Daniel Sabsay (de la ADC) y a ambos les había comentado que cuando era legislador le había llegado el borrador de UCPD. “Ahora es tiempo de hacerlo. Quiero implementarlo”, les dijo. Verbitsky le propuso recibirlo en el CELS. “Vení y te esperamos con las demás organizaciones”, invitó. No hubo demasiadas vueltas que dar ni puntos que acordar. Cuando Horacio Verbitsky le daba los detalles a Pochak, ella no podía salir de su asombro: “No, Horacio, no va a venir un ministro al CELS, ¿no es que vamos nosotros?”. Pero sí, el ministro iba. Ese día, Béliz llegó junto con Alberto Fernández, jefe de Gabinete, y Pablo Lanusse, secretario de Justicia. Verbitsky, Pochak y otros

miembros del equipo y de las demás organizaciones que rubricaban el documento los recibieron en las oficinas de la calle Piedras. Mientras todos hablaban al mismo tiempo, Pochak se fijaba en cómo el ministro tomaba nota de todo, preguntaba, hablaba y consultaba con su equipo. Luego de un par de horas, los visitantes empezaron a irse y los anfitriones llegaron a pensar que era otra reunión más que conduciría a otra y a otra y a otra. Pero antes de abandonar la oficina se sorprendieron cuando Béliz dijo: “Solo resta ver quiénes van a trabajar en el borrador del decreto”.

Mucho antes de lo pensado, el teléfono de Pochak volvió a sonar. Era otra vez Horacio Verbitsky. “Kirchner va a anunciar el decreto, la semana que viene estamos invitados al Salón Blanco.” Pochak no sabía si alegrarse o temer. El decreto estaba terminado pero ella no lo había avisto, no podía ir a la Casa Rosada a avalar un documento que no había podido estudiar. “Nos van a cagar, nos van a cagar”, pensaba.

Finalmente, el 19 de junio de 2003 Kirchner firmó el decreto 222/2003, que prácticamente aprobaba cada uno de los puntos que se habían propuesto en el documento *Una Corte para la Democracia* para modificar la dinámica sobre la designación de los jueces de la Corte Suprema. El presidente de la Nación ya no tendría la competencia constitucional de nombrarlos por ser amigos. También se abría un nuevo espacio de participación ciudadana en el mecanismo de nombramientos, se fijaban criterios objetivos para determinar la idoneidad moral y técnica de los candidatos, y se consagraba el principio de equilibrio de género en vistas a la composición del tribunal. En el Salón Blanco, Pochak escuchaba a Néstor Kirchner en el estrado y veía que el documento era casi idéntico a la propuesta de ellos. “Al final no nos cagaron”, pensó.

11
Aliados

Ya había pasado el período de búsqueda de justicia por los crímenes de la dictadura y las denuncias del tipo testimonial. Ahora el paso a incidir en el plano real acercaba las agendas de Kirchner y Verbitsky hasta un punto próximo a la complicidad. La gente del CELS notaba claramente que sus demandas históricas empezaban a ser asumidas por el gobierno, lo que dio lugar a algunos cimbronazos en una organización que, casi siempre, había sido conducida por Mignone como si fuera un grupo compacto que no daba lugar a polémicas internas.

Según Pochak, no había un "alineamiento". Para ella siempre se trató de trabajar en hechos concretos midiendo la capacidad de influir, lo que era algo nuevo. "Nunca habíamos tenido incidencia, pero sí, están tomando todos nuestros temas", pensaba, lo que no le impedía dejar de hacer o decir nada en virtud de algún tipo de estatus en la relación con el gobierno. Además, estaba tranquila con su estándar de reglas sobre incompatibilidades.

La primera discusión fuerte fue por Lilia Ferreyra, la última compañera de Walsh, que dejó la comisión directiva porque estaba ocupando un lugar como representante del Estado en el ente administrador Espacio para la Memoria. También se discutió el tema cada vez que Jorge Taiana asumía o salía de un cargo, o cuando Coco Blaustein se convirtió en director del Museo del Cine de la Ciudad. Taiana dejó de ser miembro de la comisión directiva. Blaustein se quedó porque su cargo no tenía que ver especialmente con derechos humanos y era en el ámbito metropolitano. José Nun sí se fue cuando asumió en la Secretaría de Cultura.

Estela de Carlotto ya había perdido la cuenta de la cantidad de veces que había estado en actos oficiales en primera fila. A cualquiera que le preguntaba sobre su posición, le decía claramente: "Sí, nosotros estamos cerca del gobierno y jamás, jamás, nos condicionaron, ni jamás habríamos permitido que nos condicionasen. Si a mí alguna vez Néstor o Cristina me dijeron algo que sería conveniente hacer y yo consideré que no era bueno, no lo hice. No estamos sujetas a la obediencia debida". Las Abuelas se permitían admitir el acompañamiento al gobierno "para apoyar buenas acciones" y si las

invitaban a los actos les parecía positivo. "¿Qué mejor? ¿Qué querés? ¿Que estén en dónde? ¿Defendiendo a quién?", arengaba Carlotto a quien cuestionara su lugar.

Según quién opinara, o el CELS empezaba a ser un títere del gobierno o el gobierno era quien tomaba la agenda de los organismos. Para Chillier, el apoyo político a la agenda de justicia, enviando el proyecto de anulación de las leyes, fue clave. "Bienvenidos, que tomen nuestra agenda. Si tiene resultados concretos, no es un problema: la decisión política de apoyar los juicios, bajar los cuadros, las acciones simbólicas y las concretas… ¿cuál sería el problema?", pensaba. Mientras tanto, las reuniones reservadas con ministros y secretarios de Presidencia seguían, y las hacían públicas o no según la estrategia para cada caso: si debilitaba el resultado de la gestión, la reunión conservaba su secretismo. Según Chillier, el CELS no hacía más que seguir la máxima de Mignone: nunca dejar de aprovechar oportunidades para incidir. Hasta con Menem él mismo había participado en gestiones para negociar las Leyes de Reparación. Solo que antes era la excepción y ahora parecía la norma: cada cosa que promovían parecía dar en el blanco y tener un atajo hasta las oficinas de la Presidencia.

La cercanía tampoco era cuestionable para Zaffaroni, porque el vínculo excedía a la política. "Es una cuestión ideológica en el buen sentido de la palabra. Si un gobierno se esfuerza por la realización de derechos humanos —por acortar las diferencias y reducir la desigualdad— es evidente que tienen que estar cerca. ¿Por qué no? Es decir, ¿para ser independiente hay que ser opositor? ¿Todos los que no son opositores dejan de ser independientes?", pensaba.

"En la época de Menem, estuvimos diez años para la reforma de un artículo. Acá logramos cosas importantísimas todo el tiempo", sostenía Gustavo Palmieri, refiriéndose a que en un puñado de meses habían cambiado la conformación de la Corte Suprema, decidían sobre el destino de la ESMA y comenzaban la ofensiva por las extradiciones y la reapertura de los juicios.

Aunque lo vivía desde Washington, para Juan Méndez —entonces hombre clave de Human Rights Watch (HRW)—, en cambio, el movimiento de derechos humanos argentino se estaba acercando demasiado al gobierno y no porque el gobierno no mereciera esa cercanía, pero creía que la sociedad necesitaba organizaciones más independientes. "No se le puede exigir al CELS que sea más opositor, digamos, porque independiente es, pero más opositor y que se borre del campo, eso no."

Laura Conte siempre supo que la política de derechos humanos iba a aparecer en algún momento. Recién cuando la política de derechos humanos de Kirchner soltó las velas aquel día en la ESMA terminó de

confirmar que sería de la mano de Néstor, y que ese tiempo había llegado, lo que no significaba que el CELS fuera un ladero de nadie.

12
Cristina presidenta

Cristina Fernández de Kirchner arrancaba con un hándicap de origen. Más allá del respaldo de Néstor y del cuarenta y seis por ciento de los votos —4.250.000 más que Elisa Carrió, que salió segunda—, para Cristina ser la primera presidenta electa mujer y ser peronista podía convertirse en un incordio. Llevó como compañero de fórmula al radical disidente Julio Cobos, gobernador de Mendoza.

El 10 de diciembre de 2007 en el Congreso, Néstor le colocó la banda sobre su vestido blanco, le dio el bastón de mando y no se ahorraron ninguno de los simbolismos que atribuyen el poder a una persona. En su discurso le habló al pueblo pero también directamente a Néstor. “La diferencia de 22,25 puntos porcentuales que nuestra fuerza obtuvo con la que salió en segundo término, son casi los mismos 22,24 puntos que usted, presidente, obtuvo por todo concepto en las elecciones de abril de 2003. Usted, sentado en este mismo lugar, con más desocupados que votos, se propuso dar término a dos mandatos constitucionales [...] Usted, después de todo, nunca fue un posmoderno; en tiempos de la posmodernidad, usted es un presidente de la modernidad y me parece que yo también”, le comentaba a su esposo por cadena nacional.

También se refirió a los juicios y les tiró un mensaje las organizaciones de derechos humanos. “Espero que en estos cuatro años próximos se terminen estos juicios contra la impunidad que han demorado treinta años en iniciarse. Tenemos la obligación de adoptar y diseñar los instrumentos que garanticen los derechos que otros argentinos no tuvieron para permitir enjuiciar y castigar a quienes fueron responsables del mayor genocidio de nuestra historia”, sostuvo Cristina, agradeciéndoles a los familiares de las víctimas pero también a las Fuerzas Armadas, “para que de una vez y para siempre, en vistas al bicentenario, se pueda separar la paja del trigo y entonces los argentinos podamos todos volver a mirarnos a la cara”, agregó.

Cuando el discurso terminó y la excitación bajaba un poco, en los salones adyacentes, los invitados especiales se mezclaban y todo el mundo proyectaba una sensación de júbilo. En un rincón, un puñado de ellos se vio involucrado en una escena que tensó la idílica postal democrática. Horacio Verbitsky, acaso algo pasado del límite —

teniendo en cuenta la ocasión— divisó a Néstor entre la gente y lo fue a encarar, pero no para felicitarlo. "Asumió Cristina y vos no me cumpliste con lo de injurias y calumnias", le reclamó en plena fiesta. Kirchner no entendió nada, pero atinó a contestarle sin demasiados remilgos. Aníbal Fernández estaba entre ellos y, mientras trataba de controlar su incomodidad, se puso a templar las palabras gruesas que iban y venían. En un momento se interpuso y apoyó una mano en el hombro de cada uno para calmar los ánimos definitivamente. Verbitsky lo apartó con un gesto seco y le dijo: "Esto es entre Néstor y yo".

Ellos ya habían hablado del tema cuando Kirchner asumió. El patagónico tenía un serio problema judicial con Eduardo Sosa, el procurador general de su provincia, a quien el CELS estaba patrocinando. En esa ocasión, Verbitsky lo aconsejó por el lado de la mesura. "Desistí, Néstor", le pidió. "No, porque es un hijo de puta, yo esto lo sigo", le retrucó Kirchner. Verbitsky intentó calmarlo: "Desistí, ahora sos el presidente, tenés que plantear políticas para todo el país. Olvidate de las pasiones de pago chico, terminá con eso". Néstor Kirchner le hizo caso. O eso parecía.

En esa charla ya había quedado pendiente el tema de la modificación de la legislación sobre calumnias e injurias. En agosto de 2003, Verbitsky hizo un reportaje conjunto a Lula y a Néstor durante un vuelo desde Buenos Aires hacia Santa Cruz. En esas ocasión volvió a recordarle el tema al presidente: "Mirá que sigue pendiente, Néstor. Y yo te digo una cosa, esto te conviene a vos hacerlo, pero si vos no lo hacés, yo te voy a obligar a hacerlo".

Verbitsky sabía de lo que hablaba y se tenía confianza. Ya tenía un gran triunfo con una causa de desacato que terminó en la modificación de una ley. El 6 de marzo de 1988 Verbitsky había publicado en *Página/12* un artículo titulado "Cicatrices de dos guerras" en el que se refirió a Augusto Belluscio, juez de la Corte Suprema, como "asqueroso". A raíz de la nota, Belluscio inició una acción privada de injurias contra Verbitsky. La jueza interviniente consideró que la expresión "excedía los límites del honor del funcionario y constituía un agravio al ministro con motivo del ejercicio de su función". Así, convirtió la acción privada de Belluscio en pública y condenó a Verbitsky por desacato. La sentencia fue confirmada por la cámara. Contra ese segundo fallo, el periodista interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, en el que sostenía que la sentencia afectaba la garantía constitucional de la libertad de prensa. El 25 de febrero de 1992, la Corte Suprema rechazó el recurso y lo declaró improcedente. El 5 de mayo, Verbitsky denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dio lugar a una "solución amistosa" que

culminó con la derogación del delito de desacato en el país.

Años después, durante la era K, Horacio Verbitsky seguía convencido de que algunos lineamientos generales respecto de las políticas de derechos humanos y seguridad no implicaban de ninguna manera un contrato de adhesión ni una suspensión de la crítica. Cuando la ceremonia de asunción en el Congreso terminó, Cristina se subió al Cadillac descapotable y volvió a la Rosada para tomarles juramento a sus ministros. Entre ellos estaba Martín Lousteau, el más joven, el que más dudas generaba y el que sin quererlo le estaba por servir en bandeja a la oposición el primer gran conflicto con Cristina, donde se empezaron a desnudar las identidades de cada quien en el tablero político posterior a Néstor.

A menos de cuatro meses de iniciada la gestión, a Néstor Kirchner se le había ocurrido un sistema de retenciones móviles para cobrar impuestos a los productores de soja, trigo y maíz. Lousteau (cuya hermana María había trabajado en el CELS destacándose en el caso Cabezas) negoció con poco margen para que esas retenciones no fueran tan altas. De todos modos, a las patronales del campo no les gustó nada la idea. Bloquearon rutas, interrumpieron la cadena productiva y hasta rozaron la ilegalidad cuando pusieron en jaque el abastecimiento de bienes básicos a las ciudades.

En junio, Cristina reaccionó mandando un proyecto complementario al Congreso para que se debatiera en el recinto y fueran diputados y senadores quienes resolvieran. El proyecto fue aprobado en Diputados. Una vez en Senadores, con los votos empatados, quedó a merced de Julio Cobos, presidente de la cámara, la resolución final del conflicto. No habría sido tan surrealista si Cobos no hubiera sido el vicepresidente, el compañero de fórmula recién elegido por Cristina. La oposición y las patronales del campo seguían el debate en pantallas gigantes desde diferentes puntos del país. Se mordían las uñas, apretaban fuerte lo que tuvieran a mano, una bufanda, el termo del mate, lo que fuera. Un poco inseguro, sabiendo que se estaba metiendo en un problema y como midiendo cada palabra, Cobos empezó a hablar. Ya entrada la madrugada, de sus primeras palabras, de su entonación y de su lenguaje gestual ya se adivinaba cuál iba a ser su decisión. Pidió perdón si se equivocaba, le encargó a la Historia que lo juzgase y emitió su famoso "voto no positivo". En las vigilias de las rutas del interior, junto a alguna tele, a alguna radio, los ruralistas festejaron como un gol en una final de mundial. Las palabras de Cobos polarizaron más a la opinión pública y parecía ser otro ladrillo en la pared de las divisiones políticas argentinas, de esas marcas de las que no se vuelve.

El andar tambaleante de la resolución 125 puso al CELS frente a una disyuntiva. Apoyar o no abiertamente a Cristina en una manifestación

que se estaba preparando para el 1 de abril. La mayoría de las organizaciones de derechos humanos habían acordado decir presente para dar su apoyo. La discusión en el CELS para decidir qué hacían fue muy activa. No solo estaban los miembros de la comisión directiva, sino que estaba presente el *staff* casi en pleno. Verbitsky contabilizó sesenta personas. Él, Basualdo, Patricia Valdez, Laura Conte y Damián Loreti tomaron la palabra. Loreti era uno de los que estaban de acuerdo. "Acá hay algo más grande que apoyar la 125, y es la discusión por la distribución de la riqueza, algo mucho más complicado que decidir si se está con el campo o con Cristina", arengó ante sus compañeros. Carlos Acuña estuvo de acuerdo. También Basualdo sugirió sacar un comunicado explicando qué era la 125 y por qué el CELS apoyaba su implementación. Cuando se decidió apoyar la ley 125 y acudir al acto con la bandera del CELS, Gustavo Palmieri se dio cuenta de que a partir de entonces sí se iba a empezar a ver con claridad quién estaba de un lado y quién de otro. Patricia Valdez marcó fuertemente sus dudas. Para ella no había que prohibirle a nadie ir a la plaza, pero no aceptaba la idea de ir orgánicamente. Gustavo Palmieri la escuchó decir "No, no podemos estar con el gobierno". Andrea Pochak tampoco estaba convencida y su discusión paralela con Laura Conte y con Verbitsky la perdió. "Es una situación muy grave, no estás advirtiendo la gravedad de lo que pasa", le contestaba Verbitsky. Chillier no estaba en Buenos Aires y a ella le tocaba incidir en la decisión final. "A mí me parece un acto partidario", contestaba Pochak. "¿Cómo va a ser un acto partidario? Esto es una afrenta institucional y el gobierno está en peligro", le replicó Horacio Verbitsky. Pochak hizo memoria y le fue a la mente una postal de 1987. "¿Vos me estás diciendo que es la misma situación de cuando Emilio fue al balcón en la Semana Santa de Alfonsín?", le preguntó a Verbitsky. El Perro vivió la discusión sobre la 125 como una bisagra en la política argentina. En cuanto a los puntos de vista, nunca vio que esas posiciones internas en el CELS fueran serias desinteligencias sino cuestiones más bien personales, de caracteres, de personalidad. Para él no hubo una situación de conflicto. "Que haya habido posiciones distintas en el tema de la 125, sí, por supuesto. Si partió el país, ¿por qué en el CELS no podíamos discutir el tema?", se preguntaba.

Cristina habló la noche del 1 de abril en la Plaza de Mayo, como estaba programado. Defendió su idea y calificó a las patronales agropecuarias de golpistas. Pero también les dedicó unas palabras a los medios al referir que a sus opositores no los apoyaban los tanques sino "los generales multimediáticos". No era novedad que *La Nación* estuviera del lado de la oligarquía terrateniente y golpeara al gobierno desde sus editoriales. Pero sí era novedoso y sorpresivo que el Grupo

Clarín también lo hiciera. Además de los ruralistas, el kirchnerismo también estaba fabricando un nuevo enemigo para su gran guerra en la que la épica y los negocios frustrados iban de la mano.

13
El CELS al poder

Isabel Mignone lo resumía así: “Papá siempre pensaba que el CELS debería ser independiente del gobierno”. Pero creía que eso no estaba pasando tal como decía que su padre deseaba. “Lo que pasa es que Verbitsky es muy amigo de la presidenta”, suponía. El Perro no estaría tan de acuerdo: “¿Relación del CELS con el gobierno? Sí, pero hay que ver los motivos: el tema de la reforma de la justicia, la bajada de los cuadros, incluso la visita de Cristina fue por la reivindicación de [Eduardo] Kimel y la reforma del Código Penal, por injurias y calumnias”, explicaba. Además, puntualizaba que en aquella reunión él les dijo a la presidenta, a Héctor Timerman y Eduardo Luis Duhalde, en un acto público, que había una agenda pendiente en el tema libertad de expresión y acceso a la información. “Se lo planteé en un discurso así, cara a cara. Si eso es estar pegado al gobierno… sigamos así”, justificaba. Tenía más para defenderse.

“Vos elegís los momentos y elegís los temas, y hacés una ponderación y un balance de lo positivo y lo negativo. Ahora, no es que nosotros nos hemos callado y hemos aplaudido las cosas que están mal. Las hemos cuestionado. Yo cuestioné la autorización de la fusión de Cablevisión y Multicanal, que firmó Néstor. Yo cuestioné la prórroga de diez años de las licencias. Lo hemos hecho en todo el debate de la Ley Audiovisual, también. Yo denuncié las presiones del gobierno sobre Telefónica. Yo publiqué que Moreno apretaba a los empresarios con un ‘fierro’ sobre el escritorio. Lo publiqué yo, no lo publicó Nelson Castro ni [Joaquín] Morales Sola, lo publiqué yo”, decía a quien pudiera cuestionar su independencia.

Para Gustavo Palmieri no existía una alianza estricta con el gobierno, pero no podía negar la afinidad. “Hay una decisión, pero no es que cedemos en determinadas situaciones a cambio de beneficios.” Creía recordar que el tema se habló en el CELS vagamente, pero se rechazó como una línea de acción orgánica mucho antes de que naciera. Sí tenía claro que durante la era K se habían desarrollado una serie de temas relacionados con contenidos de la agenda de incidencia política, fundamentales, estratégicas, de largo plazo. “Es un proceso político y con actores políticos, y en este sentido sí que hay un campo en el que buscábamos referenciarnos”, admitía.

Pero el contraste entre esas palabras que hablaban de matices con la realidad era demasiado fuerte. De pretender convertirse en una referencia, el CELS pasó a ser protagonista en el Ministerio de Seguridad creado a fines de 2010. Al frente fue designada Nilda Garré, hasta entonces ministra de Defensa (cargo que conservaba desde la presidencia de Néstor Kirchner) y vieja compañera de militancia de Horacio Verbitsky. Palmieri se convirtió en subsecretario de Gestión y Bienestar del Personal de las Fuerzas Policiales y otra ex CELS, Natalia Federman, fue directora nacional de Derechos Humanos. Sobre ella, los medios de la derecha se hicieron un festín porque, al haber nacido en Londres, consideraban observable que una súbdita británica ocupase un lugar tan importante en un área tan sensible.

A Carolina Varsky le parecía bueno que gente del CELS —gente de la sociedad civil— pasase al Estado y viceversa. Ella también se vio involucrada en discusiones sobre qué tan pegados al gobierno estaban, aunque creía que aquello estaba neutralizado porque de vez en cuando "un palo le tiraban" al gobierno, como en el caso del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Pero ante la opinión pública era inocultable la sensación de pegoteo.

Roberto Saba también ponderaba las críticas que hacía el CELS en temas como derecho a la información, por ejemplo. Destacaba mucho la posición de Verbitsky, quien empujando un tema como el de la discriminación en la publicidad oficial entraba así en conflicto con *Página/12*, su propio diario. Si bien creía que el CELS había bajado un poco la intensidad, también veía que aún mantenía una agenda de libertad de expresión que suscribiría cualquier liberal que para algún sector kirchnerista sería de derechas. Es decir que, según Saba, el CELS nunca acomodó su agenda, solo que un día vino un gobierno que compró esa agenda para construir legitimidad. De todas maneras, creía que el hecho de que gente del CELS se subiera a un palco gubernamental podía ser un error. "Vos no sabés cuándo el gobierno va a tomar una decisión que va a entrar en conflicto con tu institución. Este país es muy complicado, porque vos no podés tampoco dejar a un lado tu propia agenda porque el gobierno la está tomando", aventuraba.

Varsky era más vehemente. "Quizá sea un error, pero es cierto que el gobierno adoptó nuestra agenda en justicia transicional y terrorismo de Estado. Y si no, ¿qué? ¿Regalar todo lo que hiciste? El Ministerio de Seguridad al CELS lo viene proponiendo desde el 91, ¿qué mejor que proponer gente que el CELS consideraba experta en eso?", desafiaba. Saba ponderaba que gracias a las buenas relaciones que Verbitsky tenía con el gobierno —con Alberto Fernández, sobre todo— se logró ese diálogo tan íntimo, del cual rescataba la influencia para cambiar el procedimiento de designación de jueces de la corte.

"Horacio estaba en la primera fila del lobby por esa medida de interés público", entendía. Palmieri además destacaba que Verbitsky pagó costos y nunca lo vio jactarse de lo influyente que era en el Ministerio de Seguridad.

"Sí, el CELS ocupa un bando pero no de partido político, sí un bando ideológico. La ADC por ahí te defiende a Cecilia Pando. A mí como CELS no me interesa Pando, a mí me parece una hija de puta Pando, y no voy a hacer nada para estar bien con ella", desafiaba Varsky. Sin embargo, de tan prudentes, los abogados del CELS la habían defendido a Pando cuando publicó una carta de lectores en *La Nación* en la que denunció que habían sancionado a su marido militar por declaraciones que había hecho ella. Verbitsky lo explicaba sin problemas: "La asesoramos como pedía, y no nos arrepentimos".

Patricia Valdez seguía sus contrapuntos con Verbitsky sobre todo cuando él se quejaba de algunos pasos en falso del gobierno. "Horacio, no es torpeza, son decisiones, porque frente a esto que es problemático, no es que el gobierno no atina, elige o no elige hacer las cosas", le decía. Para Abramovich tenía mucho sentido apoyar a Garré, siendo el CELS el que más incidió en la creación de ese ministerio. Valdez no opinaba lo mismo: "Las cosas de la cercanía del poder a todo el mundo le gustan y entonces, cuando vos planteás algo y el poder te hace caso, a veces te creés que vos tenés capacidad para torcer decisiones. Y yo creo que eso no es cierto."

La periodista especializada en derechos humanos Adriana Meyer empezó a tener comunicación estrecha con los abogados del CELS y se daba cuenta de que los temas trabajados lograban cada vez más visibilidad. Según ella, su participación en determinadas investigaciones pasó a ser clave. "Los casos avanzan. Donde está el CELS, te atienden el fiscal y el juez, y a ellos los atiende el periodista. Se ganaron el acceso a expedientes calientes", observaba.

La opinión sin atenuantes era una vez más la de Gargarella. Para él, el hecho de que cierta gente que dependía económicamente de su lugar en el gobierno y además tenía una opinión y lugar prominente en el CELS era caminar por un límite demasiado estrecho para su gusto. "A mí es el tipo de cosas que más me indignan del CELS. Que hubiera habido una parte representada por Palmieri, que era de lo más interesante en términos de garantismo, trabajando en el ministerio y avalando el momento del desembarco de [Sergio] Berni es vergonzoso", creía. Le parecía que de un tipo de centroizquierda trabajando en el ministerio había que esperar lo mismo que de los diputados de izquierda del bloque K, es decir, estaban alineados, sí, pero en determinado momento deberían ser quienes debían levantarse y decir "Este es el límite que no pasamos". Pero no, terminaban avalando todo, según él, y lo mismo pasaba con la delegación del

CELS en el Ministerio de Seguridad. “Si aparece el Proyecto X, ellos tienen que estar a la vanguardia de la renuncia”, se indignaba. Tener ahí montada a la Gendarmería haciendo el espionaje a los grupos de izquierda, para después dar la información a los jueces en situaciones de protesta le parecía “vergonzoso”.

Santiago Felgueras llevaba años trabajando en el CELS y sabía el valor que tenía lo que estaba pasando. Él había estado años para cambiar un artículo de una ley penal y estaba impactado —y un poco incómodo— con el lugar rutilante que el CELS ocupaba como fabricante de políticas públicas.

Por otro lado, no eran pocos quienes en la izquierda veían la situación con algo de ambigüedad. Pensaban que si el CELS se metía en algunos escenarios, era algo positivo. Era gente muy profesional y eso aseguraba la buena resolución de casos o de incidencia en políticas de temas sensibles. Pero, por otro lado, al estar tan cerca del gobierno, no podían evitar pensar que tal vez estuvieran intercambiando información con funcionarios interesados en conseguir algún atajo en algún expediente.

Gargarella llegó a analizarlo. Llegó a pensar que tener una delegación del CELS en el Ministerio de Defensa ofrecía garantías, pero muy pronto opinó que no, y que eran el aval de uno de los mayores manoseos desde la llegada de la democracia. Para complementar sus estrategias de incidencia, el CELS articulaba sus objetivos con el sumario que Verbitsky tuviera preparado para sus notas en *Página/12*. Sin embargo, lo mismo se podría haber dicho a la inversa. Palmieri no podía obviar que Horacio Verbitsky nunca dejaba de ser periodista. Se coordinaba qué artículo estaba armando y preparaban una estrategia que no sonara incoherente. Si Palmieri llevaba un caso, Verbitsky le preguntaba algo, lo consultaba, sin que eso significara que le bajara letra. “Estoy pensando en poner esto, ¿qué te parece?”, le preguntaba Verbitsky. Luego de la consulta se ponían de acuerdo para ver el mejor momento de publicarla. Aun si el juego estaba claro dentro de las paredes de la institución, los lectores y otros actores de la comunidad de derechos humanos o de la política nunca terminaban de saber exactamente si las notas eran de Verbitsky o del CELS.

Palmieri creía que gran parte de lo que Verbitsky estaba logrando como referente en derechos humanos se lo debía al CELS, porque la producción de todo su material periodístico ya no salía exclusivamente de sus fuentes o sus archivos. El hecho de trabajar determinados temas con tal nivel de *insight* como lo estaba haciendo Verbitsky, solo era posible gracias a su pertenencia al CELS. En todo caso, era evidente la “comunidad de pensamiento” entre lo que el CELS trabajaba y lo que Verbitsky publicaba los domingos, según

Damián Loreti. “Es su laburo profesional y está claro que no compromete al CELS cuando opina. Como yo tampoco cuando opino dentro de mi laburo profesional. La portación de clientes no es incompatible con temas de derechos humanos en absoluto”, se cubría. Aunque no creía que Verbitsky hablara abiertamente en nombre del CELS, Loreti —como miembro de la comisión directiva— se sentía “99,9% identificado” con lo que Verbitsky escribía. La comisión directiva nunca hizo planteos sobre sus notas.

Más allá de las tapas de *Página/12* de los domingos, el CELS tenía claro dónde había que estar para comunicar, pero sin parecer justamente una de esas ONG obsesionadas con figurar en los medios a base de opinar sobre cada tema de actualidad o machacando con gacetillas sobre cursos, seminarios y proyectos en los que estuvieran trabajando, sino que más bien reaccionaban. “Hay que difundir lo que hacemos, a través de todos los medios que estén dispuestos a difundirlo a pesar de las dificultades”, sostenía Verbitsky, también siguiendo la línea de Mignone. En general, las dificultades las detectaban con *La Nación* y con *Clarín* porque o no les publicaban nada o distorsionaban lo que hacían. No era demasiado sorprendente. “*La Nación* ha tenido una línea permanente de ataque a los juicios por violación a los derechos humanos y una reivindicación sinuosa del terrorismo de Estado”, veía. Así, cada vez que había una oportunidad, el CELS trataba de mandar alguna columna de opinión para tratar de refutar aquello y marcar su posición, pero eso no era para cortejar a *La Nación*, solamente reclamar un espacio.

Roberto Saba también veía que el tema comunicacional no era sencillo de manejar. “¿Cuándo estos dirigentes tan importantes, con pedigrí, con trayectoria, están hablando en nombre de la organización y cuándo están hablando en su propio nombre?”, se preguntaba con frecuencia. Por eso pensaba que sería muy deseable que algún día los liderazgos de esas organizaciones estuvieran en manos de personas menos involucradas con sus propias agendas.

En una de las asambleas, Gargarella trató de hacer visible esto, pero no lo consiguió. Habló de la superposición entre persona e institución. Verbitsky lo reprendió remitiéndolo a un artículo que él había escrito, con su firma, en *Página/12*, o eso es lo que creyó entender Gargarella. Lo que estaba haciendo el presidente del CELS, según él, era seguir confundiendo los roles, cubriéndose ante las acusaciones de sociedad con el gobierno y sosteniendo que el CELS no ahorraba críticas. Para Gargarella, Verbitsky solamente lo hacía a título personal y dejaba al CELS en una posición demasiado incómoda.

14
Schoklender, Madres & Co.

En el CELS el grado de corrupción es cero. El tipo de gente que trabaja ahí no lo hace por el dinero. No se mueve para ver si se queda con vueltos. El CELS declara y transparenta hasta el último centavo, y lo publica. Hasta los que no quieren nada al CELS lo reconocen. Todo lo que entra por donaciones se gasta. Nadie se queda nada para comprarse un terreno, departamentos o cambiar el auto. Por eso le siguen donando miles de dólares al año. Saben que se especializaron en usar muy bien la plata para ejecutar decenas de proyectos, que no dejan uno por la mitad, y que lo que hacen tiene impacto en la sociedad. Todo lo contrario parecía estar pasando en la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Sergio Schoklender trabajaba allí desde que habían comenzado sus salidas transitorias de la cárcel, en 1995. Había conocido a Hebe de Bonafini mientras cumplía su condena por el homicidio de sus padres, ocurrido en 1981, del que fue encontrado culpable junto con su hermano Pablo. El vínculo más cercano del CELS con Madres y Schoklender corrió por cuenta de Abregú. En la política de apertura hacia la sociedad civil que Mignone había diseñado para su institución, las Madres eran una referencia obligada para consultar y construir puentes. Abregú había visitado a Schoklender en la cárcel y tuvieron una buena relación. Cuando Sergio salió en libertad, lo fue a ver a la Casa de las Madres y, a raíz de una serie de hechos desafortunados en relación con la presencia del ministro de Justicia de Menem, Rodolfo Barra, en un evento al que también estaban invitadas las Madres, la visita cayó mal y Hebe terminó echando a Abregú casi a las patadas. Junto a Hebe, Schoklender acumuló en unos pocos años un poder y una influencia insólitos hasta convertirse en la mano derecha de la presidenta de la fundación. Fue el hombre de los números y se transformó en su apoderado legal. Cuando la institución comenzó a recibir de la administración kirchnerista millones de pesos de fondos públicos semana tras semana, esa plata pasaba por sus manos.

El 8 de mayo de 2011, Sergio Schoklender, el hasta entonces adorado y protegido de Hebe de Bonafini, el que era tratado y querido "casi como un hijo", como decía la propia presidenta, simplemente se

fue. “Esto ya no es compatible con mis proyectos personales”, dijo Hebe que le dijo Schoklender. Y así, un día cualquiera, se desvinculó. Un par de semanas después se deslizó que Hebe lo había echado luego de descubrir graves irregularidades en el manejo de fondos del gobierno que iban a financiar la construcción de unas cuatro mil quinientas viviendas. Solo menos de novecientas de esas viviendas habían sido terminadas y adjudicadas, mientras en las cuentas de los hermanos Schoklender se iban desviando casi cuarenta millones de pesos. Los dirigentes de las organizaciones de derechos humanos siempre habían tenido fama de intachables, nadie los podía acusar de que hacían lo que hacían por dinero. Cuando apareció la plata, aparecieron las tentaciones. Ya habían existido problemas alrededor de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia, cuando Estela de Carlotto había renunciado a su presidencia en diciembre de 2003 tras denunciar irregularidades contables. En medio de un tironeo entre las otras autoridades de la comisión —Adolfo Pérez Esquivel, especialmente— con el gobernador bonaerense Felipe Solá, a Carlotto pareció molestarle especialmente, entre otras cosas, el dinero asignado a un proyecto paralelo de Gabriela Cerruti, directora ejecutiva de la comisión. El proyecto consistía en un centro de estudios y en una revista —se llamaba *Puentes*— que, según Estela, costaba demasiado dinero para los ejemplares que tiraba y pagaba sueldos demasiado altos a demasiada gente. Verbitsky, seguro de la transparencia de los números, le contestó: “Hay un solo gasto sin rendir en la comisión: los cuatro mil pesos entregados a Remo Carlotto en ocasión de un viaje a Europa con su madre para que buscara archivos que por desgracia no encontró”. Solá pretendía reducir el grado de autonomía de la comisión, lo que limitaba su devenir financiero. Así quedaba bajo su control, para lo cual había designado a Remo Carlotto, hijo de Estela, como secretario de Derechos Humanos de la provincia. Las recriminaciones mutuas provocaron divisiones y enfrentamientos puertas adentro de la comunidad de los derechos humanos, pero a nivel de la opinión pública, la cosa no pasó a mayores.

En cambio la vergüenza por la estafa de Schoklender-Madres cayó como un martillo sobre la imagen de la Madres y sobre Bonafini, pero ahora el escándalo salpicaba a las demás organizaciones, que también recibían fondos del gobierno, sobre todo Abuelas. Por eso Estela de Carlotto fue la primera y la más interesada en destacar el problema, y además lo hizo personal: “Hebe es quien dirige esa institución y no puede estar ajena a lo que ha pasado”, dijo por entonces. Desde Madres Línea Fundadora, Taty Almeida también apuntó contra Bonafini, a quien se refirió como “esa señora”, muy secamente. Marcando la distancia, dijo: “Atrás de un pañuelo hay treinta mil desaparecidos; hay que saber llevarlo”. Los números de Madres

quedaron bajo la lupa y Hebe debió admitir la existencia de una cuenta bancaria en Estados Unidos que supuestamente les había abierto el mismísimo Mignone para recibir una donación de diez mil dólares en 1978. Las organizaciones quedaron muy expuestas y fueron blanco fácil de cualquier dirigente o editorialista opositor. Un poco a regañadientes decidieron evitar otro quiebre interno y respaldaron a la fundación a través de una solicitada que titularon "No se manchan los pañuelos". La firmaron Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas, Familiares de Detenidos Desaparecidos e HIJOS.

Verbitsky no tuvo por qué guardarse las críticas. En *Página/12* escribió que el castigo a cualquier conducta deshonesta no significaba renegar de una buena idea que, al margen del mercado, buscaba solucionar un problema habitacional integrando sectores marginados. "Sería más fácil si Bonafini ahorrara al Congreso los insultos que primero usó contra los asesinos de la dictadura y luego para dirimir diferencias políticas o ideológicas con sus compañeros de lucha del movimiento de derechos humanos y con aquellas Madres de Plaza de Mayo que no creían en el dogma de su infalibilidad", sentenció.

Chillier se sorprendió a medias, porque ya había chocado con Hebe con el tema de reparaciones, y luego con los Juicios por la Verdad, a los que ella se oponía. Mignone pensaba que aceptar las reparaciones era una decisión personal de la familia, en la línea de Carlotto, quien tenía claro que no le devolvían la vida de nadie pero que acaso les vendrían bien a algunos de los familiares de víctimas. "Y el que no lo quiera para él por alguna especie de dilema moral, que done la plata a un proyecto benéfico", pensaba. Hebe, en cambio, había afirmado que vendían la sangre de sus hijos. Carlotto ya no conservaba nada en común con Hebe y sus diferencias eran irreconciliables, no solo por las reparaciones, sino por la forma de entender su función en los años de la democracia: una basaba su trabajo en mirar al futuro buscando nietos, la otra en mirar al pasado erigiendo a sus hijos como mártires y aun esperando que se haga realidad su histórico pedido de "Con vida los llevaron, con vida los queremos".

15
La Ley de Medios

Damián Loreti se recibió de abogado en 1986 y lo primero que hizo con el título bajo el brazo fue llevar su currículum al CELS porque, simplemente, admiraba a la institución. Nunca lo llamaron, pero creía, luego de haber leído *Iglesia y dictadura*, que una organización liderada por el autor de ese libro tenía que ser respetable e interesante. Además, en la facultad había sido adjunto de Mario Landaburu, antiguo abogado de la Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGTA) y del propio Rodolfo Walsh. Sentía que por ahí existía un vínculo con el CELS.

Un par de años después militó en el peronismo renovador de Cafiero y a fines de la década ya estaba haciendo sus primeras armas como abogado en Fatpren, la Federación Argentina de los Trabajadores de Prensa, uno de los gremios históricos de los periodistas.

La vida gremial lo llevó a cruzarse con Lilia Ferreyra, quien lo llevó a conocer a Horacio Verbitsky para discutir algunos tecnicismos sobre los temas de injurias y desacato, que afectaban directamente a Verbitsky. El Perro quedó impresionado con su capacidad y su saber técnico alrededor de legislación sobre medios, derecho a la información y libertad de expresión.

Tiempo después lo invitaron a participar en la asamblea de socios del CELS. "Esto es como que me regalen una entrada para ver a los Stones en la fila uno", pensó. Loreti ya era director de la carrera de Comunicación en la UBA y en 2006 se convirtió en vicedecano de Ciencias Sociales. En el CELS fue, según pregonaba, un "socio intenso", lo que ayudó a que Horacio Verbitsky volviera a acordarse de él: "¿Tenés ganas de estar en la comisión directiva?", le preguntó por teléfono. "Para mí sería un honor", contestó Loreti.

Hasta entonces, nadie sabía muy bien qué hacer con el tema medios en el CELS. Andrea Pochak tenía mucha incidencia: solía hacer de vocera, trabajó mucho en debates legislativos y llevó la causa Kimel. A partir de ese momento, la mayor participación de Loreti redundó en nuevas formas de trabajar, cruzando su experiencia en la temática con la experiencia en litigio de otros colegas. Para poner en tema a sus nuevos compañeros de la comisión directiva, los invitó a asistir a sus clases teóricas en la facultad: Abregú, Abramovich y Pochak fueron

algunos de los que asistieron. Una de las primeras cosas que Loreti hizo puntualmente para el CELS, como asesor técnico, fue acompañar a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) ante la CIDH.

Pero el interés de Loreti era otro, o el mismo, pero visto desde un lugar más ambicioso. Llevaba dos años coordinando la Coalición por una Radiodifusión Democrática, un colectivo que se proponía, a través de la formulación de veintiún puntos, establecer una nueva Ley de Medios para reemplazar la vigente, heredada de la dictadura. Ya entonces había pensado: "Sería bueno que el CELS esté en la coalición".

La idea de la coalición no fue autoría exclusiva de Loreti, pero él sí fue quien tuvo más incidencia. Además estaban Néstor Busso, por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO); Miguel Rodríguez Villafañe, por las cooperativas; Alejandro Verano, por la Universidad Nacional de la Plata (UNLP); Ernesto Lamas, por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), y gente de algunas carreras de Comunicación. Como antecedentes en la Argentina solo existía el intento del Consejo de Consolidación de la Democracia, que el propio alfonsinismo frenó. Según Loreti, Alfonsín ya tenía preparada la privatización de muchos medios.

Loreti y un grupo que entraba en una mesa de truco se empezaron a juntar en un local de San Telmo y lo primero que se plantearon fue hacer una plataforma, inspirada en algunas experiencias de Perú y de México. Juntos escribieron los veintiún puntos que sí o sí deberían sostener una eventual nueva ley y los presentaron el 27 de agosto de 2004, coincidiendo con el Día de la Radiodifusión. El siguiente movimiento le tocó a Guillermo Martini, entonces director de la carrera de Comunicación. Había organizaciones de la sociedad civil que ignoraban o ninguneaban el proceso. Martini las convocó para plantear abiertamente la necesidad de discutir el nuevo proyecto y voltear la ley de la dictadura. Ya nadie podía decir que no estaba enterado.

En el otoño de 2008, durante la guerra de nervios alrededor de la 125, el conflicto con el campo y la naciente guerra fría con el Grupo Clarín, un debate entre las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales también apuntalaba el camino. Esa noche se estaba discutiendo la necesidad de difundir un comunicado institucional y un profesor sugirió pedir "objetividad a los medios". Loreti se opuso. "De ninguna manera, a los medios hay que pedirles pluralidad", cortó. Finalmente, aquel 1 de abril, muy tarde, el documento se aprobó y a las pocas horas ya estaba rebotando en todos lados. El comunicado reclamaba, entre otras cosas, ese mayor pluralismo a los medios exigido por Loreti y proponía, de una buena vez, discutir la nueva Ley

de Radiodifusión.

Ese pedido resultó clave en términos de las alianzas políticas que estaban por abrocharse de cara a la anhelada nueva Ley de Medios. A las pocas horas, Loreti viajó a Uruguay por una actividad académica y pensó que el asunto quedaría aletargado en su cabeza y sobre todo entre la opinión pública al otro lado del Río de la Plata.

Sin embargo, a poco de aterrizar en Carrasco, a Loreti le empezó a sonar el teléfono. Eran los periodistas que buscaban su análisis sobre el comunicado, pero Loreti empezó a derivarlos a Federico Schuster. "Llámenlo al decano, él tiene que ser el vocero", sugería. Pero la cosa iba tomando más fuerza. Los editorialistas de *Clarín* y *La Nación*, exasperados, pidieron que la Facultad de Ciencias Sociales se abstuviera de intervenir y criticar en público a los medios. "Qué complicado sería hacerle caso a lo que reclama esta gente estando al mando de una carrera de Comunicación", pensó Loreti.

Pocas horas después, mientras se movía por inercia entre pasillos y auditorios de conferencias montevideanos, el teléfono volvió a sonar. Era Schuster. "Dejá todo lo que estás haciendo, te volvés mañana en el primer avión. Mañana nos recibe la presidenta." Loreti quedó mudo. Supuso que era una buena noticia. No preguntó mucho más e hizo caso.

A las ocho de la mañana siguiente se subió a un avión y a las diez ya le estaba sonando el teléfono en Aeroparque. Era Gabriel Mariotto, que estaba en el Comfer (Comité Federal de Radiodifusión) hacía apenas tres días. No había tenido tiempo para conocer los detalles de su función y mucho menos los proyectos que se derivaban de la declaración de la facultad y de los veintiún puntos de la coalición. Le pidió una reunión breve antes de entrar a ver a Cristina Fernández de Kirchner para conocer cabalmente qué era lo que estaban demandando. Esa misma mañana se encontraron y hablaron unos minutos, pero pronto se hizo la hora de entrar a la reunión.

En el despacho de la Rosada los esperaban la presidenta, rodeada del propio Mariotto y Enrique Albistur —secretario de Medios—, María José Lubertino —por el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi)—, Aníbal Fernández —ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos— y Florencio Randazzo —ministro del Interior—. Loreti entró flanqueado por Schuster, Mariana Moyano —directora de Comunicación Institucional de la facultad—, Alejandro Kaufman, que recién empezaba como director de la carrera, y Gustavo Gulla, director de gestión. Se saludaron con cordialidad y empezaron a intercambiar ideas.

"Le quiero agradecer el coraje cívico a la facultad, y el hecho de que se hayan jugado a participar y de exponerse en la consideración pública mientras otros se siguen callando aunque piensen como

nosotros", les dijo Cristina mientras todos se acomodaban en sus sillas. Por el otro grupo, el primero que habló fue Gulla: "Hay cosas que tienen que ser revisadas en la Argentina en esta materia. Lo primero: la Ley de Radiodifusión de la dictadura", dijo. "Hay cosas que son inadmisibles", agregó Loreti.

Los visitantes explicaron su proyecto, los demás tomaban nota. Loreti estaba impresionado por el grado de detalle con el que se manejaba la presidenta. La charla duró una hora y media y nunca se mencionó a *Clarín* —en todo caso, Cristina se refería a "la situación de los medios", así, en abstracto—. Pero por supuesto que ella y Néstor lo tenían muy presente. Loreti, también.

En las carreras de Ciencias de la Comunicación, *Clarín* ha sido siempre un objeto de estudio: desde la manera de titular, la forma de concentrar medios y acumular señales, el manejo de la publicidad, la relación con la competencia, la concentración económica hasta su política empresarial y los despidos de fines de los noventa, la eliminación y prohibición de representación sindical. Para Loreti y su grupo de docentes en la UBA, *Clarín* era un paradigma a diseccionar. También estaba muy al tanto de una vieja disputa de la década anterior: *Clarín* le había propuesto a la carrera de Comunicación hacer una maestría conjunta. La idea fue rechazada y la entonces directora Margarita Graziano fue una de las más firmes opositoras. *Clarín* sintió el impacto pero al poco tiempo ya había empezado gestiones con la Universidad de San Andrés para hacerla con ellos.

Al salir de la reunión, esperaban los periodistas para la conferencia de prensa. Antes de levantarse de su asiento y de dar por concluida la reunión, Cristina dio instrucciones para avisar que se venía el cambió más rotundo en el mapa argentino de medios en medio siglo: "Anuncien que se empieza a discutir la nueva Ley de Radiodifusión", ordenó. Cristina ya sabía que los veintiún puntos serían la columna vertebral de la nueva ley.

Mientras el CELS participaba activamente en las reuniones y en los debates públicos para discutir y difundir los alcances del proyecto que se desarrollaban en todo el país, *Clarín* ignoraba todo, como era de prever. Su táctica pasivo-agresiva consistió en ponerse en el lugar de víctima de un acoso cuasi dictatorial que quería censurar a la prensa independiente. Para Gargarella todo fue un poco menos heroico, o antiheroico. Se sentía comprometido con la democratización de la palabra e identificado con aquella iniciativa del período de Alfonsín, que le parecía más progresista. Para él, el tercio reservado para los medios alternativos, cooperativos y universitarios iba a ser una excusa para reforzar el relato del gobierno por una sola razón: el problema residía en que todo apuntaba a la conformación de un gran grupo por parte del gobierno y faltaban puntos de vista opuestos que tuvieran un

sesgo no solamente antiempresarial, sino antigobierno, con comisiones plurales de control. “Si están pensando en un organismo como la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), ya están poniendo una espada de Damocles sobre la ley y solo quieren facilitarle al gobierno la posibilidad de fabricar su propia estructura de medios disfrazado de política antimonopolio, pero en verdad debería ser antioficialista.” Gargarella esperaba que “la democratización de la palabra” obligase a repensar también la democratización de los recursos de la publicidad oficial, por ejemplo. Bajo sus críticas también cayeron algunas de las intervenciones del CELS, que seguía muy activo en torno a la iniciativa. Pero lo que para Loreti y compañía era un prodigio, para Gargarella y los suyos era una bola de confusión y dudas. Cuando vio que en las reuniones legislativas los representantes del CELS parecían dejar de lado el caso en sí y subían el nivel de abstracción —según él, emulando a los clásicos abogados políticos— le pareció que estaban legitimando un proceso que para él merecía una mirada más crítica. “¿Qué importancia tiene discutir ahora si la nueva ley es más acorde con estándares internacionales? No es momento de discutir en abstracto, sino justamente lo contrario: discutir la letra chica”, razonaba. Pero el proyecto parecía tener destino de ley desde que aglomeró a todo el kirchnerismo, el partidario y el que adhería desde ONG, universidades, medios alternativos, colectivos indígenas, de homosexuales, ambientalistas y del interior. Además, por supuesto, parecía una cuenta pendiente para Néstor.

16
Los qom

La cosa era controlar la calle. Un poco de espionaje a lo bruto y una nueva herramienta que parecía salida del cerebro de algún gerente de empresa privatizada: la represión tercerizada estaba empezando a prender como idea para neutralizar manifestaciones de no muy alta intensidad, como las de ambientalistas o estudiantes, o algunas más picantes, como la de los sindicatos de izquierda. Algo de esa mala mezcla de espionaje, control callejero y política de punteros se estaba haciendo evidente en la plaza del Obelisco. La tribu qom La Primavera, una comunidad indígena de Formosa, llevaba cinco meses de acampe. Reclamaba por sus tierras, por el acceso al agua, por un documento nacional del identidad. Pero también protestaba contra la represión del gobernador Gildo Insfrán, aliado K. La policía de su provincia había matado de un balazo al dirigente Roberto López. Al otro día, Mario López, de la comunidad Pilagá, fue atropellado por un policía y también murió. Antes habían sido otros.

El reclamo los llevó a montar un acampe en la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio, un lugar demasiado visible como para intentar neutralizar a un grupo de gente en la superficie, por lo que la opción para el gobierno fue operar por abajo. Félix Díaz, el líder de los qom —en su tierra y en la que visitaran—, venía tratando de contactarse con el CELS desde 2007 porque sabía que tenían abogados idóneos que los podían ayudar. Pero cada vez que intentaron un acercamiento algo fallaba y no pasaban de la recepción. A través de la buena voluntad de la antropóloga Lorena Cardín y Pablo Ceriani, un reconocido abogado especialista en migraciones, intentaron acercarse más, pero alguien les mandó a decir que por entonces no eran un tema prioritario. Cuando en 2010 explotó la situación en Formosa, el CELS sí propuso acompañarlos penalmente, para lo que empezaron a trabajar con Silvina Zimerman, experta en derechos territoriales e indígenas.

En mayo de 2011, los qom seguían chupando frío y pasando hambre entre los autos, los edificios y los oficinistas que cruzaban la 9 de Julio. Estaban todo lo incómodos que podían estar, usando ropa ajena, comiendo en bandejas de plástico, usando los inodoros de los bares cercanos. “Está difícil, hay muchos intermediarios”, evaluaba Félix,

quien por muy agotado y muerto de frío, por muchas ganas de regresar a su tierra que tuviese, sabía perfectamente que la discusión no era jurídica sino política. Una mañana de esas, se le apareció Andrés Larroque, el "Cuervo", para sumarse a la lista de interlocutores, pero esta vez pareció que iba con la solución definitiva. "Tranquilo —le dijo a Díaz—, estoy trabajando directamente con Aníbal Fernández." La carta parecía buena, pero los días seguían pasando. Díaz se percató de que algo raro ocurría cuando se le acercaron dirigentes de la Túpac Amaru (la organización social de base ultra K con sede en Jujuy) y el abogado Marcio Barbosa Moreira, enviado por Florencio Randazzo, ministro del Interior. "Estos no quieren solucionar nada, solo quieren neutralizar el quilombo", evaluó Díaz. Claudio Morgado, que estaba al frente del Inadi, se acercó al grupo para aportar algo, aunque lo único que podía era generar papeles para la guerra burocrática. No volvió a aparecer: Díaz supo que a Morgado lo habían apretado para que diera un paso al costado. Más días pasaban y más personajes indeseados se les aparecían a los qom: punteros de La Cámpora, Luis D'Elía, de nuevo Larroque. Todos les vendían humo, y Aníbal Fernández seguía sin recibirlos. Un viernes acordaron una entrevista con Randazzo. Fueron a la Casa Rosada y no definieron nada, salvo que al siguiente martes tendrían una segunda reunión para evaluar los pasos a seguir. Lo único que el gobierno sabía era que quería sacarlos de ahí, sí o sí.

Sin embargo, otros dirigentes de La Cámpora parecían seguir un carril de gestiones paralelas. Cuando Díaz volvió de la reunión, un compañero le dijo que los habían ido a apretar. "O levantan el acampe o se acaba el diálogo", les dijeron. El CELS seguía el caso de cerca a través de la abogada Lourdes Bascary, pero más cerca llegó la Gendarmería. El lunes se les presentó el gendarme Saracho, el jefe de un inminente operativo. Se acercó a Díaz y le dijo: "Félix, ¿qué hiciste? Me acaban de ordenar que sí o sí te suba al micro, ya están los móviles para escoltarlos por la ruta". Díaz quedó mudo de impotencia: "¡Pero no puede ser! ¡Si quedamos en otra cosa!". Casi llora de la bronca. Díaz miró a sus compañeros y los vio agotados, pero sobre todo los vio solos. Apenas le quedaba energía para hacer una única evaluación posible: "Nos cagaron". No les dieron tiempo para más: dejaron la ropa colgada en las rejas y algunos bultos con comida que les habían donado quedaron ahí tirados. En el micro de regreso, Díaz repasó las últimas horas: un abogado del CELS les había pedido que redactaran un comunicado en el que reconocieran que voluntariamente se retiraban del acampe. No lo tomó como una actitud hostil, aunque no le hizo caso. Otros punteros de La Cámpora miraban desde la vereda de enfrente. Antes le habían palmeado la espalda para decirles "Es importante que lo levanten. El gobierno

tiene los recursos que ustedes necesitan". A cambio les seguían prometiendo, esta vez, respaldo total en las causas penales contra los veintitrés miembros de la comunidad procesados en Formosa.

Díaz nunca más vio a ningún funcionario del gobierno. Sí comenzó a ver, semanas después, al abogado Federico Efron, del CELS, en quien Díaz sintió confianza cada vez que llegaba a la comunidad para trabajar el caso de los veintitrés procesados. Díaz siguió valorando mucho a Efron, aunque no vio resultados: él quería ver a los gendarmes y policías acusados por la muerte de los indígenas qom en la cárcel, y quería tener la seguridad de que nada les iba a pasar a sus compañeros perseguidos. Pero eso no estaba ocurriendo. Seguía sin tener la respuesta que buscaba: "¿Quién dio la orden de reprimir en Formosa? ¿Quién ordenó el desalojo en el Obelisco?", se preguntaba cada día.

17
Caras de poco amigos

Roberto Gargarella había seguido el caso de cerca. Percibió el apoyo popular a los indígenas cuando pasaba con su auto, vio cómo les tocaban bocina para alentarlos. Pero se sintió un poco incómodo cuando durante esos días circularon, sobre todo en medios alternativos, las fotos de la patota de La Cámpora monitoreando el desalojo. En ellas se veía al Cuervo Larroque y a Gastón Chillier, el director ejecutivo del CELS. Algunas organizaciones encontraron en esas fotos la verdadera representación de lo que pasaba: el gobierno está en la vereda de enfrente. Otros agregaron que el CELS, claro, también lo estaba.

Mientras Buenos Aires retomaba su ritmo, Gargarella comenzó a pensar que lo que estaba haciendo el CELS era jugar el papel decisivo en la rendición de Félix Díaz. Luego se enteró de que Díaz había firmado un acta que no tenía ningunas ganas de firmar, por el cual a cambio de la reunión con Randazzo se levantaba el campamento. Gargarella quedó convencido de que el CELS prestó su nombre y su autoridad para legitimar el desalojo y dejarlo a Díaz negociando solo en la Casa de Gobierno. O sea, según su deducción, por un lado aconsejaron mal a los qom y por otro ayudaron al gobierno. O ambas cosas, aprovechando su enorme influencia y la necesidad de ayudar al gobierno a remover a los qom de la 9 de Julio, que los enloquecía. También empezó a pensar que la existencia de vínculos demasiado estrechos con el gobierno hacía muy difícil que el CELS pudiera operar con libertad. Semanas después, en una asamblea, Gargarella comenzó a sentir el rigor de lo que significa pertenecer. En la reunión se estaba presentando un reporte en el que se mencionaban, a modo de pequeños triunfos, de las gestiones por unos DNI y los contactos fluidos de los abogados con la tribu. Gargarella sintió que se estaban jactando de algo insignificante y no daban cuenta, según él, del enorme error cometido. Siempre le había sorprendido que en los momentos previos del comienzo de las reuniones, en vez de estar contentos o estimulados, los participantes estaban más bien inquietos. Luego, cuando Verbitsky empezaba a hablar, reinaba el silencio, nadie le agregaba o movía ni una coma a su monólogo. Cuando terminaba, era como si ya estuviera todo dicho y no hubiera nada más que

agregar. Verbitsky no necesitaba tener un látigo en la mano para inspirar un temor reverencial antes de cada asamblea. Le bastaba pararse ahí y empezar a hablar. Aquel día Gargarella no tenía intención de participar ni de llamar la atención sobre su persona, o exponer cabalmente sus ideas, pero la irritación que le generaba el autoelogio le hizo pedir la palabra para matar ese silencio, o para contrastarlo. Así que pidió la palabra: "Pero escúchenme, ustedes han sido protagonistas de una remoción que se hizo a las cinco de la mañana, con la llegada de gendarmes, con micros. Avalaron un documento en donde Félix Díaz se compromete a liberar la zona, a cambio de una reunión en la que se prometieron cosas y no se cumplió nada...". Los demás se paralizaron. Pensó que luego de que él rompiera el hielo, los demás que él creía que compartirían su mirada, lo apoyarían y empezarían a opinar en esa línea. Pero no se detonó nada. Todos seguían callados, mirando la punta arrugada de sus papeles. Excepto Leonardo Filippini, un jurista históricamente muy ligado al peronismo pero que en ese momento trabajaba de cerca con Ricardo Gil Lavedra en el Senado. "En el Congreso se escucha sistemáticamente el pegoteo del CELS con el gobierno y eso significa perder credibilidad", dijo, respaldando a Gargarella. Ahí Verbitsky pidió la palabra y no fue tan medido. "¡¿Vos cómo te atrevés a hablar, si estás entregado a los radicales en el Congreso?!", le dijo en un tono de voz un par de grados más arriba del normal. Gargarella creyó verlo fuera de sí. "¡Es una barbaridad! ¡Estás trabajando para los radicales! Se nota que no te sentís miembro del CELS", le dijo adelante de todo el mundo. La reunión terminó con tensión, aunque Gargarella se sorprendió de que Verbitsky se le acercara al final y lo alentara: "Me parece muy bien que manifiestes tu punto de vista, este pluralismo le hace bien al CELS". Pero a Filippini no le dijo nada.

Tal vez Gargarella estaba demasiado alterado para repasar ese momento de una manera más calma. Tal vez fuera una cuestión de sensibilidades, porque el propio Filippini lo estaba viviendo de otra manera. Creía que estaba participando de un diálogo intenso pero muy valioso con Horacio Verbitsky. Para él, el punto era plantear si existía debate hacia dentro del CELS, y en el caso de que no fuera así, fomentarlo, porque le parecía necesario. Él no era el único que lo pensaba, pero no por eso creía que adentro había un frente interno que planeara amotinarse para reclamar por la cercanía entre CELS y gobierno. Sobre todo porque además nadie lograba saber dónde terminaba Verbitsky y dónde empezaba el CELS. Porque también esa era la otra pata del planteo de Filippini: comunicar una posición institucional sólida y clara hacia afuera.

En aquella asamblea de socios habían tenido varios ida y vuelta, pero de hecho nadie perdió los estribos. Filippini simplemente

pensaba que el CELS era un lugar transparente que se rige democráticamente y que Horacio Verbitsky era un tipo honesto y de buena fe. “Si no lo creyera, ya me hubiera ido. Esto es como todo, en un punto se trata de creer o no creer”, les comentaba a sus compañeros en el pasillo una vez terminada la reunión. Filippini sobre todo pensaba que Horacio Verbitsky le hacía bien al CELS, que le servía.

El día de la siguiente asamblea llegó. Gargarella estuvo ausente por un viaje. La rutina fue la misma de siempre, la única diferencia fue que Andrea Pochak se levantó de su asiento para pedir la expulsión de Gargarella. Luego de un llamado a la compostura, el momento de tensión pasó, pero no se pudo borrar. Gargarella empezó a sentir que el CELS ya no era ese espacio que creía que era, pero no dejaba de reconocer la actitud de Verbitsky y mucho menos el trabajo del CELS. Para él, la institución no merecía el mínimo repudio, aunque sí un elogio crítico, pero el CELS no parecía querer aceptarlo.

18
La visita de Cristina y el favoritismo

Andrea Pochak ya había tenido un encuentro casi íntimo con el poder. Ella y su equipo tenían preparada una reunión con Néstor Kirchner para presentarle una propuesta tendiente a acelerar los juicios y resolver la situación de los testigos para que no se repitiera el caso de Julio López, desaparecido el 18 de septiembre de 2006. La reunión en Casa Rosada estaba pactada a las seis, pero ella llegó a las cuatro y pico para dejar a punto su presentación en PowerPoint y cerciorarse de que todo funcionara bien. El asistente que la estaba ayudando con la notebook y los cables en la Sala de Situación le dijo, como al pasar: "No, Kirchner no va a venir a esta reunión, va a estar Alberto Fernández". A Pochak se le cayó el alma al piso, pero esperó ahí hasta que se hicieran las seis.

A esa hora llegaron Verbitsky, Laura Conte y Gastón Chillier. Y a las 18.05 llegó Kirchner. Pochak se emocionó. Mientras todos hablaban sobre el caso López, Kirchner anotaba. En un momento pidió permiso para ir a buscar algo a su despacho. Volvió y mostró una foto. "Me pasaron esto, este tipo podría haber tenido algo que ver", informó a la mesa, poniendo el dedo sobre el pedazo de papel. Todos se quedaron pasmados por el nivel de detalle que manejaba alrededor del caso. Estuvieron casi dos horas con él. Cuando la reunión terminó y el grupo del CELS se iba, ella fue la última en salir. El muchacho que la había ayudado con la computadora y los cables la detuvo y, antes de que cruzara la puerta, le dijo: "Nunca vi algo así".

A medida que pasaban los meses, reuniones más públicas o más secretas entre los directivos del CELS y Presidencia se hacían cada vez más frecuentes, moldeando una relación cada vez más estrecha. Cuando un puñado de años después Cristina Kirchner visitó el CELS para el acto de reconocimiento público de responsabilidad por parte del Estado argentino en la causa Kimel, la predilección de los K por el CELS era inobjetable. La presidenta los iba a visitar en su propia casa.

Así como el caso Verbitsky culminó en la derogación del delito de desacato, el fallo Kimel hizo lo propio con las calumnias e injurias. En noviembre de 1989, Eduardo Gabriel Kimel había publicado *La masacre de San Patricio*, una investigación sobre el asesinato de cinco religiosos palotinos, sucedido en julio de 1976. En su trabajo, Kimel

criticaba la actuación de los encargados de la investigación de los homicidios, entre ellos el juez Guillermo Rivarola. El 28 de octubre de 1991, Rivarola promovió una querella penal contra Kimel por el delito de calumnias. La jueza de primera instancia Ángela Braidot condenó a Kimel a un año de prisión en suspenso y a pagarle a Rivarola una indemnización de veinte mil dólares por el delito de injurias. Según la jueza, el periodista "no se limitó a informar, sino que además emitió su opinión", lo que según ella fue "innecesaria y sobreabundante". Ante la apelación de Kimel, la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia. Sin embargo, la Corte Suprema entendió que esa sentencia había sido "arbitraria", revocó la decisión y ordenó que se dictara un nuevo fallo.

En 1999, otra sala de la misma cámara condenó a Kimel por el delito de calumnia, ratificando la pena impuesta por la jueza Braidot. Kimel interpuso un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, que fue rechazado. Un año después, el CELS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) demandaron al Estado argentino ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La comisión admitió la petición y en 2006 elaboró un informe que contenía recomendaciones para el Estado. Luego, ante "la falta de avances sustantivos en el efectivo cumplimiento" de sus recomendaciones, la comisión decidió presentar el caso ante la Corte Interamericana, que se pronunció en mayo de 2008. El tribunal ordenó al Estado argentino dejar sin efecto la condena, eliminar los antecedentes penales de Kimel y adecuar su legislación a los estándares previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Como resultado del fallo Kimel, Cristina envió al Congreso un proyecto —elaborado por el CELS— para modificar, entre otros, los artículos 109 y 110 del Código Penal, referidos a calumnias e injurias. Fue aprobado en noviembre de 2009.

El fallo de la Corte Interamericana ordenaba, además, realizar el acto de reconocimiento público de asunción de responsabilidad por parte del Estado argentino. A partir de ese momento, desde el CELS empezaron los llamados a Cancillería para ver cómo se implementaba la propuesta. Andrea Pochak propuso que se hiciera en la iglesia de los palotinos, en Belgrano R. Nunca llegó una respuesta oficial para el acto, pero hubo un contratiempo mayor: Kimel murió en 2010. Tal vez su muerte sirvió para que Cancillería acelerara la producción del acto, aun con el gran protagonista ausente: "No, no va a ser posible en la iglesia porque los palotinos no quieren porque Kimel era judío", le dijeron a Pochak por teléfono. Verbitsky transmitió la novedad a Presidencia. Cuando le informaron a Cristina, ella no se hizo demasiado problema: "No importa, yo voy al CELS", dijo. De paso, la presidenta quería lucir la ley que había sacado a propósito del caso.

El 5 de julio de 2010 a la tarde, estacionaron unos autos y una camioneta en la puerta de la sede de la calle Piedras. Faltaba un rato para la hora fijada para el arribo de la presidenta. Se bajaron unos policías y los perros que detectan explosivos también salieron de la camioneta. Luego de la revisión, se dio luz verde y la comitiva presidencial se puso en camino. Ya era de noche cuando Cristina llegó a la sede del CELS acompañada por el ministro de Justicia, Julio Alak, el canciller Timerman y Eduardo Luis Duhalde. Todo el lugar, toda la gente, todo pareció congelarse. Luego de saludar a las autoridades que la esperaban en el acceso, lo siguiente fue saludar a Pedro, el ordenanza. "¿Cómo le va, Pedro? Usted debe de ser el que más trabaja acá", le dijo la presidenta. Pedro no supo si quedarse serio o sonreír. Los demás empleados quedaron impactados por ese gesto cómplice. Todo el circo del protocolo que el CELS había armado se iba desarmando a medida que Cristina improvisaba sus pasos y sus palabras adentro del edificio mientras frenaba cada dos metros a sacarse fotos con cada uno que le pedía posar junto a ella.

Luego de los saludos, se fue al primer piso mientras preguntaba y hacía comentarios sobre la obra de Mignone. Vieron el archivo y autoridades del gobierno y del CELS se quedaron reunidos en la biblioteca junto a la madre de Kimel, quien le confesó a la presidenta la simpatía que su hijo le tenía. Chillier reparó en que la mandataria le pidió disculpas por parte del Estado argentino, en privado, minutos antes del acto protocolar. En situaciones emblemáticas como esa, era complicado no ponerse la camiseta. "Ser un profesional defensor de los derechos humanos no es algo neutro, desde afuera es muy fácil hacer un análisis lineal y pensar que yo sigo las órdenes de Verbitsky", pensaba Santiago Felgueras. O lo que es lo mismo: pensar que el CELS seguía órdenes de Cristina. Es que salvo la presencia aislada de Abuelas cuando recuperaban algún nieto, las actividades positivas y constructivas del resto del movimiento de derechos humanos eran prácticamente nulas, o por lo menos invisibles.

Pérez Esquivel valoraba todo el trabajo del CELS, pero su Serpaj hacía rato que consideraba al movimiento como un órgano desintegrado. "Y se desintegró por una cosa: primero, que hay organizaciones que vieron que en este gobierno los objetivos estaban cumplidos, y después, muchos organismos tomaron opciones partidarias", sostenía. Santiago Felgueras miraba todo de reojo, pero estaba convencido de que Verbitsky como periodista y el CELS como institución fueron los responsables de los logros más trascendentes en políticas de derechos humanos de la Argentina. Hasta Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH y de formación y carrera liberales, reconocía que el trabajo del CELS y de Verbitsky eran extraordinarios, a pesar de lo poco simpático que le caía el periodista.

Sin embargo, estaba convencido de que en la segunda mitad de la década kirchnerista el CELS había "despistado mal" y que en algún momento debería dar explicaciones. "Eso le va a tocar a Gastón, pobre. No le va a resultar fácil", creía. También sostenía que el CELS estaba entre las pocas ONG que recibían mucho financiamiento de la Fundación Ford y que, aunque se lo merecía, existían muchas otras que no recibían nada y tenían derecho a quejarse. "El CELS es una organización de derechos humanos que está a favor del gobierno, algo insólito en el mundo de los derechos humanos, porque debería tener una función crítica", pensaba. A Cantón le costaba ser completamente indulgente con el CELS porque desde la época en que estaba en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y le tocaba plantear los temas tradicionales (violaciones a los derechos humanos, torturas, desapariciones) el CELS siempre lo subestimaba planteándole que había que "avanzar hacia una nueva etapa". Claro que para las ONG de México, Colombia, El Salvador o Nicaragua no había una nueva etapa, y seguían luchando por lo mismo que cuarenta años atrás, no les importaban los DESC (derechos económicos, sociales y culturales). Pero en esa tensión seguía reconociendo, como Felgueras, que gran parte de todo lo que era el avance en materia de lucha contra la impunidad se estaba dando gracias al CELS y a los distintos casos que se presentaban en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos promovido sobre todo en la época de Abramovich, a quien Cantón consideraba "un extraordinario jurista, de los mejores". Fue él, según Cantón, quien tuvo la visión de utilizar el Derecho Internacional como última alternativa, "al contrario que muchas organizaciones que utilizaban a la Comisión Interamericana como una plataforma para hacer quilombo", decía.

Cantón aseguraba haber sido testigo de interminables peleas entre Abramovich y Verbitsky, porque Abramovich era uno de los pocos que se le plantaban, no le tenía ese temor reverencial, casi marcial que sí le tenían otros. Con la ida de Abramovich, el Perro pasó a tener un control político más fuerte sobre el CELS, pero las raíces en ese camino ya estaban echadas, sobre todo porque, según él, Abramovich había hecho maravillas para recuperar el testimonio del pasado, de los fundadores del CELS. "Cuando uno ve la historia, esto tiene sus orígenes ya en las denuncias que presentaban Mignone y Conte, y luego Alicia Oliveira, que iniciaron ese camino presentando denuncias ante la Comisión Interamericana, a partir del año 76. Cuando uno ve esos expedientes, ahí están sus nombres y eso es lo que después, ladrillo sobre ladrillo, también construyó el CELS, retomando todo aquello y volviéndolo a fortalecer, volviendo a presentar las denuncias", explicaba.

"Estas son opciones políticas, cada uno tiene que tomar opción

como organización. Para ahora y para lo que puede venir", observaba Pérez Esquivel. El gobierno, apadrinando a Madres y Abuelas y cobijando al CELS, había hecho que el Serpaj quedara muy aislado de otros organismos. "Los que están aliados con el gobierno, con nosotros ni siquiera hablan, y no es cosa nuestra, es de ellos, no nos buscan, se han separado, se han distanciado. El CELS es una organización que se cortó sola y ese sí es un problema del CELS. Nuestro trabajo sigue estando con las organizaciones populares que no están en las instancias del poder. Esa es nuestra opción, el trabajo concreto, lo de hoy. Para mí la memoria no es para quedarme en el pasado, la memoria me ayuda a iluminar el presente. Hoy los problemas están aquí. Hoy hay hambre, hay marginalidad y sigue habiendo violaciones de los derechos humanos." Esa era la lectura del premio Nobel de la Paz, muy lejos de los despachos presidenciales, lejos de las oficinas de la calle Piedras tan visitadas por secretarios, ministros y hasta por la presidenta de la Nación.

19
Cortocircuitos: frente interno

"A mí nadie me va a correr por la libertad de expresión. Nadie te manda, nadie te obliga a ser socio del CELS. Si querés criticarlo, hacelo en todo el mundo. ¿Vos qué sabés? ¿Vos qué sabés lo que pasó? Me parece una canallada. ¿Por qué esconderse detrás de lo académico para criticar el rol del CELS en los juicios de lesa humanidad? ¿Querés discutirlo? Discutilo internamente y vamos todos a las discusiones. Pero vos no podés públicamente defenestrar a la institución de la que voluntariamente quisiste formar parte." Andrea Pochak volaba de calentura pero lo que pensaba sobre Gargarella no podía decírselo a él —porque no estaba presente— ni decirlo tan abiertamente ante la comisión directiva —porque no correspondía hacerlo, y menos en ese tono—. Solamente la escuchó alguna compañera.

Creía que a Gargarella podían echarlo tranquilamente. El CELS era una institución privada, independiente, no un organismo estatal donde no se podía echar a nadie por lo que pensara. Otros la apoyaron, pero primó la conducta institucional. "Ni en pedo, ¡nos va a criticar aún más!", le dijo Verbitsky en privado. Pochak seguía masticando bronca. Su enojo desbordó y se le multiplicaron las discusiones con colegas de la comisión directiva y con Chillier. De alguna manera Pochak estaba replicando el viejo latiguillo de los dirigentes peronistas ("Primero está el movimiento"). "Para mí el CELS es lo prioritario, después venimos nosotros. Y por eso me voy", concluyó un día. Además, su relación con Chillier no daba para más y el CELS no podía sufrir eso. La tendencia a lo internacional del director ejecutivo no le cerraba por ningún lado, aunque sí reconocía que debía haber una voz local para neutralizar la injerencia superficial de las ONG de derechos humanos globales.

"No me parece", le dijo Verbitsky cuando se enteró del planteo. "En todo caso, lo que podemos hacer es que él sea un director general y vos una directora ejecutiva." No había caso. "No tiene sentido, el CELS no funciona así", le replicó Pochak. Verbitsky lo tomó como una ofensa, casi como una traición. "El CELS necesita a los dos." Pero Pochak seguía firme y sabía que a su institución le iba a hacer mal un liderazgo así. "El CELS necesita una sola cabeza. Si no, mareamos a la gente." Ya no podía imaginarse teniendo las mismas discusiones con

Chillier, como una muy reciente en la que él le había hecho una pregunta que le cayó bastante mal: "¿Qué hacés yendo vos al Congreso?". Su intuición sabía por qué se lo estaba preguntando, y sabía qué contestarle, pero prefirió que la responsabilidad política de una decisión que cuestionaba la autoridad y la capacidad de Chillier recayera sobre Verbitsky. "Qué sé yo, preguntale a Horacio por qué me manda a mí." Fue ella quien había estado argumentando por la Ley de Medios y la Ley del Consejo de la Magistratura.

Cuando Pochak dejó el CELS, fue Verbitsky quien empezó a dar la cara. Chillier aparecía en los medios brindando testimonios en algunos reportajes o firmando columnas en *La Nación* y *Página/12*. Según coincidían cerca de él, Chillier era muy efectivo gestionando fondos, pero merecer la confianza pública de Verbitsky parecía un escalón demasiado alto para su perfil. La lectura de Abregú, que siempre seguía la situación desde Nueva York, era más específica: Chillier no jugaba un papel clave, sino que acompañaba el liderazgo de Verbitsky. "La fortaleza del CELS es su coherencia, y si pierde la coherencia, fuimos", fueron casi las últimas palabras de Pochak antes de terminar de irse.

Patricia Valdez creía que acaso la profunda amistad de décadas que tenía con Verbitsky le permitía plantear posiciones un poco más personales y arriesgadas en las reuniones de comisión directiva. Tradicionalmente desde la época de Mignone arrancaban con un monólogo del Pope sobre la coyuntura. Al cabo de los años, el esquema se repetía con Verbitsky. Y como Mignone, cuando él opinaba algo y todo el resto otra cosa, él seguía firme en su derrotero. "Seré un navegante solitario y no tengo problema en seguir navegando solo", le dijo a Valdez cuando ella le comentó su particular forma de razonar. Sentía que había mucho espacio para decir, pero que no se utilizaba. "Este estilo no resuelve nada, estas cosas se tramitan de otra forma", llegó a pensar. Aun creía que Verbitsky estaba aprendiendo cómo manejarse en una organización de la sociedad civil.

El destino de la ESMA era un espejo de lo que Valdez observaba. Verbitsky —y ella también— sostenía que no había que sacar completamente a los militares del ex campo clandestino. La frase que, casi como un eslogan, reflejaba el pensamiento de Verbitsky era "Que la Armada de hoy rinda homenaje a las víctimas de la Armada de ayer". Según esta idea, había que conservar algunas de las instalaciones para la Armada y que el Casino de Oficiales, la dependencia más emblemática de la labor represiva, se habilitara como museo. Para ellos el significado político era muy fuerte, más valioso, con una visibilidad más positiva y hasta menos costoso. Sin embargo, en los debates internos, esta posición tuvo que aguantar el embate de Laura Conte y los históricos, que querían el poder total

sobre todo el predio. Ellos, además, tenían apoyo por afuera de los otros organismos como Abuelas, Madres y sobre todo HIJOS, quienes no necesariamente jugaban en una interna del CELS, sino que buscaban su propio camino dentro de su relación con el gobierno en el nuevo escenario, además de su propio presupuesto y su lugar dentro del predio.

Verbitsky y Valdez consolidaron su posición y ganaron el debate interno, pero cuando fueron a discutir con los demás organismos perdieron en la votación siete a uno. Inapelable. Verbitsky lo lamentó especialmente, porque hasta el propio Néstor Kirchner le había dicho que estaba de acuerdo con eso. Sin embargo, cuando el presidente lo comentó con el resto de los organismos, le cortaron la iniciativa en seco: “No, hasta que no se vaya el último marino, ahí no entramos”, le dijeron. Al cabo de los años, a Horacio Verbitsky le siguió pareciendo una pena que no hubiera un predio terminado que la gente pudiera visitar, a excepción del Espacio Cultural Conti. “Y están ahí con los edificios que se usan para cualquier cosa. Le han dado a cada organismo que quiso un edificio. Para nuestra opinión, eso es un disparate. Nosotros no estamos de acuerdo, lo dijimos en su momento, pero bueno, respetamos las opiniones mayoritarias. Digo, no siempre tus ideas son aceptadas por los demás. Lo aceptamos de buena manera, aunque no estamos de acuerdo, eso es la democracia”, concedía.

El devenir del CELS se siguió definiendo durante una reunión en 2011, el día en que Victorio Paulón —dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)— se incorporaba a la comisión directiva. A Valdez ya se le había hecho tarde para llegar puntual y, cuando abrió la puerta de la sala de reuniones, el encuentro ya había empezado. Verbitsky arrancaba con su monólogo y posterior introducción del nuevo miembro. Cuando Valdez buscaba su silla, escuchó que Verbitsky dijo: “Acá llega la voz disidente”. No se sintió a gusto, pero no por haber ligado la etiqueta de “crítica” sino porque le parecía injusto que fuera solo ella quien la llevara. Justamente, algo que Valdez creía inútil y cansador era mantener esa posición supuestamente independiente y decir lo que pensaba, en soledad, y que al cabo de cada reunión recibiera felicitaciones y respaldos, pero por e-mail. “Hay demasiado temor a los personajes fuertes”, evaluaba. Eso le parecía una piedra en el zapato. No pasó mucho tiempo hasta que los caminos se abrieron. “Tenemos que tomar nuestra comisión directiva y renovar las responsabilidades”, propuso Verbitsky en otra reunión. A Valdez le pareció una excelente iniciativa. “Yo propongo que Patricia salga del comité ejecutivo y entre Damián Loreti”, sentenció. Para Valdez, los siguientes minutos comenzaron a pasar como en cámara lenta y no lograba articular lo que había escuchado

con lo que pensaba ni con lo que tenía que decir. Cuando terminó de tragar saliva, Loreti ya estaba adentro. El anuncio no le cayó nada simpático. Valdez ponderaba bastante la voz que aportaba Loreti desde su saber técnico profesional, pero pensaba que con su falta de crítica ese valor se perdía totalmente. Luego evaluó que Loreti había tenido un gesto que, según ella, fue "institucionalmente" repudiable: aceptar la propuesta. "Y bueno, esas son las pequeñas claudicaciones que hacen los grupos", concluyó. En realidad, las reuniones no eran demasiado frecuentes, pero todo el mundo sentía algunas tensiones que por lo menos Laura Conte no se encargaba de disimular. Verbitsky y Chillier la sentaron a Valdez para una charla que neutralizara el mal humor. Chillier le explicó: "Las reuniones ya no están siendo útiles, está todo demasiado polarizado entre Laura y vos. Así no se puede avanzar". También la falta de incidencia en temas relacionados con cuestiones financieras o tributarias, y que tenían relación con la distribución de la riqueza, o las políticas de vivienda, brillaban por su ausencia, según Valdez. "El CELS fue capaz de decir muchas cosas, pero no con la suficiente fuerza", matizaba no sin amargura. Además, se sentía muy incómoda cuando veía que el gobernador Insfrán seguía en los palcos oficiales luego de lo que había pasado con los qom. "La negociación tiene un límite: hay que saber decir que no también", pensaba. Y estaban las propias polémicas sobre subirse o no a los palcos en actos oficiales. Verbitsky nunca lo hizo, pero a Valdez le pesaba mucho la discusión sobre si Laura Conte iba como Madre de Plaza de Mayo o como miembro del CELS. Para ella, algunos familiares sucumbían ante el peso de lo afectivo —por lo que habían hecho Néstor y Cristina— y se dejaban embargar por cuestiones que no tenían nada que ver con su función en los organismos y que, en circunstancias normales, nunca habrían suscripto. "¿Cuándo un organismo de derechos humanos se iba a subir a un palco de acto del gobierno?", se preguntaba. Ya nadie le respondería ni tenía interés en hacerlo.

Santiago Felgueras también se sentía un poco aislado por la falta de presencia alrededor del tema libertad de expresión. Solamente podía anotar algunas acciones relacionadas con la pauta oficial en medios y el trabajo junto con Editorial Perfil ante la CIDH por los límites a la libertad de expresión en la causa promovida por el ex presidente Menem. Pero todo era cuestión de matices. "Si hubiera un gobierno que no estuviera tan cerca, el CELS estaría a la cabeza en esos temas", pensaba. También le parecía que la agenda DESC estaba descuidada. Si bien entendía que estar cerca aumentaba las posibilidades de incidencia, sabía que eso era inversamente proporcional al margen de crítica hacia afuera y hacia adentro que él consideraba saludable.

Muchos años habían pasado desde las divisiones internas acerca del

juicio de La Tablada entre quienes querían una defensa política y quienes querían una defensa una técnica. Era otro CELS y otra Argentina. Ahora, además de las grandes nuevas discusiones estratégicas, estaban las pequeñas, las de todos los días, las que tienen más que ver con la gente que trabaja que con la república y sus instituciones. Una de las que más sufrieron en estas pequeñas batallas diarias fue Cristina Caiati, que iba perdiendo control de lo que sucedía en su adorado archivo. En 2007 la desplazaron del área de documentación y fue reemplazada por Valeria Barbuto, antropóloga, especialista en memoria y lucha contra la impunidad, además de esposa de Víctor Abramovich. Como sucede casi siempre, la última en enterarse fue ella misma. A partir de ese momento estuvo boyando, a disgusto. Cuando murió su madre, la pusieron a reescribir un libro sobre el ex comisario Luis Patti. Lo hizo sin estar convencida y se tomó unas largas vacaciones. Cuando volvió, su estadía en el CELS se convirtió en una agonía a la espera de la jubilación. Alguien que la vio con mala cara le preguntó en un pasillo cómo se sentía. “Me desplazaron y jamás me criticaron nada. Me degradaron. Era directora de programa y pasé a soldado raso. No me bajaron el salario porque no podían. ¿Cómo no me va a doler? Te tiran a la mierda con el verso de los abogados”, respondió.

20
Un viejo debate

En 2014, los realizadores Pablo Racioppi y Carolina Azzi terminaron *El diálogo*, un documental donde el ex montonero Héctor Leis y Graciela Fernández Meijide buscaban reabrir el debate sobre la violencia de los años setenta. Básicamente, proponían a los ex jefes guerrilleros que se hicieran cargo de lo que habían hecho y aceptaran que habían sido cuadros militares, entrenados y armados para combatir, y no víctimas ingenuas que reclamaban por el boleto estudiantil o simples militantes sociales. Las palabras finales, sobreimpresas en una placa negra, dedican el documental a “los que persisten en la sensatez”. La voz en off de Leis sobre las imágenes de una hermosa bahía cercana a Florianópolis —donde vivió desde su exilio— decía: “Fui guerrillero, estuve preso y hasta el 76 fui responsable de lo que hizo Montoneros. Y hoy digo: lo que hicimos estuvo todo mal. La desconfianza con personas que nunca quieren hablar del tema te crea un abismo porque vos te sentís juzgado y monitoreado por alguien que no permite que lo fiscalicen”.

En *El diálogo* Leis, desde su casa en Brasil, opinaba, entre otras cosas, que “lo que hubo acá entre el 73 y el 76 fue una guerra civil”, que la dirigencia de Montoneros era muy pobre intelectualmente, y que una vez recuperada la democracia, nunca hizo un aporte significativo para comprender el pasado y vivir en paz. También los equiparaba a los nazis al afirmar que Montoneros “administraba la muerte, muchas veces según la cara”, es decir, que asesinó gente que le parecía, según el aspecto, enemiga. La mirada de Leis se sintetizaba en la crítica a la política K de derechos humanos, que afirmaba que se basaba más en la venganza que en la búsqueda de “verdad, memoria y justicia” y que descolgar el cuadro de Videla no servía para construir ese “diálogo” que el título del film propone.

Graciela Fernández Meijide, por su lado, hizo hincapié en la supuesta falsa mirada que ex guerrilleros y familiares de muertos y desaparecidos sostenían. Según ella, habían pasado de la victimización a la idealización. “Que reconozcan que eran militantes, que buena parte era combatiente”, reclamaba. Es por esto que, para Leis, “Graciela se convirtió en un problema para las organizaciones de derechos humanos”. Ambos terminan cuestionando la emblemática

cifra de treinta mil desaparecidos. Fernández Meijide recordaba que en una reunión con Eduardo Luis Duhalde, este le realizó algunas consultas sobre el número, y comentaron sus dudas respecto de la definición de "genocidio" según la Convención de Naciones Unidas de 1948, es decir, si había un número al que "llegar" para presentar el caso argentino ante los foros internacionales de manera más sólida. Pero la cantidad no tenía nada que ver.

A Vera Carnovale le había llegado de boca a boca esa anécdota cuando trabajaba en Memoria Abierta. Creía recordar que el debate por el número también se había dado (y hasta originado) en el CELS. La explicación residía en que así, con esos treinta mil, se enfatizaba el nivel de clandestinidad y se comenzaba a moldear el escenario de represión y la ilegalidad. Se decía que por cada desaparición denunciada, se suponía que había otras dos no denunciadas. La otra versión que recogió es que esa cifra salió de un estudio de campo hecho en la ciudad de Mercedes, de la que se habían tomado como parámetros que tenía un obispado, batallón del Ejército y cierta base poblacional. Hicieron un muestreo de desaparecidos oriundos de Mercedes y luego lo proyectaron a escala nacional. En ambos casos la cifra se acercaba a los treinta mil, lejana de los casi nueve mil que figuran en el *Nunca más* y cuyos nombres está grabados en el *Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado* de la costanera.

Un poco antes, Luis Moreno Ocampo también había estado sugiriendo en algunos reportajes que los crímenes de Montoneros podrían encuadrarse como delitos de lesa humanidad, por lo tanto eran imprescriptibles. Quienes respaldaban esta lectura la defendían, además, con la probidad del ex fiscal y su equidistancia de grupos tanto de derecha como de izquierda. Leis, Fernández Meijide, Moreno Ocampo y todos los que querían revisar el pasado se estaban equivocando, según Carolina Varsky. "Luis tiene espalda para poder fundamentar o decir las cosas no tan livianamente", pensó cuando empezó a leer sus opiniones en algunos medios del *establishment*. Moreno Ocampo era su ídolo. Hasta fue quien le entregó el título cuando se recibió. Luego se le fue el entusiasmo por su persona cuando lo vio conduciendo un ciclo televisivo. Le pareció demasiado pegado a lo corporativo. Por otro lado, se sintió enojada cuando se enteró de las opiniones de Leis y Graciela. "Esto de venir a opinar que hay que reconciliarse cuando estuvieron años ausentes del debate…"

Según Eugenio Zaffaroni, no había nada que revisar. Para él, la autocrítica estaba hecha "desde el momento en que a nadie se le ocurre retomar la vía de la violencia". Creía que "el reconocimiento del error, por parte de ellos, está en esa actitud". No le parecía reprobable la idea de que alguien contase lo que ahora entendiera como errores del pasado. "Pero la teoría de los dos demonios, no. Eso

es falso. Y es falso, entre otras cosas, porque yo como ciudadano puedo equivocarme, puedo cometer delitos, me meterán preso, y está bien. Pero la institución del Estado no puede convertirse en criminal", sostenía. Para él estaba claro. No hay ningún debate pendiente: "En ese sentido, está cerrado". El kirchnerismo, por supuesto, tampoco estaba interesado en revisar nada que implicara poner en jaque el lugar de la militancia.

Laura Conte pareció tener algo parecido a una duda por primera vez desde que su hijo desapareció. Fue una vez que lo escuchó a Verbitsky referirse a "la guerra que hubo acá". Se asustó. Siempre había creído en su hijo desaparecido y en sus compañeros como víctimas, no como combatientes, pero luego el decreto presidencial sobre las reparaciones la tranquilizó, porque en el texto se manifestaba la confesión del Estado por sus crímenes. Además, prefería acompañar la actitud de Verbitsky, en quien solo veía una vocación que venía desde el pasado y una lealtad conmovedora hacia quienes ya no estaban.

En el proceso, algunas palabras pasaban a ser impronunciables, y otras, obligadas. Carnovale se dio cuenta de que en algunas reuniones había que decir "terrorismo estatal" y no "represión ilegal", o "centros clandestinos de detención" y no "campos de concentración", por ejemplo, y lo atribuyó a que la memoria es un espacio de conflicto. Para ella, si no se habló de las ejecuciones llevadas adelante por la guerrilla, ni de la complicidad o la tolerancia de la gente común con la represión estatal, difícilmente el relato pueda salir del círculo de los convencidos y ser aprehendido por otros. "Si no hay un relato que pueda dar cuenta de aquellos acontecimientos, si no se habla sobre la responsabilidad del peronismo en el desencadenamiento de la masacre, la única opción es la censura", sostenía. Su explicación es que sobre el grupo de organismos de familiares que formaron el núcleo de los movimientos de derechos humanos se sobreimprimió, durante el kirchnerismo, el discurso de los herederos de la militancia revolucionaria setentista, que impusieron un relato dominante respecto del pasado. Muchos de esos ex militantes revolucionarios o sus hermanos e hijos también dejaron de pertenecer al movimiento de derechos humanos y pasaron a trabajar en las estructuras estatales en áreas vinculadas.

21
El pasado

Para Verbitsky, la represión estatal que justificaba la reacción de las organizaciones guerrilleras durante los setenta empezó en 16 de junio de 1955, con la insurrección de la Marina y la Fuerza Aérea al bombardear la Plaza de Mayo. Él lo vio en primera fila cuando salía del subte para ir al colegio. Para él, la represión contra el movimiento popular empezó en ese momento. Menos de dos décadas después, él ya no era un colegial sino un miembro de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y Aramburu no era el militar gorila símbolo de aquellos bombardeos sino un ex general antiperonista que había sido ejecutado por Montoneros en 1970. Él y sus compañeros de las FAP plantearon que el acto de justicia de su fusilamiento —por su responsabilidad histórica en los bombardeos de 1955 y la represión durante la sublevación de Juan José Valle en 1956— no estaba en discusión, pero sí observaron que ese era un tipo de medida propio de la culminación de un proceso revolucionario y no del comienzo. A pesar de esa evaluación, Verbitsky nunca dejó de pensar que Aramburu tuvo una responsabilidad enorme en aquellas masacres, y que por lo tanto merecía un castigo.

Por supuesto que, con los años, empezó a tener claro que no aplicaría la pena de muerte a nadie. Ni a Aramburu ni a nadie. "No era lo que pensábamos en esa época. Uno no es idéntico a sí mismo cuarenta o cincuenta años después. Dentro de la lógica de los enfrentamientos de esa época, a un fusilador se lo fusilaba. Y marcó una línea de acción —el atentado individual— que no fue buena", reconocía.

Pero a él lo que le empezó a molestar o a perturbar de una lectura revisionista como la de Héctor Leis y la Graciela Fernández Meijide era el empeño en ver aquellos sucesos con ojos contemporáneos. "No se puede deshistorizar, descontextualizar, ponerlo en términos metafísicos y estipular 'No matarás'. Yo muchas veces cuestioné las decisiones políticas y las líneas de actuación armada", asumía, pero rescataba que nunca lo hizo desde adentro. Sus críticas le valieron reiterados ataques de Rodolfo Galimberti, Mario Firmenich y Roberto Perdía, ex líderes de Montoneros, como cuando el propio Firmenich, en el marco de una negociación con el gobierno menemista, salió a

decir en un reportaje que Verbitsky era el segundo jefe de Inteligencia de Montoneros, algo que él siempre negó.

Pero, según él, lo que de ninguna manera podía existir era una simetría —ni la consecuente revisión, judicializada o no— entre el accionar de la guerrilla y del Estado represor. Los procesos de verdad y justicia para él tenían relación con el desarrollo de las leyes contra la impunidad. “Ahora, buscar hacer una equiparación entre la guerrilla y la dictadura es absolutamente inadmisible. ¿Un enjuiciamiento, a los sobrevivientes? Las responsabilidades de la guerrilla son de tipo político, histórico. No tienen nada que ver con responsabilidades penales”, argumentaba.

Verbitsky creía que ya bastante castigo habían recibido él y sus ex compañeros. “Quienes participamos en la guerrilla sufrimos las peores represalias. También en este sentido es imposible hacer una equiparación. Yo tengo tres detenidos desaparecidos en mi familia. Las organizaciones políticomilitares pagaron un precio enorme por sus actos, sin justicia por medio, pero con crímenes, asesinatos, secuestros, con las torturas de miles y miles de compañeros, muchos de ellos relacionados con la comisión directiva del CELS”, describía.

“En el caso de la guerrilla, pudieron haber habido actos individuales de personas que tenían vinculación con el Estado, pero que no implicaban de ninguna manera la participación de un aparato jerárquico, vertical”, justificaba para aclarar las diferencias. Para explicarlo, refería casos de guerrilleros que tenían funciones en el gobierno, que tenían algún cargo, nunca de alta jerarquía, pero que el gobierno desconocía que eran militantes. Él mismo estaba en la guerrilla y trabajaba en *Clarín*, cuyos jefes no tenían idea de lo que hacía su redactor en las horas libres. “Es incomparable con un aparato organizado de poder, en el cual la junta militar decidía una cosa que bajaba unánimemente a todas las unidades aplicando una política que se ejecutaba de acuerdo a lo dispuesto por la junta, independientemente de la voluntad del ejecutor, porque si uno no aceptaba, lo hacía otro”, explicaba Verbitsky. Sin embargo, los hijos de José Ignacio Rucci —el histórico líder de la CGT que tan cerca estuvo de Perón en su regreso a la Argentina— nunca estuvieron muy de acuerdo y lograron que en 2012 se reabriera la causa por su muerte. La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ordenó reabrir el expediente que había sido archivado por el juez Ariel Lijo, que consideraba que el asesinato de Rucci, atribuido a Montoneros, no era un crimen de lesa humanidad y por lo tanto había prescripto. La idea de los hijos de Rucci, precisamente, era demostrar que alguno de los involucrados en el atentado estaba vinculado a alguna dependencia del Estado en el marco de un operativo en el que algún jerarca policial o militar había ordenado “zona liberada”.

Horacio Verbitsky nunca dejó de coincidir con el punto de vista del CELS respecto a la responsabilidad estatal. “Las condenas a los militares de la dictadura provienen del carácter estatal de una represión ejercida desde un aparato organizado de poder, vertical, totalitario, cosa que es absolutamente incomparable con los episodios individuales desarrollados por la guerrilla en cuanto al desencadenamiento de la masacre”, sostenía.

Laura Conte siempre ha rescatado casi todo lo que significaba Verbitsky antes y después de incorporarse al CELS. “Él supo y sufrió, porque él estuvo ahí”, matizaba. Con el tiempo empezó a sentir tranquilidad por que Horacio Verbitsky estuviera ocupando su lugar en una organización civil. Y mucho años después, cuando el pasado volvió a ser un tema que algunos propusieron revisar, Laura le seguía encontrando sentido a lo que decía y pensaba el presidente de la institución que cofundó su marido. Para ella se hizo necesario conocer quién es el Verbitsky que hoy revisaba ese pasado, y según entendió, toda su conducta tenía una explicación más simple de lo que podría parecer: “Él en su momento le puso muchos obstáculos a la violencia, solo siguió adelante más de lo que hubiera querido por lealtad”.

22
Divergencias: frente externo

En el mapa de las organizaciones siempre había existido una sospecha que nadie pudo confirmar. En los últimos años de la dictadura, algunos miembros de la APDH y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre le tenían desconfianza al CELS (y en alguna medida, al Serpaj) por un motivo clarísimo: sospechaban que estaban infiltrados por guerrilleros, porque la mayoría de sus miembros llegaban de la militancia en la JP o eran familiares de víctimas que tenían esa militancia. Sin embargo, eso nunca pasó. Uno de los grandes méritos de las dos organizaciones fue quedar a salvo no solo de estar manipuladas o espiadas, sino a salvo de críticas que les hubieran cortado el largo desarrollo que luego tuvieron. Claro que al cabo de casi treinta años de convivir, los intereses cruzados y la dirección que cada uno iba tomando fueron desgastando a todas las organizaciones, a las históricas y a las nuevas. El último reducto de unidad parecía ser mantener cierta coherencia y la solidez institucional. Tal vez por eso Carlotto seguía consultando al CELS, a pesar de no tener la menor intención de juntarse a tomar un café con Verbitsky. Si se cruzaban, se saludaban, y si tenían que consultarse algo por un tema puntual, lo hacían. El episodio de la Comisión por la Memoria había congelado el vínculo. Ella no lo consideraba un enemigo ni mucho menos, pero tenía el menor contacto indispensable en nombre de las buenas maneras.

Otro que estaba cruzado con Verbitsky era Santiago Cantón. Un día sonó el teléfono en su despacho de Washington. Era el vicecanciller de Canadá. “¿Le interesa ser relator especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas?”, le preguntó. Cantón abrió los ojos y afinó el oído. Se tomó unos segundos para pensar una respuesta. “Yo quiero ir con el apoyo de mi país. Si la Argentina da el apoyo, sí; si no, no”, dijo. Apenas colgó, llamó a su amigo Jorge Taiana, quien ese momento era el canciller argentino. “Contá conmigo”, le respondió Taiana. Llamó al canadiense con la noticia, pero algo faltaba: la aprobación desde Presidencia. El tiempo apremiaba y en cuarenta y ocho horas el tema tenía que estar resuelto. El canadiense volvió a llamar, intrigado para saber novedades. “Por ahora no hay nada”, respondía Cantón, ya algo inquieto. Horas después, se enteró de que la

Argentina había propuesto a Damián Loreti. Cantón sintió algo parecido a lo que siente un novio al que dejan plantado en el altar. La bilis le nubló el pensamiento pero atinó a llamar a Taiana. "Mirá, Santiago, este tema lo maneja el Perro, y el candidato del Perro no eras vos, era Damián." Cantón tragó saliva y miró por la ventana queriendo romper el vidrio de un piedrazo. "Le tuvieron que preguntar a Cristina y todo eso", trataba de relativizar el canciller. Claro, la demora hizo que se venciera el plazo para las postulaciones. "Boludo, se perdieron que la Argentina tuviera un relator sobre la Libertad de Expresión." Taiana no argumentó nada. Sabía que el otro tenía razón. "Ya lo sé", dijo.

Otro boicoteador era, según Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel. "Realmente no sé qué le pasa. Ha sido tan bueno con nosotros, tan solidario y buen compañero, no sé cómo ahora boicotea cosas de Abuelas", se lamentaba cuando el premio Nobel trabó la nueva Ley del Banco de Datos Genéticos o la promoción, justamente, del premio Nobel de la Paz para Abuelas. "No firmó, no quiere firmar, ¿qué le pasa?", se sorprendía. Le pidió explicaciones, pero lo que escuchó no le sirvió. En Abuelas se referían a él como una "vedette". Tampoco entre ella y Pérez Esquivel las disputas en torno al manejo financiero de la Comisión Provincial por la Memoria se habían borrado.

Pérez Esquivel estaba en otra vereda, una que ocupaba casi en soledad. Su opinión de Horacio Verbitsky como periodista era intachable, el mejor. Pero como dirigente creía que había politizado demasiado a su organización. El líder del Serpaj opinaba que no solamente el CELS había dejado de ser independiente, sino que Madres y Abuelas también habían dejado de serlo. "Los liderazgos son así, son opciones políticas. Nosotros, por más que podemos simpatizar en algunas cosas, preferimos sacrificar eso en pos de la libertad y de poder actuar sin compromisos políticos con ningún sector, aunque pagamos los costos", pensaba. Esa actitud, veía, los había alejado de otros organismos. "Ni siquiera nos hablan", se quejaba. Poco adepto a las polémicas altisonantes, siguió adelante con su trabajo con las organizaciones populares. Para él, faltaba verdadera participación del CELS en los grandes problemas del país, que según el Serpaj eran la deuda externa, los monocultivos, los agrotóxicos y la megaminería, entre otros.

Desde una posición mucho más radical, María del Carmen Verdú no podía sino mirar de soslayo lo que pasaba en el CELS y en los demás organismos "burgueses". Para ella, la entrada de Horacio Verbitsky al CELS le había sonado igual que la de Schoklender en Madres, pero no en referencia al tipo de persona, o a su honestidad o capacidad, sino al cambio de actitud orgánico que se había producido. "Verbitsky

convirtió al CELS en una agencia de propaganda del gobierno K", sostenía. Para ella no había diferencias entre el Perro y otros personajes que participaban en la interna como un cuadro más, como Larroque o D'Elía. Verdú además recordaba el hermetismo alrededor de la organización de los actos del 24 de marzo, tomados, según ella, por los ocho organismos históricos, y sabía de los divismos y los celos cruzados. Verdú, como les había dicho francamente cuando trabajaron el caso Bulacio juntos, siempre había renegado del CELS por "tener una actitud francamente conciliadora con los gobiernos de turno y de defensa de la institucionalidad democrático burguesa". Ella y sus colegas ubicaban al CELS en un lugar muy definido: "Como su nombre lo indica, lo vemos como un centro de estudios, no un espacio de militancia, y de hecho nadie milita en el CELS, en el CELS se trabaja".

En los márgenes del movimiento y más cercana a la actividad académica, Vera Carnovale evaluaba que durante mucho tiempo el CELS había tratado de mantenerse sólido hacia adentro y relativamente independiente hacia afuera. Sus buenas relaciones con Pochak, Varsky y Valeria Barbuto se lo confirmaban de primera mano, pero vio que a partir de la experiencia dentro del Ministerio de Seguridad se había abierto más de una brecha que también impactaba en los otros organismos, fragmentando el bloque. Ella habría preferido una política de derechos humanos más flexible, más conciliatoria, estratégica y negociada, porque había mucho por ganar. Y lo explicaba con el ejemplo de Estela de Carlotto: "Que su figura esté tan pegada a la gestión de gobierno me parece una pena, porque podría ser una figura de todo el pueblo argentino y no del kirchnerismo, no tiene por qué aparecer en cada acto público que no le compete a la causa que representa", pensaba.

Una experiencia que la impactó se dio durante un proyecto conjunto entre la Unión Europea y la Secretaría de Derechos Humanos, donde Carnovale, junto con otros docentes, impartía capacitaciones a distintos agentes públicos, incluidos de fuerzas de seguridad. La experiencia era buena, pero todo quedaba arruinado, según ella, cuando se sobreimprimía la lógica de un discurso al cual había que adherir y repetir en lugar de trabajar una idea de derechos humanos asociada a derechos civiles, culturales, sociales y económicos. Bastaba con que Marcelo Duhalde (el hermano del secretario de Derechos Humanos de la Nación) se hiciera presente en el aula para bajar línea contra *Clarín* para que Carnovale y todos los docentes y alumnos se miraran entre ellos como diciendo: "Esa lógica acá no importa, acá estamos para otra cosa".

Chillier ya estaba descreído de las alianzas con otras organizaciones, o por lo menos acostumbrado a que fuera cosa del pasado. Para él era inevitable que esas alianzas —la de Una Corte para la Democracia era

el ejemplo perfecto— no sobrevivieran porque tenían posiciones muy distintas. Desde la Asociación por los Derechos Civiles sugerían acercamientos demasiado estrechos del CELS con el gobierno, ante lo que Chillier solo podía reaccionar molesto: "¡Nos hablan de la independencia del CELS o de la relación de Horacio con el gobierno, y el presidente de la ADC (Alejandro Carrió) era el abogado de Ernestina Herrera de Noble! ¿Y Poder Ciudadano? Hugo Wortman también fue abogado de Ernestina de Noble". No era todo: "¿CIPPEC? ¡Uno de los fundadores se fue a hacer el *think tank* para [Mauricio] Macri y el otro para [Francisco] de Narváez!". Se refería a Miguel Braun y Nicolás Ducoté, ex alumnos de Harvard y Yale con contactos estrechísimos con la clase alta dirigente y colegas de la hija de Domingo Cavallo durante el momento cero de CIPPEC. Hugo Wortman había sido socio de Luis Moreno Ocampo antes de que este viajara a La Haya. Si bien es cierto todo lo que Chillier enumeraba, no es menos cierto que todas esas organizaciones tenían claro que solo podían trabajar en informes, muestreos y políticas de muy bajo impacto local, porque sabían que el gobierno nunca les abriría un canal de diálogo. Para él todas esas posiciones eran más cuestionables que la del CELS. "Horacio va con una agenda propia bajo el brazo, pero los otros, siendo abogados… hay una relación de intereses económicos respecto al cliente", argumentaba. Como bien analizaba Chillier, lo poco que le quedaba al CELS de contacto con la coalición de organizaciones que dieron origen a Una Corte para la Democracia —tal vez la alianza más solida que el CELS formó con otras agrupaciones— se terminaría pronto de ir como el agua por la alcantarilla. Para Abregú todo lo que pasaba durante el final de su mandato y los primeros años del kirchnerismo era una honesta coincidencia de programas: el gobierno necesitaba legitimarse con la sociedad y tomó herramientas que estaban afuera y tenían alto nivel de consenso social. Pero con los años la dinámica había cambiado, impactando del otro lado de la pared de la sede de la calle Piedras. Para él, lo que el CELS empezó a hacer gradualmente —para luego profundizar— fue jugar en la interna de la política del gobierno. Para eso empezó a manejar los hilos y a sus contactos moviendo los temas como mejor le convinieran. "Lo que hacíamos nosotros en los noventa, eso de ganar exposición pública para incidir, empezó a cambiar y el manejo de la llegada a ciertos actores se usó inteligentemente para empujar ciertas propuestas, lo que lo puso a jugar en la vida pública de otra manera", según veía. Para él, las otras organizaciones de la sociedad civil no vieron el cambio de contexto y siguieron jugando una estrategia de búsqueda de publicidad, cuando era obvio que durante el kirchnerismo eso ya no servía para nada. Pero había un límite con el que se estaba maniobrando demasiado al filo: "Lo de jugar en la interna uno se lo puede cuestionar o no, el

punto es dónde ya se empiezan a comprometer tus principios, tus valores", pensaba.

23
Silencio

"Hay muchos aprendizajes sobre el valor de los derechos humanos o el valor de la herramienta de la defensa de la legalidad como un instrumento básico, para defender la vida. Yo no soy de las personas que creen que el silencio sobre las instituciones o sobre las organizaciones hace bien para no mostrar flancos." Patricia Valdez hablaba sobre el movimiento de derechos humanos en general, pero en lo particular estaba pintando el paraguas que habían armado los organismos alrededor del manejo de la ex ESMA y, por consiguiente, de la gestión de Eduardo Luis Duhalde, el estólido secretario de Derechos Humanos de Néstor Kirchner.

En los setenta, Duhalde había sido socio en un estudio jurídico de Rodolfo Ortega Peña —el histórico dirigente peronista de izquierda asesinado por la Triple A— y juntos fundaron la revista *Militancia Peronista*. También fue abogado de Augusto Timoteo Vandor, el sindicalista que proponía un "peronismo sin Perón". Con el regreso de la democracia, se volcó a la actividad académica y hasta fue nombrado juez durante la presidencia de Menem. En 1983 publicó *El Estado terrorista*, un libro que con los años se transformó en base no solo para diversos estudios sobre la dictadura, sino para que la definición "terrorismo de Estado" (y no "dictadura militar" o "gobierno de facto" o "represión ilegal") se tornara tan sólida durante el kirchnerismo.

El CELS tendió a moverse con sigilo alrededor de su figura. La incomodidad que declamaba Valdez sobre los manejos del predio de la ex ESMA no encontró demasiado eco del CELS hacia afuera. "En el proceso largo de la ESMA ha habido problemas serios vinculados a poca transparencia en algunas contrataciones o lo que fuere, y me acuerdo de discusiones donde uno decía 'Bueno, pero eso hay que decirlo y decirlo públicamente…'. Pero no, siempre era mejor, callar, silenciar. Todas las instituciones que sostienen los ordenamientos más democráticos, estatales, privadas, o no gubernamentales, están llenas de contradicciones, esencialmente porque las instituciones están manejadas por personas", creía Valdez. Temas como la gestión de Eduardo Luis Duhalde al frente de la Secretaría de Derechos Humanos se manejaban con la suficiente discreción como para que no hicieran

demasiado ruido. Por eso, dentro del CELS aparecieron algunas grietas. A Patricia Valdez le empezó a molestar demasiado que en materia de memoria en general, Laura Conte endiosara sin más cualquier política, sobre todo las que provenían desde esa secretaría. “Con Duhalde hay cantidad de cosas mal hechas, poco claras”, sostenía. Se refería a la falta de transparencia en los manejos licitatorios en la ESMA y la forma ineficiente en que se manejaba la discusión sobre qué hacer allí. Para ella no había un debate productivo, sino una parodia de participacionismo que lo único que conseguía era ganar tiempo sin avanzar en nada.

Pero el peso que conservaba Laura Conte era incontestable. La viuda del cofundador no sentía ninguna tensión entre ser militante o profesional. Siempre siguió creyendo que el CELS hacía política de derechos humanos, no política partidaria ni de sostenimiento de autoridades. Para ella, esta cercanía también era relativa, pero aunque la reivindicaba personalmente, creía que el CELS tiraba una de cal y una de arena. Según ella, Patricia Valdez estaba haciendo cosas más mezquinas que criticar la cercanía del CELS con el gobierno, como aceptar cobrar más sueldo que los demás o no respetar el trabajo de otros durante su paso por Memoria Abierta, una entidad coordinadora de organismos de derechos humanos que Valdez dirigió desde su fundación en 2001 hasta 2012, cuando la reemplazó Valeria Barbuto. A Conte también la exasperaba la excesiva alta valoración que Valdez tenía de sí misma.

Institucional y públicamente la posición de la organización fue de acompañamiento a la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos, pero puertas adentro se respiraban otros aires. Hasta que en el *Informe anual* de 2008 dejó de tener contemplaciones con Duhalde, quien curiosamente en 1986 había publicado la primera edición de *Ezeiza*, la investigación que Horacio Verbitsky escribió sobre la inolvidable jornada de violencia el día del regreso de Perón. Ya desde el título del capítulo —“Un espacio vacío”— asomaba una evaluación contundente. En la página cuarenta y dos se destrozaba la gestión, acusándola de desidia en el caso de la desaparición de Julio López, falta de rendición de cuentas, pagos realizados en efectivo de manera habitual y por importes significativos que incumplen normas vigentes, contratación irregular de profesionales y desprolijidades en otros protocolos de manejo de la administración pública, entre muchas otras cosas. El informe evaluaba que la secretaría no supo traducir el mandato de Kirchner en una gestión comprometida con una agenda ampliada de derechos. “Esta oficina se limitó durante gran parte de su mandato a los temas relacionados con la búsqueda de la verdad y la justicia sobre los crímenes del terrorismo de Estado. Lamentablemente, aun en este aspecto su gestión ha estado más

enfocada en administrar la relación con los organismos de derechos humanos que a la ejecución de una política eficiente para remover los serios obstáculos en el proceso de justicia que hemos mencionado", decía.

También hablaba de la mala gestión del Archivo Nacional de la Memoria. "Si bien entre los objetivos del Archivo Nacional figura el de proporcionar un instrumento necesario en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación ante los crímenes de la dictadura, su gestión no ha desarrollado una política activa de contribución a la justicia", afirmaba. Además, citaba un informe donde se hablaba de las malas condiciones laborales de los empleados, que trabajaban "sin reconocimiento de título ni antigüedad" y con una jornada de seis horas "claramente insuficiente, en especial por la complejidad de la tarea asumida, por lo que la jornada se extiende sin el reconocimiento cabal de las horas trabajadas", si bien en otras áreas destacaba la falta de personal idóneo. Había más: se hablaba de falta de instalaciones apropiadas y falta de una base de datos, de superposición de acciones entre sectores con responsables distintos pero tareas similares, de deficiente trabajo de archivo y dependencia extrema de la máxima autoridad, es decir, estaban diciendo que la gestión de Duhalde era excesivamente personalista.

El CELS acusaba a la secretaría de tener "un rol de elevada exposición pública en relación con los juicios", que se traducía en presentarse como querellante "de manera simbólica e indiscriminada en causas judiciales de todo el país, sin un trabajo previo de investigación, sin un procesamiento mínimo de la información disponible, sin aportar una sola prueba útil a las causas, con lo cual su incidencia sobre la mayoría de los procesos de justicia es limitada", tomando un rol que no solo no le correspondía sino que obstaculizaba los procesos. Incluso destacaban una deficiencia grosera: la ausencia de personal para transcribir en una computadora viejos testimonios manuscritos, lo que según el CELS impedía "contar con datos sobre nombres o alias de represores que los buscadores no detectan, privando así a la justicia y a la sociedad de conocer sus verdaderas identidades, datos de incalculable valor histórico que solo la secretaría puede aportar".

El informe era casi inapelable. Cuando Duhalde les cortó el saludo, Pochak no se sorprendió: "Si lo matamos", pensaba. También sabía que había sido un golpe fortísimo. "Él sentía que con los organismos estaba todo bien y el CELS dijo que no, que era un desastre". Cuando a Verbitsky se le mencionaba el silencio sobre la gestión de Duhalde, se indignaba. "Eso es insostenible. Le hicimos un informe demoledor", se defendía.

Era verdad. El informe era demoledor y abrió grietas rotundas en la

relación con la secretaría, pero lo del silencio —o la falta de silencio— seguía siendo o un poco vago o bastante relativo. Era cierto que la evaluación del CELS era catastrófica, pero era incomparable el impacto que podía generar un informe que circula entre unas pocas manos con una tapa de domingo en *Página/12* o con una denuncia penal. Porque de las palabras del informe del CELS parecía desprenderse que había bastante material como para merecer una cosa o la otra. O ambas. Eligieron dar fe de lo poco que les gustaba la gestión de Duhalde pero casi puertas adentro, para que tuviera bajo —o nulo— impacto.

24
El papa Bergoglio

Las relaciones entre Néstor Kirchner y el entonces arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio empezaban a tensarse cuando Horacio Verbitsky decidió convertir en libro una de sus investigaciones sobre el vínculo entre la Iglesia y la dictadura militar. *El silencio. De Paulo VI a Bergoglio: las relaciones secretas de la Iglesia con la ESMA* fue publicado en febrero de 2005, apenas dos meses antes de que la muerte del papa Juan Pablo II pusiera a Bergoglio, por primera vez, en la lista de candidatos para sucederlo. En el libro, Verbitsky ahonda en el supuesto rol de Bergoglio en el secuestro y la desaparición de dos jesuitas, en mayo de 1976. Los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics dependían del provincial de la Compañía de Jesús que por entonces dirigía Bergoglio y trabajaban en una villa del Bajo Flores, donde fueron secuestrados por un grupo de tareas de la Armada. Estuvieron cautivos en la ESMA y en una casa de Don Torcuato durante cinco meses. Según Verbitsky, el propio Yorio, un par de años antes de morir, le dijo: “Tenía comunicación con Massera, le habrían informado que yo era el jefe de los guerrilleros y por eso se lavó las manos y tuvo esa actitud doble. No esperaba que saliera vivo”. Se refería a Bergoglio. Verbitsky retomaba así lo publicado en 1986 por Emilio Mignone en su libro *Iglesia y dictadura*, en el que denunció “la siniestra complicidad” eclesiástica con los militares, que “se encargaron de cumplir la tarea sucia de limpiar el patio interior de la Iglesia”. Según el fundador del CELS, la luz verde para los secuestros era dada por los mismos obispos. “¡Qué dirá la historia de estos pastores que entregaron sus ovejas al enemigo sin defenderlas ni rescatarlas!”, escribió.

En su libro *El silencio*, Verbitsky recurrió también al testimonio de su vieja amiga Alicia Oliveira, muy cercana a Bergoglio. La hermana de Oliveira, María Susana, trabajaba con Mónica Mignone y con Yorio en la villa de Flores cuando se lo llevaron. Según Oliveira, Bergoglio avisó del peligro inminente a Yorio y Jalics, pero ellos desobedecieron. “Cuando los secuestraron, Bergoglio averiguó que los tenía la Armada y fue a hablar con Massera. Al día siguiente aparecieron en libertad”, sostenía Oliveira, defendiéndolo. Pero la esposa de Mignone, Chela, le contó a Horacio Verbitsky una versión

diferente: “Yorio y Jalics fueron liberados por las gestiones de Emilio y la intercesión del Vaticano y no por la actuación de Bergoglio, que fue quien los entregó”, le contó Chela. “Ese es un personaje siniestro”, le dijo. Pese a los dichos de Oliveira, Verbitsky tenía —además de aquellas palabras de Yorio— más testimonios que avalaban su versión, entre ellos el libro *Ejercicios de meditación*, que escribió Jalics en 1994. “Mucha gente que sostenía convicciones políticas de extrema derecha veía con malos ojos nuestra presencia en las villas miseria. Interpretaban el hecho de que viviéramos allí como un apoyo a la guerrilla y se propusieron denunciarnos como terroristas. Nosotros sabíamos de dónde soplaba el viento y quién era responsable por estas calumnias. De modo que fui a hablar con la persona en cuestión y le expliqué que estaba jugando con nuestras vidas. El hombre me prometió que haría saber a los militares que no éramos terroristas. [...] Este hombre no había cumplido su promesa sino que, por el contrario, había presentado una falsa denuncia ante los militares”, escribía Jalics. También se estaba refiriendo a Bergoglio.

La muerte de Juan Pablo II, el 2 de abril de 2005, no solo puso a Jorge Bergoglio en la lista de papables, sino que generó el primer roce público entre el entonces arzobispo de Buenos Aires y Néstor Kirchner. Mientras el presidente resolvía si viajaba o no al Vaticano para las exequias, Bergoglio pronunciaba un discurso picante ante las comunidades educativas: “Los actuales progresismos adolescentes bloquean todo real progreso humano”, sostuvo. Su audiencia tal vez no haya entendido demasiado qué quería decir, pero Kirchner lo tomó muy seriamente y supo que el mensaje era para él. “Para algunos tener convicciones es ser adolescente”, retrucó. Pocos días más tarde, mientras los obispos se preparaban en Roma para la elección del nuevo papa, Verbitsky publicó una extensa nota en *Página/12* en la que volvía sobre el papel de Bergoglio durante la dictadura. La elección de Joseph Ratzinger en el cónclave dejó todo como estaba.

En 2011, Verbitsky retomó la ofensiva desde *Página/12*. “Mientras en Alemania se vela el papado fallido de Benedicto XVI, Bergoglio intenta lavar su imagen en espera de un eventual nuevo cónclave”, escribía. Se estaba refiriendo a la publicación del libro *El jesuita*, escrito por el periodista de *Clarín* especializado en temas religiosos Sergio Rubín en coautoría con Francesca Ambrogetti pero que funcionaba como autobiografía autorizada. Bergoglio aseguraba allí que nunca respondió las acusaciones “para no hacerle el juego a nadie, no porque tuviese algo que ocultar”. También allí Rubín y Ambrogetti escribieron que Bergoglio se encontró con Mignone luego de una misa de Jueves Santo en la Catedral. “Intenté hablarle, pero Mignone tenía una posición tomada y no quiso escucharme”, recordaba el entonces obispo. Por esa época, mientras Verbitsky

machacaba desde *Página/12*, el kirchnerismo lo acompañaba en el sentimiento y más de una voz dentro del gobierno catalogaba a Bergoglio como jefe de la oposición. Pero el 13 de marzo de 2013 una bomba cayó en el centro de la política local: Bergoglio había sido electo papa. El vínculo tuvo que redefinirse en cuestión de horas. Cuando Cristina se refirió en público por primera vez a la elección Bergoglio como papa, en Tecnópolis, los militantes de La Cámpora lo abuchearon, mientras la presidenta, seca y escueta, le deseaba suerte en su papado.

En un primer momento, Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto rechazaron de manera explícita la elección de los obispos en Roma y no dudaron en asociar a Bergoglio a la dictadura. Pero el viraje de Cristina los obligó a retroceder a todos. De un primer comunicado en el que la presidenta felicitaba fríamente al flamante papa, el gobierno pasó a la veneración de Francisco, abandonando a Verbitsky, que seguía clamando en soledad su versión de los hechos desde *Página/12*. Por su parte, Jalics, desde su retiro espiritual en Austria, comunicó que se llamaría a silencio y que el pasado ya estaba enterrado en la noche de la historia, lo que suponía o un perdón o una reconciliación.

La seguridad que tenía Verbitsky sobre lo que publicaba no solo lo aisló, sino que le costó su amistad con Alicia Oliveira. Se rompió así un vínculo de décadas. Mientras él continuaba su cruzada personal, el CELS institucionalmente miraba para otro costado. Además de la fuerte influencia de Verbitsky y del legado de Mignone en sus diatribas contra la complicidad de la Iglesia, entre los miembros de su asamblea de socios estaba Graciela Yorio, hermana de Orlando. Pero aun con esta impronta, el CELS nunca se metió con Bergoglio. “Lo que nosotros no hicimos fue una denuncia penal porque yo nunca evalué que hubiera razones”, explicaba Verbitsky. ¿Por qué no lo hizo? Según él, porque “no eran temas específicos del CELS”. Gustavo Palmieri también entendía que no había elementos para eso. Para él, Mignone siempre trabajó para comprobar el vínculo entre Iglesia y dictadura, por lo cual nadie podría decir que el CELS nunca tuvo posición tomada sobre ese tema. Pero estaba convencido de que si hubiera tenido elementos para procesarlo a Bergoglio, lo habría hecho. “Lo que yo dije cuando lo nombraron papa y lo que es un hecho que no está disputado, es que Bergoglio como presidente de la Conferencia Episcopal nunca dijo nada o nunca llevó a la Iglesia a hacer un autocrítica”, sostenía Chillier. Además, Bergoglio fue fundamental en algunos proyectos del CELS, según recordaba. “Hizo algunos llamados telefónicos clave para sacar la sacar la Ley de Migraciones que reemplazaba a la de la dictadura. Él hizo gestiones políticas para aprobar la ley”, reconocía.

Salvo Alicia Oliveira, nadie en el CELS tenía una relación personal

con Bergoglio. Pero Isabel Mignone pensaba que la continuación del trabajo de su padre por parte de Horacio Verbitsky no era todo lo fiel que ella esperaba. Si las relaciones de Verbitsky con Estela de Carlotto venían mal desde la época de la Comisión Provincial por la Memoria, el episodio del papa argentino las terminó de enterrar. Estela tenía dos fuentes demasiado fiables, según ella, para descreer de las denuncias de Horacio Verbitsky. Estela era íntima amiga de Clelia Luro, una vecina de La Plata que tuvo en su vida un modesto atisbo de popularidad entre su grupo de amigos: era la secretaria de un obispo —muy amigo de Bergoglio— que largó la sotana por su amor. "Mirá que Bergoglio es bueno, Estela. Él quiere verte, así hablan, así vos ves…" Estela tenía dudas. "Bueno, que me llame", concedió. Bergoglio nunca la llamó y ella tampoco quiso ser la que diera un primer paso. Años después, Carlotto gestionó un encuentro entre Bergoglio y Néstor Kirchner. "Es un poder, Néstor, nuestro país es católico." Pero Kirchner no quería saber nada. Según Estela, Bergoglio era simplemente un tipo que "no había dado señales". Hasta que también Alicia Olivera le empezó a hablar bien de él. "Es una mujer magnífica, creíble, ¿cómo no creerle?", comentaba sobre uno de los baluartes del CELS. Además Estela, entre el papa y Verbitsky, se iba a quedar con el papa.

El kirchnerismo y mucha gente de los organismos seguían mareados y se sintieron tocados una vez más cuando Adolfo Pérez Esquivel viajó al Vaticano para reunirse con el papa, en lo que constituía un fuerte respaldo. La novedad venía con una sorpresa extra: también llevó a ese encuentro al dirigente qom Félix Díaz. Pérez Esquivel nunca tuvo dudas, ni antes ni después. "Bergoglio en ese tiempo no era obispo, era el superior de los jesuitas", matizaba. A él le constaba que las denuncias de Verbitsky no eran ciertas. Horacio Verbitsky no solo afirmaba que no había hecho todo lo posible para proteger a los dos curas, sino que fue más allá y casi lo acusó de entregarlos. "No es así eso. Bergoglio, no fue cómplice en la dictadura. Pero, eso sí, tampoco fue un hombre que tuvo la cabeza de Novak o De Nevares. Hubo mucha gente, varios obispos, que hicieron trabajo silencioso, pero si bien Bergoglio no se destacó en la defensa de los derechos humanos, eso no quiere decir que fuera un cómplice", aseguraba el premio Nobel.

Pero Verbitsky no terminaba de saber cuándo Pérez Esquivel mentía o cuándo decía la verdad. Por eso publicó una columna en la que lo acusaba, por lo menos, de desmemoriado, y recordó cuando compartieron el piso en un estudio televisivo en ocasión de la elección de Ratzinger como papa, en 2005. Verbitsky escuchó cómo Pérez Esquivel se refería de manera un tanto crítica al entonces candidato Bergoglio, acusándolo de haber sido ambiguo y parte de una

institución que pensaba que todo aquel que trabaja con los pobres en realidad o era terrorista o los apoyaba.

Además de las grietas del pasado y la polémica por el matrimonio igualitario —aprobado en el marco de la reforma del Código Civil en 2010 y que el CELS había apoyado en las audiencias convocadas en el Senado—, la organización también tuvo un cruce con la Iglesia a raíz del aborto, un episodio que rebotó muy sensiblemente en los Mignone. En septiembre del 2011, en la inhóspita Vancouver, Fernando Mignone, el hijo cura del fundador del CELS, abogado, máster en Ciencias Políticas y numerario del Opus Dei, sintió una especie de insulto que llegaba desde Buenos Aires. Una ofensa no solo a la memoria de su padre, sino a las ideas sobre la vida que tenía y le transmitió de chico. Se trataba de la adhesión del CELS a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que impulsaba una reforma para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. "Él estuvo siempre a favor de la vida. Yo lo sé: soy su hijo", escribió en una carta que publicó el diario *La Nación*. Allí, Fernando comparaba el aborto con los desaparecidos (equiparando las "dos vidas interrumpidas") y se refería a las organizaciones de derechos humanos como grupos que estaban "forzando al mundo a un discurso antifamilia y antivida". Su conclusión era inapelable: "Pero aclaro que si el CELS lo promueve, no sigue el ideario de mis padres".

La carta del hijo de Mignone continuaba un poco la tensa línea entre los hijos del fundador y las nuevas autoridades del CELS, que veían en aquellos demasiado recelo hacia las nuevas políticas del organismo. Para los hijos, Verbitsky y compañía estaban casi traicionando la herencia de su padre. Pochak se negaba a aceptar esa lectura: "No puede andar diciendo que el CELS estafaba el legado de Emilio porque ahora defiende la despenalización del aborto y que Emilio nunca lo hubiera hecho". Para ella, como mujer de un organismo de derechos humanos, no había contradicción entre defender la despenalización del aborto y defender la vida. Pero mientras la propia presidenta siguiera siendo antiabortista, el debate nunca sería abordado profundamente.

En marzo del año 2012, la Corte Suprema de Justicia dictó una histórica sentencia sobre el aborto —el caso FAL— que establecía que "no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a un trámite judicial". El Tribunal Supremo exhortaba, además, a las autoridades de todas las provincias a que elaborasen protocolos hospitalarios para actuar en esos casos. Sin embargo, dos años después, solo ocho jurisdicciones habían cumplido con lo ordenado por los jueces. A raíz de eso, en diciembre de 2014, el CELS, Amnistía Internacional y el Equipo Latinoamericano de Justicia y

Género (ELA) presentaron una demanda para exigir al Ministerio de Salud que garantizase las condiciones necesarias para la práctica de los abortos legales en todo el país. La ADC, por su cuenta, realizó un informe en el que denunciaba la parálisis respecto de estas medidas a tres años del fallo de la corte.

Estela de Carlotto había renegado mucho con las noticias sobre el pasado de Bergoglio, aunque en su caso esa "mala información" no se la atribuía a Verbitsky. Con el caso del general César Milani fue diferente. "Ahí sí, con Milani, él nos informó mal. Vino a traer una información que, menos mal, no suscribimos nada."

25
Milani

"Las Fuerzas Armadas deben acompañar con renovadas ansias el proyecto nacional." Los pocos subordinados que estaban en el Salón Blanco de la Casa Rosada no entendían nada. Por un segundo creyeron que se refería al proyecto de San Martín o Belgrano, futuros de país con cordilleras nevadas y soldados independentistas dando la vida por sus camaradas para echar a las potencias coloniales invasoras. Luego se dieron cuenta de que no. De que el general estaba hablando de otra cosa, más de entrecasa, menos gloriosa. Los funcionarios sí que entendían, sobre todo Cristina. El 3 de julio de 2013, con un encendido discurso a favor del gobierno, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani asumió su cargo como jefe del Ejército y los oficiales que lo escuchaban a pocos metros no sabían si toser o mirar para abajo. No hicieron nada. El cura castrense empezaba a bendecir los sables. A pesar de la protección divina, la llegada de Milani a la cumbre del Ejército estaba un poco endiablada. El ascenso de Milani ya había sido cuestionado por varias figuras de la oposición, entre ellos la diputada Victoria Donda —hija de desaparecidos— y el senador radical Gerardo Morales, quien había acusado al CELS de hacer silencio frente a las denuncias por la actuación de Milani en Tucumán y en La Rioja durante 1976. Ante ese reclamo, el CELS atinó a emitir un primer comunicado el 1 de julio, en el que aseguraba que carecía de datos sobre el tema cuando fue consultado por la Comisión de Acuerdos del Senado en ocasión del ascenso de Milani, en 2010. "Una denuncia sostenía que participó en el alzamiento carapintada de 1987. Milani no figura entre ellos según una resolución de la Corte Suprema. La otra impugnación le atribuía actividades violatorias a los derechos humanos durante la llamada Operación Independencia en Tucumán. La información consolidada presente en los registros del CELS no permite constatar la información y, por lo tanto, cuestionar la proposición de ascenso", aseguraba el organismo en su descargo.

A los cuestionamientos de la oposición comenzaron a sumarse los de organismos de derechos humanos. "Es una persona que tiene situaciones en su vida profesional que son dudosas y comprometidas. Pedimos una revisión. Es preocupante su designación", dijo Adolfo Pérez Esquivel. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos lo acusó

de ser "un personaje de oscuro prontuario represivo". Pocos días después, Nora Cortiñas —de Madres Línea Fundadora— pidió "una investigación urgente" sobre su actuación durante la dictadura y solicitó su desplazamiento. A las dudas sobre su rol durante los años del terrorismo de Estado se sumaron cuestionamientos por su crecimiento patrimonial. Días después, Milani quedó aún más comprometido por el testimonio de un ex preso político, Ramón Olivera, quien ratificó que el flamante jefe del Ejército participó en el proceso de su detención ilegal en La Rioja durante la dictadura. "A vos te cortamos la carrera de guerrillero", contó Olivera que le dijo Milani durante uno de los interrogatorios a los que lo sometió. Además, lo acusó de haber encabezado un allanamiento en el que llevaron detenido a su padre, en marzo de 1977. En paralelo, Jorge Lanata difundió un informe en su programa *Periodismo para Todos* en el que denunciaba que Milani había estado involucrado en la desaparición del soldado Alberto Ledo, ocurrida en 1976. De acuerdo con la denuncia hecha por el ex conscripto Álvaro Illáñez, Ledo, que era asistente de Milani, fue llevado a Tucumán en medio del Operativo Independencia, tras lo cual nunca más apareció. El Ejército dijo que Ledo había desertado. En 1977, Graciela Ledo vivía en Buenos Aires cuando su hermano colimba desapareció. Ella y su madre, Marcela Brizuela, patearon las calles de la capital de un organismo a otro. Estuvieron en la APDH y en Madres. Alguien les habló del CELS. Hacia allí fueron y las atendió Emilio Mignone. Las mujeres le relataron lo que había pasado. Es decir, lo que les habían dicho los militares que había pasado. Mignone tomó nota de todo, las contuvo. "No son las únicas, hay mucha gente en la misma situación. Mi compañero Conte también tiene un hijo colimba desaparecido", les contó. Semanas después, la madre de Ledo se convirtió en una de las fundadoras de la delegación de Madres de Plaza de Mayo en La Rioja. El caso Ledo pasó a engrosar el expediente de denuncias que la CIDH se llevó de Buenos Aires en 1979.

Andrea Pochak estaba en el CELS cuando le pidieron opinión sobre Milani para uno de los ascensos previos. Ella y su equipo mandaron información al Senado. "No tenemos nada", decían las conclusiones pero, como siempre, aclararon: "Eso no significa que no tenga antecedentes, sino que nosotros no tenemos nada". Pero luego vio cómo el CELS se puso a estudiar y encontró cosas que no cerraban. Cuando el CELS vio que podía demostrar la conducta irregular de Milani, convocó a los demás organismos. "Tenemos esto." Se refería a elementos relacionados con las desapariciones de Ledo en Tucumán y del soldado Olivera en La Rioja. "La investigación de Ledo es alrededor de una causa en la que Milani no está imputado, con lo cual no figuraba en los antecedentes de las causas como imputado y por

eso nunca avanzó y no había forma de que apareciera en ningún expediente ni en nuestras estadísticas, como sí aparecen las personas imputadas en las causas”, explicaba Chillier. Por otro lado consiguieron una publicación del *Nunca más* de La Rioja, donde figuraba la otra denuncia de los Olivera. La información fluía y las novedades explotaban con el correr de horas. “Bueno, tenemos demasiado. Hay que llamar a una reunión de la comisión directiva”, concluyeron los abogados del CELS. El tema sacudía a los medios, y a Laura Conte el tema la tocaba muy directamente por la simetría del caso Ledo con el de su hijo.

Chillier había escuchado hablar de Milani a través de una de las colaboradoras de Nilda Garré. “Milani estaba siempre por ahí y tenía influencia en el ministerio”, le habían dicho. Según él, empezaron a sentir cómo otros contactos del gobierno con los que habitualmente hablaban por otros temas empezaron a ponerse nerviosos. “Están a las puteadas con nosotros”, comentaba. Pero al mismo tiempo los abogados se sentían muy tranquilos con su decisión. “En una relación costo-beneficio es evidente que nosotros quedamos muy consistentes y coherentes con los principios que sostuvimos todo el tiempo. Y ahí es donde creo que nuevamente es otro de los casos donde se puede medir eso de la cooptación. Si alguien está cooptado, no toma una decisión de ese tipo”, apuntaba. El punto de máxima tensión entre el CELS y el gobierno, temían, traería consecuencias y significaba pagar un costo: varias puertas se iban a cerrar. A Pochak lo que más le enervaba era la acusación sobre por qué los papeles para impugnar a Milani aparecieron después y no antes. “El CELS no tenía la información, ¡y no tenía por qué tenerla! Los archivos del CELS no son infalibles”, argumentaba. Damián Loreti pensaba más o menos lo mismo. “El CELS no es un organismo público pero acá lo trataron como si lo fuera, como si tuviera la responsabilidad de tener toda la información referida a Milani cuando se trata de una pequeña organización privada, con recursos limitados y con un archivo que se hizo a pulmón”, pensaba.

Santiago Felgueras empezó a escuchar sobre el tema en los medios y llamó a Carolina Varsky para preguntarle qué pasaba. “No sabemos”, le dijo primero. Luego saltó que la verdad estaba enterrada en unos expedientes del Noroeste. Varsky se lo explicó, y le creyó. “No hicimos algo mal, es que no teníamos la información”, le juraba. El CELS estaba caminando en una zona de penumbras donde el límite entre usar los derechos humanos para hacer política y hacer política usando los derechos humanos era muy difuso. Gustavo Palmieri tenía claro que había dos lugares donde pararse. Y para él, en cuanto a lo de Milani, se estaban parando junto a la oposición. “No nos molesta, creemos que es la posición correcta”, pensaba. Una posición diferente

a la que estaban aproximándose otros organismos que sostenían que hasta que Milani no estuviera procesado, habría que esperar. De todas maneras, para Horacio Verbitsky había demasiados mitos alrededor del tema. Supuesta discrecionalidad en el manejo de los antecedentes, datos escondidos, reuniones y contactos secretos entre él, Milani y Nilda Garré, diseño de tácticas de inteligencia, entre otras leyendas urbanas que las operaciones de prensa iban sugiriendo.

Horacio Verbitsky aseguraba que solo había visto a Milani una sola vez en su vida, poco antes de que explotara el tema de su ascenso. "Jamás tuve diálogo con él", juraba. Verbitsky siempre parecía convencido de lo que decía, y si no estaba convencido, no decía nada. Como cuando aseguraba que se pusieron a investigar a Milani más rigurosamente a partir de las denuncias públicas. "Cuando escuchamos que había una madre de Plaza de Mayo que aseguraba que Milani había participado en la desaparición de su hijo y que había un conscripto que decía que secuestraron a su padre y lo golpearon y secuestraron a él, y que Milani lo llevó al tribunal, entonces sí empezamos a investigar el tema. No lo habíamos hecho antes porque no había habido denuncias antes", aseguraba. No podía tolerar que se dijera que el CELS apoyaba a Milani. "Lo que no hicimos fue cuestionar sus ascensos previos, porque no había denuncias que nosotros tuviéramos registradas." En la reunión de comisión directiva convocada de urgencia tras tener la certeza que la información les proporcionaba, Verbitsky dejó que todos hablaran primero y se guardó para él el cierre. Gastón Chillier dio los detalles de la nueva información que tenían y abrieron la opinión a los demás miembros. Laura Conte fue la primera que habló. "Es lo mismo que hicieron con mi hijo. Lo secuestran y lo hacen pasar por una deserción. Tenemos que denunciar esto", afirmó allí. Todos decían lo mismo casi con unanimidad, usando frases cortas e inapelables: "Hay que impugnarlo". Llegó el turno del presidente. "Yo también sostengo eso", dijo Verbitsky. También por unanimidad decidieron convocar a otros organismos para plantear el tema antes de comunicarle a Cristina que le iban a pedir que retirase el pliego.

La reunión con los demás organismos se hizo el jueves 18 de julio en la sede de Abuelas, en Monserrat. No tardaron mucho en acordar que el tema merecía un mensaje sólido y conjunto al gobierno: le bajarían el pulgar a Milani. Cuando terminó la reunión, Verbitsky tomó el teléfono y desde ahí mismo llamó a la Rosada para hablar con Cristina y adelantarle el tema. "Me estoy yendo a Colombia, pero los recibo el sábado a la mañana", le dijo la presidenta. Pero ese encuentro de sábado a la mañana nunca llegó. Antes, Oscar Parrilli llamó a Estela de Carlotto. "Vénganse para la Casa Rosada", le dijo a Estela. Verbitsky se inquietó. Algo no le cerraba. "Vayan ustedes", les

dijo a los demás. “No, no, vos también tenés que venir, si sos el que tiene la información”, le retrucó Estela. Pero Verbitsky sabía que por algo no le devolvían el llamado a él. “Te llamó a vos, no a mí.” Fueron, aunque en la Rosada hicieron pasar a Estela, a los miembros de Madres y a Familiares. Al CELS, no. Laura Conte tenía la puerta abierta por su condición de Madre, pero eligió quedarse afuera. “Esperen acá”, les pidieron. Laura Conte y Horacio Verbitsky se miraron y decidieron: “No, no nos quedamos nada, nos vamos”. Verbitsky volvió al CELS para preparar su movimiento. Hicieron una carta donde se detallaba y anexaba toda la información disponible. Al día siguiente le entregaron el sobre, en mano, a Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete. Era lo mismo que le iban a dar a Cristina en la reunión trunca.

En esas horas, Verbitsky había tenido una reunión con Carlos Zannini en la que discutieron el tema. La posición de Zannini no le pareció del todo disparatada a Verbitsky. “Durante los años de la impunidad bastaba con una denuncia para una impugnación, pero ahora que funciona la justicia, si no hay un procesamiento judicial, no es válido cortarle la carrera a un tipo”, argumentaba el Chino. Pero Horacio Verbitsky no estaba de acuerdo en que el proceso de impugnación tuviera que depender de una causa penal. “Tal vez no hay elementos como para una condena penal o tal vez sí. Pero, en cualquier caso, haber participado en los términos en que Milani lo hizo, lo descalifica para ser jefe del Estado Mayor”, le retrucó a Zannini. La carta para Cristina quedó en manos de Abal Medina y se paseó por varios pasillos de la Rosada hasta quedar inerte sobre un escritorio incierto. No hubo respuesta ni ese viernes, ni el sábado, ni nunca.

El domingo 21 de julio Horacio Verbitsky publicó en *Página/12* una columna donde argumentaba por qué Milani se tenía que ir y cuyo título sintetizaba todo: “Paraguas o fusible”. Si decía apoyar a la presidenta, sugería Verbitsky, lo mejor que podría hacer Milani es convertirse en lo segundo en vez de usarla como lo primero. Sin embargo, en una de las paradojas más notables del periodismo argentino de los últimos tiempos, en las mismas páginas, el propio Milani era entrevistado por Raúl Kollmann para defenderse. “No puedo creer las cosas que dicen”, decía el título. En la nota, Milani afirmaba nunca haber visto al soldado Ledo y no haber tenido nada que ver con los Olivera. “Hacen una campaña en mi contra porque yo dije que quiero un Ejército al servicio de un proyecto nacional y popular”, se defendía.

Ese domingo tampoco hubo novedades desde Presidencia, por lo cual el CELS decidió ir al día siguiente al Congreso para exponer en la Comisión de Acuerdos todas las pruebas. Se metían en territorio hostil.

Para Andrea Pochak, todo el episodio de Milani fue arduo pero transparente. “Se hizo de manera meticulosa. Una vez que con los organismos acordamos, se pensó en una carta para la presidenta. Y cuando no funcionó, se hizo público”, explicaba. El CELS daba marcha atrás. En el mensaje dirigido al presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Marcelo Guinle, Verbitsky explicaba que en consultas anteriores el organismo “no poseía en sus archivos información fehaciente que diera cuenta de la participación de Milani en delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura”, pero aclaraba que había “continuado la investigación” y así había logrado reunir información que lo llevaba a cambiar de parecer. Y agregaba que “conviene recordar que los sumarios de deserción fueron el modo de encubrir la desaparición de soldados durante el terrorismo de Estado”, refiriéndose a la situación de Ledo. Por último, sugería que el ascenso de Milani debía ser rechazado. Ese informe del CELS —que desde entonces mantuvo su enérgico rechazo al ascenso del jefe del Ejército— obligó al gobierno a postergar el tratamiento del pliego de Milani en el Senado, hasta después de las elecciones presidenciales de 2015. Para algunos fue una estocada por la espalda, pero para Horacio Verbitsky todo había sido de frente. “No hicimos traicioneramente nada, se lo entregamos a Cristina para que ella hiciera lo que tuviera que hacer”, decía.

El vínculo cómplice que tenían él y Cristina hasta entonces se congeló. En un punto, hablar de Milani era también hablar de Nilda Garré. Y también era hablar de espionaje. Verbitsky admitía que Milani era el hombre de confianza de su vieja amiga y compañera de militancia. “Me parece un hombre democrático, comprometido con los derechos humanos”, le había confiado Garré. Del otro lado veían que Milani era el primer oficial de inteligencia que llegaba a la Jefatura del Ejército, que tenía un interna con la SIDE y que espiaba para Cristina. “Y yo confiaba en Nilda, sí. Pero nunca dije nada a favor de Milani tampoco”, admitía el Perro, a la vez que relativizaba las acusaciones de espionaje. “No hay ningún dato que lo demuestre. Es una construcción intelectual o interpretación sobre una relación plausible. Pero ¿cuál es la prueba de eso? Yo no la veo. Que Nilda lo tenía a Milani por el Proyecto X, dicen. No. Si eso era de Gendarmería. Yo trato de ser muy cuidadoso, porque el nivel de desinformación y de campaña que hay es monstruoso. Yo quiero moverme sobre datos comprobados. Es decir, en el caso de Milani, el soldado Ledo y el de La Rioja son casos comprobados, entonces vamos y lo denunciamos. Quienes afirman que es espía, deberían probarlo”, contraatacaba. “Durante la gestión de Nilda en el Ministerio de Defensa —que fue cuando Milani hizo su carrera importante— yo nunca tuve indicio de que él estuviera haciendo ninguna cosa de espionaje interno. Yo con

Nilda tengo mucha confianza de hace muchísimos años, la respeto, la quiero, la valoro. Ella estuvo en el CELS también. Ella coincide con nosotros en la necesidad de que se cumpla la legislación que impida a las Fuerzas Armadas cualquier tarea vinculada con seguridad interior, con inteligencia política. Y nunca tuve, a través de Nilda, ningún indicio de que él estuviera haciendo esas cosas. Jamás. Y cuando ella me hablaba de él, jamás mencionó que ese fuese un tema por el cual ella desconfiara. Me parece que más bien, por las cosas que ella mencionaba, era un tipo que apoyaba los procesos de justicia, que no conspiraba en contra del gobierno, que no apoyaba a los retirados que querían frustrar el proceso de justicia, que estaba abierto a las reformas institucionales para la modernización de las Fuerzas Armadas." Eso era lo que Verbitsky contaba sobre lo que escuchaba decir sobre Milani. Más allá de las pruebas, Horacio Verbitsky sí podía conceder una cosa: "Lo que yo puedo decir es que a mí no me gusta. Yo lo denuncié. El CELS lo denunció. El CELS pidió que no ascienda. Él ofreció contestar preguntas del CELS. El CELS lo aceptó, igual que en el caso de Brinzoni. Nos mandó las respuestas y usamos esas respuestas para ratificar el cuestionamiento, porque nos parecía absolutamente inverosímil todo lo que contestó. ¿Qué más puedo decir? Si alguien me trae un elemento que demuestre que Milani está haciendo inteligencia interna prohibida, yo lo denuncio. Pero ¿porque lo diga el senador Morales?", desafiaba.

En diciembre de 2013, el kirchnerismo volvió a insistir con el ascenso. Pocos días antes de que su pliego fuera aprobado en el Senado, Milani visitó a Hebe de Bonafini en la Fundación Madres de Plaza de Mayo y le aseguró: "Nunca torturé ni maté a nadie". Estela de Carlotto no se animó a darle un apoyo como el que le dio Bonafini, pero dijo que el caso lo debía resolver la justicia. El CELS ratificó su impugnación pero el 18 de diciembre el oficialismo lo convirtió en teniente general. El domingo siguiente Verbitsky firmó una columna en *Página/12* en la que afirmaba que "el ascenso del ahora teniente general César Milani es un grave error político".

Graciela Ledo y su madre nunca más habían tenido contacto con el CELS. Si bien sabían que Alberto no había desertado, la falta de avances en la causa durante más de tres décadas las fue demoliendo de a poco. Hasta que en ese momento —luego de la objeción al ascenso— el nombre de Milani las sacudió de su desesperanza y volvieron a contactarse con la organización. Fue cuando supieron que había un acta de deserción. A las familiares de Ledo el acta les importaba mucho porque, según les habían dicho, era suficiente para llamar a indagatoria a Milani. Más de treinta y cinco años después, Graciela y su madre volvieron al CELS. Fueron con sus dos abogadas y, mientras hablaban con el abogado Diego Morales, alguien acercó un

folletito y más papeles a la mesa donde estaban reunidos. Era un informe de diecinueve soldados conscriptos detenidos desaparecidos que ellos habían registrado al año 1977, entre los que figuraba su hermano. Es decir, estaba denunciado como desaparecido. "Esto estaba en el archivo como parte de la denuncia", les explicaron sobre lo que Mignone había hecho treinta y cinco años atrás. "Queremos que ustedes sean coquerellantes en la causa", le dijo Graciela a Morales. Le explicaron que para eso tenían que hacer una nota formal pidiéndolo. Pero ni Graciela hizo la nota ni del CELS la llamaron, así que se introdujeron de lleno en la causa con sus propias abogadas.

Graciela rescataba que la presión del CELS y la de Horacio Verbitsky fue un desencadenante vital para demostrar que Milani sí tenía que ver con la desaparición de su hermano. El gobierno seguía firme, mientras Graciela y su madre se sintieron un poco solas. Esperaban un poco más de acompañamiento del CELS, pero valoraban su interés. Pero sí esperaron, en vano, demasiado de alguna gente que había quedado en la vereda de enfrente. No solo no recibieron ni un llamado de Hebe o Estela, sino que las repudiaron: a Estela, por lavarse las manos, y a Hebe, por apoyar abiertamente a Milani. Les asqueaba que Hebe estuviera sacándose fotos con Milani, blanqueándolo en un pseudo reportaje para la revista de la Fundación Madres en vez de estar junto a ella, justamente, una de las fundadoras de Madres en su provincia. También estaban resentidas con Aníbal Fernández, que no las quería recibir. Pero con quien más dolidas estaban era con Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación, por quien Graciela se sintió doblemente defraudada. Lo buscó, le mandó mensajes a su hermano Ramiro. "Él conoce nuestra causa, vio el material y nunca me respondió. Me extraña de hijos de desaparecidos que son tan víctimas como nosotros, ¿cómo pueden estar en un gobierno que hace esto?", se preguntaba.

El punto de congelación de las relaciones entre Verbitsky y Cristina empezó a ceder en esa época. El silencio manifestó que habían quedado bastante enojados los dos, que no tenían ganas de tomar contacto. Retomaron tibiamente el vínculo institucional cuando explotó el tema de los fondos buitre. El desgaste para el CELS no solo se medía en el vínculo con el gobierno, sino en la posición en que se había colocado a través de todo el conflicto por Milani. Primeras planas, notas en la televisión, audiencia en el Senado, fotos, columnas en los diarios. El CELS y Verbitsky ya no reaccionaban antes las noticias, eran la noticia.

26
El escenario internacional y Venezuela

Gastón Chillier es lo que Laura Conte describe como “celsiano”. Celsiano de paladar negro, para más datos. Esto es, nacido y criado profesionalmente en las ideas y los ideales del CELS. En la mirada cariñosa y protectora de Laura, los celsianos podrán cambiar de trabajo o irse a estudiar afuera, pero nunca dejan de ser del CELS. Son del CELS de por vida, ya sea como embajadores, ya sea como silenciosos colaboradores, ya sea porque pertenecer dejó una marca indeleble en sus vidas. Como Gustavo Palmieri, que pegó un póster del CELS en su despacho ni bien llegó al Ministerio de Defensa. Como Carolina Varsky o Andrea Pochack en sus nuevos trabajos en la Justicia, como la vieja guardia de Luis Zamora, Marcelo Parrilli y Pablo Llonto desde su puestos de lucha política, como Santiago Felgueras en el estudio jurídico que durante años compartió con Julio Strassera o como Víctor Abramovich desde su cargo en el Mercosur o Patricia Valdez en Cancillería.

O Como Chillier, que llegó al CELS siendo estudiante de derecho de la mano de Abregú, a quien había conocido cuando se acercó a la redacción de la revista *No hay Derecho*, fundada en 1990, una “revista de temas jurídicos pero abordados de modos irreverente desde diversas perspectivas extrajurídicas. Una revista sobre Derecho, pero no desde el Derecho”, según la definición de uno de sus fundadores-directores, Alberto Bovino. En esa redacción coincidieron varios futuros celsianos como Abregú, Bovino, Víctor Abramovich, Christian Courtis. También estaban Roberto Saba, Manuel Garrido, Mary Beloff: de lo mejor de la generación de abogados postdictadura. Horacio Verbitsky contribuyó con un artículo en el primer número.

Chillier empezó como voluntario en el CELS en 1992, en el Programa de Violencia Institucional Medios de Comunicación y Seguridad Ciudadana que dirigía la antropóloga Sofía Tiscornia, prácticamente el único realmente activo, el único con financiamiento propio en esa época de Punto Final, Obediencia Debida y vacas flacas. Por entonces los empleados de tiempo completo en la vieja oficina de la calle Sarmiento no pasaban la media docena: Mignone, Carmen Lapacó, María Villarroel, Cristina Caiati, Tiscornia y alguno más. Abregú todavía no estaba tiempo completo, pero colaboraba en el

programa de Tiscornia. El único financista era la Fundación Ford a través de Michael Shifter, el *program officer* en la oficina de Santiago de Chile.

Después de recibirse de abogado, siguió trabajando casos de violencia policial en el CELS y también defendió junto con Bovino a tres juezas de San Luis, Adriana Gallo, Ana María Careaga y Silvia Maluf, que habían sido destituidas por el régimen de los Rodríguez Saá por haber firmado una solicitada de un colegio de abogados puntano pidiendo la democratización de la justicia provincial, un tema que había acercado al CELS el jurista Eugenio Zaffaroni. El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en 2013 el Estado pidió disculpas a las magistradas y se comprometió a cumplir "medidas reparatorias y pecuniarias", pero el Superior Tribunal de San Luis sigue negándose a restituirlas en sus cargos.

Chillier partió a Estados Unidos para hacer un doctorado en derechos humanos en la Universidad de Notre Dame, dirigido por el argentino Juan Méndez, quien venía de fundar y dirigir durante quince años la ONG multinacional con sede en Nueva York Human Rights Watch. Tras recibirse y pasar una temporada en la ONG WOLA, de la capital estadounidense, Chillier volvió al CELS en 2006, ya contratado como abogado de tiempo completo, y pocos meses más tarde sucedió a Víctor Abramovich —su viejo compañero en la revista *No Hay Derecho*— como director ejecutivo de la institución.

Para entonces muchas cosas habían cambiado en el mundo de los derechos humanos y Chillier trajo de Estados Unidos una agenda para *aggiornar* el CELS: nuevas herramientas, nuevas perspectivas, nuevos temas. En la mirada de Chillier, el CELS debía formar parte de una red internacional descentralizada de agenda global, con eje en referentes locales. Era la última tendencia en ONG, y era lo que pedían sus grandes financiadores. Roberto Saba había intentado hacer algo similar en la ADC, según él sin demasiado éxito, y por eso reconocía el trabajo de su colega: "Si te fijás, el CELS forma parte de una red global de tendencias Sur-Sur, pero también está la ACLU (Asociación por los Derechos Civiles de Estados Unidos), está Irlanda, digamos que en realidad acá hay un tema interesante a nivel de geopolítica de ONG, para futuro. Hay quienes creen que las organizaciones de derechos humanos que se diseñaron en los sesenta, setenta, tipo Amnesty, Human Rights Watch, que están todas en el centro mirando la periferia, pertenecen a otra etapa histórica y que hoy hay mucha experiencia en el trabajo de derechos humanos en organizaciones locales, no internacionales, en todo el mundo. Entonces, está la idea de esta red. Y la nueva agenda de temas. Porque los temas de esas redes ya no son el juicio a los militares. Los temas son 'laburemos el tráfico de personas, laburemos temas de cárceles' a nivel global… Yo

creo que Gastón está poniendo mucha energía en esa agenda”, sostenía.

La nueva forma de trabajar quedó evidenciada en los comunicados de prensa del CELS, que la institución ya rara vez firmaba en soledad, sino que se hacía acompañar por distintas instituciones locales o internacionales, según el tema. Por ejemplo, el caso Luciano Arruga lo trabajó con la APDH de La Matanza; la campaña en contra de la penalización del aborto, con Amnistía Internacional.

Para Chillier, la adaptación a los nuevos tiempos era un proceso casi natural para el CELS, que ya venía muy acostumbrado al trabajo conjunto con los organismos de derechos humanos en los temas de memoria y justicia, y también muy habituado al trabajo internacional a través de sus presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D. C. En esa instancia, el CELS se había convertido en un referente regional desde los tiempos en que Alicia Oliveira, Martín Abregú y María José Guembe representaban al periodista Verbitsky en temas de libertad de expresión y a la familia Mignone para sortear las prescripciones a los crímenes de la dictadura.

Pero no todos estaban tan de acuerdo. Para Santiago Felgueras, el nuevo perfil internacional tenía más que ver con las necesidades de financiamiento que con intereses propios. Para Pochak, Chillier se la pasaba todo el tiempo viajando y no estaba en el día a día de lo que ocurría en la Argentina. Para Varsky, “el tema internacional” le restaba atención a la agenda de verdad y justicia. Chillier entendía a Varsky y sabía que no era la única que pensaba que lo internacional restaba atención a la agenda local, pero estaba convencido de lo que hacía. “Nosotros coordinamos una red de organizaciones del norte y del sur en la que yo soy el presidente. Está la ACLU, está el Consejo Irlandés por las Libertades Civiles, está Canadian Civil Liberties, hay una organización de Egipto, hay una organización de Kenia, de Sudáfrica, de Israel, de Hungría y nosotros. Y ahora se va a sumar una de la India. Y lo interesante de esa red es que hay muchos temas que están conectados y hay muchas discusiones de política internacional de derechos humanos donde, históricamente, la agenda la definían las organizaciones del norte. Y que no era necesariamente la agenda del sur. Hoy por hoy, a Human Rights Watch le interesa ir tras Siria, que tiene una situación gravísima, pero no es mi agenda. A nosotros, siendo América Latina, nos interesan mucho más las cuestiones de la protesta social, las cuestiones sustantivas”, pensaba. “Al principio, cuando lo planteé en el CELS, todos tenían la posición de Carolina. Ahora todos los que están acá comparten. Y el gran aliado para esa agenda fue Horacio. Somos una organización nacional con agenda global. Pero justamente no queremos replicar, no queremos ser un Human Rights Watch desde la Argentina.”

Más allá de las ventajas de estar *aggiornado* con la últimas tendencias y con lo que buscan los financistas, el nuevo perfil internacional llevó al CELS a un terreno pantanoso o al menos complicado para una organización que se jacta tanto de su profesionalismo, de su militancia y de su capacidad de incidencia en procesos políticos. Por ejemplo, en la página web de la organización aparecen distintas redes de ONG de diversas partes del mundo que el CELS integra, suscribiendo diversos comunicados. Denuncian las torturas de la CIA en cárceles secretas, condenan la interrupción del juicio al dictador Efraín Ríos Montt en Guatemala, exigen el esclarecimiento de la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes-alumnos de colegios secundarios víctimas de los grupos mafiosos integrados por el narcotráfico, la policía y las autoridades civiles en Ayotzinapa, México, y hasta alertan sobre los abusos autoritarios en Zimbabue del dictador Robert Mugabe, quien controla el país desde 1980 y es crónicamente denunciado en los foros internacionales de derechos humanos como un corrupto al mando de un aparato represivo feroz. Pero de Cuba, ni una palabra.

El 14 de febrero de 2014 fue un día negro para Venezuela. En medio de una ola de protestas y contraprotestas que se tornaron violentas por el accionar de grupos de choque de ambos lados, cinco personas murieron por heridas de bala. Cuatro eran estudiantes universitarios que protestaban desarmados en contra del gobierno. El quinto era un ex policía ultrachavista que había estado preso por poner una bomba en la sede de una cámara de comerciantes. Al día siguiente, por cadena nacional, el presidente Nicolás Maduro reconoció que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) habían utilizado armas de fuego el día anterior. Maduro dijo que los agentes habían actuado contrariando una orden suya de “no salir a la calle” y que había dado la orden de investigar y detener a los culpables. La admisión del jefe de Estado venezolano no dejaba margen para visiones optimistas. Si era cierto que los agentes del SEBIN no le habían hecho caso, entonces Maduro había perdido el control de su servicio de inteligencia. Si el presidente había mentido sobre sus instrucciones al SEBIN para no tener que cargar con los asesinatos de los estudiantes, entonces la situación era mucho peor. De cualquier modo, quedaba claro que el Estado venezolano había incurrido en una grosera violación a los derechos humanos de los manifestantes. Además de los muertos baleados, la fiscalía venezolana contó más de ciento veinte heridos y otros cuatro muertos en accidentes producidos por cortes de ruta, amén de sesenta detenidos, varios de ellos estudiantes que denunciaron haber sido torturados en comisarías.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos no tardaron en reaccionar. “El mundo entero ha visto las imágenes del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, incluido el uso de armas de fuego… todos estos actos son violaciones de los derechos humanos y son por lo tanto intolerables”, denunció AI. “La comisión ha prestado especial atención a las graves denuncias sobre supuestos ataques de grupos civiles armados en contra de los manifestantes durante las protestas que han seguido teniendo lugar en el país”, puntualizó la CIDH. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, criticó el “silencio” de los gobiernos latinos sobre la represión a las protestas contra la administración de Nicolás Maduro en Venezuela y el “abandono” de los gobiernos vecinos en la defensa de los derechos humanos seis días después de la represión. “No me sorprende el silencio regional sobre Venezuela”, aseguró Vivanco, quien puso como excepciones a los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y Chile, Sebastián Piñera. El director de Human Rights Watch calificó como “lamentable” que Brasil no se pronunciase al respecto y como “desalentador” que la Argentina se sumase a las declaraciones de solidaridad de la ALBA con el presidente Maduro. Cristina Kirchner, en concierto con sus aliados bolivarianos, había manifestado su “firme respaldo” a Maduro ante los “evidentes intentos de desestabilización de los manifestantes” sin decir una palabra sobre represión armada de los agentes civiles del gobierno venezolano.

Vivanco podría haber agregado al CELS entre los cultores de “silencio regional”. También a los demás organismos de derechos humanos de la Argentina, que alternaron entre no pronunciarse y manifestarse solidarios con Maduro ante la supuesta amenaza golpista implícita en la masiva movilización popular, cuya principal consigna era la salida del gobierno electo unos meses atrás. Pero en el CELS el silencio hacía más ruido porque con la llegada de Chillier había adoptado una estrategia de incidencia internacional y los demás organismos no solían sacar comunicados sobre Mugabe.

Al final, el CELS se pronunció, aunque tardó once días en hacerlo. Cuando lo hizo, el tema ya se había caído de las primeras planas de los diarios, por lo que la incidencia sería mínima, evitando así cualquier comparación con el entusiasta apoyo de Cristina al colega venezolano. Pero no solo fue tardío el pronunciamiento, sino también lavado y deliberadamente ambiguo, a tal punto que condenaba la “violencia” en general y no la “violación a los derechos humanos” en particular. Más aún, de manera insólita para un comunicado que representa a organismos de derechos humanos, el texto señala como primeros presuntos responsables de esa violencia a los “participantes en las protestas”. Recién después de los manifestantes aparecen mencionados, otra vez en modo potencial, civiles armados y policías o

militares: “Ante este escenario, el Estado venezolano debe llevar a cabo investigaciones de oficio, independientes, imparciales y efectivas, para el esclarecimiento de los hechos violentos, independientemente de si fueron perpetrados por participantes en las protestas, grupos armados civiles o si ocurrieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales o militares venezolanos”. La definición misma de derechos humanos desafía el orden elegido en el comunicado. A diferencia del derecho común, que se encarga de crímenes cometidos por personas comunes, por ejemplo manifestantes, los derechos humanos se encargan de crímenes cometidos desde el Estado, por ejemplo, perpetrados por agentes de inteligencia, soldados o policías y, por ende, más graves que los crímenes comunes. El comunicado sigue con una serie de consejos para Maduro, escritos en tono casi amistoso, sobre cómo el Estado debe respetar a las personas, aún a manifestantes enojados o violentos: “Es fundamental […] que cualquier actuación para mantener el orden público se realice con pleno respeto a los derechos humanos”, decía. De los crímenes del SEBIN admitidos por Maduro hacía ya diez días, ni una palabra. Eso sí: el comunicado llevaba la firma de una veintena de organizaciones sociales y fundaciones latinoamericanas, más WOLA y Amnistía Internacional, otra de las redes de Chillier.

Para el director ejecutivo del CELS, se había actuado bien porque el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una ONG venezolana cercana a la oposición con la que ellos trabajaban, supuestamente les había recomendado silencio y prudencia. Sin embargo, Provea no había firmado el prudente y silencioso comunicado de la red del CELS. “Tenemos como un decálogo informal sobre nuestro trabajo internacional que establece no hablar sobre otros países sin consultarlo antes y sin establecer estrategias previas”, se justificaba Chillier. “Firmamos esa declaración, pero antes estábamos haciendo gestiones, y deliberadamente consultamos a las organizaciones. Provea nos dijo que este tipo de cosas mejor no hacerlas públicas, no suma hacer un informe y demás, sino que es mejor hacer gestiones de bajo perfil o diplomáticas. De hecho estamos organizando una audiencia temática en la Comisión Interamericana por protesta social donde estamos invitando a organizaciones de toda la región, incluido Provea y también la Red de Apoyo, o sea, una del lado más del oficialismo y la otra de la oposición, como para tender puentes. Podemos estar equivocados o no, pero no es que nos hacemos los boludos. De alguna manera, mandan y deciden las organizaciones nacionales. A mí, cuando viene una organización internacional, ya sea Amnesty o cualquiera, y viene a decir algo acá, sin consultar, me rompe las pelotas. Porque no necesariamente coinciden con la estrategia, no necesariamente me

sirve el *name and shame* [nombrar y avergonzar]".

Tanto o más que Chillier, Verbitsky también estaba convencido de que el gobierno de Venezuela y sus aliados latinoamericanos merecían respeto y consideración. "Desde el punto de vista del CELS, nosotros vemos que hay un proceso político y cultural en toda nuestra región muy importante, muy positivo, y esto puede entrar en contradicción, en algunos momentos y en algunos lugares, con otros valores que para nosotros también son importantes", decía. "Nosotros lo que de ninguna manera vamos a hacer es una polarización de blanco y negro. Ni vamos a aprobar a libro cerrado cualquier cosa que haga un gobierno popular latinoamericano, ni vamos a partir de una específica violación de algún derecho, a condenar, como hace Human Rights Watch, todo el proceso, en el caso específico venezolano. Nos manejamos dentro de esos parámetros. Hay gente a la que le gusta tirar piedras desde afuera. Nosotros tiramos piedras desde afuera cuando hay una dictadura y no queda otra que tratar de voltearla. Ahora, cuando hay gobiernos democráticos, elegidos por el pueblo, que además son progresistas, que además implican un cambio importante para la enorme mayoría de los pueblos, y esos gobiernos cometen errores o adoptan políticas que son cuestionables, nosotros lo que tratamos es que las modifiquen. Y tratamos de no quedar embanderados dentro del portaaviones norteamericano."

Santiago Cantón había dado un paso al costado como director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fines de 2012 luego de soportar una fuerte presión del gobierno de Hugo Chávez para que renunciara. Para él, lo que pasaba tenía una explicación mucho más sencilla: "El CELS no quiere meterse con los bolivarianos", razonaba.

27
Se rompe la coalición

Nada es para siempre, y en política menos, y en la Argentina, menos que menos. Sin embargo, la alianza de organizaciones que dio luz a Una Corte para la Democracia (UCPD) parecía que perduraría por muchísimos años. Los juntaba un objetivo claro, transparente, institucional, superador, que además de conseguir un notable avance en la calidad de la administración de justicia, hablaría muy bien de las organizaciones que la impulsaron: FARN, ADC, Poder Ciudadano y, por supuesto, el CELS. Pero el tiempo le demostró a cada uno que más valía tirar para su propio lado. Llegado 2005, la coalición seguía formalmente junta aunque a sus miembros les iban quedando pocas ganas de reunirse a pensar proyectos en común.

El primer quiebre llegó cuando se empezó a discutir la modificación del Consejo de la Magistratura, hacia finales de aquel año, y marcó uno de los episodios más resonantes en la vida profesional de Pochak. Ella fue la encargada de ir al Congreso a discutir la posición del CELS —y de las organizaciones aliadas—, pero del otro lado tenía una dura rival: Cristina Fernández de Kirchner, entonces senadora y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, además de primera dama. Primero había tenido que sostener su opinión internamente ante un Verbitsky que tenía sus reservas. Pochak explicaba y Verbitsky solo respondía: "No, no me cierra, no me cierra". Luego de más análisis y explicaciones, Verbitsky se dio por satisfecho. "Me convenciste", le dijo. "Ahora tenés que ir al Congreso a explicar lo mismo que me explicaste a mí." Lo que Pochak tenía entre manos era un documento muy crítico sobre el proyecto.

La discusión con Cristina duró dos horas y fue interpretada como una carta fuerte jugada desde la oposición, aunque no lo era. Para Pochak, la idea del oficialismo pretendía darles más poder a los jueces reasignando representación política y atribuyéndole mayor incidencia en las cuestiones administrativas —lo que además haría los procesos más lentos—, y no atacaba el corporativismo del Poder Judicial. Los argumentos de Pochak daban lugar a que parecieran escritos por fervientes antikirchneristas. Pochak exponía, Cristina refutaba, y viceversa. "Explíqueme, tengo todo el tiempo del mundo", la apuraba la senadora. Los medios pusieron a Pochak en un lugar que ella no

había buscado, el de vocera de la oposición, lo que tuvo que sobrellevar con bastante incomodidad. No es que sintiera necesidad de ser complaciente con el gobierno, pero sí de no quedar pegada a las mismas críticas que se hacían desde la derecha o desde las asociaciones de abogados más conservadoras.

Según ella, hasta ese momento la alianza de UCPD, aunque precariamente, se sostenía. Luego de aquel debate, los demás organismos de la coalición, además de suscribir las críticas al proyecto oficial, elevaron un poco más la puntería y comenzaron a leer que el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura no era más que una ofensiva K sobre los tribunales y que había un peligro latente de que la justicia perdiese su independencia. Entonces hubo un quiebre.

Gastón Chillier no se arrepentía de nada. Ni de haber integrado la alianza de ONG, ni de haberse alejado de ella. Tiempo después, hasta parecía más aliviado. “Ellos podrán decir que son muy independientes, que nunca claudican, pero tráiganme una lista de sus logros”, desafiaba. “Yo sí te muestro la lista de los nuestros y de nuestra incidencia, a mí no me complica que otros me rotulen como parte de este espacio. En la forma simplificada en que se discute la política, en un escenario polarizado, probablemente sí, y yo me siento más cómodo en este espacio que en el otro”, pensaba. Ese otro espacio ya era el de la oposición.

Una de las consecuencias inesperadas de aquella división alrededor de las iniciativas oficialistas sobre el funcionamiento de los tribunales fue la aparición de la agrupación Justicia Legítima, una asociación que decía estar integrada por gente de diversos sectores que buscaban la “democratización de los poderes judiciales de la Argentina”, pero que básicamente eran jueces, fiscales y abogados afines al kirchnerismo. La visión de Chillier sobre las ONG de cuño liberal había cambiado desde que estudiara en Estados Unidos, pero a partir de los roces con sus colegas de la ADC, Poder Ciudadano y FARN se redefinieron. “Nosotros no nos concebimos hoy como un *watchdog*, como creo que tampoco son las organizaciones de allá. No veo a Human Rights Watch como independiente del poder. Nuestro trabajo es promover políticas”, evaluaba. Chillier veía improbable que el CELS saliera ileso del proceso de polarización de la Argentina kirchnerista, por eso sostenía que algo mal habrían hecho si salían indemnes. “Esa idea de que estas organizaciones son independientes, asépticas… es mentira”, destacaba.

Juan Méndez también era escéptico sobre las etiquetas que se arrogan unos y otros, partidarios u opositores, K o anti K, sobre todo a partir de las opiniones de José Miguel Vivanco, su sucesor en HRW. “Para mí, se equivoca completamente cuando considera al CELS como un aliado del poder, y la única razón que da es que Verbitsky es un

asesor cercano, primero de Néstor y ahora de Cristina, y que entonces el CELS ha dejado de ser una organización no gubernamental. Tuvo el descaro de decirlo incluso, acá en Buenos Aires. Yo, la verdad, que después de haberlo hecho muchos años, soy bastante escéptico sobre hacer derechos humanos desde Washington", evaluaba. Para Méndez, el trabajo en ese terreno había cambiado demasiado y los organismos globales, antes tan poderosos e inevitables —y tendientes a monopolizar la opinión y la crítica—, dejaron de tener influencia. Por eso pensaba: "A esta altura, que Vivanco critique al gobierno de Cristina podrá generar algún que otro titular, pero no cambia nada y no ayuda a cambiar la política, y si además lo hace sin socios locales, aun más irrelevante se torna".

Pero en la Argentina lo de la independencia también puede ser relativo. Los dirigentes más destacados de las ONG que acompañaron al CELS en la reforma de la Corte Suprema tienen o han tenido una clara vinculación política con entes partidarios o empresas poderosas que son enemigas del gobierno. Más de un ex dirigente de Poder Ciudadano ha presumido de esa independencia, o se la ha reclamado a su ex socio. Sin embargo, Laura Alonso se convirtió en uno de los cuadros más visibles del PRO luego de ser directora ejecutiva de esa ONG, que tiene entre los integrantes de su Consejo de Administración a Martín Etchevers, empleado multifuncional del Grupo Clarín y una de las espadas más activas del grupo durante la disputa por la Ley de Medios.

En la ADC no hay vínculos con el gobierno, pero sí con quienes lo detestan. La ADC se opuso a la Ley de Medios cuando el presidente era Alejandro Carrió, quien también se presenta como constitucionalista. Carrió fue abogado de Ernestina de Noble en el caso de la supuesta apropiación ilegal de sus hijos y de Francisco de Narváez, y escribió columnas donde defendía al juez Thomas Griesa. La ADC resultó ser un lugar curioso, ya que entre los miembros fundadores están Martín Abregú y Mirna Goransky.

Daniel Sabsay, ex presidente de FARN, se había convertido en la voz más resonante contra el Proyecto de Reforma Judicial —que el CELS celebraba originalmente— cuando la iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner llegó al Congreso en abril de 2013. La reforma consistía en un paquete de seis leyes, aunque solo tres de ellas eran las seriamente resistidas: la reforma del Consejo de la Magistratura, la creación de nuevos tribunales de casación y la regulación de las medidas cautelares. Es solo por el impacto de estas tres que las restantes —relacionadas con la transparencia de los funcionarios y la democratización del acceso a cargos judiciales— no habían provocado demasiado ruido. Esas tampoco habían caído simpáticas en la corporación de funcionarios judiciales, que veía, como siempre que

intentaban meterse con sus privilegios, un "avance sobre la justicia que apunta a quebrar la independencia necesaria de los jueces".

La idea de Cristina, según promovía, era democratizar la justicia. "Que sea sometida al escrutinio es una buena noticia. El Poder Judicial ha sido poco criticado, su funcionamiento nunca ha sido puesto en discusión", explicaba Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad Democrática del CELS. En cuanto a la independencia, Litvachky creía que por supuesto era un valor importante para el Estado de derecho, pero sostenía que "siempre fue interpretado de una manera corporativa y no con el fin de garantizar una mayor protección de derechos, que debería ser su objetivo". También hacía hincapié en lo irritante que resultaba cancelar cualquier intento de discusión sobre el tema con el pretexto de que afectaba la independencia judicial.

Cristina había dicho lo suyo sin la necesidad del lenguaje técnico-jurídico cuando explicó su idea, que podía resumirse en que la familia judicial era un gueto infranqueable salvo que hubiera pertenencia a la casta. "Hasta ahora, si no tenés un amigo, ni disfrazado de mono podés ingresar", expresó. Algo de razón tenía: cualquiera que hojease antiguos ejemplares de guías judiciales desde el comienzo de la organización nacional hasta el peronismo podría ver que los apellidos de jueces, fiscales y abogados se repetían, como replicando un sistema monárquico dentro de una república.

Sin embargo, el proyecto de Cristina, que había sido visto con entusiasmo, cayó como un balde de agua fría en el CELS cuando se conocieron los detalles. La organización emitió un comunicado kilométrico en el que desmenuzaba el proyecto y daba su punto de vista. Además de "valorar y acompañar la iniciativa de dotar de contenido político a las discusiones sobre el sistema judicial" —es decir, apoyaba una reforma—, el CELS creía que quedaban dudas sobre su "diseño político institucional". Se refería sobre todo a la ley que limitaba las cautelares, sobre la que presuponía que presentaba "problemas de constitucionalidad", según apuntaba. Y marcaba el ejemplo de cuando las cautelares habían servido para "asegurar, entre otros supuestos, el acceso a la educación de migrantes, la definición de alternativas de vivienda de personas desalojadas".

Sobre las otras reformas pedían una revisión sobre "la organización del sistema judicial en su totalidad", sobre todo en lo referente a las propuestas del Consejo de la Magistratura y la modificación de Casación. "Es imperioso apuntar a su horizontalidad y desburocratización, y la inclusión de nuevas instancias remite más a su verticalidad", aseguraba.

En los corrillos el Congreso, hasta los propios kirchneristas sostenían algo parecido: decían que la idea era buena, pero la forma

de presentarla (a las apuradas, sin pulir detalles que podrían haber sido más consensuados y sólidos técnicamente) la había quemado. Por eso, pusieron el freno de mano y tomaron en consideración las observaciones del CELS.

Mientras el CELS acompañaba la intención reformista haciendo equilibrio sobre una cuerda para neutralizar su propio entusiasmo con sus reservas y pedidos de modificaciones, las demás organizaciones que habían integrado la coalición, más la corporación judicial (como las asociaciones de magistrados o los colegios de abogados), estaban abiertamente en contra, sin matices.

El debate de comisión en el Senado sobre la reforma (donde además de senadores opositores estaban convocados la ADC, la ACIJ —Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia—, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia —Fores— y el CELS) incluyó un tenso diálogo cuando Verbitsky se cruzó con Julián Álvarez, secretario de Justicia y uno de los referentes de La Cámpora, el músculo juvenil y militante que de buscar ser un ejército político de respaldo a Cristina pasó a disputar lugares clave de poder dentro del gobierno.

Cuando Verbitsky elogiaba algunos puntos de la iniciativa pero criticaba la mayoría, Álvarez lo acusaba de ser cómplice de los que "ayudan a la ensalada que generan quienes dan debate en los medios y no en el Congreso" y daban argumentos "a la patria zocalera", en alusión a las gráficas que en TV acompañan las declaraciones de los políticos que desfilan por los estudios.

Álvarez preguntaba insidiosamente por qué el CELS reaccionaba en ese momento, cuando ya sabía del proyecto, y luego dijo que los argumentos del CELS eran "erróneos" e "imprecisos", algo que a Verbitsky no le gustó demasiado. El Perro le contestó diciendo que efectivamente sabían del proyecto, pero no de los detalles de su contenido y luego lo sopapeó verbalmente a Álvarez dejándolo en *offside* cuando le recordó que era evidente que su intervención en el proyecto era lo suficientemente pobre como para no haber reflejado lo que había dicho la presidenta.

Mientras el CELS corregía, sus ex socios pegaban. Sabsay había sido un jugador clave en el documento Una Corte para la Democracia, pero ahora no quería saber nada ni con Verbitsky —quien se reía de su mote de "constitucionalista"— ni con el CELS, y mucho menos con la presidenta. De hecho, conservó algo de aquella sociedad con la ADC y Poder Ciudadano (a la que se sumaron la ACIJ, CIPPEC y la Fundación Directorio Legislativo) para combatir la iniciativa del gobierno ya que, según Sabsay, "se intentaba terminar con la justicia independiente en el país".

El bloque de ONG se dedicó a juntar firmas y hasta propulsó una convocatoria online a través de change.org para que doce diputados

que ocasionalmente acompañaban las iniciativas K no lo hicieran en el recinto cuando se votase el proyecto. La campaña fue abiertamente acompañada por artículos en *Clarín* y *La Nación*, que ilustraban cada nota con la foto de Sabsay, quien se había convertido en una de las contracaras de los legisladores oficialistas y hasta del mismo Verbitsky. En mayo de 2013 el proyecto se aprobó en el Senado, pero al mes siguiente la Corte Suprema declaró su inconstitucionalidad. Todos sus miembros, menos Eugenio Zaffaroni, votaron en contra.

Las diferencias entre los ex socios ya eran insalvables, pero en 2014 Sabsay dio claras muestras de estar completamente del otro lado. El abogado prendió fuego por unos días el tablero político cuando en el coloquio de IDEA de 2014 dejó de lado la moderación habitual esperable de un "constitucionalista" y habló como un político opositor en campaña, como si Cristina fuera una dictadora de novela a quien buscara derrocar. Le dijo que no creía que fuera abogada y llamó "encubridora general de la Nación" a la procuradora Alejandra Gils Carbó. "¡Esto no es un una democracia, es un sistema autoritario! ¡No lo podemos permitir!", cerró su discurso. A esa altura, la coalición estaba destrozada para siempre. Es más, comenzado 2015 la ADC patrocinó —en soledad— a la fiscal Marisa Tarantino, quien denunciaba que por lo menos tres fiscales subcalificados serían confirmados por el Senado postergando su —según ellos— merecido nombramiento. Además, afirmaba en su denuncia que el Poder Ejecutivo manejó los nombramientos discrecionalmente y dejaba entrever que el motivo era por su colaboración con el fiscal Carlos Rívolo, quien trabajaba causas sensibles que implicaban al gobierno, como el caso Ciccone, entre otros.

Resultaba asombroso observar cómo diez años atrás el CELS y Sabsay se habían mostrado unidos no solo en el lobby por la nueva Corte Suprema sino por el caso Sosa, que también había manifestado otros intentos de manipulación del sistema de justicia cuando Néstor Kirchner aun era gobernador de Santa Cruz. En 1995, el procurador general de la provincia, Eduardo Sosa, fue separado de su cargo por una maniobra impulsada por Kirchner. Había sido nombrado cinco años antes y durante su período como cabeza de los fiscales y defensores promovió varias investigaciones contra funcionarios públicos, convirtiéndose en una molestia para el poder político, Kirchner incluido. Para acabar con su problema y apartarlo de sus funciones, Kirchner puso en marcha una reforma que desdoblaba el cargo de Sosa en dos: la ley 2.404 creó un puesto de agente fiscal y otro de defensor de pobres. El procurador general no se quedó con ninguno de los dos puestos y fue cesanteado. Sosa planteó entonces la inconstitucionalidad de la reforma judicial y obtuvo tres fallos de la Corte Suprema de la Nación a su favor, en 1998, 2000 y 2001. Los

jueces le ordenaron al Tribunal Superior de Santa Cruz que repusiera a Sosa en su cargo, pero la corte santacruceña respondió que le resultaba imposible reponer al procurador en un cargo que ya había dejado de existir. En 2004, el gobierno de Santa Cruz le ofreció 1.216.182,16 pesos en concepto de daños y perjuicio, a cambio de la no-restitución. Es decir, un arreglo, pero Sosa lo rechazó.

En 2005, el ex procurador presentó un recurso de queja y, un año después, el CELS, Poder Ciudadano e Inecip se presentaron como *amicus curiae* en la causa "Sosa, Eduardo Emilio c/ Provincia de Santa Cruz s/ ejecución de sentencia s/ recurso de queja" por considerar que la decisión del Poder Ejecutivo santacruceño afectaba la garantía de la "independencia judicial" en la provincia. En 2007, el CELS y el abogado Daniel Sabsay presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dos años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a fallar contra Santa Cruz y le ordenó al gobernador Daniel Peralta que le diera a Sosa el cargo de agente fiscal vigente. La sentencia llevaba las firmas de Ricardo Lorenzetti, Raúl Zaffaroni, Carlos Fayt, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Antes, el procurador Esteban Righi había solicitado a la corte que pidiera la restitución de Sosa, pero la provincia nunca cumplió con el fallo del tribunal. Al gobernador Peralta nunca le parecieron suficientes tres fallos y parecía haber elegido un entuerto judicial que le complicó la vida en vez de cumplir con una sentencia que caería poco simpática en el corazón del kirchnerismo.

La terquedad del gobierno de Santa Cruz parecía irreductible. "Los jueces de la corte más no podemos hacer, se nos acabó el 'Imperium', es un poder contra el otro, es un caso como para que intervenga el Congreso", comentaba Zaffaroni. Por su lado, Pochak lamentaba todo lo que le había costado en lo personal el caso Sosa, porque "Sosa arregló por salarios caídos", se resignaba, y explicó que "con Sabsay de abogado lo llevamos hasta el último momento y se terminó cerrando a nivel internacional, porque Sosa decidió renunciar al litigio".

El CELS y Verbitsky quedaron entre la espada y la pared. El Perro recordó que, cuando apenas había asumido Néstor Kirchner, él le había sugerido al flamante presidente que había que arreglar "el quilombo de Santa Cruz". Lo que acaso nunca sospechó fue que estando el CELS patrocinando a Sosa el arreglo iba a ser por debajo de la mesa y dejando en *offside* a los abogados defensores, y no con una ejemplar restitución del cargo. Tanto el CELS como Sabsay se tragaron el sapo y se quedaron mirando cómo un cliente se desvanecía frente a ellos, pero tampoco podían salir a denunciar un supuesto arreglo que sucedió bajo sus narices y con un "caso" propio.

Al filo del segundo período de Cristina en el gobierno, nada de aquella sociedad quedaba en pie. Las organizaciones que alguna vez fueron aliadas se despegaron del CELS como quien huye de un enfermo viral. Al CELS no le quedó otra que seguir caminando solo.

28
Una institución para los tiempos que corren

Cada vez que la calle ardía con temas de seguridad y primeras planas que la exageraban todo lo posible ("seguidilla de crímenes", "fiebre de entraderas", "ola de secuestros"), el CELS lamentaba no haber acompañado más la reforma de Arslanian, una de las grandes críticas que se había hecho Abregú en su momento. En cuanto a la protesta social, el destino de Kosteki y Santillán había cambiado todo.

En julio de 2004, Gustavo Béliz se convirtió en el primer ministro desplazado por Kirchner. Las razones oficiales tenían que ver con que había hablado mal de la SIDE y ciertas desinteligencias en torno a la política de seguridad. El expulsado funcionario rápidamente se calzó el traje de héroe moral que se "había metido con el aparato más oscuro de la Argentina". Para el CELS, no fue tan así. "Se quiso hacer ver como una salida porque el tipo quería militarizar y no lo dejaban. Pero Aníbal Fernández también busca una política de autonomía de las fuerzas policiales, con operativos de saturación, volver al policía —en algunos casos— sin identificación", evaluó Abramovich en su momento.

Según Horacio Verbitsky publicaba en *Página/12*, Béliz se había rebelado al rechazar la orden presidencial de no usar personal armado en movilizaciones sociales. Luego, Béliz mostró en televisión una foto del enigmático monje negro de la SIDE, Antonio Stiuso, y allanó su propio camino hacia el exilio. En ese momento, el sentido del CELS ya no era solamente ser un *watchdog* sino incidir en las políticas públicas. Según Abramovich, la organización se estaba beneficiando con la proyección del CELS hacia afuera gracias a Verbitsky y además se estaba haciendo menos timorato. Sin embargo, creía que había un problema de comunicación y deberían enfatizar más su perfil institucional. Por esos días, el CELS había elaborado un documento sobre seguridad que resultó bastante crítico, por lo que tuvieron que negociar el tono.

Desde que en la segunda mitad de los ochenta Eugenio Zaffaroni empezó a trabajar con temas de violencia policial junto con Alicia Oliveira, lo que pasaba en las calles de los suburbios nunca dejó de ser ajeno al CELS. Por entonces, Zaffaroni se sentía a merced de una época espantosa, de un clima social decadente que se cultivaba con los

noticieros de Canal 9 y su periodista estrella, José de Zer, quien se regodeaba con los crímenes más sangrientos que daban marco a una explosión de periodismo amarillo masivo en la televisión.

Zaffaroni también aborrecía la televisión dirigida a un perfil más ligado al *establishment*, y se vio a sí mismo cruzándose en peleas con Bernardo Neustadt, quien una vez lo invitó al piso de su programa *Tiempo Nuevo*, lo hizo exponer y le contestó luego de sacarlo del aire, dejándolo sin derecho a réplica. "Es que era así, un traidor", pensó Zaffaroni desde entonces. Pero volvió otra vez a la tele para marcar en un mapa las comisarías de la ciudad donde habían existido casos de abusos policiales, algo novedoso en aquel momento. No los abusos, sino el hecho de mostrarlos con detalle. El ya prestigioso jurista destacaba a 1987 como un año crítico, de muertes masivas a manos del gatillo fácil policial. "Son muertos de la democracia", se lamentaba. El ministro de Gobierno bonaerense lo acusó de "disolvente y anárquico", usando terminología de la dictadura. De aquella época solamente rescató institucionalmente a Antonio Cafiero. "Él fue quien paró eso cuando llegó al Gobierno", recordaba.

La primera vez que escuchó la expresión "gatillo fácil" fue de boca de un periodista que lo estaba entrevistando. Zaffaroni admitía que la agenda de violencia policial colándose entonces en la agenda clásica de derechos humanos fue autoría de Alicia Oliveira y de él mismo, que lamentaba que esos casos pasaran a destacarse cuando la policía se "equivocaba" y mataba a alguien de clase media. En aquel momento aun notaban que las fuerzas de seguridad involucradas eran hijos dilectos de la forma de trabajar de la dictadura, cuando la policía hacía prácticamente lo que quería sin necesidad de dar cuenta y sin el acoso de un aparato judicial, lo que siempre les aseguraba impunidad.

"Fundamentalmente el tema lo tomó el CELS. Todos me decían que estaba loco. Empezamos en soledad Alicia yo y alguna gente más. Incluso en Tribunales nos miraban muy raro. Las Madres podían llegar a hacer alguna declaración denunciando algún caso, pero era marginal", recordaba, y destacó que Verbitsky, desde el flamante *Página/12*, le daba una visibilidad importante. Para él, antes de la época de la incidencia y el lobby, había que ser visible, porque si los organismos como el CELS en esa época no tenían visibilidad, entonces no tenían nada.

Pero en la Argentina parecía que la calle nunca dejaba de arder. Bien entrado el siglo XXI, varios sucesos relacionados con la violencia descontrolada agitaron las oficinas del CELS. El caso Luciano Arruga y el caso Mariano Ferreyra marcaron a fuego a los responsables de seguridad de la era K, y también empujaron a que el CELS apareciera cada vez más seguido en la tapa de los diarios y poniendo a Verbitsky en las pantallas de los televisores en más de un canal a la vez.

Luciano Arruga tenía dieciséis años el 30 de enero de 2009 cuando salió de su casa, en Lomas del Mirador, para reunirse con un grupo de amigos en una plaza. Nunca más se supo de él. Preocupada porque no había vuelto, su mamá, Mónica Alegre, salió a buscarlo en plena noche. Ese mismo día dejó asentada la denuncia por desaparición en una comisaría que Luciano ya conocía. Él le había contado a su hermana, Vanesa Orieta, que más de una vez se lo habían llevado detenido por negarse a robar para los policías. Una de esas veces que su hermana lo había ido a buscar llegó a escuchar que Luciano le gritó: "Sacame de acá que me están moliendo a palos".

En noviembre de 2010, el CELS fue aceptado como querellante en la causa y tres años después la carátula pasó de "averiguación de paradero" a "desaparición forzada de persona" y fue a la justicia federal. Un año después, el CELS presentó un hábeas corpus y el juez federal Juan Pablo Salas tomó nuevas medidas y amplió la búsqueda, hasta que el cuerpo de Luciano apareció. El 17 de octubre de 2014, su familia y el CELS confirmaron que estaba enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita desde mayo de 2009. "Es el hecho más grave de violación a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires", dijo entonces Maximiliano Medina, el abogado del CELS que trabajó en el caso. En una conferencia de prensa retransmitida por varios canales simultáneamente, Verbitsky explicaba el procedimiento y dio algunos detalles del hallazgo. Verdú lo miraba por TV y se molestó al notar que era él quien monopolizaba la palabra y que Medina ni aparecía: "Lo dejó parado como un jarrón en una esquina, cuando fue él el que hizo todo el laburo, y además seguro que no coincide con lo que está diciendo Verbitsky", Verdú pensó en ese momento. Si bien Adolfo Pérez Esquivel siempre tuvo presente que fue el Serpaj el que había tomado el caso primero, no dejaba de reconocer la capacidad de trabajo jurídico del CELS y hasta se lamentaba por la falta de complemento entre la tarea de acción política y social de su organización y la tarea legal del CELS.

"El hábeas corpus en el caso de Arruga se había presentado cuando se habían cerrado todas las otras posibilidades y no conseguíamos nada", explicaba luego Verbitsky. Es que él ya venía arrastrando una explicación parecida desde el caso de Mariano Ferreyra, el estudiante de Historia y militante del PO que fue baleado en octubre de 2010 por una patota sindical en el marco de unas protestas por la precariedad laboral en los servicios ferroviarios. Mariano recibió un tiro en el pecho, mientras sus victimarios ya tenían asegurada la huida gracias a que la policía les había liberado la zona. Fue el símbolo de un caso mal resuelto de represión tercerizada y un grave golpe al corazón de Néstor Kirchner, que murió pocos días después. En el transcurso de aquel año y con el kirchnerismo inflando las velas de su barco luego

de los festejos del bicentenario, la muerte de Néstor cayó como un rayo en medio de una fiesta de casamiento.

La comunión de juventud militante y solvencia política que proyectó Cristina en los días posteriores a la muerte dispararon su popularidad a los cielos. Pero antes de encaminarse a su reelección, Cristina tuvo que navegar por otro diciembre funesto cuando se desató una pueblada en el Parque Indoamericano, un predio ubicado en la postergada barriada de Villa Soldati, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, una zona marcada por el déficit habitacional. Fue cuando unas mil quinientas familias ocuparon el predio en reclamo de viviendas y se vieron sometidas a un recio operativo de desalojo ejecutado por unos doscientos efectivos de la Policía Federal y otros doscientos cincuenta de la Metropolitana. Al cabo de la jornada, el operativo dejó un saldo de tres muertos, cinco heridos de bala y alrededor de cincuenta detenidos.

El CELS, en representación de la familia de una de las víctimas, Rosemary Chura Puña, se constituyó como querellante en la causa. En mayo de 2014, la jueza de instrucción Mónica Berdión de Crudo procesó a treinta efectivos de la Metropolitana y once de la Federal. Sin embargo, la decisión fue revocada y, cuatro años después de la toma, el CELS emitió un informe en el que denunció que la decisión de la cámara de deslindar a las fuerzas de seguridad era lo mismo que avalar la violación de las reglas de actuación policial, asegurando a la fuerza que siguiera manejándose según su propia discrecionalidad, sin control y con un paraguas de impunidad. Estaban denunciando lo mismo que Mignone y Conte en la dictadura, o lo que denunciaron Zaffaroni y Olivera durante el alfonsinismo. Pero lo hacían ellos porque además nadie más lo hacía.

Cuando llegó el turno del proceso para el caso Ferreyra, su familia recurrió al CELS para la defensa legal, y los dirigentes del Partido Obrero fueron a ver a Carmen Verdú, ya que además había otros tres militantes heridos. Cuando se desarrollaba el juicio y todo apuntaba a la teoría de la zona liberada para que la patota de José Pedraza tuviera el control de la calle, Gargarella volvió otra vez sobre su propio encono, y de nuevo le pareció ver en el CELS un cómplice del gobierno que no estaba haciendo todo lo que debería haber estado haciendo.

“Era tremendamente problemático, porque si el CELS había sido capaz de probar la existencia de una zona liberada, no podía trabajarse con el supuesto de que la policía se hubiera dado una orden a sí misma de liberar la zona”, pensaba. Según él, era obvio que la orden había venido del Ministerio del Interior o del propio Kirchner. Para Gargarella, Kirchner tenía un sesgo muy duro contra los grupos de izquierda y una actitud hostil ante la protesta, pero marcada por

Kosteki y Santillán. “Él nunca hubiera querido que se produjera una muerte, pero sí tengo la certeza de que le interesaba controlar la calle”, analizaba. En el juicio, el abogado del CELS Alberto Bovino logró demostrar, efectivamente, que la patota del líder sindical José Pedraza actuó bajo una zona liberada por la Comisaría 30.ª. Pero Gargarella no se conformaba: “Me parece excelente el trabajo que están haciendo, lo que han probado, pero que no se clausure la posibilidad obvia y necesaria de ir más arriba. No puede ser que nuestro techo sea la Policía Federal”, protestaba. Para él, la pregunta siguiente era “¿Quién dio la orden a la policía?”.

Verbitsky no salía de su asombro: “Ahora yo digo una cosa. Es la primera vez en la historia argentina que un crimen hecho por una patota sindical con complicidad estatal es castigado. Y el castigo llega al jefe del sindicato, que era un tipo próximo al gobierno, y llega a altos funcionarios de la Policía Federal”, se excusaba. Para Horacio Verbitsky, la sospecha de gente como Gargarella —lo que supuestamente no hicieron— era secundaria respecto a lo que sí hicieron. “Avanzamos hasta donde teníamos los elementos. No es cuestión de la ley, es cuestión de la investigación. Nosotros no tenemos elementos para demostrar que actuaron por órdenes de más arriba. Lo puedo suponer, pero es una hipótesis para la cual no tenemos elementos probatorios”, explicaba.

Andrea Pochak seguía muy cruzada con Gargarella: “Fue muy duro con el CELS. Lo criticó duramente en *La Nación*, lo acusó de haber transado luego de haberse convertido en querellante en el caso Ferreyra y afirmó que el CELS decidió no imputar a Aníbal Fernández. Es una basura decir eso en un medio. ¡Es mentira! ¡Y vos no podés decir eso, siendo miembro del CELS!”. Fue por eso que Pochak le pidió a la asamblea de socios que tomara una decisión. “A mí me parecía que había que tener ciertos códigos”, explicaba.

Pero el CELS no solo estaba metido en lo que pasaba en los arrabales violentos de Buenos Aires. Con su impulso —y el de varias organizaciones de la sociedad civil— el Congreso sancionó en noviembre de 2010 la nueva Ley de Salud Mental, que ponía límites a la internación de personas contra su voluntad y apuntaba a reemplazar los hospitales neuropsiquiátricos por la atención comunitaria, aunque tardó casi tres años en ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. En ese lapso el CELS advirtió, a través de su coordinadora del equipo de salud mental, Macarena Sabín Paz, “falta de voluntad política por sacar la ley adelante”.

Tres años antes, el organismo había presentado el libro *Vidas arrasadas*, una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas alojadas en asilos psiquiátricos. De acuerdo con ese informe, unos veinticinco mil argentinos estaban en ese

entonces encerrados en instituciones donde sufrían la privación de la libertad en celdas de aislamiento, abusos físicos y sexuales, falta de atención médica, condiciones insalubres de alojamiento, tratamientos inadecuados, sobrepoblación y muertes por causas que nunca eran investigadas.

El CELS había estado acompañando a las víctimas de la dictadura casi desde sus inicios a través de un programa instaurado por Laura Conte, quien se ocupaba de aquellos que habían sufrido una desaparición en la familia. "Era muy difícil hacer un duelo para los que declaraban ante la Conadep", recordaba. Luego también trabajó con hijos restituidos y nietos recuperados, en sociedad con Madres y Abuelas. En los años noventa, Christian Courtis había continuado aquella labor pero no desde la psicología sino desde el Derecho, cuando empezó a atender pacientes que llegaban con consultas jurídicas sobre internación involuntaria o falta de tratamiento, por citar casos frecuentes. Courtis creía que aquellos pacientes necesitaban defensa, los veía muy vulnerables. Así se ganó la enemistad de los psiquiatras: ellos estaban en contra porque perdían privilegios y exclusividad en la decisión sobre las internaciones y perdían su poder de decisión sobre los pacientes.

Una institución como el CELS ha tenido sus altísimos grados de exposición, de tensiones en la primera línea donde se disputan el poder, la justicia, los intereses, las influencias. Pero también sus preocupaciones ramplonas, sus deberes intrascendentes. Como cuando Verbitsky quiso cambiar el logotipo por algo más "moderno" y luego de mucha resistencia logró concretarlo pero conservando las figuras humanas. O ante su eterna queja de lo mal que funcionaba la página web del CELS, atajando cualquier crítica que apuntase a que la palabra "Cuba" no aparece en ninguna búsqueda. "No me sorprende, es bastante mala", admitía. Más allá de esos detalles, Verbitsky siempre creyó que entre él y el CELS hubo un aprendizaje mutuo. "El informe anual siempre se presentaba en lugares chiquitos, más bien marginales, como el [Centro Cultural Ricardo] Rojas. El primer año que yo asumí la presidencia, planteé presentarlo en el Teatro Cervantes e invitarlo al presidente de la Corte Suprema, Enrique Petracchi. ¡Y el tipo fue!", recordaba. Según él, sus compañeros entraron en pánico porque nunca se les había ocurrido que eso fuera posible. "Llenamos el Teatro Cervantes con el presidente de la Corte Suprema entre el público", resumía para explicar el lugar que él cree que el CELS debe ocupar: "Tiene capacidad técnica, tiene historia, tiene con qué".

29
El CELS, hoy

En los últimos meses del gobierno de Cristina, en el ocaso del kirchnerismo, el CELS no solo cumplió con la premisa de su presidente de no "tirar piedras desde afuera en contra de un gobierno popular", sino que le puso el hombro en su momento de debilidad. Otra vez, como en 2008, cuando convocó a la Plaza de Mayo a defender a Cristina en el conflicto con la patronales del campo, a fines de 2014 y principios de 2015, el CELS llevó alivio al gobierno en dos frentes en los que venía haciendo agua desde hacía rato: las sospechas de corrupción del entorno presidencial y el uso faccioso de los servicios de inteligencia. Pero, claro, nada es simple, lineal, exento de paradoja, dialéctica o contradicción en el sofisticado mundo de los celsianos. Mientras con sus acciones y decisiones apuntalaba al "gobierno popular", en el frente internacional el CELS mostraba que se le estaba acabando la paciencia con los abusos de otro "gobierno popular", el venezolano, y que de vez en cuando no está mal contrariar la doctrina Verbitsky y tirar un piedrazo desde afuera, porque una prestigiosa organización de derechos humanos no puede darse el lujo de proteger a sus amigos.

El 26 de diciembre de 2014 Cristina Kirchner recibió un regalo con el sello de Horacio Verbitsky: ese día el CELS anunció que iba a defender al fiscal Carlos Gonella en una causa de libertad de expresión. Gonella había sido denunciado ante el juez federal Claudio Bonadío por haber publicado una lista de unas treinta personas presuntamente vinculadas a narcolavadores en la página web de la Fiscalía Federal. En la publicación figura el nombre de una jueza, que es mencionada como pareja de un condenado por narcotráfico a gran escala. La jueza lo había querellado por "violación de secretos" y Gonella había dado la primicia vía Twitter un día después de Navidad. "CELS me defenderá en el caso de Bonadío por estar en juego la libertad de expresión y acceso a la información", había escrito el fiscal. Hasta ahí todo normal, el CELS defendiendo a un fiscal ante un intento de amordazarlo por parte de la mafia narco. Pero Gonella no es un fiscal cualquiera ni era un momento cualquiera cuando el CELS asumió su defensa. Gonella era el fiscal titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el principal

organismo encargado de investigar el lavado de dinero en la Argentina y el que recibe las notificaciones de operaciones sospechosas de los bancos y entidades financieras. Diez días antes de que el CELS asumiera su defensa en el caso de libertad de expresión, Gonella había sido procesado por un juez federal en otra causa. Allí se investiga a la familia de Cristina Kirchner por presunto lavado de dinero a través de sus hoteles y en sociedad comercial con uno de los principales contratistas de obra pública de la Argentina, Lázaro Báez, un ex empleado del Banco de Santa Cruz cuyo patrimonio creció exponencialmente durante los gobiernos kirchneristas, primero a escala provincial y luego a escala nacional. En esa causa, Gonella está imputado por prevaricato porque supuestamente ocultó informes de operaciones sospechosas de Báez, quien hoy se encuentra procesado por lavado de dinero en otra causa, que precede a la de los hoteles de la familia presidencial. En otras palabras, el CELS había asumido la defensa del fiscal acusado de frenar la investigación judicial de los presuntos actos de corrupción de los Kirchner.

Habían pasado doce años de gobiernos kirchneristas, cientos de columnas dominicales en *Página/12*, docenas de comunicados del CELS, pero para el autor de *Robo para la corona* y su institución, en todo ese tiempo, el anuncio de la defensa de Gonella era lo más parecido que habían hecho a pronunciarse sobre la corrupción del entorno presidencial en la era K. Y asumir la defensa de Gonella, justo la de Gonella, justo en ese momento, sonó a pronunciamiento absolutorio. El CELS le había dejado la primicia del anuncio al propio Gonella. En sus tuits Gonella había invocado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Convención Americana de Derechos Humanos, y había dicho que el caso “compromete la responsabilidad internacional de Argentina”. La noticia no pasó inadvertida. Como en política nadie es inocente y nada es casualidad, ese día después de Navidad de 2014 *Clarín* tituló: “Gonella será defendido por el organismo que preside Verbitsky”.

Tres semanas más tarde murió Alberto Nisman, fiscal de la Unidad Fiscal para la Investigación de la causa AMIA, en su departamento de Puerto Madero. La semana anterior Nisman había acusado a la presidenta y al canciller Héctor Timerman de haber pactado la impunidad de los funcionarios iraníes acusados por la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina de 1994, a cambio de una cantidad indeterminada de petróleo. Más allá de la causa de muerte del fiscal y de la credibilidad de la denuncia, que se siguen discutiendo hasta el día de hoy, el caso conmovió al país y provocó un debate sobre la falta de control de los servicios de inteligencia, en particular durante la gestión kirchnerista.

La muerte de Nisman, a quien el juez de la causa AMIA describió

como un rehén de los servicios de inteligencia, hizo recordar que ya en 2004 el renunciante ministro de Justicia, Gustavo Béliz, había descripto a la Secretaría de Inteligencia como “un Ministerio de Seguridad paralelo, una especie de Gestapo”. Cuando estalló el caso Nisman, ya no era secreto que los espías a sueldo del Estado, más que dedicarse a terroristas, narcotraficantes y demás amenazas a la seguridad nacional, se había especializado en sobornos, chantajes y carpetazos en contra de jueces, fiscales, políticos y periodistas que molestaban al poder, mientras se financiaban con fondos reservados y negocios turbios vinculados a la trata de personas, la importación de equipos de seguridad y la compraventa de inmuebles a nombre de empresas fantasma.

Aunque la denuncia de Nisman fue eventualmente rechazada en tres instancias judiciales y archivada por falta de pruebas, la imagen de la presidenta quedó golpeada. A la defensiva y sin encontrar el tono apropiado para referirse al tema —de hecho, nunca le dio sus condolencias a la familia del fiscal— Cristina perdió días valiosos contestando con vaguedades e insinuaciones a través de su página de Facebook, o haciendo de cuenta que ignoraba el asunto por completo, hasta que el 26 de enero de 2015 anunció por cadena nacional que llamaba a sesiones extraordinarias del Congreso para que aprobara una ley de reforma de los servicios de inteligencia y así cumplir con una vieja deuda de la democracia. Si bien la mayoría K en el Congreso garantizaba el pasaje de la ley, la oposición rápidamente anunció que no se presentaría a convalidar una farsa, ya que nadie podía pensar seriamente que Cristina era sincera en su intención de reformar el sistema de espionaje cuando ella lo había usado y abusado a su antojo desde su llegada al poder. Además, decían, en los últimos meses el gobierno había recortado el presupuesto de los espías civiles y había aumentado y mucho las partidas de los espías militares bajo el mando del general Milani, a pesar de que ninguna hipótesis de conflicto armado había surgido, por lo que reformar el sistema que regía a los espías civiles no parecía una solución de fondo. Para el CELS, en cambio, la convocatoria de la presidenta era una oportunidad para incidir positivamente en una reforma necesaria para mejorar la democracia. Más aún, se trataba de un viejo reclamo del CELS a partir de su representación del grupo de familiares de víctimas de la AMIA, Memoria Activa, ante la CIDH en 2005. Esa intervención había derivado en una solución amistosa en la que el Estado se comprometía, entre otras cosas, a promover una ley de reforma de los servicios de inteligencia. Verbitsky recordó esa deuda del gobierno K en su columna de *Página/12* el domingo anterior a la muerte de Nisman: “En cambio [Cristina] nunca recibió a la organización de familiares de las víctimas Memoria Activa, que apoyó en el Congreso

el Memorando de Entendimiento [con Irán] y que denunció ahora una operación contra la presidente. También llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aceptó un proceso de negociación amistosa con el patrocinio del CELS y Cejil. El 4 de marzo de 2005, el Estado reconoció ante la CIDH su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos al no haber cumplido la función de prevención, por la denegatoria de justicia debido al encubrimiento de los hechos y al grave y deliberado incumplimiento de la función de investigarlos. Como reparación integral se comprometió a una agenda de trabajo 'tendiente a informar a la población, investigar los hechos, prevenir su repetición futura, compensar los daños y reformar algunas leyes, entre ellas la de Inteligencia'".

Pocos días más tarde, Cristina recibía a las tres organizaciones de víctimas, incluyendo Memoria Activa, en la Casa Rosada y mandaba al Congreso el proyecto de ley para reformar y cambiar el nombre de la Secretaría de Inteligencia a Agencia Federal de Inteligencia. Una semana después del anuncio de Cristina por cadena nacional, el proyecto de ley del gobierno ingresaba al Senado. Al día siguiente, 4 de febrero, Verbitsky volvió a colocar al CELS en el centro de la agenda mediática nacional con declaraciones desde el Congreso, minutos antes del comienzo del tratamiento de la ley. Mostrándose ecuánime, criticó por igual a gobierno y oposición: "Nos parece de enorme irresponsabilidad tratar de sacar la ley a las disparadas, en un mes, ante una emergencia. Y es incomprensible que los opositores deserten de la discusión", disparó. Al día siguiente, Verbitsky y Paula Litchvatsky, hablaron en el recinto de la Cámara Alta pero no se sintieron lo suficientemente escuchados. Ese día, ya con dictamen de comisión favorable para el proyecto de ley en el Senado, un comunicado del CELS y una columna de Verbitsky criticaron el texto por no tocar temas de fondo que ellos habían señalado, empezando por el cese de la función de los servicios de inteligencia como auxiliares de la justicia. Pero el partido no estaba terminado.

De a poco, los cambios pedidos por el CELS se fueron incorporando y, para cuando el Senado le dio media sanción al proyecto el 12 de febrero, el CELS ya se daba ampliamente por satisfecho. Así lo hizo saber en un comunicado de ese mismo día, titulado "Avance fundamental para la reforma del sistema de inteligencia". El texto destaca varios aspectos de ley y no menciona ninguno deficitario, negativo u omitido en la legislación. Despojado de la ecuanimidad que el CELS había transmitido al principio de la discusión, el comunicado incluye un tremendo palo para la oposición, a la que acusa de "deserción", "amenaza" y "falta de compromiso", y responsabiliza por cualquier problema que pueda surgir con la ley en el futuro: "La

relevancia de estos cambios hubiera requerido una discusión más profunda y amplia de cada uno de sus aspectos en los tiempos que fueran necesarios. La deserción de muchas fuerzas políticas, su ausencia del debate y la amenaza de derogar la norma en un futuro sin analizar sus alcances, mostró su falta de compromiso con la solución de los problemas de fondo que se expresaron en la coyuntura".

Tres días más tarde Verbitsky masificó el mensaje "ley buena–gobierno acepta críticas–oposición se porta mal" en su columna dominical, titulada "Una deserción poco inteligente", que él mismo subtituló así: "La nueva Ley de Inteligencia contribuye a sanear un sistema que había escapado de control y comprometía la gobernabilidad democrática. Un detalle de los cambios pone de relieve el grave error de la oposición que desertó de un debate fundamental". Al día siguiente, entrevistado en el mismo diario, Chillier también celebró, pero se cuidó las espaldas al decir que había que ver cómo el gobierno llevaría a la práctica lo que sus legisladores habían votado prácticamente en soledad: "Esta media sanción [...] es muy importante porque significa un avance muy significativo, [pero] la reglamentación y la implementación serán fundamentales para poder llevarlo a cabo". La ley se aprobó el 25 de febrero con el voto de los diputados K y sus aliados habituales.

A lo largo de todo el proceso, el oficialismo contó con el aporte invalorable del CELS, que a falta de una oposición dispuesta a participar, cumplió el rol de legitimar lo sancionado a través del debate parlamentario con las críticas previas y los elogios posteriores a los cambios implementados, como si el proceso democrático hubiera funcionado tal como había sido diseñado. Así, el gobierno pudo empezar a dejar atrás el caso Nisman.

¿Y la ley? A los pocos días de su sanción, Litchvatsky había sido invitada a exponer en una reunión del Club Político Argentino (CPA) sobre la crisis por el descontrol de los servicios de inteligencia en el sótano del Centro Cultural San Martín, un lunes por la tarde. En esa ocasión, la experta del CELS enumeró los logros de la ley y dijo que no quería pecar de normativista ingenua al pensar que iba a ser la solución definitiva para un problema que era histórico y también cultural, pero que sin embargo, más allá de las falencias u omisiones que pudiera tener, con su debate y sanción se había dado un importante paso adelante. Cuando terminó, se abrió a preguntas y comentarios de la media centena de intelectuales que habían ido a escucharla. Entonces Graciela Fernández Meijide dijo que lamentaba que la oposición no hubiera debatido el tema en el Congreso, pero que la ley era "un lavado de cara" para el gobierno. Varios miembros más le hicieron saber a Litchvatsky que pensaban que la ley legitimaba al

gobierno sin arreglar el problema y ninguno se manifestó satisfecho con lo votado, más allá de agradecerle a la experta del CELS su esfuerzo por tratar de explicar cuáles eran las supuestas bondades del texto. Ricardo Gil Lavedra, uno de los últimos en hablar, no anduvo con vueltas. Le enrostró a la especialista que se trataba de "una ley berreta" y enumeró una serie de supuestas deficiencias jurídicas. Litchvatsky contestó reconociendo que la factura técnica de la legislación aprobada no era de la mejor calidad. "Por la forma en que está escrito, el decreto que creó la Policía de Seguridad Aeroportuaria [en 2005] es mucho mejor", le dijo al juez del juicio a las juntas militares y entonces diputado del partido radical. Terminada su exposición, Litchvatsky optó por saltearse el tradicional ágape postconferencia del CPA, en el que los miembros del club suelen charlar con sus invitados mientras comparten gaseosa, pizza, vino tinto y empanadas.

Mientras tanto, otra tormenta se desataba en el frente internacional. El 24 de febrero un estudiante de catorce años era asesinado de un tiro en la cabeza disparado por un policía venezolano en medio de una manifestación estudiantil para recordar el aniversario de la represión de las marchas del año anterior. Ese mismo día, un soldado mató a tiros en la espalda a un aborigen venezolano de diecisiete años durante un operativo militar en la selva para frenar el contrabando hormiga de combustible a la frontera colombiana. La respuesta del CELS, esta vez, no se hizo esperar. En un comunicado que firmó en soledad, sin redes y sin red, a solo setenta y dos horas de los sucesos, bajo el título "Grave represión de la protesta social en Venezuela", el CELS denunció sin pelos en la lengua que las "fuerzas de seguridad" eran responsables de las dos muertes y de que "muchas personas resultaran heridas en contexto de protestas y otros hechos violentos preocupantes". Las fuerzas de seguridad, claro, dependen del gobierno de Maduro. Y para que quede más clara aún la responsabilidad de ese gobierno, el CELS señaló que el mes anterior el Ministerio de Defensa venezolano había emitido unas directivas para controlar protestas que incluían el uso de fuerza mortal en casos extremos. Para el CELS, esas directivas "habilitan" el comportamiento que derivó en el adolescente muerto y los heridos durante las protestas y otros casos de violencia excesiva como el de la muerte del joven aborigen. "Estos aspectos de la norma renuncian a la protección de la vida y la integridad física como prioridad, habilitan graves violaciones a los derechos humanos y son contrarios a los estándares internacionales sobre el uso gradual, proporcional y excepcional de la fuerza en el control de las manifestaciones públicas."

Los tiempos habían cambiado. El año anterior, ante la evidencia de cuatro estudiantes venezolanos muertos por las mismas "fuerzas de

seguridad" que ahora denunciaba el CELS, la institución no solo había esperado a que se pronunciara Cristina sino que había dejado pasar varios días para no salir a contradecirla. Mejor dicho, para no matizar el apoyo acrítico que la presidenta había manifestado en favor a Maduro ante claras violaciones a los derechos humanos, cuestión que el CELS tampoco denunció cuando finalmente publicó un comunicado compuesto de frases ambiguas y contradictorias que escondía la responsabilidad del gobierno venezolano. Esta vez, el CELS se puso mucho más duro y además se anticipó a Cristina, que guardaba silencio a la espera de un comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que tardaría cuatro días más en llegar. Cuando llegó, el comunicado manifestaba preocupación por la violencia y llamaba al diálogo, pero también ratificaba su apoyo a Maduro ante su enésima denuncia de un intento golpista. Dicho intento, al igual que el del año anterior, se descubría justo a tiempo para tapar la protesta opositora y justificar la represión estatal.

La presidenta, golpeada por el caso Nisman, salpicada por denuncias de triangulaciones a Irán a través de Venezuela, no estaba para comprarse otro salvavidas de plomo plegándose a las gastada denuncia antiimperialista por más desesperado de apoyo que estuviera su amigo bolivariano, quien además de enfrentar una severa crisis económica y política, estaba siendo denunciado por las principales ONG de derechos humanos del mundo, incluyendo, ahora sí, al respetado CELS. Durante una semana de urgentes reuniones de cancilleres y declaraciones altisonantes de Evo Morales, Rafael Correa y los hermanos Castro en contra de los supuestos golpistas, Cristina calló y esperó. Cuando finalmente salió el comunicado de Unasur, sin agregar una sola palabra, la presidenta argentina lo retuiteó. Con eso dio por cerrado el tema.

En cambio, la dura denuncia del CELS tuvo su corolario. Una semana después de su publicación, la institución emitió un segundo comunicado, aclaratorio del primero. Según la aclaración, la norma venezolana que permite reprimir manifestaciones usando fuerza mortal en casos extremos no es tan mala como parece. "La resolución 008610 del Ministerio de Defensa habilita la utilización de armas letales pero solo como último recurso frente a situaciones de riesgo mortal y establece principios de uso progresivo y diferenciado de la fuerza", dice, como para corregir "distintas interpretaciones" que se habían hecho del comunicado anterior. Según una fuente del CELS, las "distintas interpretaciones" habían corrido por cuenta de una "organización venezolana". Hecha la aclaración, en un zigzagueo confuso, el CELS volvió a plantear su oposición a la norma, que ya no es malísima sino apenas mala, pero lo suficiente como para "habilitar" y "justificar" la muerte de los jóvenes baleados: "Sin embargo, para

que las fuerzas de seguridad y armadas no se consideren habilitadas o justificadas a disparar por fuera del estándar del último recurso que fija aquella resolución, los mensajes políticos tienen que ser claros… El mejor modo de prevenir hechos graves de violencia institucional es restringir la portación de armas en las protestas y practicar controles políticos eficaces tanto sobre los efectivos que actúan en las manifestaciones como sobre los responsables jerárquicos de los operativos”.

Semejante malabarismo entre principios éticos, objetivos políticos y necesidades institucionales, ya de por sí complicado en el ámbito local, se convertía en un verdadero arte en los escenarios ajenos a los que se había lanzado el CELS, impulsado por su propio instinto de supervivencia.

30
PD: El pasado llama otra vez

El pasado volvió a golpear a la puerta de Verbitsky durante los primeros meses de 2015. Primero, en el libro *El Perro*, del periodista Hernán López Echagüe, que agregaba algunos datos sobre su relación con Güiraldes y la Fuerza Aérea, sumando un documento que probaría que Verbitsky fue contratado para diversas tareas editoriales durante la Dictadura. Luego, el 18 de mayo, cuando *Clarín* y Radio Mitre hicieron rebotar algunos adelantos de una biografía no autorizada del presidente del CELS realizada por Gabriel Levinas, periodista del Grupo y director del sitio web plazademayo.com. En su investigación, Levinas buscó probar que Verbitsky no solamente escribió para Güiraldes y —como López Echagüe afirmaba— habría firmado un contrato con el Instituto Jorge Newbery (una dependencia de la Fuerza Aérea), sino que firmó otros contratos para ser *ghostwriter* de la Dictadura entre 1978 y 1982. Además, afirmaba que Güiraldes lo escondió en su estancia de San Antonio de Areco durante los primeros días del golpe del 76 y mostraba pruebas caligráficas que, según el autor, demuestran la autoría de Verbitsky de algunos discursos de la cúpula de la Fuerza Aérea.

Ese día el tema empezó a rebotar en las redes sociales y, unas horas después, Gastón Chillier escuchó a Levinas en el programa de Jorge Lanata. Según Chillier, Levinas hacía tiempo que estaba "obsesionado con Horacio y con el CELS, diciendo barbaridades en temas nuestros sobre todo en relación a los qom y a Félix Díaz, tuiteando cosas con un tono entre acusatorio y virulento y siempre infundado". En el CELS ya todos conocían el caso de Güiraldes, y daban por buena la explicación pertinente de Verbitsky al respecto, pero esto requería otro enfoque y a Chillier le preocupaba demasiado que en todos lados saliera "el presidente del CELS acusado de colaborar con la Dictadura". Las horas pasaban y Verbitsky permanecía fuera del radar. Chillier lo llamaba y Verbitsky no lo atendía. Le mandó un whatsapp y arreglaron una reunión para después del mediodía. "Tenemos que discutir esto", le pidió.

Verbitsky lo citó en su oficina de Tribunales y se sumaron Diego Morales y Paula Litvachky. Allí les dijo lo mismo que estaba preparando para publicar al día siguiente en *Página/12*: "Esto es falso,

no es mi letra. Es una operación. El contrato que me adjudican no existe, el libro no se publicó". Verbitsky les hizo leer el resto de su descargo y les mostró ejemplos de su escritura, comparándolos con los que le atribuía Levinas. Cuando terminaron, Paula Litvachky le hizo notar que el descargo no mencionaba al CELS, que había sido sensiblemente afectado por la denuncia, y le pidieron que agregara unas líneas respecto de la institución.

Luego discutieron la posibilidad de hacer una reunión de Comisión Directiva, pero no tenían tiempo. En ese contexto decidieron hacer un comunicado. "Hay que salir con algo ya, esto va a crecer, nos van a empezar a llamar", coincidieron. "Me parece bien lo del comunicado", aprobó Verbitsky.

Un rato después, Chillier y Litvachky más Ximena Tordini, directora del área de comunicación, se pusieron de acuerdo en lo que debía decir el texto. "Para nosotros el ataque había sido contra el CELS, no solo contra la persona de Horacio. Por eso no queríamos simplemente solidarizarnos con él, sino más bien responder a un ataque dirigido a nuestra institución a través de nuestro presidente", analizó Tordini, quien se encargó de redactar el texto. Después se repartieron la tarea de llamar a los miembros de la Comisión Directiva para obtener su aprobación. No era normal que la comisión firmase en bloque un comunicado, pero esta vez la situación ameritaba una medida excepcional. "Verbitsky colaborador de la Dictadura" era demasiado. El comunicado, de apenas nueve líneas, no deja resquicios para la duda. Se tituló "Mentiras", y atribuye todo a una operación de *Clarín* que buscaba "deslegitimar, a través de su figura [la de Verbitsky], el trabajo que desde 1979 realiza el CELS en la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado". Apareció firmado por los quince miembros.

Al día siguiente Verbitsky publicaba algo parecido en *Página/12* (el apoyo del CELS saldría finalmente en un recuadro aparte), pero agregaba algo más. Así como en el pasado atribuía los ataques de los que se sentía víctima a sus denuncias publicadas en *Robo para la Corona*, ahora afirmaba que era por haber publicado las maniobras del Grupo Clarín con relación a la reelección de Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte Suprema y el papel asignado al nonagenario juez Carlos Fayt en la operación. Dicha argumentación llamó la atención de más de uno en el CELS. Aun creyendo todo lo demás, ni Chillier, ni Tordini ni Carlos Acuña compraron la teoría Lorenzetti-Fayt. Un libro supuestamente crítico que ya llevaba varios meses escribiéndose con conocimiento de Verbitsky y al que había llegado el momento de promocionar difícilmente podía ser la respuesta a un artículo que había escrito apenas un par de semanas atrás.

Ese día Gabriel Tokatlian, uno de los miembros de la Comisión

Directiva, estuvo toda la tarde dando clases. Cuando recibió el borrador del comunicado de Chillier, solo atinó a darle el OK. "No hizo falta ninguna reunión especial, solo la natural reacción a lo que había sucedido durante las últimas 24 horas y atento a un pedido de la dirección ejecutiva", explicaba. No necesitó sentirse a gusto firmando la defensa de Verbitsky porque le bastaba la confianza que depositaba en Chillier. "Me siento comprometido con él. Fue clave en mi nombramiento a la Comisión Directiva", agregaba. Pero no dijo nada sobre Verbitsky, ni que le creía, o que lo bancaba, solo creyó que "el momento ameritaba un intercambio, pero también una respuesta inmediata".

Otras voces dentro del CELS destacaron que, como *Clarín* no publicó nada en la edición impresa después del adelanto de la edición digital, fue una clara victoria de Verbitsky, continuando la lógica de "la operación de *Clarín*" que planteaba Verbitsky, y no la de un anticipo ganchero para promocionar un lanzamiento editorial.

Para Carlos Acuña, lo de Levinas era "viejo", parte de una ofensiva que incluía la denuncia sobre la supuesta cuenta secreta de Máximo Kirchner y Nilda Garré que publicó en potencial Daniel Santoro en la tapa de *Clarín*, y la acusación de Lilita Carrió al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina de cocainómano. Ese día intercambió algunos mails con Tokatlian, y coincidían en esa lectura, la misma que tenía Víctor Abramovich, quien justamente por esas horas paseaba por Buenos Aires con Marino Alvarado, el ex director de la ONG venezolana PROVEA, a quien recibió en el marco de una maestría en Derechos Humanos.

El debate interno en el CELS quedó para el jueves, día de reunión de la comisión. Ese día, Verbitsky reconstruyó lo que había pasado, explicó lo mismo que había publicado en *Página/12* y todo el mundo lo dio como bueno. Por si a la comisión le quedaba alguna duda, ofreció someterse a un examen grafológico pero rápidamente le contestaron que no hacía falta. "Como abogados, nos pareció que someter a Horacio a un examen de escritura era invertir la carga de la prueba. No es Horacio quien debe demostrar que es inocente sino al revés: ellos tienen que demostrar que es culpable", pensó Tordini. Algunos opinaron, pero nadie amagó con dudar de la versión de Verbitsky, sino que más bien se hablaba de las debilidades de la denuncia y de las opiniones de gente ajena al CELS, por ejemplo, una defensa de Verbitsky que Felipe Solá escribió en su Facebook. También se mencionó una llamada de solidaridad de Joaquín Morales Solá.

La discusión entre Levinas y Verbitsky pareció replicar una vez más una guerra de viejos secretos guardados tercamente. Así como los altos mandos militares nunca dijeron dónde están los desaparecidos —

y los nietos no recuperados—, los ex montoneros siguieron aferrados a sus propios pactos. Ese silencio es el que le pasa factura a Verbitsky de vez en cuando, un silencio que llenan otros, lo que hace muy complicado saber dónde empieza la mentira y dónde termina la verdad. Verbitsky se quejó porque Levinas no lo llamó para contrastar su documentación con él. Levinas se sorprendió por la velocidad con la que el CELS salió a apoyar a Verbitsky sin hacer un llamado para chequear la documentación que Levinas y su equipo había reunido. Tal vez, la acusación (traición, nada menos) lo ameritaba. Verbitsky insistió con que todo era mentira, un invento. Seguramente la realidad es más compleja. Entre la nada y la traición hay un largo trecho.

Levinas escribió luego una carta abierta, en la que daba por hecho que Verbitsky negaría el papel que le adjudicaban. "Lo contrario equivaldría a su oprobio e invalidación moral como pretendido Fiscal de la Nación", decía. También agregaba que le parecía "triste que el CELS apañe a quien colaboraba con la Dictadura" cuando el organismo estaba naciendo en 1979, y acusaba a Verbitsky de mancillar el buen nombre del CELS: "Verbitsky se arropó en el CELS para responder a un señalamiento sobre su conducta personal, y el CELS lo consintió".

Casualidad o no, esa misma semana Verbitsky participó en dos actos del Gobierno, de esos que merecen cadena nacional. El primero fue en el Sitio de la Memoria de la ex ESMA, una "intervención museográfica" que el Gobierno armó en el antiguo Casino de Oficiales del ex campo de concentración. Su presencia allí vino a dar un mensaje opuesto al de otros actores y organismos. El ex detenido Víctor Basterra había expresado que la movida museográfica le producía "temor al olvido"; Pérez Esquivel se quejó porque la renovación atentaría contra la buena preservación de pruebas valiosas para los juicios, y la Liga reclamó que nunca fueron consultados. "Esto implica la banalización del tema y un riesgo de negacionismo", exageraron. Verbitsky también apareció en la inauguración del faraónico centro cultural en la antigua sede central del Correo Argentino, bautizado, simplemente, "Kirchner".

La semana mediática para el CELS terminó también con una nota en *Clarín*. A pesar de los deseos del CELS de que cada uno de sus informes anuales (serios, rigurosos, con miles de horas de trabajo e investigación detrás) sea un hito en la vida de los argentinos, la verdad es que su riquísimo contenido solo resulta atractivo para la comunidad de Derechos Humanos, sociólogos y politólogos. El lector promedio solo se enteró del lanzamiento del último informe cuando *Clarín* publicó el viernes 23, en un recuadro pequeño, abajo, en página par, que "la ONG que dirige Verbitsky" criticaba duramente al general Milani. Entre su denuncia del *affaire* Lorenzetti-Fayt y su defensa de la

acusación de Levinas, Verbitsky había omitido escribir en sus columnas de *Página/12* sobre el informe anual que criticaba a Milani. Así, después de tanto trabajo, la primicia quedó servida en bandeja al diario *Clarín*. Justo a *Clarín*, a quien la comisión directiva del CELS acababa de identificar como un enemigo que busca deslegitimar a la institución a través de operaciones de prensa.

Epílogo

Presente y futuro del CELS y del movimiento por los derechos humanos

LUIS ZAMORA —*Usted nunca estuvo a favor de la lucha armada, seguramente por una cuestión más táctica que ideológica.*

—Nunca estuve de acuerdo en que un grupo asumiera la representación de todo un pueblo y forzara esa situación haciendo hechos armados. Eso significa involucrar a todo el pueblo. Es decir, la represión después venía contra todo el pueblo. Me parece que ese camino fracasó en todos lados.

—*Cuando llega Verbitsky, él tenía una experiencia en una organización armada. ¿Eso estaba bien para un organismo de derechos humanos? ¿Hay alguna contradicción entre lucha armada y lucha por los derechos humanos?*

—Eso hay que verlo en situación. Es decir, en determinado tiempo y lugar. Así, en general, no diría. Yo no digo que San Martín era un violador de los derechos humanos ni Güemes.

—*¿Pero se los imagina como directores de organismos de derechos humanos?*

—Era gente que podría haberlo sido. Defendían ideales, principios. La lucha por los derechos humanos es una lucha política. Yo lo que no veo nunca es la cosa de elite, de un grupo que asume. […] Ahora si usted me dice mantener secuestrado a un militar durante un año, eso no lo veo vinculado a la construcción de un mundo distinto. No me estoy refiriendo a ningún caso particular. Yo soy muy crítico del accionar político de Montoneros y del ERP, pero no lo vinculo con la lucha de derechos humanos ni con el CELS. Una de las personas que yo más respeto en la militancia contra la impunidad es Graciela Daleo. Es una sobreviviente de la ESMA, que fue parte de Montoneros y lo reivindica.

—*Es un tema el uso de los derechos humanos por parte del kirchnerismo.*

—Yo creo que sí hay un uso que no es parte de la lucha.

—*Pero el CELS queda algo pegado.*

—Eso pasa con muchos organismos que están muy vinculados al gobierno.

MARCELO PARRILLI —La violencia es necesaria. Cuando vos querés transformar algo, no podés renunciar a la violencia porque si no estás frito. ¿O vos pensás que vas a cambiar el sistema capitalista repartiendo palomas y flores? Mirá cómo le fue a Allende en Chile pensando que iba a construir el socialismo así. El grado de violencia depende de la situación política y de la correlación de fuerzas. Si vos tenés mucha fuerza en las masas, necesitás menos violencia. Cuanto menos fuerza tenés, más violencia necesitás. Montoneros y el ERP eran grupos ultraminoritarios, totalmente despegados de la gente, que tenían que hacer acciones que fueron desastrosas, que para lo único que sirvieron fue para justificar o darles una excusa a los militares para reprimir.

—*Pero vuelvo a lo mismo. O querés cambiar el sistema o te dedicás dentro de este a los derechos humanos.*

—Sí, pero Montoneros y el ERP no se dedicaron a los derechos humanos.

—*Entonces en Horacio hubo un cambio.*

—Para mí, como él es un "figureti", un día le dijeron: "Vení, vas a ser presidente del CELS". Como no podía ser presidente de CARBAP, aceptó.

—*¿Qué pasa con la información del CELS?*

—No se da información, y lo que yo veo de la información que se publica es que es una historia bastante acotada. No sé si es por las posibilidades de Internet. Pero lo que se ve es apolitizado. Un perfil prolijo, presentable, no comprometido políticamente. Ese es el perfil al que apuntan, un perfil tipo Amnesty. Creo que eso tiene que ver mucho con la influencia y el peso de la Fundación Ford. Quieren hacer un organismo de derechos humanos de un país central.

ALICIA OLIVEIRA —*¿Y te gusta cómo Verbitsky dirige el CELS?*

—Yo te mentiría. No sé qué está haciendo el CELS en este momento.

—*¿Cómo que no sabés?*

—Son los derechos humanos del aeropuerto. No se embarran. No sé si tocan a la gente, no sé si tienen cercanía con la gente, justamente.

—*Horacio es muy popular, es casi lo que no tiene el CELS en algún punto, ¿no?*

—No sé.

—*Pero yo te pregunto qué hace el CELS y me decís que no tenés idea, pero si te pregunto por Horacio, sí sabés qué hace.*

—Y… en *Página/12.*

Ahora está muy claro con quién está.

—*¿Te da la sensación de que el CELS podría hacer más?*

—Es del lugar desde donde yo veo las cosas. Una vez tuve que ir a la Villa 1.11.14 con gente del CELS que trabajaba conmigo en la Defensoría. Había un problema grande en la villa y yo tenía que ver al cura, llegué y le metí un papelito por debajo de la puerta donde vive para decirle que estuve y que me llamase. Para llegar a lo del cura había que pasar por una cancha de fútbol. Entonces, cuando voy a cruzar, yo iba con dos del CELS. Una salió corriendo, se metió en el auto y se acostó en el asiento para que no lo vieran. Y no te imaginás el miedo que tenía el otro. Nos estaban apretando para ver si nos podían sacar unos mangos. Punto. Creo que a él le sacaron plata de los bolsillos. Yo crucé tranquila. Esta es la diferencia. Pero claro, yo entré a los quince años a la villa. Empecé trabajando en la Villa La Cava.

Martín Abregú

—Yo creo que el tema Nisman ahora se te abre… es un problemón, en términos del legado de derechos humanos de este gobierno. En un sentido, yo creo que el CELS está siendo muy cuidadoso en este tema, pero creo que esto va a salpicar mucho el legado de derechos humanos de todos los que vayan a quedar pegados al gobierno. Creo que el tema Nisman, acá [en Nueva York] está pegando enormemente y el gobierno queda muy mal parado, y hoy por hoy es como un elemento ilevantable. Y yo no soy de los que creen que el gobierno lo haya mandado matar, ni nada por el estilo. Pero el gobierno no puede negar su responsabilidad de lo que ha hecho con la SIDE durante doce años. Es decir, el gobierno no se puede presentar como una víctima de la SIDE. Si vos hace seis meses querías argumentar que este gobierno podría haber tenido otros problemas, pero que también tenía un compromiso con los temas de derechos humanos, etcétera, creo que hoy se te hace difícil.

Santiago Felgueras

—Mi sensación es que si viene un gobierno del cual no estamos cerca, se alinean todos los planetas. Te va a quedar la mancha, te va quedar que el CELS andaba con este gobierno, pero se van a alinear internamente también. Yo voy a estar más cómodo allá adentro, me van a dar participación en temas que hoy no me dan. Porque es así. Y después, si vuelve a haber otro acercamiento del gobierno, otra vez va a haber situaciones de tensión. Pero mi sensación es que esto no le pasó solo al CELS. No fue una situación fácil… Cuando vos decís “Yo quiero tener más poder, porque con más poder puedo lograr más

cosas", en la mecánica de obtener más poder, podés estar resignando cosas que no tendrías que resignar. Eso es una dinámica de acceso al poder, le pasa a todo el mundo, ¿no? Y al CELS, también. Además, hay que tomar en cuenta que en este andar tan abierto a algunas críticas, también se obtuvieron muchas más cosas que no habíamos obtenido antes... Si ahora vienen cuatro años de Macri, ponele, y nosotros no tenemos mayor afinidad con Macri, esto va a quedar como un período que tuvo esas características (de acercamiento con el gobierno), pero después se te alinean los planetas de nuevo.

GASTÓN CHILLIER

—El trabajo hoy del CELS y de todos... de derechos humanos, es un trabajo más político que el de los noventa, cuando era una institución más, si se quiere, de tradición más liberal, de *watchdog*, en relación con un Estado neoliberal y mínimo. Y donde el Estado no tenía ni pretensión de ocupar la escena pública con políticas públicas, y hoy es distinto. Y de alguna manera, el CELS retomó el trabajo político que hicieron incluso los fundadores, que era bien político. Esa es la cuestión... Claramente, yo no me identifico como un profesional de los derechos humanos. O sea, me identifico como un activista de los derechos humanos, en este contexto donde claramente hay agenda y donde si vos me decís, qué sé yo, en Venezuela, con todos los problemas que tiene Venezuela, hay un sector que ha jugado a la desestabilización democrática y que todos condenamos. Por eso, en ese escenario... es difícil posicionarte desde afuera, porque podés jugar y alimentar a esos sectores. Yo aprovecho otras estrategias.

JUAN MÉNDEZ

—Después de haberlo hecho muchos años yo mismo, estoy bastante escéptico sobre hacer derechos humanos desde Washington. Porque yo estuve en la época en que vos podías incluso ir a ver a un senador republicano y el tipo expresaba solidaridad públicamente con víctimas de gobiernos de derecha. Pero ahora en Washington no hay nada de eso. Y yo creo que las críticas que ahora se les están haciendo a los grupos de derechos humanos, especialmente a los grandes, a Human Rights Watch y a Amnesty, como si eso fuera todo, desconocen que hay grupos en los países, en las trincheras, en los lugares más peligrosos y que algunos son muy sofisticados. A mi juicio el CELS es uno de ellos, pero también hay grupos egipcios, grupos colombianos, grupos peruanos, que son muy buenos. Y me parece que el trabajo en

derechos humanos ha venido cambiando y que los organismos grandes tienden a monopolizar y a acaparar, pero también tienen cada vez menos influencia. Especialmente tienen menos influencia en las políticas de los países democráticos y con problemas, como la Argentina… Sí siento que el movimiento en general de derechos humanos argentino se ha posicionado demasiado cerca del gobierno, y no porque el gobierno no lo merezca, porque la verdad es que ha impulsado mucho las reivindicaciones de ellos, pero porque la sociedad necesita organizaciones más independientes. Ahora, me parece que es injusto achacarle eso al CELS, porque las Madres de la Plaza de Mayo no hablan de la tortura en las cárceles, en cambio el CELS ha criticado al gobierno.

CARLOS H. ACUÑA —Más allá de las tensiones personalización/ institucionalización, hay una búsqueda constante de voces diversas para ampliar los márgenes de pluralismo en la comisión directiva del CELS, aunque dentro de acuerdos democráticos/progresistas básicos. En ese sentido [Juan Gabriel] Tokatlian funciona como un ejemplo, yo soy otro.

SANTIAGO CANTÓN

—Hay una corriente actual que trata de poner los derechos humanos para cuestiones que no necesariamente son violaciones cometidas por la gente del Estado. Venezuela… varios países. Que un poco está bien, por el tema de la responsabilidad empresarial y todo eso. Pero yo creo que uno tiene que mantener la importancia que tiene el alto valor moral que tiene el Estado y que no puede entrar en la misma situación. Entonces, si un militar cometió una tortura, es responsable de violaciones a los derechos humanos, si lo hizo un montonero, no lo es. Hay que mantener la distinción.

—*Pero en el 75 o el 74 Montoneros tenía gobernaciones, tenía ministerios, [Julio] Troxler era subjefe de policía. ¿No hubo zona liberada para matar a Rucci?*

—Yo creo que ahí debe de haber. Deben de estar buscando, como también se está haciendo con la responsabilidad empresarial. Eso lo está impulsando el CELS.

—*Claro. Pero ¿por qué impulsa para un solo lado?*

—Sí, claro.

HORACIO VERBITSKY

—Y si hubiera habido algún elemento que involucrara algo arriba

del gobierno [en el caso Ferreyra], nosotros lo habríamos usado, lo habríamos seguido. Pero no lo encontramos. Entonces, que los que dicen que lo hay, que lo muestren. Si no, es muy desequilibrado, es muy injusto. A quienes más han hecho, reprocharles lo que no hicieron, cuando al mismo tiempo no podés mostrar. Porque si vos me dijeras, sí, hicieron todo esto, pero mirá, había esto y no lo hicieron. ¡Mostrámelo! ¿Dónde estaba esto?

CAROLINA VARSKY

—Es una cosa que nosotros hemos discutido internamente, de cuán pegados estamos o no del gobierno. Yo creo que quizá un déficit del CELS haya sido… porque el CELS no es que no cuestionaba al gobierno, el CELS cuestionaba al gobierno, lo que pasa es que… por ejemplo la causa del INDEC, el CELS fue uno de los primeros en decir que hay que conocer la base de datos del INDEC… pero eso no se vio. Entonces se veía más la ligazón de Nilda Garré, como es abogada del CELS, o Gustavo Palmieri o Natalia Federman [ex CELS empleados en el Ministerio de Seguridad], que el laburo más contrera. Quizá fue un error. Creo que a mí me hubiera gustado quizá mantener la cosa más neutra en relación con el gobierno… Pero para mí sí era un espacio, sobre todo que por los años en los que vivimos, donde yo militaba… era un trabajo rentado, sí, soy una profesional, sí. Pero yo militaba allá dentro. No encontré ningún partido político donde yo diga “Me representa”, pero sí el CELS, donde yo militaba las causas. Entonces, en algún punto tiene que ver con una crisis político-partidaria, si querés en 2000, donde ¿qué tenías? ¿Quién era la opción? Por eso yo siempre sentí al CELS como un espacio militante.

VÍCTOR ABRAMOVICH

—El CELS siempre se consideró parte de los organismos de derechos humanos creados durante la dictadura, no es una ONG. Cuando el CELS empieza a abrir la agenda, su política de alianzas se amplía. Al mismo tiempo, esa política de alianzas a veces resiente su política con los organismos históricos. El CELS nunca terminó de romper esa relación.

GRACIELA FERNÁNDEZ MEIJIDE

—Bancarse la derrota es bancarse internamente lo que llevó a esa derrota: la soberbia, las muertes de las que son responsables, el sufrimiento que les infligieron a sus familias y a los demás, a la sociedad… En el tema memoria, aferrarse exclusivamente al recuerdo sin pensar en lo que tiene que ser una reconciliación a futuro para que la sociedad pueda trabajar integrada por todos, es lo que se llama memoria fijada o memoria fina. La otra es la memoria histórica. Cuando vos te quedás en la memoria testimonial, te quedás fijado, lo cual es bastante natural. Para hacer la memoria histórica tenés que hacer un esfuerzo y decir qué pasaba, por qué nos pasó esto. Porque si no lo que nos pasó puede quedar reducido a que un día los militares se volvieron locos, y no es así.

LAURA CONTE

—La historia del CELS es la historia de una identidad. No es una suma de gente, es algo colectivo.

FUENTES

Para este libro entrevistamos a: Víctor Abramovich

Martín Abregú
Carlos Acuña

Cristina Caiati
Santiago Cantón

Estela de Carlotto

Octavio Carsen
Gastón Chillier

Laura Conte
Félix Díaz

Santiago Felgueras
Graciela Fernández Meijide

Leonardo Filipini
Rogelio García Lupo

Mirna Goransky
Noemí Labrune
Carmen Lapacó

Pablo Llonto
Damián Loreti
Juan Méndez

Isabel Mignone

Luis Moreno Ocampo

Alicia Oliveira

Marcelo Parrilli
Adolfo Pérez Esquivel

Julio Raffo
Carlos Rodríguez

Carolina Varsky

Horacio Verbitsky
María del Carmen Verdú
Néstor Vicente
Eugenio Raúl Zaffaroni

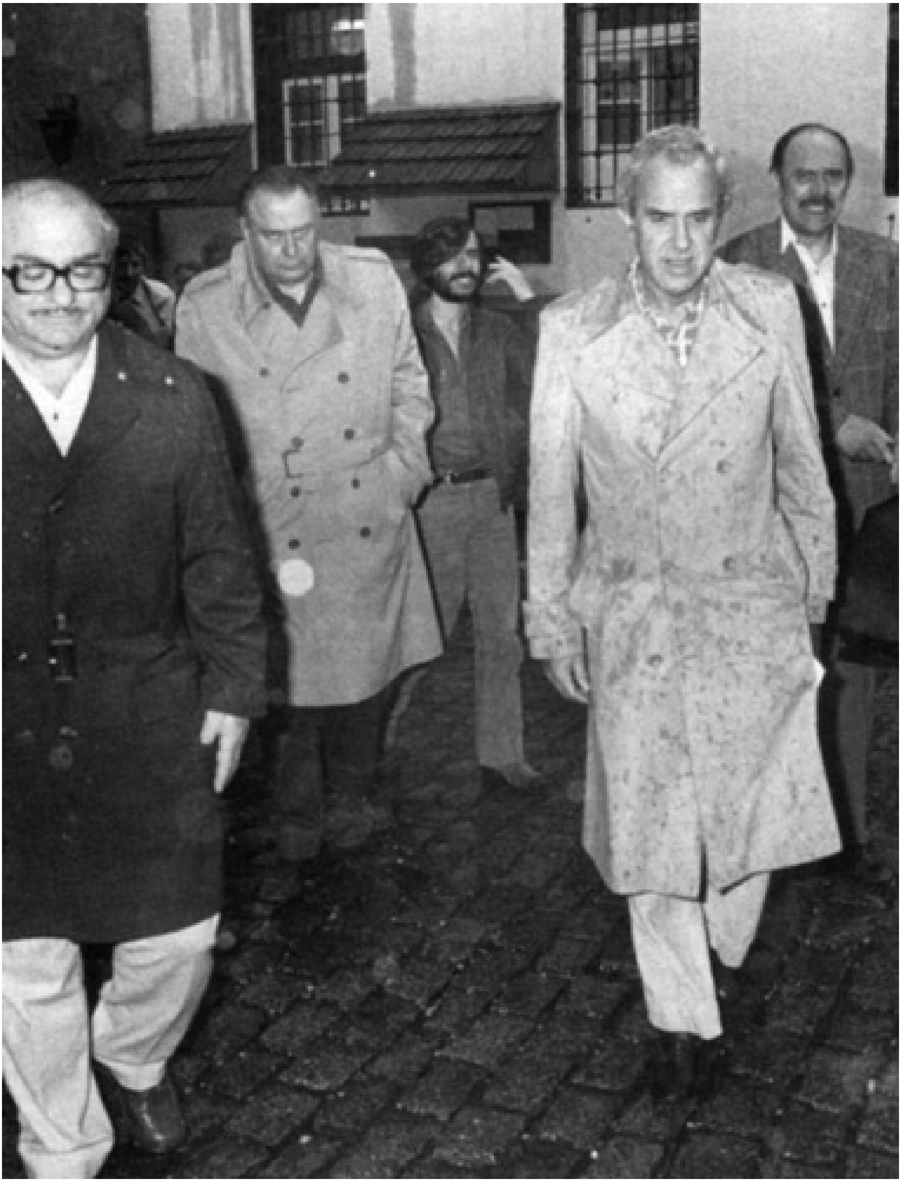
Hemos consultado los siguientes libros, artículos y sitios web: AMERICAS WATCH y CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (editores): *Verdad y Justicia en la Argentina*, Buenos Aires, 1991.

CAIATI, Cristina: *Haciendo historia*, biografía inédita de Emilio Mignone.
CELESIA, Felipe y Pablo WAISBERG: *La Tablada: a vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina*, Buenos Aires, Aguilar, 2013.
CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (editor): *Informe anual*, 2008-2015.
DEL CARRIL, Mario: *La vida de Emilio Mignone*, Buenos Aires, Emecé, 2011.
ESQUIVADA, Gabriela: *Noticias de los Montoneros*, Buenos Aires, Sudamericana, 2009.
FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela: *La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina (A Pablo)*, Buenos Aires, Sudamericana, 2009.
GORINI, Ulises: *La rebelión de las Madres*, Buenos Aires, La Página, 2011.
—: *La otra lucha. Historia de las Madres de Plaza de Mayo (tomo II)*, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2008.
LÓPEZ ECHAGÜE, Hernán: *El Perro*, Buenos Aires, Ediciones B, 2015.
MALAMUD GOTI, Jaime: *Terror y justicia en la Argentina*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2000.
MIGNONE, Emilio: *Iglesia y dictadura*, Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional, 1987.
—: *Derechos humanos y sociedad*, Buenos Aires, CELS– Ediciones del Pensamiento Nacional, 1991.
MIGNONE, Emilio y Augusto CONTE: *Estrategia represiva de la dictadura militar: la doctrina del paralelismo global*, Buenos Aires, Colihue, 2006.
NINO, Carlos: *Juicio al mal absoluto*, Buenos Aires, Emecé, 1997.
O'DONNELL, Santiago: *Politileaks*, Buenos Aires, Sudamericana, 2014.
PIÑERO, María Teresa (editora): *Culpables para la sociedad, impunes por la ley*, Buenos Aires, 1998.
SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José: *Memoria y dictadura. Cuadernos de trabajo*, ICA/Filosofía y Letras/UBA–Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2003.
VERBITSKY, Horacio: *El vuelo*, Buenos Aires, Sudamericana, 2004.
—: *Ezeiza*, Buenos Aires, Contrapunto, 1986.
—: *El vuelo*, Buenos Aires, Planeta, 1995.
—: *El silencio*, Buenos Aires, Sudamericana, 2005.

VICENTE, Néstor: *Augusto Conte, Padre de la Plaza*, Buenos Aires, Galerna, 2006.
WALSH, Rodolfo: *Operación Masacre*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2000.

Artículos de los diarios *Clarín*, *La Nación*, *Página/12*, *Perfil*, *El País*, *El Periodista*, *El Porteño.*
Informes anuales de la Fundación Ford.
Memos internos, informes, gacetillas y publicaciones de difusión editadas por el CELS.

ARCHIVO CELS



Emilio Mignone, atrás, de piloto, y adelante a la derecha, Agusto Conte.

ARCHIVO EMILIO FERMÍN MIGNONE

Representantes de organismos de Derechos Humanos y Madres de Plaza de Mayo se retiran de la Casa de Gobierno luego de reunirse con autoridades del gobierno de Reynaldo Bignone. En la foto, Alfredo Bravo en el centro, y Luis Zamora con Pipo Westerkamp a la derecha.

ARCHIVO CELS

Boris Pasik, uno de los miembros fundadores del CELS.

ARCHIVO EMILIO FERMÍN MIGNONE

Augusto Conte, pilar del CELS, donde empezó a trabajar tras la desaparición de su hijo, Augusto María.

ARCHIVO CELS

ARCHIVO EMILIO FERMÍN MIGNONE

Emilio Mignone escribiendo *Iglesia y Dictadura*

ARCHIVO EMILIO FERMÍN MIGNONE

Pintada en contra del CELS y de Mignone.

ARCHIVO EMILIO FERMÍN MIGNONE

Emilio y Chela Mignone, marchando en Plaza de Mayo.

ARCHIVO CELS

Mignone y Alicia Olivera, una de las primeras abogadas del CELS, en la puerta de Tribunales, 1985.

ARCHIVO EMILIO FERMÍN MIGNONE

Emilio y Chela Mignone conversan con Cyrus Vance, secretario de Estado de Jimmy Carter, a la derecha de la foto, en un evento oficial del Gobierno de los Estados Unidos.

ARCHIVO EMILIO FERMÍN MIGNONE

Emilio Mignone junto a Ted Kennedy, senador demócrata por el estado de Massachusetts, en un encuentro con organismos de Derechos Humanos en Nueva York.

Emilio Mignone y Juan Méndez en una audiencia en Washington.

ARCHIVO EMILIO FERMÍN MIGNONE

Martín Abregú toma el té mientras habla Mignone. Lo escuchan, entre otros, Ariel Dubovsky y Jorge Taiana (sentados).

ARCHIVO EMILIO FERMÍN MIGNONE

Taller de Educación en Derechos Humanos en Buenos Aires, 1997,

auspiciado por el CELS, el Instituto de DDHH de Costa Rica y el gobierno porteño. En el centro, Mignone, Dina Rodríguez (IIDH) y Mario Giannone (GCBA).

ARCHIVO EMILIO FERMÍN MIGNONE

Mignone en la ronda de los jueves de las Madres, mayo de 1998.

ARCHIVO CELS

Foto tomada frente a Tribunales en 2005, durante la marcha por la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tercero desde la izquierda, Víctor Abramovich. Décimo, en la fila de atrás, Santiago Felgueras. Delante de él, de campera marrón, Andrea Pochak. A su lado, Carolina Varsky (hablando por teléfono) y María José Guembe.

ARCHIVO CELS

Reunión de trabajo del área de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) del CELS, en noviembre de 2013.

ARCHIVO CELS

Miembros del CELS durante la marcha del 24 de marzo de 2012.

ARCHIVO CELS

Diego Morales, Pablo Ferreyra (hermano de Mariano, asesinado por una patota sindical en Avellaneda), Horacio Verbitsky y Gastón Chillier en el auditorio del CELS, noviembre de 2010.

ARCHIVO CELS

Verbitsky junto a Vanesa, hermana de Luciano Arruga, durante una conferencia de prensa a propósito del caso, en el auditorio del CELS.

INDYMEDIA

Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, detrás del dirigente de La Cámpora Andrés “el Cuervo” Larroque (hablando por celular), durante el desalojo del acampe qom en el centro porteño, mayo de 2011.

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

El ministro de Justicia Julio Alak, Horacio Verbitsky, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman durante el homenaje a Eduardo Kimel en el CELS, 5 de julio de 2010.

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

El fiscal Hugo Cañón; el secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda; la defensora general de la Nación Stella Maris Martínez; la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó; Andrea Casamento, de la Asociación Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, y Horacio Verbitsky en la conferencia “Aportes para la Implementación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura”, 25 de septiembre de 2013.

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Cristina y Horacio.

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Cristina Kirchner en la escalera de la sede del CELS de la calle Piedras, rodeada por miembros de la institución, entre ellos Carolina Varsky y Damián Loretti, durante el homenaje a Eduardo Kimel.

- Cubierta
- Portada
- Dedicatoria
- Agradecimientos
- Prólogo. La historia
- Primera parte
    - 1 Mignone
    - 2 El golpe
    - 3 Los organismos
    - 4 Momento cero
    - 5 La visita de la CIDH
    - 6 Madres, Abuelas

- 7 Jóvenes
- 8 El coloquio y el allanamiento
- 9 Malvinas
- 10 Conte
- 11 El Informe Final y la campaña
- 12 Alfonsín presidente
- 13 Los juicios
- 14 Obediencia Debida y Punto Final
- 15 Resabios
- 16 La transición de la transición
- 17 La Tablada
- 18 El efecto Menem
- 19 El financiamiento

- 20 Abregú
- 21 Un frágil equilibrio
- 22 La muerte de Conte
- 23 El yuppie
- 24 Scilingo
- 25 El caso Carrasco
- 26 Violencia
- 27 La muerte de Mignone
- 28 Cambios
- 29 El Perro

- Segunda parte
  - 1 Verbitsky

- 2 Aterrizando
- 3 Los cinco presidentes
- 4 Un final para Bulacio
- 5 Llega Néstor
- 6 El cambio
- 7 Néstor y yo
- 8 El cuadro de Videla
- 9 La reapertura de los juicios
- 10 Una corte para la democracia
- 11 Aliados
- 12 Cristina presidenta
- 13 El CELS al poder
- 14 Schoklender, Madres & Co.

- 15 La Ley de Medios
- 16 Los qom
- 17 Caras de poco amigos
- 18 La visita de Cristina y el favoritismo
- 19 Cortocircuitos: frente interno
- 20 Un viejo debate
- 21 El pasado
- 22 Divergencias: frente externo
- 23 Silencio
- 24 El papa Bergoglio
- 25 Milani
- 26 El escenario internacional y Venezuela

- 27 Se rompe la coalición
- 28 Una institución para los tiempos que corren
- 29 El CELS, hoy
- 30 PD: El pasado llama otra vez

- Epílogo
  - Presente y futuro del CELS y del movimiento por los derechos humanos
- Fuentes
- Álbum de imágenes
- Créditos
- Sobre los autores
- Otros títulos del autor

O’Donnell, Santiago
Derechos Humanos ® / Santiago O’Donnell y Mariano Melamed. - 1a ed. - Buenos Aires, Sudamericana, 2015.
(Investigación Periodística) EBook.
ISBN 978-950-07-5348-7

1. Investigación Periodística. I. Mariano Melamed. II. Título CDD 070.4

Edición en formato digital: agosto de 2015
© 2015, Penguin Random House Grupo Editorial Humberto I 555, Buenos Aires.
Diseño de cubierta: Carolina Marcucci Foto de tapa: © Omar Torres Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo por escrito de la editorial.
ISBN 978-950-07-5348-7

Conversión a formato digital: Libresque www.megustaleer.com.ar

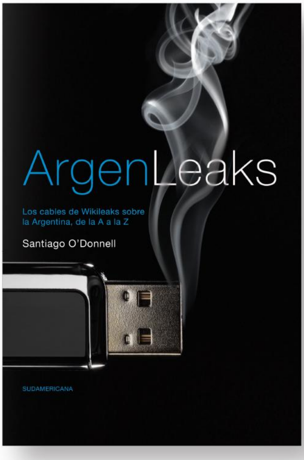
SANTIAGO O'DONNELL

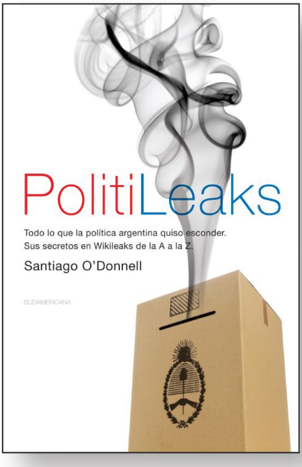
es periodista. Actualmente cumple tareas como editor jefe de la sección El Mundo del diario *Página 12* y escribe el blog santiagoodonnell.blogspot.com.ar. Comenzó su carrera en el *Buenos Aires Herald*, pero rápidamente pasó a trabajar en dos de los diarios más importantes de los Estados Unidos: entre 1987 y 1990 en *Los Angeles Times* y de 1991 a 1994 en *The Washington Post*. De regreso a la Argentina se incorporó a la redacción del diario *La Nación*, para luego ser editor general del semanario *TXT*. Es autor de los exitosos *ArgenLeaks. Los cables de Washington sobre la Argentina, de la A a la Z* y *PolitiLeaks. Todo lo que la política argentina quiso esconder*, ambos de Sudamericana.

MARIANO MELAMED

es periodista y realizador audiovisual. En 2009 se incorporó como cronista al servicio en español de Radio France Internationale (RFI) en París. En la Argentina publicó artículos en los diarios *Perfil*, *Clarín* y *La Nación* y en las revistas *Playboy*, *TXT*, *Mercado*, *Brando* y *El Planeta Urbano*, entre otras. En el exterior colaboró en *The Washington Post* (EE.UU.) y publicó crónicas en las revistas *Surcos* (Chile), *Etiqueta Negra* (Perú), *Travesías* (México) y *Resumen Latinoamericano* (España).

Foto: © Alejandra López





Otros títulos del autor en megustaleer.com.ar